

INSTITUTA

DE LA

JURISPRUDENCIA

ESTABLECIDA POR LAS

Exmas. CÁMARAS DE APELACIONES

DE LA

CAPITAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EN SUS SENTENCIAS POR ORDEN NUMÉRICO Y ALFABÉTICO

POR

J. J. HALL

(ABOGADO)

Comprende los tomos 9 y 10 de la 2ª Serie de la Jurisprudencia Civil;

5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la 2ª Serie de la Jurisprudencia Comercial y Criminal

TOMO IV

BIBLIOTECA DE LA CORTE SUPREMA	
Nº. DE ORDEN	30.139
UBICACIÓN	JOS

BUENOS AIRES

IMPRENTA EUROPEA, MORENO Y DEFENSA

1804





Con el presente tomo completamos el resumen de la segunda serie de los fallos de ambas Cámaras de Apelaciones. Hemos compendiado en cuatro, los treinta y cinco volúmenes de la 1ª y 2ª serie.

Cuanto de bueno y cuanto de malo hay en ese enorme número de sentencias, no podemos decirlo con exactitud, por más que tengamos bien formada nuestra opinión al respecto. Podemos, sin embargo, justificar cualquiera apreciación que se considerara severa, con la opinión que en ciertas ocasiones emiten los mismos miembros de las Cámaras. Alguno de ellos decía, fundando su voto en un acuerdo en que ya se había pronunciado la mayoría y en el que ya no podía evitarse la injusticia: «Resolver la cuestión en la forma que lo acaba de hacer la Cámara, *es conculcar los principios más elementales de la justicia y establecer precedentes poco serios.*» Otro dijo en otra ocasión: «*la cuestión así resuelta es el colmo de lo injusto y de lo arbitrario.*»

Si en las mismas Cámaras se han calificado en forma tan dura, las sentencias dictadas por ellas, ¿qué dirán los litigantes, sujetos pasivos é inermes de tales sentencias?

Es que la Administración de Justicia, como todo en



nuestro país, se resiente de este momento crítico y desgraciado en que estamos.—Con todo, debemos consignar, en honor de la verdad, que una reacción favorable se ha producido en la Cámara de lo Comercial, con la nueva composición que ha resultado del ingreso de los doctores Esteves y Saavedra.

Uno de los vicios más notables en que se incurre, especialmente en la Cámara de lo Civil, es el de suprimir la garantía de un tribunal colegiado, convirtiéndolo en unipersonal. Esto resulta manifiesto, de la unanimidad abrumadora que aparece en sus fallos. Un solo Camarista vota, y los demás adhieren sin dar muestras del estudio de la causa.

Con tal procedimiento, el objeto de la ley queda defraudado, pues ella ha querido crear un tribunal en que todos los jueces estudiarán la cuestión y fundarán su voto. Tomando al acaso uno de los tomos últimamente publicados con resoluciones firmadas por los doctores Gimenez, Molina Arrotea, Gonzalez del Solar, Bustos y Sauze, resulta que se han dictado treinta y dos sentencias definitivas, produciéndose tan solo *tres* disidencias insignificantes; y ochenta y nueve sentencias interlocutorias en las que no se ha producido una sola disidencia.—Tom. 9, Scr. 4^a, Jur. Civil.

No hay que dudarle: esta unanimidad es la mejor prueba de la violación de la ley, y la violación de la ley es el despotismo.

Nada es más esencial á la vida civilizada que una recta administración de justicia.

¿La tenemos?

Dícese que uno de los argentinos de mayor significación política, visitando á Bismarck, fué interrogado de pronto por éste :

« En vuestro país ¿tenéis justicia recta, pronta y barata? »
« Si es así, sois un pueblo civilizado. » — El interpelado guardó silencio y el gran canciller dió otro giro á la conversación.....

Buena ó mala, es, sinembargo, necesario conocer la jurisprudencia: si es buena para perseverar en ella; si es mala para reformarla.

A este objeto contribuye modestamente esta publicación; y damos en este volumen la que corresponde á los tomos 9 y 10, serie 2ª de la Jurisprudencia Civil, y 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la 2ª serie de lo Comercial y Criminal.







1. **Abogado**—Y procurador ó representante, carecen de personería para apelar personalmente de las regulaciones contenidas en la sentencia de trance y remate.—Jur. Com., tom. 9, pág. 308, Ser. 2^a.

2. **Abogado**—Sus honorarios por trabajos estrajudiciales, cualquier que haya sido el carácter que ha investido, deben ser fijados por peritos arbitradores.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 291, Ser. 2^a.

1—Porque no son parte en el juicio en que la regulación se hace. En nuestros Tribunales existe la práctica viciosa de notificar á los abogados las regulaciones contenidas en las sentencias. Hemos considerado siempre este trámite como inútil y perjudicial. Inútil, porque no produce efecto legal; y perjudicial porque puede traer cuestiones para más tarde cuando se trate de saber si el abogado notificado de esa regulación y que no ha apelado de ella, puede deducir el recurso de apelación. También perjudicial por el trastorno que puede producirse con la intromisión indebida de personas que no son parte. La regulación de honorarios solo produce efecto entre las partes litigantes, y solo ellas pueden recurrir y ser notificadas.

2—Cuando se trata de honorarios que no han sido devengados por un abogado en un pleito ó juicio; cuando no se ha procedido como letrado director de una de las partes, ante los jueces á quienes se quiere atribuir el conocimiento de la regulación, no procede la aplicación del art. 67 del Apéndice al Cód. de Proc., sino lo dispuesto en el art. 1627 del Código Civil.

ABO — ABU

Abogado—Véase: *Dinero*, núm. 1—*Honorarios*, núms. 7 y 9.

Abogado patrocinante—Véase: *Justa causa*, núm. 1.

Abogados—Inscripciones en la matrícula.—Jur. Civ., tom. 9, págs. 104 y 239.

1. **Absolución**—Procede la del demandado, si el actor no justifica su acción.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 403, Serie 2ª.

2. **Absolución**—La defensa agena es tan lícita como la propia: el que por defender á otro, de un ataque ilícito se ve obligado á herir ó matar al agresor, debe ser absuelto.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 27, Ser. 2ª.

Absolución—Véase: *Injurias*, núm. 3—*Prueba plena*, núm. 1—*Sentencia*, núm. 4—*Prueba testimonial*, núm. 3—*Confesión del reo*, núms. 9 y 10—*Estafa*, núm. 5—*Prueba de presunciones*, núm. 1.

Abuso de autoridad—Véase: *Agente de autoridad*, núm. 1.

Abuso de confianza—Véase: *Hurto*, núm. 1.

1—El actor debe justificar su demanda.—Ley 1ª, tit. 14, Part. 3ª.

2—Un individuo transitaba con una mujer con quien vivía; otro pretendió llevársela, aquél la defendió: del encuentro resultó la muerte del agresor. La legítima defensa procede, no porque la clase de relaciones que existían entre hombre y mujer confieran derecho alguno; sino porque aun considerada como una persona extraña, se habría hallado autorizado para impedir la violencia, como que cualquiera se halla autorizado á impedir la cuando esa violencia es injusta, como lo es casi siempre que es ejercida contra una mujer indefensa. Aquí la defensa sigue las mismas reglas como si la agresión fuese dirigida contra la misma persona que se defiende. Será legítima cuando el ataque sea injusto sin haber mediado provocación y siendo indispensable el medio empleado. Si un hombre hace por una mujer lo que ésta no puede á causa de su debilidad; si impide que por las vías de hecho se la violente y estropee y se hace en la forma que el defensor lo haría en causa propia si el ataque se hubiese dirigido contra él, su conducta es correcta y debe ser escusada.



ACCIÓN

1. **Acción**—Su procedencia solo puede ser declarada en la sentencia definitiva.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 95, Ser. 2ª.

2. **Acción**—El desistimiento de uno de los herederos, no exime al tribunal de fallar sobre el fondo del litigio, si la acción ha sido deducida á nombre de varios.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 240, Ser. 2ª.

Acción—Véase: *Injurias*, núm. 2—*Tercería*, núm. 1—*Accionista*, núm. 1—*Jurisdicción arbitral*, núm. 1—*Rendición de cuentas*, núms. 3, 7 y 12—*Sociedad anónima*, núm. 3—*De oficio*, núm. 1—*Absolución*, núm. 1—*Escepción de cosa juzgada*, núm. 1—*Escepción de defecto legal*, núm. 4—*Escepción de falta de personería*, núms. 4, 9 y 10—*Honorarios*, núm. 7—*Documentos*, núm. 2—*Escepción de litispendencia*, núms. 2 y 4—*Rebeldía*, núm. 3—*Acusación*, núm. 3—*Acusador*, núm. 1—*Pagaré*, núm. 1—*Personería*, núm. 5—*Fuero federal*, núm. 2—*Nulidad*, núm. 11—*Nulidad del laudo*, núm. 1.

Acción criminal—Véase: *Sustracción de menores*, núm. 2.

Acción de daños y perjuicios—Véase: *Daños y perjuicios*, num. 10.

Acción de nulidad—Véase: *Quiebra*, núm. 8—*Escritura pública*, núm. 2—*Nulidad*, núm. 11.

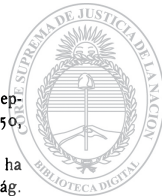
Acción de rendición de cuentas—Véase: *Jurisdicción arbitral*, núm. 1—*Rendición de cuentas*, núms. 1, 2, 3, 4, 5 y 7—*Sociedad anónima*, núm. 3.

Acción desdolorosa—Véase: *Injurias*, núm. 7.

1— Toda resolución anterior á ese estado, sería estemporánea é importaría un prejuzgamiento.

2— Ese desistimiento no puede perjudicar los derechos de los demás actores conjuntos, respecto de los cuales el acto debe considerarse como *res inter alios acta*, que consiguientemente, ni puede aprovecharles ni perjudicarles.





ACC

Acción directa—Véase: *Cesionario*, núm. 1.

1ª. **Acción ejecutiva**—No procede, entre girante y aceptante de una letra de cambio.—Jur. Com., tom. 9, pág. 50, Ser. 2ª.

2. **Acción ejecutiva**—No procede si el protesto no ha sido verificado personalmente.—Jur. Com., tom. 10, pág. 14, Ser. 2ª.

3. **Acción ejecutiva**—Entre girante y aceptante, de una letra imperfecta, no existe acción ejecutiva.—Jur. Com., tom. 10, pág. 276, Ser. 2ª.

Acción ejecutiva—Véase: *Obligaciones alternativas*, núm. 1.—*Escepción de litispendencia*, núm. 4.

Acción entablada—Véase: *Pagaré*, núm. 1.

Acción entre socios—Véase: *Balance de liquidación*, número 1.

1ª. **Acción personal**—La demanda que versa sobre el co-

1ª—La letra de cambio constituye para firmante y aceptante una obligación solidaria en favor del acreedor—art. 736 del Cód. de Com. vig. y 912 del ant.—Abonada la letra por uno de los coobligados solidarios, la operación queda terminada; cualquiera obligación que de ella surja no puede ventilarse por la vía ejecutiva, la que es de escepción, y solo en virtud de disposición expresa, esta vía es procedente. No existiendo en el Cód. de Com. disposición alguna que la autorice entre girante y aceptante, y por el contrario otra cosa se desprende de sus disposiciones—arts. 794 y 826 del Cód. ant., y 669 y 649 del vigente,—no puede aplicarse el art. 614 del Cód. de Com. vigente, porque este artículo se refiere á los fiadores en general, siendo así que no pueden equipararse á los libradores que juntamente con los aceptantes y demás obligados, son considerados co-deudores respecto de los tenedores de una letra. Esta sentencia está de acuerdo con otra que se registra en el tom. 1º de la Int., Verb. *Aceptante*, núm. 63.

2—Véase: art. 675 del Cód. de Com. vig., Verb. *Protesto*, números 5 y 6.

3—Véase el núm. 1. Art. 649, Cód. de Com. vig.

1ª—Art. 4 del Cód. de Proc.



ACC

bro del precio del inmueble, como acción personal, corresponde á los tribunales del domicilio del demandado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 166, Ser. 2ª.

Acción prejudicial—Véase: *Acusación*, núm. 2.

1. **Acción reivindicatoria**—Justificada por el demandante la propiedad del bien sobre que recae esta acción, procede se le dé la posesión.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 552, Ser. 2ª.

2. **Acción reivindicatoria**—Para que sea procedente, es requisito indispensable, justificar la posesión y su pérdida.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 180, Ser. 2ª.

3. **Acción reivindicatoria**—Justificado el dominio con los respectivos títulos, y la posesión, la acción reivindicatoria es procedente.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 203, Ser. 2ª.

4. **Acción reivindicatoria**—La transferencia del conocimiento á la orden, no basta para probar la tradición de las mercaderías, y el vendedor puede, en virtud de la quiebra del comprador, entablar acción reivindicatoria la que hace procedente el embargo preventivo.—Jur. Com., tom. 8, pág. 154, Ser. 2ª.

Acción reivindicatoria—Véase: *Poder especial*, núm. 1.

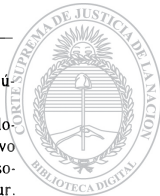
Acciones—Véase: *Accionista*, núm. 1—*Personeria*, número 4—*Sobreseimiento*, núm. 2—*Evicción*, núm. 3—*Jurisdicción*, núm. 4—*Título*, núm. 5—*Filiación adulterina*, núm. 1—*Prescripción*, núm. 12.

1—De acuerdo con lo preceptuado en los arts. 2758, 2792 y 2794 del Cód. Civ.

2—Art. 2758, Cód. Civ.

3—La posesión anterior al hecho de su pérdida. Art. 2758, Cód. Civil.

4—No es aplicable el art. 1201 del Cód. de Com., porque se trata de la acción del vendedor ejercitada directamente contra el comprador que á la vez era endosatario y que no había dispuesto de las mercaderías.

**ACC — ACR**

Acciones al portador—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 6.

1ª. **Acciones personales**—El vendedor que trasfiere el dominio y la posesión, solo está obligado á defender al nuevo propietario pero en ningún caso á iniciar acciones personales contra terceros que lo turben en su posesión.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 415, Ser. 2ª.

2. **Acciones personales**—Tratándose de ellas, son competentes los jueces del domicilio del demandado.—Jur. Com., tom. 6, pág. 415, Ser. 2ª.

Acciones personales—Véase: *Prescripción*, núm. 10.

1ª. **Accionista**—El iniciador de una sociedad industrial, á quien se le reconoce como compensación un tanto por ciento sobre el capital que deberá pagarse en acciones, no reviste el carácter de accionista mientras no le hayan sido entregadas: solo puede ser considerado como acreedor.—Jur. Com., tom. 5, pág. 406, Ser. 2ª.

Aceptante—Véase: *Acción ejecutiva*, núms. 1 y 3.

Acerbo—Véase: *Jurisdicción*, núm. 2.

Aclaraciones—Véase: *Arbitros*, núm. 1.

1ª. **Acreedor**—Que hubiese recibido en pago mercaderías después de la fecha fijada para la efectiva cesación de

1ª—Arts. 2108, 2110, 2113 y 2191 del Cód. Civ. La obligación de evicción contraída por el vendedor, es siempre pasiva. Las acciones personales que resulten de las vías de hecho llevadas á cabo contra el dominio del comprador, son personales á este último.

2—Cuando no hay lugar designado para el cumplimiento de la obligación—art. 4º, aparte 3º del Cód. de Proc.

1ª—El carácter de acreedor de la sociedad, le confiere el derecho de exigir la entrega de esas acciones, la que, como obligación de hacer que es, puede ó no cumplirse, y en este último caso se resuelve en daños y perjuicios.

1ª—Art. 1540, Cód. de Com. ant.

ACR

pagos del concursado, debe ser obligado á devolver su importe á la masa.—Jur. Com., tom. 8, pág. 18, Ser. 2ª.

Acreeedor—Véase: *Accionista*, núm. 1—*Contrato de compraventa*, núm. 1—*Pago*, núms. 1 y 2—*Embargo*, núm. 2—*Inhibición*, núm. 9—*Consignación*, núm. 1—*Obligaciones alternativas*, núm. 1—*Letra de cambio*, núm. 4.

1ª. **Acreeedor con plazo**—O condicional, puede ejecutar todos los actos necesarios para garantizar sus derechos.—Jur. Com., tom. 10, pág. 92, Ser. 2ª.

1ª. **Acreeedor prendario**—Que pierde la posesión de la prenda en virtud de una caución de documentos que resultan falsos, tiene derecho á reivindicar la parte de prenda que estuviera en poder del deudor ó de su concurso.—Jur. Com., tom. 5, pág. 171, Ser. 2ª.

1ª. **Acreeedores**—Los de una sociedad debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio, están obliga-

1ª—El sumario consagra un principio de derecho—arts. 546, 3156, 3434, 3961 y su nota, del Cód. Civ.; Aubry y Rau, 311.

1ª—Un comerciante caucionó algunos valores en un establecimiento bancario: con posterioridad levantó la caución pagando su deuda en pagarés, los que después resultaron falsificados. Comprobada la falsedad, el banco recuperó de su deudor concursado parte de los valores dados en prenda. Este derecho tiene su fundamento en el fraude con que procedió el deudor prendario, fraude evidenciado por la falsedad comprobada de los pagarés entregados para el levantamiento de la prenda: siendo ese acto nulo, no puede producir efecto alguno entre los que en él intervinieron, con arreglo á lo dispuesto en los arts. 197 y 198 del Cód. de Com., y 3208, Cód. Civ.

1ª—El inc. 1º del art. 484 del Cód. de Com. ant.—igual al 422 del vig.—establece que la sociedad se disuelve por la espiración del término prefijado en el contrato; y el 486 dice, que las sociedades no se entienden prorrogadas por la voluntad presunta de los coasociados, y su renovación está sujeta á las formalidades prescritas para el establecimiento de las mismas. En presencia de esta disposición terminante de



ACR

dos á conocer el término de la espiración del contrato—Jur. Com., tom. 5, pág. 72, Ser. 2ª.

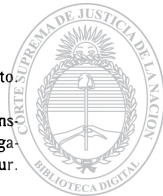
2. **Acreedores**—Los de una sociedad debidamente inscripta en el Registro Público de Comercio, están obligados á conocer el término de espiración del contrato.—Jur. Com., tom. 5, pág. 72, Ser. 2ª.

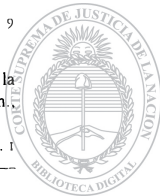
3. **Acreedores**—No son parte en los incidentes del con-

la ley, es evidente que la sociedad se disuelve *ipso jure*, por la espiración del término; y los actos celebrados con posterioridad, aunque lo sean bajo la razón social, no obligan sino á los que los han celebrado. Ese artículo de nuestra ley ha sido tomado del Código español, y sus comentadores están todos contestes en darle ese alcance al artículo citado. Por otra parte, el art. 492 de nuestro Código sienta de una manera terminante que la disolución de una sociedad comercial, siempre que proceda de cualquiera otra causa que *no sea la espiración del plazo señalado en el contrato*, no surtirá efecto en perjuicio de tercero, hasta que se anote en el Registro de Comercio y se publique en el domicilio de la sociedad: lo que claramente quiere decir, que cuando ha habido término fijado, vencido éste, la sociedad queda disuelta y produce efectos en perjuicio de terceros que de antemano conocían la duración de la sociedad, por la inscripción en el Registro de Comercio. Aunque no la conozcan efectivamente, la ley presume que la conocen, y esa presunción es *juris et de jure*, no admite prueba en contrario. Es deber de toda persona que contrata con una razón social el conocer el acto constitutivo de la sociedad, y si no lo conoce solo á él le es imputable esa omisión.

2—De acuerdo con lo establecido en el inc. 1º del art. 484 del Cód. de Com. ant., la sociedad se *disuelve totalmente* por la espiración del término fijado á su duración. Con relación á terceros, el Código no exige que se anote en el Registro de Comercio ni que sea publicada su disolución cuando ella se opera por la espiración del término por el cual fué contraída. Esta doctrina está de acuerdo con lo resuelto por la S. C. N. como puede verse en el tom. 9, pág. 56, Ser. 2ª y tom. 10, pág. 170 de la misma Serie; art. 1768, Cód. Civ.; Bravard Veirrières, tom. 1º, págs. 419 y 420.

3—Se trataba de acreedores que no habían presentado los justificativos de sus créditos, los que no son admitidos á formar parte de la masa—arts. 1612, Cód. de Com. ant. y 1458 del vig.—El síndico representa





ACR- ACT

curso: la intervención del Síndico basta en tanto que la ley no requiere espresamente la de aquéllos.—Jur. Com. tom. 9, pág. 169, Ser. 2^a.

Acreedores—Véase: *Fallido*, núm. 1—*Quiebra*, núms. 1 y 3—*Sociedad anónima*, núm. 3—*Simulación*, núm. 3—*Síndico definitivo*, núm. 1.

1^a. **Acreedores verificados**—En junta especial, durante la sindicatura provisoria, no están obligados á justificarlos nuevamente ante el Síndico definitivo.—Jur. Com., tom. 5, pág. 155, Ser. 2^a.

Acto—Véase: *Incapacidad*, núm. 2—*Instrumento privado*, núm. 2—*Posiciones*, núm. 18.

1^b. **Acto de comercio**—Se considera tal, la compraventa de haciendas.—Jur. Com., tom. 10, pág. 268, Ser. 2^a.

Acto ilícito—Véase: *Indemnización*, núm. 2.

Acto jurídico—Véase: *Simulación*, núm. 3.

Acto preparatorio—Véase: *Estafa*, núm. 7.

Acto público—Véase: *Testamento*, núm. 1.

Actos—Véase: *Escribano*, núm. 3—*Testigo*, núm. 2.

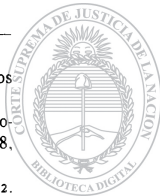
1^c. **Actos de comercio**—El ejercicio de actos de comercio,

al fallido y á la masa. No formando parte de la masa no pueden ser oídos hasta tanto no sean reconocidos en su carácter de acreedores del concurso.

1^a—Surge de la interpretación del art. 1601 del Cód. de Com. ant.

1^b—Según el actor las bases del contrato que servía de fundamento á la acción, se reducía á una sociedad cuyo objeto era el engorde de haciendas compradas para revenderlas después ó beneficiarlas en el saladero de uno de los socios. La compraventa en este caso es comercial—art. 8, incs. 1 y 2, Cód. de Com. vig.

1^c—La jurisprudencia de nuestros Tribunales fundada en la doctrina generalmente admitida, reduce á tres las cuatro condiciones requeridas por la ley—art. 1º del Cód. de Com. ant.—para caracterizar al comerciante respecto de sus responsabilidades por las obligaciones que con-



ACT — ACU

trae aparejada la responsabilidad que la ley impone á los comerciantes.—Jur. Com., tom. 8, pág. 305, Ser. 2^a.

2. **Actos de comercio**—La compra y venta de títulos comerciales importa acto de comercio.—Jur. Com., tom. 8, pág. 305, Ser. 2^a.

Actos de comercio—Véase: *Libros de comercio*, núm. 2.

Actos del fallido—Véase: *Quiebra*, núm. 8.

Actos prohibidos—Véase: *Nulidad relativa*, núm. 1.

Actor—Véase: *Testigos*, núm. 7—*Documentos*, núm. 3.

Actuario—Véase: *Certificado*, núm. 2.

1. **Acusación**—El Agente Fiscal puede pedir diligencias

trae y no cumple: éstas son: 1º Capacidad para contratar; 2º Ejercicio por cuenta propia, de actos de comercio, y 3º Profesión habitual. La manifestación de no ser comerciante, de no haber sido, de no quererlo ser, nada vale ante el ejercicio de actos de comercio, porque es el hecho lo que la ley toma en cuenta para determinar el carácter del agente. Sobre este tópico el hecho domina necesariamente al derecho.—Bedarride, *Faillites et Banqueroutes*, tom. 1º, pág. 42—El hecho de la no inscripción en la matrícula no confiere al comerciante un privilegio de no ser considerado tal; todo lo contrario, la falta de este requisito, le priva de los privilegios que tiene el comerciante y al propio tiempo le grava con todas las cargas. Es por esto que un comerciante no inscripto puede ser declarado en estado de quiebra por las operaciones mercantiles que realice. Los arts. 5 y 6 del Cód. de Com. ant., sientan el principio consagrado en el sumario. La comisión encargada de redactar las Reformas al Cód. de Com. decía en su informe: «No exigimos la inscripción en la matrícula para revestir la calidad de comerciante, porque la omisión de este requisito no debe tener el poder de sustraer al que la lleva á cabo en trasgresión del precepto legal, por acto propio, de las leyes y jurisdicción mercantiles.» Con escepción de esta modificación los arts. 1º, 5º y 6º del Cód. de Com. vigente, son iguales á los citados del antiguo.

2—Arts. 7 y 515 del Cód. de Com. antiguo, iguales al 8 y 451 del vigente.

1—Cuando se trata de una causa seguida de oficio por delito grave

ACU

ampliatorias del sumario antes de entablarla.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 89, Ser. 2ª.

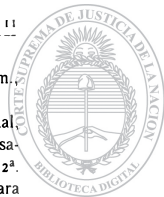
2. **Acusación**—A los efectos de la acusación criminal, solo son prejudiciales las cuestiones que la ley espresamente determina.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 346, Ser. 2ª.

3. **Acusación**—Los herederos carecen de acción para querrellarse por delitos cometidos contra su causante si éste no hubiese iniciado la acusación, pero si la hubiese iniciado tienen ellos derecho á continuarla.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 428, Ser. 2ª.

y siendo conveniente practicar esas diligencias que completen el sumario á fin de poderse espedir con pleno conocimiento de causa, pueden solicitar la ampliación, siempre que no sean inoficiosas ó innecesarias para los fines del sumario.

2—Arts. 1104 y 1105 del Cód. Civ.

3—Esta escepción se discutió bajo la denominación de falta de personería, lo que es un inconveniente para su resolución, pues podía oponerse como artículo de previo pronunciamiento, tanto la escepción de falta de acción como la de falta de personería. Con arreglo á la antigua como á la moderna legislación, la escepción es procedente. Así en las Instituciones de Justiniano se encuentra una disposición que resuelve que la transmisión de las acciones penales se hace á favor de los herederos. «Es regla ciertísima de derecho que las acciones penales procedentes de delito no se dan contra el heredero, aunque les competan y no se nieguen á los herederos; pero si estas acciones hubiesen sido contestadas por los causantes, no solo pasan á los herederos, sino que también se dan contra ellos.»—Inst., lib. IV, tit. 12, párr. 1º.—Esta disposición ha sido espuesta é interpretada por los autores en el sentido de que, las acciones penales aun antes de ser deducidas pasan á los herederos, pero solo las acciones persecutivas de la causa, de multas pecuniarias ó indemnización de daños y perjuicios; mas no se refiere á las acciones criminales tendentes al castigo de los delitos. Así opinan Gregorio Lopez y demás glosadores. Igual doctrina sientan la Ley 25, tit. 1º, Part. 7ª; ley 23, tit. 9º, Part. 7ª; ley 2, tit. 13 de la misma partida; Curia Filipica, parte 3ª, 58, núm. 12; Escriche, Verb. *Acción perse-*





ACU

Acusación—Véase: *Cosa juzgada*, núm. 1—*Escarcelación bajo fianza*, núm. 2—*Sobreseimiento*, núm. 1—*Adulterio*, núm. 1—*Testigos*, núm. 12—*Calumnia*, núms. 4, 5, 6 y 7—*Confesión del reo*, núm. 13—*Costas*, núm. 18—*Estafa*, núm. 6.

1. **Acusación particular**—El Ministerio Fiscal es parte en todo juicio criminal, aun cuando el delito fuese de los

curatoria penal y mixta: Tapia, Febrero Reformado, lib. 3º, tít. 4º, cap. 1º, pág. 3; Goyena, tom. 5º, lib. 4º, tít. 3º, pág. 412; Tejedor, curso de Derecho Criminal, part. 2ª, lib. 1º, tít. 1º, cap. 3º, núm. 27, pág. 16. Nuestro Código de Procedimientos no resuelve el punto y en este caso queda sujeta su resolución á los principios que indique el derecho común, ó á los que teníamos aceptados en la legislación española, la que no permitía al heredero, ejercer las acciones penales de su causante, sino cuando éste las hubiese deducido. El art. 179 dispone que la persona particularmente ofendida, puede promover el respectivo juicio criminal, haciéndose extensivo este derecho á los representantes de los incapaces: el art. 14 consagra ese derecho á dichos representantes. El Código Civil, establece que la acción civil no pasa á los herederos, salvo si fué entablada por el difunto en los delitos de agravio moral, como las injurias y la difamación: de donde se infiere, que si hay restricciones para la acción civil, con mayor razón debe haberlas para las acciones criminales, porque el derecho de pedir la aplicación de una pena, no forma parte del patrimonio del agraviado y por consiguiente no es transmisible á sus herederos—art. 1099, Cód. Civ.—Además, no debe olvidarse que el art. 3317 establece, que si bien el heredero continúa la persona del difunto, es con la limitación de aquellos derechos que no son trasmisibles por sucesión. En el Código de Procedimientos de la Provincia de Buenos Aires—art. 25—se prohíbe al heredero ofendido ejercitar la acción penal, salvo los casos que enumera, entre los cuales se encuentra el de haber sido entablada por el causante; doctrina que se ajusta á la legislación española: principio también confirmado por el art. 175 de nuestro Código de Procedimientos.

1.—La intervención fiscal en caso de haber acusador particular, es coadyuvante. Esa intervención la establece el art. 14 del Cód. de Proc. Crim. La acción penal procedente de un delito, aunque comprendido

ACU

que solo se persiguen por acusación particular. — Jur. Crim., tom. 8, pág. 168, Ser. 2ª.

Acusado—Véase: *Delito*, núm. 3—*Injurias*, núms. 1 y 3—*Prueba plena*, núms. 1 y 4—*Calumnia*, núms. 2, 3, 4, 7 y 8—*Detención*, núms. 1 y 2—*Sobreseimiento*, núm. 3—*Confesión del reo*, núms. 9 y 10—*Estafa*, núms. 5 y 6—*Interrogatorios*, núm. 2—*Querella*, núm. 1—*Escarcelación*, núm. 1—*Escepción*, núm. 3—*Escepción de legítima defensa*, núm. 1.

1ª. **Acusado prófugo**—No puede ser oído, ni intervenir en el juicio por medio de apoderado, hasta tanto se presente ó sea habido.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 46, Ser. 2ª.

Acusados—Véase: *Juez competente*, núm. 1.

1ª. **Acusador**—La escusación del que acusa injurias, para comparecer al juicio, presentada antes de la hora señalada, no permite darlo por desistido de la acción.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 58, Ser. 2ª.

Acusador—Véase: *Escepción de falta de personería*, núms. 7 y 8—*Injurias*, núm. 3—*Interrogatorios*, núm. 2—*Nulidad*, núm. 7—*Sobreseimiento*, núms. 5 y 6—*Poder*, núm. 1—*Calumnia*, núm. 9—*Prueba*, núm. 16.

1. **Acusador particular**—Está obligado á absolver posiciones.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 46, Ser. 2ª.

entre los calificados como privados, reviste el carácter de acción pública, puesto que solo los poderes públicos, tienen el derecho de castigar, y es lógico que á su representante incumbe ejercitar ese derecho.

1ª—Art. 10 del Cód. de Proc.

1ª—La escusación comprueba el acatamiento de la orden judicial, y su deseo de comparecer al juicio. La deserción de la querella por la no comparecencia del querellante se funda en el abandono que éste hace del juicio instaurado, el que no se presume cuando se presenta una escusa para no comparecer.

1—Art. 470, Cód. de Proc. Crim.



**ADH — ADU**

Adhesión—Véase: *Apelación*, núm. 2—*Recurso*, núm. 1.

1^a. **Adhesión al recurso**—Por el Ministerio Público, solo procede si la causa ha sido llevada por apelación.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 193, Ser. 2^a.

Administración de bienes—Véase: *Filiación natural*, número 1.

1^b. **Administrador**—Justificada la mala administración de los bienes testamentarios, ejercida por la viuda, el Juzgado puede nombrar administrador á otro heredero.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 68, Ser. 2^a.

Administrador—Véase: *Socios*, núm. 2—*Rendición de cuentas*, núm. 5—*Prueba*, núm. 12—*Defraudación*, número 5.

1. **Adulterio**—Este delito, no está comprendido en el tratado de extradición vigente con el Estado Oriental.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 215, Ser. 2^a.

2. **Adulterio**—Este delito solo puede ser materia de proceso cuando existe acusación de parte del cónyuge ofendido.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 415, Ser. 2^a.

3. **Adulterio**—Excediendo de dos años la pena fijada á este delito, no procede la escarcelación bajo fianza.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 98, Ser. 2^a.

1^a—Si bien es cierto que el art. 528 del Cód. de Proc. Crim., autoriza la adhesión al recurso, no tiene lugar esto cuando la causa se eleva por el solo ministerio de la ley, como lo establece el art. 690; pues entonces no permite el art. 693, que se modifique la pena del Inferior en sentido desfavorable al reo: este efecto solo se produce en los casos establecidos en la segunda parte del artículo, ó bien cuando el defensor recusase de la sentencia ó espresase agravios.

1^b—Art. 643, *in fine* del Cód. de Proc.

2—Art. 124, Cód. Pen.

3—Art. 376 del Cód. de Proc. Crim.

ADU — AGR



4. **Adulterio**—El cómplice, puede ser escarcelado bajo fianza.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 101, Ser. 2^a.

1. **Agente de la autoridad**—Fuera de los actos de servicio, no puede ser desacadado, y los delitos comunes en que incurra, no pueden ser calificados como abuso de autoridad.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 332, Ser. 2^a.

Agente de la autoridad—Véase: *Atentado*, núms. 1 y 2.

Agente Fiscal—Véase: *Acusación*, núm. 1.

Agravación—Véase: *Lesiones*, núms. 12 y 13.

1^a. **Agravación de la pena**—La falta de apelación del Agente Fiscal, y la omisión del Defensor en espresar agravios, inhibe al Fiscal de pedir la agravación de la pena.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 39, Ser. 2^a.

2. **Agravación de la pena**—La Cámara, no puede agravar la pena si solo el Defensor interpone el recurso de apelación.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 23, Ser. 2^a.

Agravantes—Véase: *Circunstancias atenuantes*, núm. 1.

Agravio—Véase: *Sobreseimiento*, núm. 3.

Agredido—Véase: *Defensa*, núm. 1.

Agresor—Véase: *Absolución*, núm. 2—*Defensa*, núm. 1—*Homicidio*, núm. 23.

4—El art. 376 del Cód. de Proc. establece, que la escarcelación bajo fianza procede en los casos en que la pena corporal correspondiente al delito no excede de dos años de prisión. El art. 122 del Cód. Pen. castiga al cómplice del adulterio con pena de destierro, no pudiendo ésta considerarse igual ni superior á la de prisión, tanto por su naturaleza y efectos cuanto porque en el orden graduado de las penas establecido en el art. 54 del Cód. Pen., figura después de la prisión y arresto. Por otra parte, estudiando las penas establecidas por el Código para el adulterio, se vé que éste considera más grave el delito por parte de los cónyuges y especialmente de la mujer—arts. 122 y 123 del Cód. Pen.

1^a—Véase: Verb. *Adhesión al recurso*, núm. 1.

2—Art. 693 del Cód. de Proc. Crim.

ALB — ALE

A la orden—Véase: *Endoso*, núm. 1—*Verificación*, número 2.

1ª. *Albacea*—Está obligado á hacer manifestación jurada de los bienes dejados por el causante.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 81, Ser. 2ª.

Albacea—Véase: *Mandato*, núm. 1.

1ª. *Albaceas*—Su intervención en la testamentaria se rige por las disposiciones del mandato, y en consecuencia, tienen personería para intervenir en todo incidente, que modificando el capital testamentario, pueda alterar la voluntad del testador.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 347, Ser. 2ª.

Alcaide de Policía—Véase: *Reincidencia*, núm. 4.

Al contado—Véase: *Comisionista*, núm. 2—*Operaciones de bolsa*, núm. 2.

Alegatos—Véase: *Diligencias de prueba*, núm. 8.

1ª. *Alevosia*—Esta debe resultar plenamente probada para que pueda ser tomada en consideración.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 111, Ser. 2ª.

2. *Alevosia*—No puede declararse su existencia mientras no se justifique que la herida fué inferida á traición.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 233, Ser. 2ª.

1ª—El Cód. Civ., no le impone tal obligación. La Cámara dijo que la naturaleza del cargo impone al albacea esta obligación.

1ª—Arts. 3851, 3857, 3862 y 3863 del Cód. Civ.

1ª—Porque la alevosia es una circunstancia agravante de los delitos en general y esencialmente constitutiva del asesinato, según el art. 95, inc. 1º del Cód. Pen.

2—La traición es un elemento indispensable para que la alevosia exista. También hay alevosia cuando se toma á la víctima desprevenida ó de improviso. Véase: *Inst.*, tom. 3, Verb. *Alevosia*, núms. 1 y 2. El Cód. Pen. vig., dice en su art. 84, inc. 2º, que se entiende por alevosia, cuando se obra á traición ó sin peligro para el agresor. De donde resulta que cuando el Camarista decía que «no puede afirmarse que da-



ALE — APE

Alevosía—Véase: *Lesiones*, núm. 1—*Homicidio*, núms. 5, 6, 23 y 25.

Alimentos provisorios—Véase: *Inhibición*, núm. 1.

Amenazas—Véase: *Competencia*, núm. 1—*Coacción*, número 1—*Desacato*, núm. 5—*Oficial de justicia*, número 1.

Amigables componedores—Véase: *Daños y perjuicios*, número 1.

Ampliación—Véase: *Sumario*, núm. 1.

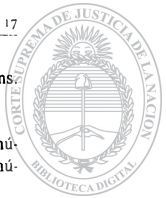
Antecedentes—Véase: *Homicidio*, núm. 24.

Apelable—Véase: *Honorarios*, núm. 6—*Rematador*, número 3—*Inapelables*, núm. 1.

1. **Apelación**—En los juicios criminales, la apelación de autos interlocutorios, solo procede en efecto devolutivo: el suspensivo ha sido tácitamente derogado.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 233, Ser. 2ª.

dos los antecedentes que precedieron, el procesado haya procedido a traición, faltando el elemento indispensable de la alevosía», padece error, pues este no es un elemento indispensable, ni según la ley, ni según la doctrina del derecho criminal.

1—La regla general establecida por el art. 505 del Cód. de Proc. en lo Crim., es que la apelación se concede en un solo efecto: al sentarse esta regla ha querido separarse del procedimiento que regía anteriormente el que concedía el recurso en ambos efectos, como sucede en el procedimiento civil—art. 230, Cód. de Proc. Civ.—Cuando la ley dice que el recurso se concederá en un solo efecto, debe entenderse que lo es en el devolutivo, tanto porque así se desprende del art. 507 del Cód. de Proc. Crim., igual al 232 del Cód. de Proc. Civ., cuanto que si se entendiera en el efecto suspensivo carecería el referido art. 505 de significado legal ó por lo menos sería inútil, atento lo espuesto en el art. 504. Debe además tenerse presente que está en el espíritu del Código acelerar la terminación de las causas en cuanto sea compatible con las garantías del procedimiento para la libertad individual—arts. 68, 69, 82, 108, 147 y 431, Cód. de Proc. Crim.



APE

2. **Apelación**—No procede la adhesión del Fiscal de las Cámaras al recurso interpuesto por el defensor del reo: debe el Agente Fiscal deducir la apelación en tiempo y forma para que el Superior pueda modificar la sentencia en sentido desfavorable al reo.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 439, Ser. 2ª.

3. **Apelación**—Todo recurso de apelación, es improcedente en el juicio ejecutivo, salvo los que espresamente la ley determina.—Jur. Com., tom. 9, pág. 207, Ser. 2ª.

4. **Apelación**—El auto que no hace lugar á la revocatoria, hace cosa juzgada, si conjuntamente con este recurso, no se interpone apelación.—Jur. Com., tom. 10, pág. 334, Ser. 2ª.

Apelación—Véase: *Árbitros*, núm. 1—*Adhesión al recurso*, núm. 1—*Agravación de la pena*, núm. 1—*Renuncia*, núm. 2.

Apellido—Véase: *Testigo*, núm. 1.

1. **Apercibimiento**—Cuando se dicta un auto bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por derecho, que se

2—El recurso en esta forma no se halla autorizado por el Código de Procedimientos. El Superior no puede elevar la pena impuesta—art. 693, Cód. de Proc.

3—Art. 505, Cód. de Proc.—La apelación se interpuso por el ejecutado, de un auto en que se denegaba una diligencia de prueba. Parece que ésta debiera estar regida por el principio general de que toda providencia que deniegue una diligencia de prueba es apelable. Es necesario además tener presente que el art. 505 solo es aplicable al ejecutado. Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Apelable*, núm. 1; *Juicio ejecutivo*, núm. 1; y tom. 1º, verb. *Apelaciones*, núm. 183.

4—Art. 225, Cód. de Proc.

1—Porque las convenciones hechas entre las partes forman una regla á la cual deben someterse como á la ley misma—art. 1197, Código Civil.



APE — ARB

hace al notificado, está de acuerdo con lo dispuesto en la ley que rige el contrato, ello importa que se le aplicará la pena que fulmina.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 359, Ser. 2^a.

Apercibimiento—Véase: *Posiciones*, núm. 14—*Copias*, número 1—*Excepciones*, núm. 3.

A plazos—Véase: *Comisionista*, núm. 2—*Operaciones de bolsa*, núm. 2.

1^a. **Apoderado**—O mandatario judicial, no puede ser responsable personalmente por las costas del juicio.—Jur. Com., tom. 8, pág. 301, Ser. 2^a.

Apoderado—Véase: *Rebeldía*, núm. 2—*Acusado prófugo*, núm. 1.

1^b. **Aprobación**—El reconocimiento expreso del saldo que arroja una cuenta, importa su aprobación y hace imprecendente todo ulterior reclamo sobre falsedad de las partidas, por medio de una nueva rendición de cuentas.—Jur. Com., tom. 9, pág. 70, Ser. 2^a.

Aprobación tácita—Véase: *Balances*, núm. 1.

Arbitrio judicial—Véase: *Homicidio*, núm. 1.

1^c. **Árbitros**—Sometido á ellos un asunto, el Juzgado

1^a—El art. 15 del Cód. de Proc. Civ., establece que en caso de condenación en costas los apoderados solo responden de las costas causadas en la actuación del juicio, pero no de los honorarios del abogado, etc., á menos que se hayan obligado á ello de una manera expresa.

1^b—No procede la rendición de cuentas, porque la cuenta no objetada importa una rendición: pero procede la modificación de esa cuenta rendida, fundándose que en ella se ha omitido cargar á su favor algunas partidas, ya sea que esa omisión sea debida al dolo ó al error de la otra parte.

1^c—Si el Juez de 1^a Instancia resolviera los incidentes que ocurran en estos casos, se crearían recursos que las leyes no admiten para las resoluciones de los árbitros. Las aclaraciones corresponden á las par-



ARB — ARG

queda inhibido de hacer aclaraciones al contrato, si no interviene en grado de apelación.—Jur. Com., tom. 5, pág. 241, Ser. 2ª.

2. **Árbitros**—No poniéndose éstos de acuerdo para el nombramiento de un tercero, debe nombrarlo el Juzgado.—Jur. Com., tom. 6, pág. 52, Ser. 2ª.

3. **Árbitros**—Las cuestiones sobre liquidación de una sociedad comercial, deben ser resueltas por árbitros.—Jur. Com., tom. 6, pág. 104, Ser. 2ª.

4. **Árbitros**—El Juez que conoció en la formación del compromiso arbitral, es el competente para resolver sobre la aplicabilidad de la multa estipulada: los árbitros carecen de jurisdicción.—Jur. Com., tom. 9, pág. 53, Ser. 2ª.

5. **Árbitros**—Conformes los socios en la disolución de la sociedad, procede el nombramiento de árbitros.—Jur. Com., tom. 10, pág. 99, Ser. 2ª.

Árbitros—Véase: *Informe de los árbitros*, núm. 1—*Sociedad*, núm. 5.

Área—Véase: *Precio*, núm. 3.

Área del terreno—Véase: *Títulos*, núm. 5.

Argentino—Véase: *Fuero federal*, núm. 1.

tes siempre que se trata de fijar el alcance de sus propias manifestaciones y la mente que les ha guiado.

2—Art. 774, Cód. de Proc.

3—Art. 511, Cód. de Com. ant.

4—La jurisdicción de los árbitros está circumscripita á los puntos que por el compromiso han sido sometidos á su fallo; no pueden entender en cuestiones que le son estrañas por ser del resorte esclusivo del Juez ordinario y por haberse celebrado ante él el compromiso por el cual se establece la pena.

5—Arts. 511 del Cód. de Com. ant. y 448 del vigente.



ARM

1ª. **Arma**—Se conceptúa tal á los efectos del atentado contra la autoridad, cualquier objeto que pueda servir para el ataque, sin que ser requisito esencial que sea arma de fuego ó de acero.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 276, Ser. 2ª.

2ª. **Arma**—A los efectos de calificar el atentado con armas contra la autoridad, debe reputarse tal cualquier objeto capaz de poner en peligro la vida.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 318, Ser. 2ª.

Arma—Véase: *Atentado*, núm. 5—*Legítima defensa*, núms. 4 y 6—*Premeditación*, núm. 2—*Lesiones*, núm. 16.

1ª. **Arma de fuego**—Disparada intencionalmente, el delito debe ser penado con un año y medio de prisión, si el reo estaba ebrio.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 393, Ser. 2ª.

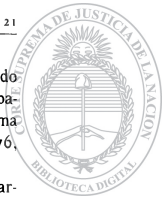
2ª. **Arma de fuego**—Su disparo, debe ser penado con dos

1ª—En la palabra armas se comprende también las piedras, palos y cualquier elemento de ataque.

2ª—Aquí se trataba de una herida producida con un vaso. En cuanto al sumario, véase el número precedente. El Dr. Tejedor en su «Curso de Derecho Criminal» dice: «§ De todo se sigue que el arma toma su carácter no tanto de la materia que la forma como del uso á que se destina. Así todo lo que puede dañar, *omne quod nocendi causa habetur*, todos los objetos con que se puede herir ó matar pueden convertirse en arma.»

1ª—Disparada contra otra persona, está regido por el art. 99 del Cód. Pen. vigente siempre que la embriaguez no reúna todos los requisitos exigidos por la ley para eximirlo de responsabilidad, y sirviendo tan solo como circunstancia atenuante—art. 83, inc. 1º, Cód. Pen.

2ª—El art. 99 del Cód. Pen. castiga el hecho de disparar intencionalmente una arma de fuego contra cualquiera persona, aun cuando no la hiera, con prisión de uno á tres años; siendo dos años el término medio que debe aplicarse cuando no hay circunstancias atenuantes ni agravantes. En autos se comprobó que no hubo intención de matar. Cuando se cause heridas debe tenerse presente lo dispuesto en el art. 119.



ARM — ART

años de prisión, no obstante la lesión causada, mientras no se justifique la intención homicida.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 49, Ser. 2ª.

3. **Arma de fuego**—El disparo de arma de fuego sin circunstancias agravantes ni atenuantes debe ser penado con dos años de prisión.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 97, Ser. 2ª.

4. **Arma de fuego**—Corresponde la pena de dos años de prisión al delito de disparar arma de fuego: la menor edad del reo no debe ser tomada en consideración si se causan lesiones.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 92, Ser. 2ª.

5. **Arma de fuego**—El hecho de dispararla, debe ser penado con dos años de prisión, que es el término medio de la pena, si no existen circunstancias agravantes ó atenuantes.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 21, Ser. 2ª.

Arma de fuego—Véase: *Atentado*, núm. 2—*Disparo de arma de fuego*, núms. 1, 2, 3, 4 y 5—*Tentativa de homicidio*, núms. 1 y 2—*Tentativa de heridas*, núm. 1—*Intención homicida*, núm. 1—*Lesiones de bala*, núm. 1—*Arma*, núm. 1.

Arma homicida—Véase: *Premeditación*, núm. 1.

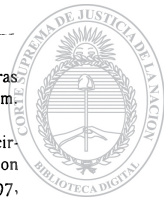
Armas—Véase: *Homicidio*, núm. 16—*Legítima defensa*, núms. 4 y 6—*Atentado*, núm. 1.

1. **Artículos acusados**—Siendo varios los artículos acusados, si el presentado como autor responsable niega que

3—Véase nota precedente.

4—En cuanto á la primera parte, véase el núm. 1: en cuanto á la segunda, se dijo que la edad del reo no debía tenerse en consideración porque había procedido con manifiesta alevosía, concurriendo asimismo reiteración del delito: siendo estas circunstancias agravantes neutralizadas por la atenuante que nace de la minoridad del procesado.

5—Arts. 99 y 52 del Cód. Pen. vigente.



ART — ATE

alguno le pertenezca, la responsabilidad renace contra el editor.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 110, Ser. 2ª.

Artículos acusados—Véase: *Editores*, núm. 1.

A ruego—Véase: *Excepción de inhabilidad de título*, número 5.

Arrendamiento—Véase: *Cesión de derechos*, núm. 3.

Arresto—Véase: *Fallido*, núm. 3.

Arresto y multa—Véase: *Delitos*, núm. 2.

Asambleas—Véase: *Sociedades anónimas*, núm. 1.

1ª. **Asesinato**—Por precio, debe ser penado con presidio por tiempo indeterminado, cuando por consistir la prueba en presunciones graves, precisas y concordantes, no puede aplicarse la pena capital.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 86, Ser. 2ª.

2. **Asesinato**—Para que las heridas puedan ser penadas como tentativa de asesinato, debe justificarse la existencia de circunstancias que permitan esa calificación.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 47, Ser. 2ª.

Asesinato—Véase: *Delito*, núm. 2—*Homicidio*, núms. 6 y 18.

Asuntos judiciales—Véase: *Comisionista*, núm. 3.

Ataque—Véase: *Legítima defensa*, núms. 1, 2 y 3—*Arma*, núm. 1.

Ataque brusco—Véase: *Circunstancias atenuantes*, número 3.

Ataque ilícito—Véase: *Absolución*, núm. 2.

1ª. **Atentado**—Con armas contra la autoridad, sin circunstancias atenuantes ni agravantes, debe ser penado con

1ª—Arts. 34, inc. 2º, y 55, Cód. Pen.

1ª—De acuerdo con lo establecido en los arts. 234 y 235 del Código Pen. vigente.



**ATE**

año y medio de prisión.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 310, Ser. 2ª.

2. **Atentado**—La intimidación á un agente de la autoridad para que no cumpla sus funciones, importa un atentado.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 216, Ser. 2ª.

3. **Atentado**—Contra la autoridad, debe ser penado con el máximo de la pena, si existen lesiones como circunstancias agravantes.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 119, Ser. 2ª.

4. **Atentado**—Este y el desacato contra la autoridad, deben ser penados con año y medio de prisión.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 66, Ser. 2ª.

5. **Atentado**—A mano armada contra la autoridad, debe ser penado con año y medio de prisión.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 117, Ser. 2ª.

6. **Atentado**—A la autoridad; las lesiones, cuando concurra esa circunstancia agravante en la víctima, debe ser castigado con dos años y ocho meses de prisión.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 105, Ser. 2ª.

7. **Atentado**—Con armas á la autoridad, con circunstancias atenuantes, debe ser penado con un año de prisión.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 312, Ser. 2ª.

8. **Atentado**—A mano armada, contra la autoridad, agravado por lesiones, debe ser penado con dos años de prisión.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 212, Ser. 2ª.

2—Art. 234, Cód. Pen. vigente.

3—Art. 235, inc. 1º, Cód. Pen. vigente.

4—Véase el núm. 1.

5—Véase nota precedente.

6—Art. 120, inc. 1º, Cód. Pen. vigente.

7—Arts. 234 y 235 del Cód. Pen. anterior.

8—Arts. 119 y 234 del Cód. Pen. anterior.

ATE — AVI

9. **Atentado**—A mano armada contra la autoridad, a los efectos de calificar este delito, debe reputarse como arma cualquier objeto capaz de poner en peligro la vida.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 318, Ser. 2ª.

Atentado con armas—Véase: *Desacato á la autoridad*, núm. 2.

Atentado contra la autoridad—Véase: *Arma*, núms. 1 y 2.

Audiencia—Véase: *Estado civil*, núm. 1—*Testigos*, números 3, 4 y 5—*Mensura*, núm. 1—*Escepciones*, núm. 4.

Ausencia—Véase: *Detención*, núm. 1—*Premeditación*, núm. 2.

Ausente—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 6—*Posiciones*, núm. 4.

Ausente periódicamente—Véase: *Escepción de arraigo*, núm. 1.

Autenticidad—Véase: *Instrumento privado*, núm. 2.

Auto—Véase: *Desalojo*, núm. 1—*Recurso de reposición*, núm. 1—*Rematador*, núm. 3.

Auto de quiebra—Véase: *Concordato*, núm. 2—*Quiebra*, núm. 11.

Autos interlocutorios—Véase: *Apelación*, núm. 1.

Autor—Véase: *Editores*, núm. 1—*Publicación acusada*, núm. 1—*Posiciones*, núms. 15 y 16—*Negativo*, núm. 2—*Artículos acusados*, núm. 1.

Autoridad—Véase: *Atentado*, núms. 1 y 2—*Coacción*, núm. 1—*Desacato*, núm. 5—*Atentado*, núm. 11.

Aviso—Véase: *Remate judicial*, núm. 3.

9—Véase: Verb. *Armas*, núms. 1 y 2.





Bala—Véase: *Lesiones*, núm. 4.

1^a. **Balance de liquidación**—Y división de la sociedad, es ley para los socios que la formaban, y vencido el término de diez días que el Código de Comercio fija para los reclamos fundados en errores que se hubiesen cometido, toda acción que pretenda modificar dicho balance debe ser desechada.—Jur. Com., tom. 7, pág. 238, Ser. 2^a.

1^b. **Balances**—La aprobación tácita y consecutiva de los balances en que se hacen constar las condiciones estipuladas con un dependiente, es prueba suficiente del contrato de habilitación, aun cuando no exista convenio espreso.—Jur. Com., tom. 8, pág. 372, Ser. 2^a.

1. **Banco Nacional**—Está obligado á ocurrir á la

1^a—Arts. 504 y 1003, inc. 2º, Cód. de Com. ant., iguales al 441 y 848 del vigente.

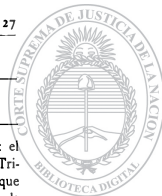
1^b—El balance determina el verdadero estado de una casa de comercio, fijando la posición de cada uno de los interesados en el giro y estableciendo sus respectivos derechos y obligaciones. Los arts. 59 y 76 del Cód. de Com. ant. iguales al 48 y 63 del vigente consagran el principio sentado en el sumario.

1.—El Banco Nacional no puede iniciar la ejecución para el cobro de sus cuentas ante la jurisdicción común, porque ella no es competente. La única autoridad competente para entender en todo litigio en que sea parte el Banco Nacional, es el Juzgado Federal: ya sea que se trate de

BAN

jurisdicción federal para ejecutar á sus deudores.—
Jur. Com., tom. 10, pág. 143, Ser. 2ª.

una demanda iniciada *por* el Banco ó *contra* el Banco. Con efecto: el art. 100 de la Constitución Nacional dice que, corresponde á los Tribunales de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versan sobre puntos regidos por la Constitución General y Leyes de la Nación. La creación del Banco Nacional, como igualmente sus estatutos, arrancan de la Constitución y han sido sancionados por el Congreso Nacional en virtud de sus facultades constitucionales conferidas *ad hoc* por la misma Carta Fundamental en su art. 67, inciso 5º. No se puede objetar que el Banco Nacional, tal cual ha sido formado, no responda al carácter del Banco que la Constitución ha querido crear: baste con hacer presente que tanto el Congreso, como el Ejecutivo Nacional, han creado el Banco ejercitando este precepto constitucional, pues así lo comprueba el hecho de haber sido rodeado de toda clase de exenciones y privilegios: no paga impuesto alguno, ni Nacional ni Provincial. No puede por consiguiente decirse, que por el hecho de componerse el Banco en su mitad de accionistas, sea este establecimiento una institución particular. Un establecimiento privado de comercio, es el formado por un particular ó muchos asociados con el fin de sacar un beneficio ó utilidad privada. El Congreso tuvo en vista otro orden de cosas: quiso hacer uso de la cláusula constitucional para crear el Banco de Estado que la Nación necesitaba. La creación de nuestro Banco Nacional tiene su analogía con la del «Banco de los Estados Unidos»; y si examinamos la historia de la creación de este último, se verá claramente la intención que guió á nuestros legisladores. El art. 67 establece en su cláusula mencionada, la facultad recordada en los siguientes términos: «Establecer y reglamentar un Banco Nacional en la Capital, y sus sucursales en las provincias con facultad de emitir billetes.» Es de advertir, y tenerse en cuenta que en la creación del Banco se han llenado cuidadosamente todos los requisitos ordenados en la Constitución. La elección de la forma en que debió darse vida al precepto constitucional, ha quedado librada á los Poderes Públicos, pues era conveniente, era correcto, era práctico, dejar determinada esta facultad al Congreso el que debía proceder consultando los consejos de la ciencia económica. Tanto la una como la otra aconsejaban la creación de un Banco mixto, del Gobierno y por acciones de particulares al mismo tiempo: Así son los Bancos de Inglaterra, Francia, Bélgica y lo fué también el de los



BIB

Bienes—Véase: Embargos, núm. 1—Papel sellado, núm.

Estados Unidos, que es el que debe servirnos de norma á nosotros, puesto que nuestros convencionales se inspiraron en la ley de su creación para legislar sobre el nuestro. Teniendo pues presente que el Banco tiene su origen en la Constitución y que ha sido reglamentado por el Congreso y por el Ejecutivo Nacional, es una consecuencia lógica que todos los actos ó contratos que esa institución celebre quedan sujetos á la jurisdicción federal, pues es un principio reconocido en derecho, que el poder ó facultad para crear una institución entraña la de protegerla en todos sus actos, siempre que sean necesarios para la vida del establecimiento creado: de aquí la necesidad de que también la justicia federal sea la única competente para entender en estos juicios. Como se ha dicho anteriormente, según el art. 100 de la Constitución, y 2º, inciso 1º de la Ley de 1863, sobre jurisdicción y competencia de los Tribunales Nacionales, corresponde al conocimiento de éstos, toda causa regida por la Constitución y por las leyes nacionales—ley del Congreso.—La excepción que consigna el inciso 11 del art. 67, con respecto á los Códigos Civil, Comercial y de Minería etc., comprueba la tesis espuesta, pues si esa excepción no se hubiese establecido serían también de competencia de los Tribunales Federales todas las cuestiones en que tuviesen que aplicarse estas leyes. El caso presente tiene su origen y está regido por una ley del Congreso, y la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales es una consecuencia necesaria de estos antecedentes. Por otra parte, la jurisdicción federal tiene su origen en la Constitución y en las leyes del Congreso que han reglamentado la materia: esta jurisdicción no puede ser limitada por la creación de otros Tribunales que aun siendo nacionales no ejercen jurisdicción federal. Nos referimos á los Tribunales de la Capital de la República. A los efectos de su competencia, los juzgados nacionales de la Capital Federal son considerados como provinciales. Se dice que el Banco Nacional puede renunciar al Fuero Federal, ocurriendo al fuero ordinario en los casos que quiera. Es evidente que los que tal teoría sostienen padecen error. El Fuero Federal nace, ó de las personas, ó de la naturaleza de la causa. En el caso *sub-judice*, el Fuero Federal nace tanto por razón de las personas, como por la naturaleza de la causa. Corresponde al Fuero Federal por razón de las personas, porque ésta es una entidad jurídica de creación nacional y establecida con fines puramente nacionales. Siendo el Banco Nacional una persona jurídica nacida y creada para fines puramente nacionales, afectando todos sus actos, inte-



BIE

mero 2—*Acción reivindicatoria*, núm. 1—*Albacea*, nú-

reses también puramente nacionales, debe reconocerse como una consecuencia natural, que todos esos actos y operaciones que surgen y en que es parte esa persona jurídica, son de jurisdicción nacional. El Poder Judicial se extiende á todo aquello á que se extiende el Poder Legislativo y el Ejecutivo, y es un principio reconocido, que el poder ó facultad para crear una institución, envuelve la facultad de protegerla en todos sus actos, lo que sería imposible sin la intervención del Poder Judicial siempre que fuese necesaria, ha dicho la Suprema Corte de la Nación, como puede verse en el tom. 9, pág. 172, Ser. 2^a. De aquí se desprende la exactitud del principio anteriormente sentado de que estos juicios corresponden al Fuero Federal por razón de las personas. No se diga tampoco, que la persona á cuyo favor se establece el Fuero Federal pueda renunciarlo cuando quiera, obligando á la otra parte á aceptar el fuero común cuando así se le antoje. Cuando una persona demanda á otra y una de ellas es extranjera, su conocimiento corresponde á la Justicia Federal: mas el art. 12, inc. 4^o, establece la escepción de que, cuando un extranjero demande á un argentino ante la justicia de la Provincia, se entiene que hay prorrogación de jurisdicción, y el argentino no puede obligar al extranjero á ocurrir á la Justicia Federal. Como he dicho, esta es una escepción, y como tal debe interpretarse de una manera restrictiva. La ley dice: «Siempre que un *pleito civil*, etc.» Aquí se trata de un pleito comercial. Si la prorrogación de jurisdicción se admite por escepción, en materia *comercial* no procede. Por otra parte, la ley habla de un caso que no es el presente: «cuando un extranjero demanda», dice: Aquí no se trata de un extranjero, se trata de una causa seguida por una persona jurídica, que es un argentino, con otro argentino. No es el caso de escepción establecido por la ley de 1863 en su art. 12, inc. 4^o. Este artículo, establece un privilegio, y como tal necesariamente tiene que restringirse. Se trata del orden de proceder en los juicios, y precisamente en lo relativo á jurisdicciones, en cuyo caso es de interés general y de orden público. «El orden de las jurisdicciones es de interés general, y no puede fuera de los casos permitidos por la ley ser alterado por la voluntad de los que son llamados á comparecer en juicio.» Véase Fallos de la Suprema Corte Nacional, tomo 3, pág. 7, Ser. 2^a, inc. 4^o del sumario. El orden establecido en este caso no puede alterarse por voluntad de las partes, y mucho menos contra su voluntad. La escepción ha sido establecida por la ley para ciertos y determinados casos; no puede aplicarse por analogía al que nos ocupa,



ACC

mero 1—*Embargo*, núm. 1—*Filiación natural*, núm. 1—

máxime si se tiene en cuenta que ellos **no** son análogos. Esto en cuanto á la incompetencia por razón de las **personas**. Además hay incompetencia *ratione materiae*, y voy á demostrarlo: El Fallo de la Suprema Corte que se registra en el tom. 9, pág. 162, causa CXVI, Ser. 2º, dice: Que según el art. 100 de la Constitución y el art. 2º, inc. 1º de la ley de 1863, corresponde á los Tribunales Federales el conocimiento de toda causa regida por la Constitución ó por una ley del Congreso: como el Banco Nacional tiene su origen en la Constitución y en la ley reglamentaria del Congreso que dió forma práctica al precepto constitucional, de donde se sigue la competencia de esos Tribunales para conocer en dichas causas. Cita la Suprema Corte un caso resuelto por los Tribunales de los Estados Unidos y concluye diciendo: «La decisión de este caso á que concurrió, entre otros jueces, el eminente J. Story, fijó la jurisprudencia, y desde entonces *todas las cuestiones promovidas* POR Ó CONTRA el Banco de los Estados Unidos, fueron llevadas ante los Tribunales de la Unión.» El Fuero ordinario es por consiguiente incompetente por razón de la causa. La prorrogación de causa á causa, no es permitida por la ley, pues de otro modo se trastornaría el orden de las jurisdicciones, que ha sido establecido por razones de interés público, y no puede ser alterado por los particulares, como dice el Doctor Malaver en sus Procedimientos Judiciales, pág. 26. El art. 12 de la ley de Justicia Federal, sobre jurisdicción y competencia dice, es privativa en todos los casos especificados por los artículos 1, 2 y 3, excluyendo á los Juzgados de Provincia. Aun más, al sostenerse que el Fuero Federal concedido al Banco Nacional es un privilegio personal, se desconocen completamente los mismos principios de nuestra organización judicial, por cuanto los Tribunales Nacionales no han sido instituidos con el fin de privilegiar á cierta clase de personas, sino por razones más elevadas. La interpretación de la ley corresponde necesariamente al poder que la ha dictado ó á los representantes judiciales directos de este mismo poder ó sea á los Tribunales federales, porque como lo ha declarado la Corte Suprema Nacional en el recordado fallo, el Poder Judicial se estiende á todo aquello á que se estiende el Poder Legislativo y Poder Ejecutivo; y como se espresaba Marshall, al esponer la opinión de la Suprema Corte de Estados Unidos en un caso en que se ventilaba esta misma cuestión: «El Banco no solo es él mismo una mera criatura de una ley, sino que todas sus acciones y todos sus derechos emanan de la misma ley»—9 V. Keaton's Reports 833.—En



BIE

Obligación de hacer, núm. 3—Peritos, núm. 4—Poder es-

vista de estas consideraciones y teniendo la Nación su Poder Legislativo, debía asimismo tener su Poder Judicial especial, es decir, una jurisdicción del mismo orden para interpretar y aplicar las leyes votadas por el Congreso. El Banco Nacional solo puede presentarse ante los Juzgados ordinarios para pedir una declaración de quiebra, pero no en otros juicios. Sin embargo de estas poderosas razones la Cámara de lo Comercial resolvió la cuestión revocando la sentencia de 1ª Instancia y consagrando el principio contrario: es decir, que es competente el fuero ordinario ó el federal según convenga á los derechos del establecimiento. La Cámara se fundaba en las siguientes consideraciones: Que dada la naturaleza del Poder Judicial de la Nación y la índole general del sistema, la jurisdicción federal es de escepción, y como tal escepción al derecho común, deben interpretarse sus efectos restrictivamente; Que además, esa jurisdicción es privilegiada, y como tal, solamente puede ser invocada por las personas que gozan de esa prerrogativa, y no por otras, en cuyo beneficio no ha sido concedida; Que, desde luego, la parte del demandado no ha podido alegar declinatoria de jurisdicción, pretendiendo que su Juez es el Federal, porque al pretender ampararse de la justicia federal, se arroga una prerrogativa concedida al Banco Nacional, no á él; Que, por otra parte, citado el demandado ante el Juez de su domicilio, que es su Juez natural, no puede fundadamente quejarse, y solicitar la remisión de la causa ante un Juez de escepción que no ha sido creado para él, y cuya jurisdicción es restrictiva é improrrogable; Que los fallos de la Corte Suprema de la Nación recordados por el demandado y el Juez *á quo*, no tienen la fuerza del precedente en el caso *sub-judice*, porque lo que en dichos fallos se resuelve, es que el Banco Nacional goza del Fuero Federal y en el caso traído á esta Cámara, no se ha puesto en duda la competencia de los Jueces Federales para conocer de las causas en que el Banco Nacional es parte, sino que se trata de saber si este Banco puede demandar ante un Juez ordinario el cumplimiento de obligaciones comerciales para cuya decisión es competente *ratione materiae*. Siendo este el punto traído en apelación, debe decirse que el Banco Nacional ha podido recurrir á la justicia común en demanda de sus derechos, desde que así lo consideraba conveniente, sin hacer uso del fuero de que está investido, como una prerrogativa. No obsta á esta declaración el que el Banco Nacional haya sido creado por una ley especial del Congreso, en uso de la facultad conferida por el inciso 5,



BIE

pecial, núm. 1.—*Tutor*, núm. 1.—*Embargo preventivo*, número 17.

art. 67 de la Constitución Nacional. La institución del Banco Nacional es de una existencia conveniente, mas no necesaria. El Congreso pudo ó no crearlo, y si lo creó, fué por considerar conveniente ejercer la facultad recordada. Las Provincias son entidades políticas de existencia necesaria en nuestro orden institucional; por eso el preámbulo de la Constitución dice: «Nos, los Representantes de la Nación Argentina, reunidos . . . por voluntad y elección de las Provincias que las componen» etc., etc. No puede sostenerse, entonces, que los casos judiciales promovidos por el Banco, emanen más directamente de la Constitución, que aquellos en que una Provincia es parte; los Tribunales de Estado han ejercido constantemente jurisdicción concurrente en los casos en que un estado demanda á un ciudadano de otro estado.—Decisiones Constitucionales recopiladas por el Dr. Kent, número 2080.—Entre nosotros está aceptada esta misma doctrina, pues el inciso 4º del art. 12 de la ley de jurisdicción y competencia de los Tribunales Nacionales de 1863, establece que es caso de jurisdicción concurrente, siempre que un extranjero demanda á una Provincia. Si pues, en tales casos, estas entidades necesarias del derecho público pueden demandar ante los Tribunales ordinarios, con mayoría de razones, puede hacerlo el Banco Nacional. Si el Banco Nacional tiene facultad en su capacidad de derecho, para transigir las cuestiones litigiosas, para sacarlas de la jurisdicción federal y llevarlas ante un Tribunal arbitral, ¿por qué se le negaría para someterlas ante un Tribunal ordinario, cuando así convenga á sus propios intereses?» Felizmente para la jurisprudencia argentina la sentencia de la Cámara fué apelada para ante la S. C. N., y este agosto Tribunal dejó triunfante la sana doctrina, fundándose en que la Suprema Corte tiene uniforme é invariablemente establecido que todas las cuestiones que dimanen de actos y operaciones del Banco Nacional son de jurisdicción federal, por tener su fundamento y punto de partida dicho establecimiento en la Constitución Nacional y deber ser reguladas las cuestiones que le atañen directa é inmediatamente por las leyes de la Nación. Que la jurisdicción nacional en las causas regidas por la Constitución, leyes ó tratados del Congreso es privativa y excluyente de la de los Tribunales de Provincia, según la terminante disposición del artículo 14, acápite primero de la ley sobre jurisdicción y competencia de los Tri-



BIE

1. Bienes—Si bien la ley prohíbe á los procurado

bunales Federales de catorce de Setiembre de mil ochocientos sesenta y tres, y la aplicación práctica que estos Tribunales han hecho de dicho artículo. Que por lo tanto, solicitada oportunamente por el demandado la remisión y envío de la causa á la justicia nacional, ha debido así decretarse, y proveerse de conformidad la declinatoria de jurisdicción formulada ante el Juez de Primera Instancia de la Capital, no obstante la resistencia del demandante. Esta causa es una de las más importantes que registra la jurisprudencia de nuestros Tribunales, tanto por la naturaleza de la cuestión ventilada cuanto por la autoridad científica de los magistrados que en ella han intervenido. Emitieron sus opiniones en el sentido del sumario los Dres. Cigorraga, Juez de 1.^a Instancia en lo Comercial; Rodríguez Bustamante, Fiscal de los Juzgados de 1.^a Instancia; Gerónimo Cortés, Fiscal de las Cámaras de Apelaciones; Vitorica, de la Torre, Varela, Bazán y Saenz Peña. Y en contra del sumario los Dres. Malaver, Bunge y Ortiz. El caso resuelto es el primero que se presenta en nuestros Tribunales, y la S. C. N. padece error cuando dice, que ya existía jurisprudencia formada á este respecto, pues examinando los fallos todos de ese alto Tribunal, como los de la Exma. Cámara de Apelaciones de la Capital, no se encuentran publicado ningún caso en que el particular demandado *por* el Banco Nacional, deduce incompetencia de jurisdicción. Los casos resueltos, se relacionan con excepciones de incompetencia opuestas por el mismo Banco como demandado, declinando de jurisdicción ante la justicia ordinaria, fundándose en que tiene el derecho, el privilegio de acogerse al Fuero Federal cuando así conviene á sus intereses. Pero jamás ha sido materia de resolución práctica, el caso en que se le haya obligado al Banco á entablar su acción ante la única jurisdicción competente para entender en los juicios en que él sea parte como actor ó demandado. La justicia federal es la única competente para entender en todo juicio iniciado *por ó contra* el Banco.

1.—Los antecedentes de esta resolución son los siguientes: Ejecutado el Banco Argentino, por cobro de pesos, se mandó vender en público remate un campo para el pago del crédito: se llenaron todas las formalidades y después de varias ofertas se adjudicó en venta la cosa rematada al apoderado del ejecutante, en el juicio ejecutivo. De común acuerdo de partes el remate fué aprobado. Pocos días después el comprador declara que el inmueble lo compró para sus representados en virtud de instrucciones de ellos recibidas, aceptándose dicha manifes-



BIE

res y mandatarios, comprar los bienes materia del li-

tación. El Banco que consintió el remate, cinco años después viene á decir de nulidad de esa venta, fundándose en que el comprador en remate, fué el apoderado del ejecutante, y sosteniendo que esta nulidad procede aunque los poderdantes hubiesen autorizado y consentido la compra del bien ejecutado, porque esa nulidad es absoluta y consiguientemente no susceptible de confirmación: se fundaba en el art. 1361, incisos 4º y 6º del Cód. Civ. Ante todo debe tenerse presente que nuestro Código á diferencia del de Chile y del Proyecto de Freitas para el Brasil, no define la nulidad absoluta ni la relativa, ni enumera taxativamente los actos jurídicos que son afectados de una ú otra de estas nulidades como lo hacen los espresados Códigos—arts. 805 y 810 del Proyecto de Freitas y 1682 del de Chile.—Nuestro Código ha seguido la doctrina francesa y especialmente á Savigny en su obra de Derecho Romano tom. 3º, págs. 202 y 203, como se comprueba por las citas que el codificador hace al pié del tit. 4º, y de los arts. 1038 y 1039. La dificultad reinante en nuestro Código Civil, no ha desaparecido con la agregación de *presumidos por la ley*, agregado en virtud de la ley de Correcciones al Código Civil—art. 1044.—Así es que debemos limitarnos á la apreciación de cada caso, y al examen de la naturaleza propia de cada relación de derecho creada por el acto jurídico que se ataca de nulidad: aceptando por vía de hipótesis que se trata de bienes litigiosos, veamos si procede la nulidad de acuerdo con lo preceptuado en el inc. 6º del art. 1361. Este artículo se limita á prohibir á los procuradores la compra de las cosas que enumera, nada dice de nulidad: solo el artículo siguiente—1362—dice: «La nulidad de las compras prohibidas en el artículo anterior, no puede ser deducida ni alegada por las personas á quienes comprenda la prohibición.» De aquí se deduce *a contrario sensu*, que si las otras personas interesadas, á quienes no comprende la prohibición, no la pidiesen, ni alegasen, esas compras quedarían válidas y firmes. Este es el sentido literal del art. 1362. De la interpretación racional se deducen las mismas consecuencias. Como se ha dicho, nuestro Código no define ni la nulidad absoluta ni la relativa, pero sus caracteres principales se desprenden de algunos artículos. Así, en el 1047 se dice que la nulidad absoluta no es susceptible de confirmación; de donde se sigue que aquella nulidad que es susceptible de confirmación; no es absoluta sino relativa. Y como se ha visto que el art. 1362 hace depender la validez ó nulidad del acto, de la voluntad de la persona interesada, se sigue que la nulidad de que habla dicho artí-



BIE

tigio, si la compra llevada á cabo en remate público por el representante del ejecutante fuera aprobada por

culo no es absoluta sino relativa. Savigny enseña la misma doctrina, cuando dice: «Varios autores llaman relativa esta falta de validez que depende de la voluntad del hombre, y la oponen á la invalidez absoluta que no admite esta especie de dependencia.» Esta cita tiene una importancia capital, pues ha sido seguida, por nuestro codificador, en esta parte. Resulta, pues, que siempre que la nulidad de un acto jurídico dependa de una escepción concedida por la ley á una de las partes interesadas, esa nulidad es *relativa*. Los actos atacados de esta invalidez son calificados por nuestro Código, de *anulables*; Savigny los llama *atacables*—Véase nota al tit. VI.—*De la nulidad de los actos jurídicos*. El artículo 1361, ha sido tomado de los arts. 1596 y 1597 del Código francés. Aubry y Rau, citado en la nota del art. 1362, en el párrafo 351, página 349, 4ª edición, después de hablar de las ventas hechas á pesar de la prohibición del art. 1596, Cód. Nap., dice: «Por lo demás la nulidad de que ellas son afectadas *no es más que relativa*, y no puede ser opuesta por las personas contra las cuales se ha establecido la prohibición de comprar.» La misma doctrina es sustentada por Zachariæ, citado por Aubry y Rau, párrafo 679: «Sinembargo, la venta en todos los casos que preceden, no puede ser atacada más que por el vendedor ó por sus acreedores, ella no puede serlo por el adquirente.» Pero volvamos con especialidad á la compra hecha por el procurador. Las procuraciones judiciales están regidas por el mandato—art. 1870, inc. 6º.—El artículo 1918 permite al mandatario comprar lo que se ha ordenado vender con aprobación de su mandante: el art. 1513 permite á los administradores de bienes ajenos, ser locatarios de ellos con consentimiento de sus dueños: el art. 954, declara nulos los actos cometidos por error, simulación ó fraude, y sinembargo, estos actos quedan válidos y subsistentes, cuando las partes interesadas no deducen la acción ó escepción que el derecho les acuerda para invalidar ó consentir en ellos después. Estos casos son semejantes al del procurador, y sinembargo la prohibición no invalida los actos de que se trata, si las partes en cuyo interés se ha establecido la prohibición, consienten en ellos, lo que demuestra claramente que estos actos no son reputados inexistentes, como en las nulidades absolutas, sino que solo serán anulados á requisición de parte interesada. Tal es la doctrina generalmente recibida por los autores franceses. No hay duda que hay grande incertidumbre en esta materia en



BIE

el ejecutado, el acto no puede ser anulado.—Jur. Com., tom. 5, pág. 322, Ser. 2^a.

1. Bienes de menores—No puede autorizarse la venta

nuestro Código, y que solo la jurisprudencia fijará su verdadero alcance: tampoco hay duda de que el Código pudo dar á la nulidad del artículo 1362, el carácter de absoluta, pero de su texto, de la opinión de Aubry y Rau y de Zachariæ y de las consideraciones aducidas, se deduce que el acto del procurador que compra el bien mandado vender para pagar el crédito de su poderdante, está afectado de nulidad relativa. Aun en el caso de duda, debe decidirse en favor de la validez del acto jurídico, porque toda ley prohibitiva de la facultad de contratar debe interpretarse restrictivamente—art. 19 *in fine* de la Const. Nac.; 1037, Código Civ.; art. 296, regla 3^a del Cód. de Com. ant.: Ley 2, tit. 33, Partida 7^a.—Estos actos atacados de nulidades relativas subsisten mientras no sean anulados por sentencia, en virtud de acciones resolutorias entabladas por las partes interesadas. Si el Banco consintió en que la escritura se hiciese á favor del mandante del procurador, ha perdido su derecho para pedir la nulidad y rescisión de la venta.

1.—El caso es el siguiente: Una finca fué sacada á remate dos veces: la primera sin resultados por falta de licitadores: en la segunda se obtuvo 31.200 ₮, sin que se llevara á efecto la escrituración, debido á que el comprador desistió perdiendo 500 ₮ que había dado en seña. Posteriormente un comprador particular ofreció 34.000 ₮; el Juez de 1^a Inst., autorizó la venta fundándose en que había quedado fijado el verdadero valor del inmueble por medio de la segunda subasta que solo ascendió á la suma de 31.200 ₮, siendo este último remate el que dió el verdadero valor de la finca. El valor ofrecido particularmente suplía con ventaja la venta pública. La Cámara revocó el auto diciendo que la ley exige que la oferta del precio exceda al de tasación—art. 442, Cód. Civ.—Consideramos que el fallo de la Cámara carece de fundamento bastante. La ley ha permitido que la venta se haga privadamente cuando ella resulte más provechosa para los menores por alguna razón particular. Aquí la razón salta á la vista. Si la venta se verificó por 31.200 ₮ en remate público y el comprador no escrituró prefiriendo perder la seña, ¿qué razón puede aducirse para no efectuar la venta en ₮ 34.000? Ninguna. Sin embargo, como la ley dice que el Juez *puede* dispensar que la venta se haga en remate público, es evidente que le confiere esa facultad, la que es potestativa en el magistrado. Y así puede oponerse á



BIE

estrajudicial de bienes de menores, si el precio no excede del de la tasación.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 233, Ser. 2^a.

1^a. **Bienes embargados**—Si no bastan á cubrir el crédito y las costas, debe decretarse la inhibición.—Jur. Com., tom. 10, pág. 160, Ser. 2^a.

2. **Bienes embargados**—Es facultativo del Juez apreciar el valor de los bienes dados á embargo, para ordenar el levantamiento de la inhibición.—Jur. Com., tom. 10, pág. 330, Ser. 4^a.

Bienes embargados—Véase: *Comisionista*, núm. 3.

1^b. **Bienes muebles**—Tratándose de ellos, la posesión es presunción de propiedad.—Jur. Com., tom. 5, pág. 378, Ser. 2^a.

1^c. **Bienes propios**—El esposo, aun inhibido, puede dis-

ello sin dar ninguna razón de su oposición, pues la ley no lo obliga, aun dado el caso que el precio ofrecido fuese superior al de tasación.

1^a—Si bien es cierto que el art. 474 del Cód. de Proc. autoriza la inhibición general del deudor cuando no se le conoce bienes, esto debe entenderse en un sentido racional, para el caso que los bienes embargados no alcanzasen á cubrir el importe de la ejecución. El art. 471 establece que el embargo debe comprender bienes suficientes para responder al pago del capital y costas de la ejecución.

2—El art. 474 del Cód. de Proc., establece que la inhibición quedará sin efecto tan luego como se presentaren bienes á embargo; lo mismo dispone el art. 461.—Véase: verb. *Inhibición*, núm. 3.—Es práctica en los Tribunales cuando se presentan bienes á embargo á fin de obtener el levantamiento de una inhibición, y existiendo controversia á cerca de su valor, nombrar un perito para su justiprecio.

1^b—Art. 2412, Cód. Civ.

1^c—Este auto fué revocatorio del de 1^a Inst. La Cámara dijo: que la mujer no se halla autorizada por la ley—art. 1295, Cód. Civ.—á reclamar el embargo de los bienes muebles del marido, sino de los propios que estuviesen en poder de éste. Que ningún perjuicio positivo podría sobrevenir á la mujer con el acto de desposesión; porque se trata de un bien propio del esposo y porque sus derechos se hallaban plenamente



BIE — BIG

poner del precio de sus bienes propios.— Jur. Civ., tomo 10, pág. 44, Ser. 2ª.

Bienes raíces—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 1.

Bienes testamentarios—Véase: *Administrador*, núm. 1.
—*Poseción al heredero*, núm. 1.

Bienes vendidos—Véase: *Obligación*, núm. 1.—*Remate judicial*, núm. 1.—*Tercería*, núm. 1.

1. **Bigamia**—Siendo ella un delito instantáneo y no su-

garantidos con la inhibición que sobre sus bienes pesaban. Esta resolución está en abierta contradicción con el texto del art. 1295 citado por la Cámara. Ese art. dice que la mujer puede pedir embargo de sus bienes muebles y la *enagenación de los bienes de éste*, ó de la sociedad. Una vez pedida la no enagenación y decretada, ¿cómo puede la Cámara dejar sin efecto de su propia autoridad esa prohibición? Sin embargo la Cámara lo ha resuelto contra el texto espreso de la ley, y resuelto queda.

1.—El art. 268 del Cód. Pen. ant. y el 143 del vigente, hacen del hecho de contraerse un segundo matrimonio antes de la disolución del primero, el crimen de bigamia. La celebración regular de este segundo matrimonio es la que constituye el delito de bigamia en su forma y en su consumación. El que contrae segundo matrimonio estando vigente el primero es bigamo, aun antes de ser adúltero el cónyuge, es decir, antes de violarse corporalmente la fe conyugal. El adulterio puede haber precedido ó proseguir á la bigamia, pero no es un elemento constitutivo de este delito. No es pues, un delito de la carne lo que la ley castiga en la bigamia, es la violación de la fe pública, es la alteración del orden de la familia, organizada entre nosotros bajo la base del matrimonio único de la monogamia. Si esto es así no puede sostenerse que la bigamia sea un delito continuo, porque ella entraña un adulterio permanente; pues los delitos continuos son aquellos que consisten en un hecho susceptible de continuarse, idénticos consigo mismos, durante un tiempo más ó menos largo. Pero el segundo matrimonio que es el hecho constitutivo de la bigamia concluye en el instante mismo en que termina la ceremonia, sin poderse prolongar más allá del tiempo empleado en su celebración. El matrimonio es un hecho indivisible: ó se está ó no se está casado, y desde el momento en que el casado contrae



BIG—BOL

cesivo, la prescripción del derecho de acusar empieza a correr desde la celebración del último matrimonio.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 128, Ser. 2ª.

2. Bigamia—El matrimonio ilegal debe ser penado con penitenciaría de tres á seis años.—Jur. Crim., tom. 6, página 365, Ser. 2ª.

Billete de lotería—Véase: *Hurto*, núm. 2.

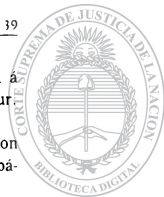
Boleto—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 1.

1. Boleto de venta—Para que el boleto de la venta efectuada por el corredor ó comisionista, forme prueba contra las partes, debe ser reconocido por aquél y constar la operación de sus libros de comercio.—Jur. Com., tom. 8, pág. 220, Ser. 2ª.

segundo matrimonio, se comete el delito de bigamia. La bigamia según nuestro Código Penal, es un delito simple, instantáneo, que consiste en contraer segundo matrimonio estando en vigor el primero. Haus, dice que para juzgar la discontinuidad del delito, no hay que considerar ni sus consecuencias, ni que el delincuente haya perseverado durante un tiempo más ó menos largo, en el estado producido por el delito, sino que solo debe consultarse la definición legal del delito—tom. 2, página 366.—Luego pues, este delito puede prescribirse, y su prescripción comienza desde el segundo matrimonio, porque desde ese momento el crimen queda irrevocablemente consumado. El Fiscal sostuvo que la bigamia constituye un delito sucesivo y que la prescripción no puede empezar á correr, mientras el reo continúe haciendo vida marital con la mujer á quien ha engañado. La S. C. P. dictó una sentencia sosteniendo este mismo principio. En presencia de los argumentos apuntados en contra de esta doctrina, parece inoficioso ocuparse de estudiar detenidamente los argumentos aducidos en contra de lo establecido en el sumario.

2—Art. 143, Cód. Pen. vig.

1—El Juez de 1ª Inst. dijo que «dados los antecedentes espuestos, es de perfecta aplicabilidad lo dispuesto por el art. 347 del Cód. de Com., no pudiendo tomarse en consideración las argumentaciones del demandado, tendentes á desvirtuar el acto de la venta, en



**BOL — BUE**

1. **Boletos**—Sobre operaciones de bolsa, no traen aparejada ejecución, ni son bastantes para declarar en quiebra al que los suscribe.—Jur. Com., tom. 8, pág. 335, Ser. 2ª

Bolsa—Véase: *Embargo preventivo*, núms. 1 y 11—*Jurisdicción pública*, núm. 1.

Borrador—Véase: *Posiciones*, núm. 2.

Buena fe—Véase: *Costas*, núms. 5 y 14.

Buenas costumbres—Véase: *Escritura pública*, núm. 2—*Nulidad*, núm. 2.—*Mujer*, núm. 1.

razón de la falta de matrícula del comisionista y de la irregularidad de la contabilidad de éste.» La Cámara revocó el auto diciendo que: «El boleto, único instrumento con que se instruye la demanda, carece de la fuerza de un instrumento público por no haber sido reconocido en juicio por el corredor, y porque los libros de este corredor no son llevados con las formalidades legales.» El art. 979 del Cód. Civ., en su inciso 3º, atribuye el carácter de instrumento público á «los asientos de los corredores, en los casos y en la forma que determina el Código de Comercio.» Si el corredor no lleva en forma esos libros, sus asientos no pueden tener la fuerza de un instrumento público—arts. 67 y 76, Cód. de Com. ant.—De aquí la necesidad de que el boleto espedido por él, sea reconocido por el otorgante para que tenga fuerza en juicio. En cuanto á la necesidad de que conste la operación en sus libros, ella está de acuerdo con lo preceptuado en los arts. 92, 94 y 95 del mismo Cód. 2º Porque la quiebra no procede cuando el deudor tiene razones particulares para no pagar—art. 1511 *ibid*.

1 Del fallo no resulta que la Cámara hubiese resuelto que los boletos no traen aparejada ejecución: solo dijo que no procedía la quiebra del firmante, porque éste manifestó y comprobó que le asistían razones particulares para no pagar: siendo así que en este caso no procede la quiebra. 1º Porque con esos documentos no se justifica la efectiva cesación de pagos—art. 1525, Cód. de Com. ant.



Caducidad—Véase: *Nulidad*, núm. 9.

Calificación—Véase: *Pena*, núm. 4.

1. **Calumnia**—Para que los testigos formen prueba bastante á constatar el delito de calumnia, deben prestar declaración libremente: si antes de comparecer al Juzgado ya habían suscrito la esposición, sus declaraciones no hacen fe.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 5, Ser. 2^a.

2. **Calumnia**—El juicio por calumnia, no se paraliza

1—La validez de la prueba testimonial según las leyes 24 y 26, título 16, Part. 7^a, estriba en el secreto de ella y en su reserva: cuando los testigos suscriben con anterioridad sus declaraciones ya cada uno sabe lo que el otro ha declarado. Además, en el caso presente los testigos habían suscrito todos el mismo documento, de manera que cuando vinieron á declarar ya todos sabían lo que los demás dirían. Por otra parte, cuando se suscribe una declaración, no es posible, al declarar bajo juramento, retractarse sin desdoro, y quizá sin contraer serios compromisos que los ligaban con anterioridad, circunstancias que bastan para despojar la prueba de toda fuerza legal ó valor probatorio. Los testigos deben ser examinados con la mayor amplitud posible á fin de que declaren lo que sepan á cerca de los hechos sobre que son examinados. Cuando las preguntas son sugestivas y formuladas de manera á contestarlas afirmativa ó negativamente, deben ser tomadas en cuenta con gran prevención.

2—El Cód. de Proc. en lo Crim. ha suprimido el juicio en rebeldía, estableciendo en su art. 151 que si ella tiene lugar en el plenario debe

CAL

por ausencia del acusado; debe declarársele rebelde.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 122, Ser. 2ª.

3. Calumnia.—Es Juez competente para entender en este delito cometido por la prensa, el del lugar donde se

suspenderse la continuación de la causa hasta tanto el acusado sea habido. Pero esta disposición no es aplicable al juicio de calumnia que se encuentra reglamentado de un modo especial. El art. 596 establece que el acusado por calumnia, no puede ser detenido preventivamente, lo que implica resolver implícitamente que en caso de incurrir en rebeldía y de negarse á presentarse en juicio, éste deberá seguirse en su rebeldía, porque de otro modo nada sería más fácil que evitar las responsabilidades que este delito acarrea, no presentándose y dejando que se le declare rebelde, pues tal no pudo ser jamás la mente del legislador, ni podría aceptarse sin incurrir en lo absurdo. Sería un contrasentido si se admitiese que el delincuente estuviese munido de los medios conducentes á evadir las responsabilidades en que ha incurrido como consecuencia de un delito. Las disposiciones generales del juicio criminal, no son aplicables al procedimiento especial marcado por la ley para el de calumnia.

3.—De acuerdo con lo preceptuado en el art. 25, inc. 1º del Cód. de Proc. Crim.; ya sea que se trate de un delito cometido por argentino ó extranjero. Cuando es dudoso el lugar en que el delito se comete, su conocimiento corresponde al que previene en la causa—art. 36.—En la represión de los delitos está interesada toda la humanidad, porque afectan las garantías sociales y la tranquilidad pública. Sin embargo, siempre está más directamente interesada la Nación y especialmente la localidad donde se cometen, pues así lo exige la vindicta pública, y porque las leyes deben tener su sanción dentro de los límites de su territorio hasta donde se extiende su soberanía. No sería posible admitir que por la circunstancia de residir el transgresor de la ley en ajena jurisdicción se le considere al abrigo de toda impunidad; teniendo el damnificado que seguir el domicilio del reo, quedaría burlada la acción de la justicia en sus más sagradas atribuciones. Es legislación aceptada en todas las partes civilizadas, que es Juez competente para el conocimiento de los delitos, el del lugar en que se cometieron y en defecto de éste el del domicilio del reo. Ley 15, tit. 1º; y ley 1ª, tit. 29, Part. 7ª; Ley 1ª, tit. 36, lib. 12, Nov. Rec.; Ortolan, Derecho Penal, tomo 2, título II, Capítulo II.



CAL

ha hecho la publicación, aun cuando el acusado residiera fuera de él.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 381, Ser. 2ª.

4. **Calumnia**—O injuria, cometida por la prensa, los Tribunales ordinarios son competentes para conocer en ellos.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 90, Ser. 2ª.

5. **Calumnia**—Los empleados de una repartición, á la

4—Existe jurisprudencia afirmada por repetidas resoluciones de la Cámara declarando que hoy no existe el jurado de imprenta, y que mientras no se determine otra cosa, los delitos de injuria ó de calumnia que se cometen por medio de la prensa, caen bajo la jurisdicción de los Tribunales del Crimen.—Véase: Inst., tom. 2, verb. *Jurado*, núm. 1.

5—El art. 170 del Cód. de Proc. Crim., establece que «que la persona particularmente ofendida por un delito del cual nace la acción pública, podrá asumir el rol de parte querellante y promover en tal carácter el juicio criminal.» Si la ley acuerda este derecho al que acciona individualmente para que proceda en concurrencia con la acción pública, con mayor razón debe estar autorizado á ejercer esa acción cuando ella está exclusivamente reservada á la persona ofendida, como sucede respecto del delito de calumnia. No puede alegarse diciendo que cuando se dirigen las imputaciones á una repartición pública no se dirigen á persona determinada, porque esa entidad pública en su carácter de tal no puede cometer delitos, sino las personas que la constituyen, y los únicos autores posibles de cometer delito serían los individuos de la corporación. No debe olvidarse que es un principio de derecho criminal que las sociedades, corporaciones, reparticiones de los poderes públicos, ya sean políticos ó administrativos y en general ninguna entidad abstracta es imputable de delitos, pues no pueden cometerse sino por las personas que los constituyen. De donde se deduce que los cargos que en ese sentido se hagan deben conceptuarse como dirigidos á las personas que componen la colectividad aludida. Si el querellante forma parte de la corporación aludida, las imputaciones que á ésta se hagan, alcanzan á sus individuos, aunque esas imputaciones sean hechas en una forma encubierta, indeterminada ó impersonal. No puede argumentarse diciendo que solo el jefe de una repartición ó el representante de una persona jurídica sea el único con personería bastante para ejercitar la acción, careciendo de ella sus subalternos, porque los querellantes no se atribuyen la representación de la entidad jurídica, siendo así que por el contrario se presentan ejercitando



CAL

que en general se imputen delitos, tienen personería, individual ó colectivamente para acusar por calumnia sin que sea necesario que la acción se deduzca á nombre de la entidad abstracta, ni que el jefe de ella asuma su representación.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 117, Ser. 2ª.

6. **Calumnia**—Uno ó más miembros del directorio de una persona jurídica, tiene personería para acusar por ca-

acciones propias y personales. Los derechos y acciones que corresponden á una colectividad, y que solo pueden ejercitarlos sus representantes legales, no implica la negación de los derechos y acciones que personalmente asistan á cada uno de sus miembros. Esto es elemental en derecho civil y comercial y lo es asimismo en materia criminal. Según el conocido precepto constitucional, nadie puede ser privado de lo que la ley no prohíbe; y así en ausencia de una disposición legal expresa que prive á los miembros de una colectividad el ejercicio de las acciones personales, el derecho que les compete para ejercitarlos, está al abrigo de la garantía constitucional. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que mientras la ley autoriza el desistimiento del juicio, tratándose de calumnias entre simples particulares, no lo permite respecto de los cargos dirigidos á los empleados públicos. Ante tal propósito de la ley, ella se mostraría inconsecuente consigo misma, si desconociera en el empleado público el derecho de ser el primer guardian de su propia honra subordinando el ejercicio de ese derecho á la exclusiva iniciativa del superior, que podría quedar librada á su buena ó mala voluntad.

6—La acusación versaba sobre injurias y calumnias vertidas por la prensa contra el directorio de una sociedad anónima, por haber esquilado y estafado á sus accionistas. La querella se entabló por algunos de los directores, y el querrellado les opuso la escepción de falta de personería y falta de acción. Fundaba la primera escepción en que los querellantes invocaban su carácter de directores de la sociedad, siendo así que según los estatutos la representación social solo corresponde al presidente; y que aun dado el caso de reconocérseles el carácter de mandatarios, su cometido se circunscribe á la administración de los bienes sociales, y la acusación ultrapasa los términos del mandato. Fundaba la segunda escepción, en que los cargos contenidos en las publicaciones acusadas eran formulados contra la colectividad del directorio, sin nom-



CAL

lumnia al autor de una publicación en que se imputen delitos al directorio.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 344, Ser. 2ª.

7. Calumnia—El acusado por este delito que no justifica su imputación debe ser condenado á dos años de prisión.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 162, Ser. 2ª.

8. Calumnia—Procede la aplicación de la pena al acusado por calumnia, si no justifica la existencia de los delitos imputados al querellante.—Jur. Crim., tom. 10, página 239, Ser. 2ª.

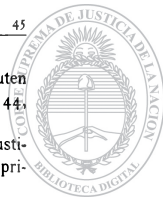
9. Calumnia—El acusador por este delito no está obliga-

brar personas, y que no puede establecerse quiénes sean los causantes de la mala administración, ni la culpabilidad individual de cada uno de ellos. Las excepciones fueron rechazadas porque los actores no asumían la representación de la sociedad. En cuanto á la falta de acción basta tener presente que las imputaciones de delito hechas á una colectividad ó entidad jurídica, que no puede cometer delitos, afectan á las personas que forman la entidad aludida según lo tiene resuelto la jurisprudencia, como puede verse en el número precedente.

7—El art. 178 del Cód. Pen. establece la pena de uno á tres años de prisión.

8—Última parte del art. 178 del Cód. Pen. vigente.

9—En principio general, el acusado particular está obligado á absolver posiciones, pues así lo establece el art. 470 del Cód. de Proc. Crim. —Véase: Verb. *Posiciones*, núm. 9.—En los juicios sobre calumnia no tiene aplicación el citado artículo, porque está en oposición con el artículo 18 de la Constitución que prohíbe obligar á una persona á absolver posiciones bajo juramento conducentes á probar que ha cometido un delito. El Cód. de Proc., ha rodeado de garantías al acusado de haber cometido un delito, dejándolo en completa libertad de prestar ó no declaración, sin exigirle juramento ni promesa de decir verdad si la presta y sin que su negativa á declarar haga prevención alguna en su contra. Toda ley debe entenderse de manera que concuerden entre sí sus diversas disposiciones, y por lo espuesto en el Cód. de Proc. resultaría contradictoria consigo mismo si se hiciese extensivo al juicio especial de calumnias lo que dispone en su art. 470 en un sentido general para todos



CAL — CAM

do á absolver posiciones.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 281, Ser. 2ª.

10. Calumnia—El Juez que entiende en la acusación por estafa, es el competente para entender en la reconvencción que por calumnia deduzca el acusado.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 95, Ser. 2ª.

Calumnia— Véase: *Compensación*, núm. 1.—*Excepción de litispendencia*, núm. 1.

Calle—Véase: *Espropiación*, núm. 1.

1. Cámara—Carece de jurisdicción para determinar si

los juicios ordinarios por delitos que deben perseguirse de oficio. No hay identidad en todos los juicios para la aplicación de dicho artículo, porque hay diferencia entre los efectos que produciría tratándose de los juicios ordinarios en general y los que resultarían de su aplicación en el juicio por calumnia, particularmente cuando en este último caso el acusado sostuvo su imputación convirtiéndose en acusador. Entendida de otra manera dicha disposición sería contraria á la Constitución cuya observancia los Jueces deben velar en primer término. Esta ha sido la jurisprudencia constante de nuestros Tribunales. Véase: Inst., tom. 3, verb. *Acusado*, núm. 2.

10—Es doctrina corriente en materia criminal, que el demandado tiene derecho á contra acusar al demandante. Esta doctrina es de estricta aplicación cuando la recriminación se funda en el mismo hecho que se imputa al demandado, y es invocado como defensa de la acusación.—Véase: Escriche, verb. *Recriminación*, *Acumulación* y *Reconvencción*; Tejedor, Curso de Derecho Criminal, tom. 2, núm. 30, inc. 2.—No obsta á esta doctrina el art. 32 del Cód. de Proc., porque éste no hace incompetentes á los Jueces de sentencia para conocer en los delitos que por vía de reconvencción se acusen ante ellos. De lo contrario, los Jueces de sentencia no tendrían facultad para ampliar los sumarios elevados ante ellos, cuyo poder les ha sido reconocido por varios fallos de la Cámara.

1—El art. 45 de la Ley de Papel sellado de 1890, que regía en la época en que dictó esta resolución, espresamente establecía de una manera terminante que la autoridad, con facultad para resolver toda cuestión sobre el papel sellado que correspondía á un documento, era la Dirección de Rentas, en la Capital.



CAM — CAP

existe infracción á la ley de papel sellado.—Jur. Com., tom. 8, pág. 338, Ser. 2^a.

Cámaras sindicales — Véase: *Jurisdicción pública*, número 1.

Cambio de acción — Véase: *Deudores solidarios*, núm. 1.

Cantidad — Véase: *Jurisdicción*, núms. 1 y 8 — *Compe-*
tencia, núm. 4 — *Hurto*, núm. 4.

Cantidades anticipadas — Véase: *Contrato de rescisión*, número 1.

Cantidades de cosas — Véase: *Obligaciones alternativas*, núm. 1.

1^a. Capataz — De un obraje, carece de derecho para obligar por la fuerza á trabajar á sus peones.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 225, Ser. 2^a.

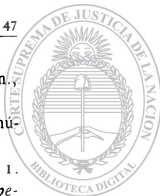
1^b. Capellanía — Para que pueda prescribirse el derecho al patronato de una capellanía, es necesario que ella exista fundada: la creación ordenada por el instituyente, no basta para darle existencia legal.—Jur. Civ., tom. 10, página 97, Ser. 2^a.

2. Capellanía — La prescripción del derecho al patronato de una capellanía solo empieza á correr desde la fecha en que se reconoce judicialmente corresponder á los herederos, y no desde la fecha en que quedó vacante por fallecimiento del anterior patrono.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 97, Ser. 2^a.

Capital — Véase: *Tercería*, núm. 1.

1^a — El hecho es ilícito y culpable, constituyendo consiguientemente delito.

1^b — Mientras no se funde la capellanía, no puede haber prescripción, porque se halla en suspenso el ejercicio del derecho y el cumplimiento de la obligación, siendo estos los antecedentes que darían un punto de partida fijo y seguro para la prescripción.



CAP — CAR

Capital testamentario—Véase: *Albaceas*, núm. 1.

Capitalización trimestral—Véase: *Intereses*, núm. 1.

Carácter grave—Véase: *Lesión*, núm. 1—*Homicidio*, número 8.

Caracteres legales—Véase: *Denuncia*, núm. 2.

Carta de pago—Véase: *Quebra*, núm. 1.

1^a. Carta misiva—No procede la declaración de testigos, sobre el contenido de una carta misiva dirigida á tercero.—Jur. Com., tom. 6, pág. 126, Ser. 2^a.

2. Carta misiva—Dirigida á tercero, no puede ser tomada en consideración por el Juzgado como prueba.—Jur. Com., tom. 10, pág. 56, Ser. 2^a.

1^b. Carta privada—Si no existe comprobada la intención criminal, no puede calificarse de injuriosa la carta privada en que se cobra la deuda.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 107, Ser. 2^a.

Carruago—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 8.

1^a—Tales cartas no pueden ser admitidas en juicio—art. 1036, Cód. Civ.—Esta disposición tiene por base el secreto de las cartas misivas, cuyo principio de justicia no podría desconocerse sin permitir al mismo tiempo que una confidencia privada viniera á servir de elemento á una investigación pública, como lo dice el Dr. Obarrio—Véase: Comentario al Cód. de Com., tom. 2, pág. 50, Ser. 2^a.

2—Art. 1036, Cód. Civ.

1^b—Un acreedor dirigió una carta á su deudor diciéndole que si no abonaba se publicaría el hecho. La Cámara dijo que en primer lugar no resultaba comprobada la intención criminal que es elemento esencial en los delitos voluntarios. Que teniendo en cuenta los antecedentes existentes entre acreedor y deudor y la circunstancia de que la carta era puramente privada, y que ninguna publicidad se le dió, no habiéndose realizado la amenaza, por lo menos era dudoso de si existía ó no delito, en cuyo caso debía aplicarse el art. 13 del Cód. de Proc. Crim. el que establece que en caso de duda deberá estarse siempre á lo que sea más favorable al procesado.



CAS - CER



- Casa locada—Véase: *Violación de domicilio*, núm. 2.
- Casado—Véase: *Información supletoria*, núms. 1 y 2.
- Caso fortuito—Véase: *Cosa vendida*, núm. 1.
- Caución—Véase: *Acreeedor prendario*, núm. 1.
- Causa eficiente—Véase: *Heridas*, núm. 3.
- Causa justificada—Véase: *Comisión*, núm. 4.

1^a. Causas correccionales—Siendo facultativo de la Policía, instruir sumario de prevención en estas causas, no puede imputársele transgresión por la incomunicación del reo durante el tiempo que la ley se la permite ó los Jueces.
—Jur. Crim., tom. 9, pág. 194, Ser. 2^a.

Causas criminales—Véase: *Término de prueba*, núm. 1.
—*Interrogatorios*, núm. 1.

Causas extrañas—Véase: *Homicidio*, núm. 2.

Causante—Véase: *Albacea*, núm. 1.

Cedente—Véase: *Posiciones*, núms. 7 y 17—*Cesionario*, núm. 2.

Cerca—Véase: *Homicidio*, núm. 19.

1^b. Certificado—El del actuario sobre los hechos que im-
pidieron una diligencia judicial, como instrumento público,
hace plena prueba mientras no sea arguido de falso.
—Jur. Com., tom. 9, pág. 416, Ser. 2^a.

Certificado—Véase: *Escribanos*, núm. 3.

Certificados—Véase: *Personería*, núm. 6.

1^a—De acuerdo con lo preceptuado en los arts. 256, 257 y 571 del
Cód. de Proc. Crim.

1^b—Según el art. 979 del Cód. Civ., incs. 2º y 4º, es instrumen-
to público cualquier documento que un funcionario público esten-
diere en la forma que las leyes hubieren determinado; como lo son igual-
mente las actas judiciales hechas en los expedientes por los respectivos
escribanos, las que hacen fe, mientras no sean arguidos de falsos—artí-
culo 993 del mismo.

CES

1ª. Cesación de pagos—El acreedor que hubiere recibido en pago mercaderías después de la fecha fijada para la efectiva cesación de pagos del concursado, debe ser obligado á devolver su importe á la masa.—Jur. Com., tom. 8, página 18, Ser. 2ª.

Cesión—Véase: *Posiciones*, núm. 17.

1. Cesión de derechos—Y acreedores, para que la escritura de cesión sea válida, basta que llene los requisitos de los contratos en general, partes, cosa y precio, sin que sea indispensable determinarlos específicamente.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 5, Ser. 2ª.

2. Cesión de derechos—Los condóminos en asuntos litigiosos, no pueden oponerse al reconocimiento ó cesión de derechos á un tercero que solo afecta la parte del cesante.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 419, Ser. 2ª.

3. Cesión de derechos—De un contrato de arrendamiento celebrado por escritura pública, solo puede justificarse por instrumento público.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 56, Ser. 2ª.

1. Cesionario—El de un crédito no endosable carece de

1ª—Art. 1540, inc. 2º del Cód. de Com. ant.—Véase, verb. *Acreedor*.

1—Con estos requisitos se llenan las condiciones exigidas por la ley. Si bien el art. 1170 del Cód. Civ., exige que la cosa materia del contrato sea determinada en cuanto á su especie, también el 1333 declara que habrá cosa vendida cuando se establezcan daños para determinarla.

2—Ese acto en nada puede afectar los derechos del otro condómino, pues por él no se priva de ninguno de los derechos que le corresponde en su carácter de condómino—art. 837, Cód. Civ.

3—Art. 1184, incs. 9 y 10 del Cód. Civ.

1—Se trata de una cesión hecha por un comerciante á un comisionista. Si bien es cierto que el art. 337 del Cód. de Com. antiguo al negar acción directa entre comitente y terceros, escepción del caso de



CES—CIR

acción directa contra el deudor que no ha consentido la cesión.—Jur. Com., tom. 8, pág. 265, Ser. 2ª.

2. Cesionario—De derechos litigiosos, no es parte en el juicio hasta tanto sean reconocidos los derechos del cedente.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 406, Ser. 2ª.

Cesionario—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 2.

1ª. Cicatrices—En la cara se conceptúan deformación.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 165, Ser. 2ª.

Ciencia propia—Véase: *Protesto*, núm. 4.

Circunstancias—Véase: *Atentado*, núm. 1—*Homicidio*, núm. 1—*Lesiones*, núm. 4—*Desacato*, núm. 1.

Circunstancias agravantes—Véase: *Desacato*, núm. 2—*Defraudación*, núm. 1—*Falsificación*, núm. 1—*Homicidio*

cesión del comisionista á favor de alguna de las partes; de aquí no se desprende que la cesión no esté sujeta á las formalidades que la misma ley establece para estos casos. Con arreglo á lo dispuesto en el artículo 1454 del Cód. Civ., aplicable al presente caso de acuerdo con lo establecido en el art. 191 del Cód. de Com., toda cesión debe ser hecha por escrito bajo pena de nulidad: y si fuese de acciones, por escritura pública, ó acta judicial hecha en el respectivo expediente, salvo que se trate de títulos al portador—art. 1455, Cód. Civ.—Por otra parte, el art. 563 del Cód. de Com., establece la ineficacia de la cesión de créditos no endosables, mientras esa cesión no se le notifique al deudor cedido, consintiéndola éste ó renovando la obligación á favor del cesionario. El art. 571 establece cuándo se considera litigioso un crédito. En realidad el sumario está equivocado, pues el cesionario tiene acción directa contra el deudor cedido, con las limitaciones de los arts. 564 al 570 del Cód. de Com.; pero el art. 563 sienta el principio de que «la cesión de créditos no endosables es ineficaz en cuanto al deudor cedido.» Esto debe interpretarse en el sentido de que el cesionario queda sugeto á las disposiciones del art. 564 y siguientes del Código.

2—Los derechos cedidos, como igualmente la escritura de cesión fueron impugnados.

1ª—La cicatriz fué clasificada como estensa, profunda é indeleble.—Véase: Inst., tom. 3, verb. *Deformidad física*, núm. 1 y su nota.



CIR

simple, núms. 2, 6 y 7—*Tentativa de robo*, núms. 1 y 4—*Atentado*, núm. 3—*Delincuente*, núm. 1—*Estafa*, núms. 3 y 7—*Homicidios*, núm. 1—*Lesiones*, núms. 12, 13 y 14—*Robo*, núm. 4—*Arma de fuego*, núms. 3 y 5—*Homicidio*, núms. 10, 11, 12, 17 y 28—*Incapacidad para el trabajo*, núm. 1—*Premeditación*, núm. 3—*Robo con violencia*, números 1 y 2—*Disparo de arma de fuego*, núm. 4—*Hurto*, núm. 5.

1. **Circunstancias atenuantes**—La existencia conjunta de circunstancias atenuantes y agravantes, obligan á prescindir en absoluto de su existencia.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 65, Ser. 2ª.

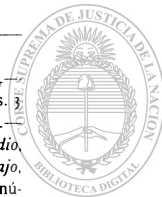
2. **Circunstancias atenuantes**—La existencia de éstas, permite aplicar el minimum de la pena.—Jur. Crim., tomo 6, pág. 255, Ser. 2ª.

3. **Circunstancias atenuantes**—El ataque brusco á una mujer indefensa, llevado á cabo por la víctima, es una cir-

1—El art. 53 del Cód. Pen. vigente establece para el caso de concurrencia de circunstancias atenuantes y agravantes, que los Tribunales apliquen las penas dentro de los límites señalados, según su prudente criterio.

2—Concurrían las circunstancias atenuantes de provocación por parte de la víctima, y el no haber tenido el delincuente intención de causar todo el mal que produjo—art. 83, incs. 3º y 4º del Cód. Pen. vigente.—Según el art. 52, cuando las penas son divisibles por razón del tiempo ó cantidad, la pena puede imponerse recorriendo los jueces toda su extensión aumentando hasta el maximum ó disminuyendo hasta el minimum, con arreglo al carácter de las circunstancias, salvo los casos establecidos como escepción por el Código.

3—Parece que la defensa de una mujer inerte á quien se la ve bruscamente atacada, entra en el espíritu del art. 81 del Cód. Pen. Si la muerte ocasionada con motivo de esa defensa, no reúne los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad—art. 81, inc. 8º—debe considerarse el caso comprendido en el art. 83.



CIR—CIT

cunstancia atenuante del homicidio.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 161, Ser. 2ª.

Circunstancias atenuantes—Véase: *Ebriedad*, núm. 1—*Homicidio*, núms. 1, 11, 12, 17, 19, 22, 25 y 27—*Homicidio simple*, núms. 1, 2 y 7—*Provocación*, núm. 1—*Tentativa de homicidio*, núm. 4—*Disparos de arma de fuego*, núms. 1—*Heridas*, núm. 4—*Infanticidio*, núms. 1 y 2—*Lesiones*, núms. 13, 14 y 17—*Pena*, núm. 4—*Arma de fuego*, núms. 3 y 5—*Robo con violencia*, núm. 2—*Atentado*, núms. 1, 3 y 6—*Menor edad*, núm. 1.

Citación—Véase: *Posiciones*, núm. 14—*Edictos*, núm. 1.

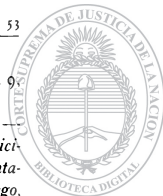
Citación de evicción—Véase: *Evicción*, núms. 1, 2 y 3.

1. Citación de remate—La notificación en forma, de la citación de remate, hace procedente la sentencia, aun cuando no existan días señalados para la notificación.—Jur. Com., tom. 8, pág. 342, Ser. 2ª.

2. Citación de remate—Solo procede después de trabado el embargo.—Jur. Com., tom. 9, pág. 241, Ser. 2ª.

1—El ejecutado había sido notificado en forma y por cédula. La citación de remate equivale al emplazamiento, según opinión de todos los prácticos, por consiguiente en la notificación por cédula que se practique deben observarse estrictamente las formalidades prescriptas por el art. 77 y siguientes del Cód. de Proc. La citación de remate que no llene estos requisitos, es nula y sin ningún valor.

2—El art. 485 del Cód. de Proc. establece, que «hecho el embargo se citará de remate al deudor.» El trámite previo requerido de que haya embargo trabado ha sido establecido por la ley en favor del acreedor, como una garantía para que no se vea obligado á seguir un juicio inútil y sin tener bienes en que hacerlo efectivo. Como garantía que es establecida en favor del acreedor, puede éste renunciar á ella. F. S. C. P., tom. 10, pág. 85, Ser. 1ª: Manresa y Reus, tom. 4, pág. 290; Reus, tom. 3º, pág. 406; Coravantes, tom. 3º, pág. 324.—En el caso del sumario, el deudor solicitó que se le citara de remate sin que hubiese bienes embargados, á lo que no se hizo lugar porque el art. 485





CIT — COM

Citación de remate—Véase: *Excepción de incompetencia*, núm. 5.

Clandestinidad—Véase: *Desalojo*, núm. 1—*Locación de servicios*, núm. 1—*Interdicto de retener*, núm. 3—*Interdicto de despojos*, núm. 3—*Interdicto de recobrar*, número 2.

Cláusula—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 2—*Socios*, núm. 2.

Cláusula especial—Véase: *Poder especial*, núm. 2.

Coadyuvantes—Véase: *Cosa juzgada*, núm. 3.

1ª. Coacción—Y amenazas, si el reo no inviste carácter de autoridad, debe ser penado con un año de prisión.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 22, Ser. 2ª.

Cochero—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 8.

Coherederos—Véase: *Declaratoria de herederos*, núm. 2—*Estado civil*, núms. 2 y 3—*Herederos legítimos*, núm. 1.

Comerciante—Véase: *Libros de comercio*, núms. 1 y 2—*Matrícula de comercio*, núm. 1—*Quiebra*, núm. 2—*Actos de comercio*, núm. 1.

1ª. Comercio—La compraventa de alhajas, aun sin tener establecimiento, importa ejercer el comercio.—Jur. Com., tom. 5, pág. 138, Ser. 2ª.

ha establecido el trámite del embargo en beneficio del acreedor y no se le puede obligar á seguir adelante el juicio sin que previamente se cumpla este trámite. Si el acreedor renunciara al embargo, el caso sería otro, porque como es un trámite y una garantía establecida por la ley á su favor, puede él renunciar á esa garantía. El caso está de acuerdo con lo resuelto en otro.—Véase: Inst., tom. 2º, verb. *Bienes embargados*, núm. 1.

1ª.—Arts. 168, inc. 2º, y 170 del Cód. Pen. vigente.

1ª.—La ley califica de comerciante al que hace profesión de la compra y venta de mercaderías con el objeto de lucrar—art. 2 del Cód. de Com. antiguo.

COM

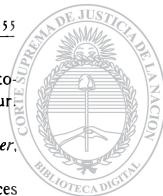
2. Comercio—Corresponde á la jurisdicción civil autorizar á la mujer casada para ejercer el comercio.—Jur. Civ., tom. 10, págs. 39, Ser. 2ª.

Comercio—Véase: *Acto de comercio*, núm. 1—*Mujer*, núm. 1.

1. Comisión—Debe abonarse al martillero, tantas veces

2—Esta resolución fué dictada revocando la de 1ª Inst. dictada por el hoy camarista Dr. Gimenez que dijo: que «la competencia del Juez de Comercio es incuestionable», porque el caso está perfectamente previsto en el cap. 2º del Cód. de Com., al tratar de la capacidad legal para ejercer el comercio: que el art. 2º del mismo Código corrobora esta doctrina. Para la Cámara era *incuestionable* que el caso caía bajo la jurisdicción civil, porque el derecho civil es el que determina el estado y capacidad de las personas y reglamenta los efectos legales del matrimonio con relación á la persona y á los bienes de los cónyuges, estableciendo la inhabilidad de la mujer para obligarse sin consentimiento del marido, los casos y la forma en que aquél puede ser suplido, cualquiera que sea el objeto que se proponga. El asunto es negocio civil cuya jurisdicción la ejerce el que es Juez de lo Civil. Esta resolución de la Cámara está de acuerdo con lo resuelto en otro caso.—Véase: Inst., tom. 2º, verb. *Mujer casada*, núm. 1, y tom. 1º, verb. *Comercio*, número 398 y su nota.

1—El primer remate que se verificó quedó sin efecto porque los títulos no eran buenos. Es sabido que los martilleros son mandatarios y no comisionistas, como lo tiene declarado la Cámara: de donde se sigue que las relaciones jurídicas entre vendedor y martillero, se hallan sujetas á las leyes que rijen el mandato. Ahora bien, vendido el inmueble fué aprobado el remate, quedando con este requisito cumplido el mandato con relación al martillero y surge su derecho para exigir el cobro de su retribución de acuerdo con lo establecido en el art. 1952 del Cód. Civ. La circunstancia posterior de dejarse sin efecto el contrato y la de designarse el mismo martillero para el nuevo remate en nada afecta su derecho al cobro de la comisión; porque nada tiene que ver el martillero pues no se produjo por hecho suyo ni por su culpa sino por el hecho de los vendedores; y porque el nuevo nombramiento no puede considerarse como una continuación del anterior, sino como un mandato distinto. El art. 1960 del Cód. Civ. establece que el mandato



COM



cuantas se le nombre para efectuar la venta, aun cuando el mandato se refiera á la misma finca.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 170, Ser. 2ª.

2. **Comisión**—Aprobado el remate, el desistimiento posterior del comprador, no inhibe al martillero para el cobro de su comisión—Jur. Com., tom. 9, pág. 170, Ser. 2ª.

3. **Comisión**—Si no se justifica la comisión estipulada, el comitente debe al comisionista la que sea de uso en plaza determinada por peritos nombrados por las partes.—Jur. Com., tom. 9, pág. 294, Ser. 2ª.

4. **Comisión**—El comitente debe al comisionista la mitad de la comisión por la mercadería no vendida, siempre que el mandato haya sido revocado sin causa justificada.—Jur. Com., tom. 9, pág. 294, Ser. 2ª.

Comisión—Véase: *Jurisdicción comercial*, núm. 1—*Pago á cuenta*, núm. 1.

Comisión liquidadora—Véase: *Sociedad*, núm. 1.

1. **Comisionista**—Reconocido por el demandado el carácter de comisionista, el comitente puede responsabilizarlo por aquellas operaciones que reconozca haber hecho á plazo, y de las cuales no haya dado á aquél los nombres y condiciones de los terceros con quienes trató.—Jur. Com., tom. 5, pág. 185, Ser. 2ª.

cesa por el cumplimiento del negocio: aquí el negocio quedó cumplido para el martillero: si los interesados lo rescinden después, ese es un hecho ageno al martillero y que por consiguiente no puede perjudicarle.

2—Véase nota precedente.

3—Arts. 274 y 275 del Cód. de Com. vigente, iguales al 379 y 380 del antiguo.

4—Art. 275 del Cód. de Com. vigente, igual al 380 del anterior.

1—Arts. 363 y 364 del Cód. de Com. antiguo.

COM

2. **Comisionista**—Tiene derecho para repetir contra el mandatario el saldo que haya pagado al contado ó á plazos por las operaciones de bolsa que le haya encomendado.—Jur. Com., tom. 9, pág. 5, Ser. 2ª.

3. **Comisionista**—El que cobra y no entrega el precio de las mercaderías en cuya venta ha intervenido, comete defraudación.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 37, Ser. 2ª.

4. **Comisionista**—El que paga las diferencias que resultan de las operaciones encomendadas, tiene derecho de repetir contra su mandante ó comitente.—Jur. Crim., tomo 9, pág. 65, Ser. 2ª.

5. **Comisionista**—Debe á su comitente cuenta detallada del mandato, no pudiendo responsabilizar á éste por operaciones sueltas: la rendición de cuentas de todas las encomendadas y practicadas por su orden es ineludible para responsabilizarlo por el saldo.—Jur. Com., tom. 9, pág. 209, Ser. 2ª.

6. **Comisionista**—El reconocimiento hecho por el comi-

2—Así lo tiene declarado la Cámara en los casos que se han sometido á su decisión. El corredor que paga se subroga en los derechos que corresponden al acreedor. El corredor tiene interés en que el crédito se abone al que con él ha contratado, en cuyo caso la subrogación se opera *ipso jure*—art. 939, inc. 2º, Cód. de Com. ant.—Véase: Inst. tomo 3º, verb. *Diferencias*, núm. 1; *Agente de bolsa*, núm. 1; tom. 2º, verb. *Agente ó comisionista*, núm. 1; *Corredor de bolsa*, núm. 1.

3—Arts. 52 y 202, inc. 3º, Cód. Pen.

4—Véase el núm. 2.

5—La ley impone al comitente la obligación de satisfacer al comisionista todos los gastos y desembolsos verificados en el cumplimiento de su comisión. Pero para que esta obligación exista es necesario que el comisionista rinda cuenta al comitente de todas las cantidades entregadas ó percibidas—arts. 331, 381 y 382 del Cód. de Com. ant., iguales al 276 y 277 del nuevo.

6—Véase nota precedente.





COM

sionista de la existencia de un saldo adelantado, hace obligatoria la justificación de su inversión para que pueda responsabilizarse al comitente por suma alguna.—Jur. Com., tom. 9, pág. 209, Ser. 2ª.

Comisionista—Véase: *Boleto de venta*, núm. 1—*Gastos*, núm. 2—*Comisión*, núms. 3 y 4—*Rendición de cuentas*, núms. 9 y 10—*Consignatario de frutos*, núm. 1.

1. **Comisionistas**—O despachantes de aduana, están equiparados al mandatario y tienen derecho para exigir del mandante todos los gastos que el mandato haya ocasionado, aun cuando no justifiquen haberlos pagado, siempre que haya resultado indispensable.—Jur. Com., tom. 7, pág. 42, Ser. 2ª.

2. **Comisionistas**—Que deben efectuar las ventas de mercaderías en presencia del propietario, se rijan por las disposiciones del mandato y no por las de rematador ó consignatario.—Jur. Com., tom. 7, pág. 50, Ser. 2ª.

3. **Comisionistas**—Para vender, sin poder especial para asuntos judiciales, carecen de personería para deducir tercera sobre los bienes embargados.—Jur. Com., tom. 7, pág. 163, Ser. 2ª.

4. **Comisionistas**—Al encargado para la venta de mercaderías puede oponérsele la escepción de falta de personería, siempre que pretenda deducir tercera sobre ellos.—Jur. Com., tom. 7, pág. 163, Ser. 2ª.

Comisionistas—Véase: *Corredores de bolsa*, núm. 4.

1—Arts. 310 y 381 del Cód. de Com. ant.

2—Arts. 122, 304 y 327 del Cód. de Com. ant. y 1977 del Cód. Civ.

3—De acuerdo con lo preceptuado en el art. 1884 del Cód. Civ.

4—Este sumario no está inserto en los fallos, pero el punto fué resuelto por la Cámara: tiene su fundamento en los arts. 13, 14, 83 y 84, incs. 2º y 4º del Cód. de Proc. y 1884 del Cód. Civ.

COM

Comitante—Véase: *Corredores de bolsa*, núm. 6—*Mandato*, núm. 4—*Comisión*, núms. 3 y 4—*Comisionista*, números 5 y 6—*Peritos*, núm. 5—*Rendición de cuentas*, números 8 y 9.

Compañías—Véase: *Privilegios*, núm. 1.

1^a. **Compensación**—La calumnia no puede oponerse como compensación á la injuria.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 344, Ser. 2^a.

Compensación—Véase: *Accionista*, núm. 1—*Sociedad anónima*, núm. 2—*Escepción de litis-pendencia*, núm. 4.

1^b. **Competencia**—La querella por amenazas, es de la competencia del Juez Correccional.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 230, Ser. 2^a.

2. **Competencia**—Resuelta en virtud de un informe mé dico legal, la competencia del Juez de Instrucción, éste no puede declararse incompetente.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 228, Ser. 2^a.

3. **Competencia**—Del Juzgado de Paz, es procedente

1^a—La compensación solo puede oponerse con un delito de la misma naturaleza del acusado; no puede oponerse al delito mayor uno menor como lo son los del sumario.

1^b—Arts. 169 y 170 del Cód. Pen. vigente.

2—La competencia, en este caso, resulta de la calificación que el mé dico hace de las lesiones inferidas y que según su duración determina la jurisdicción á que corresponde su conocimiento.

3—Una demanda de competencia de Juez de Paz fué sometida á arbitraje, habiéndose fijado el monto por los árbitros, en una suma superior á la de la competencia de los Jueces de Paz: se dijo de nulidad del laudo, y se pretendió someter esa nulidad á la jurisdicción de 1^a Instancia, lo que no es procedente mientras esa resolución arbitral no quede consentida, pues sus efectos están en suspenso y por consiguiente esa resolución arbitral no puede tomarse como base para determinar la competencia al Juez de 1^a Instancia.



COM

mientras la cantidad que haría variar de competencia no se encuentre consentida.—Jur. Com., tom. 6, pág. 42, Ser. 2ª.

4. Competencia—La designación de pesos oro en una obligación, no basta para alterar la jurisdicción, pues la competencia por razón de la cantidad supone igualdad de valor en pesos moneda nacional.—Jur. Com., tom. 8, pág. 303, Ser. 2ª.

Competencia—Véase: *Contrato*, núm. 3 — *Jurisdicción*, núms. 2, 3, 4 y 5—*Contrato de compraventa*, núm. 5—*Jueces de Instrucción*, núm. 1—*Jurisdicción arbitral*, número 1—*Rendición de cuentas*, núms. 1 y 3 —*Sociedad anónima*, núm. 1—*Sustracción de menores*, núm. 1—*Demencia*, núm. 1—*Préstamo hipotecario*, núm. 1—*Declaraciones*, núm. 1—*Calumnia*, núm. 10—*Defraudación*, números 7 y 8.

Competentes—Véase: *Petición de herencia*, núm. 1.

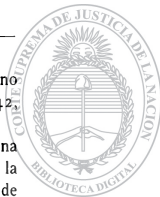
Cómplice—Véase: *Adulterio*, núm. 3.

Compra y venta—Véase: *Actos de comercio*, núms. 1 y 2 —*Embargo preventivo*, núm. 11 — *Contrato de compraventa*, núm. 3.

Comprador—Véase: *Convenio especial*, núm. 1—*Falsificación*, núm. 5—*Oblación*, núms. 1 y 3—*Remate judicial*, núms. 1 y 2—*Acción reivindicatoria*, núm. 4—*Conocimiento á la orden*, núm. 1—*Martillero*, núm. 2—*Cosa vendida*, núms. 1 y 2—*Escrituración*, núm. 1—*Posesión*, número 1—*Títulos*, núms. 3 y 5—*Precio*, núm. 3—*Contrato de compraventa*, núm. 3.

Compraventa—Véase: *Comercio*, núm. 1 —*Contrato de*

4—Está de acuerdo con la jurisprudencia sentada en otro caso.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Jurisdicción*, núm. 7 y su nota.



COM — CON

compraventa, núm. 5—*Jurisdicción comercial*, núm. 1—*Renuncia*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núms. 5 y 6.

Compromiso—Véase: *Escepción de compromiso*, núm. 2.

1^a. *Compromiso arbitral*—La multa, como pena estipulada en un compromiso arbitral, solo puede ser aplicada si se justifica la existencia de los requisitos que exige el contrato.

—Jur. Com., tom. 6, pág. 409, Ser. 2^a.

Compromiso arbitral—Véase: *Nulidad del laudo*, núm. 1.

—*Multa*, núm. 2—*Arbitros*, núm. 4.

Compulsa—Véase: *Libros de comercio*, núm. 7.

Común acuerdo—Véase: *Perito*, núm. 1.

1^b. *Concordato*—Su aceptación judicial, hace procedente la escepción de quita contra todos los créditos de fecha anterior, y favorece á todos los socios que formaban la sociedad.—Jur. Com., tom. 5, pág. 306, Ser. 2^a.

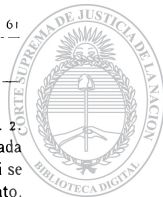
2. *Concordato*—La revocación del auto de quiebra, solo procede probada la falsedad de los hechos que motivaron la declaración, ó mediante concordato celebrado en la oportunidad que fija la ley.—Jur. Com., tom. 8, pág. 152, Ser. 2^a.

Concurso—Véase: *Acreedor*, núm. 1.

1^a—La multa, se estableció que debía abonarla el que obstruccionara el cumplimiento del compromiso, lo que se resolvió no haberlo hecho el inculpado, y por consiguiente se le eximió de la multa.

1^b—La sanción de un arreglo por medio del concordato obliga á todos los acreedores estén ó no presentados, conocidos ó desconocidos, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 1626 del Cód. de Com.

2—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1557 del Cód. de Com. antiguo, la revocación del auto de quiebra solo puede pedirse dentro de ocho días contados desde su publicación: fuera de este caso únicamente procede dejarse sin efecto la declaratoria de quiebra en los casos del sumario, como lo establece el art. 1596.





CON

1. **Concurso**—Justificada la existencia de la deuda, procede su reconocimiento por el concurso.—Jur. Com., tomo 8, pág. 33, Ser. 2ª.

Concurso—Véase: *Acreeedor prendario*, núm. 1—*Posiciones*, núm. 11—*Acreeedores*, núm. 3—*Honorarios*, núm. 12—*Síndico*, núm. 1—*Fianza*, núm. 2—*Quiebra*, núm. 11.

Condición—Véase: *Legado condicional*, núm. 1—*Legado*, núm. 1—*Prescripción*, núm. 3—*Obligaciones condicionales*, núm. 1.

Condición resolutoria—Véase: *Legado*, núm. 1.

Condición social—Véase: *Indemnización*, núm. 2.

Condiciones—Véase: *Comisionista*, núm. 1—*Inhibición*, núm. 6—*Rematador*, núm. 1—*Balances*, núm. 1—*Confesión indivisible*, núm. 1—*Dependiente*, núm. 3—*Sociedad comercial*, núm. 1—*Contrato de locación*, núm. 1—*Contrato*, núm. 4—*Convenio espreso*, núm. 1.

1ª. **Condominio**—La entrega de una suma determinada para la construcción de un edificio, importa la constitución de un condominio y no un préstamo, aun cuando el título del terreno se encuentre á nombre de uno solo de los contratantes.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 35, Ser. 2ª.

2. **Condominio**—La división entre socios, se rige por el

1ª—En un primer escrito había manifestado el dueño del dinero, su carácter de condómino, y el dueño del terreno así lo sostuvo: de aquí resulta que el condominio se había operado por contrato—art. 2675 del Cód. Civ.

2—Se trataba de un contrato de sociedad entre demandante y demandado, en el que se decía lo siguiente: «desde la fecha y hasta la liquidación de todos los negocios pendientes, tendremos sociedad en el resultado de ellos, de modo que el líquido producto será partible.» Constituían parte del activo algunos bienes raíces sobre los que versaba la demanda de división de condominio. El actor había sido asimismo reconvenido sobre rendición de cuentas y liquidación de los negocios

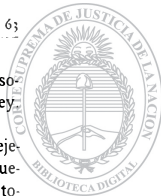
CON

contrato, en consecuencia, debe, como liquidación de sociedad, ser resuelto por el Tribunal arbitral que exige la ley.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 229, Ser. 2ª.

3. **Condominio**—Aun declarado éste por sentencia ejecutoriada, es improcedente la protocolización, si el inmueble se traspire judicialmente á un tercero.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 99, Ser. 2ª.

sociales. Se dijo que estas cuestiones debían ser resueltas por árbitros-arbitradores de acuerdo con lo preceptuado en los arts. 1777 del Cód. Civ., y 504 y 516 del Cód. de Com. ant., iguales al 441 y 452 del vigente. Y que tratándose de demandas ó cuestiones que deben ser resueltas, unas de ellas por el Juez ordinario y otras por arbitradores, cuya tramitación es diferente, no puede admitirse la reconvencción, pues como lo enseña Carvantes, la reconvencción tiene lugar, respecto de las causas ó negocios de que pueda conocer el Juez ante quien se interpuso la demanda principal, y solo habiendo conformidad en su índole, ó no repugnándole su naturaleza — Tratado de Proc. Jud., lib. 2º, párrafo 707.—Si no es posible sustanciar conjuntamente la demanda y la contestación, como lo preceptúa el art. 102 del Cód. de Proc., el Juzgado estaba en el deber de rechazar la reconvencción por no ser acumulable la demanda principal con la reconvenccional. La Cámara dijo, que no tratándose de simples enagenaciones, de las que solo resulta la obligación de dividir el precio, sino de verdaderas negociaciones sociales que exigen una liquidación total en que queden comprendidas todas las operaciones que todos esos negocios han afectado en relación con otros llegándose así á la individualidad del conjunto del contrato, sin que la separación de las acciones sea posible, debía someterse la liquidación total al Tribunal arbitral designado por el Cód. Civ. en el artículo citado.

3—Una propiedad fué adjudicada á la esposa viuda y á sus menores hijos conjuntamente teniendo cada uno su parte alicuota en la propiedad; esa misma propiedad fué vendida en remate público, y el Juez exigió como medida previa la protocolización del condominio: la Cámara revocó el auto diciendo que, la propiedad fué vendida en público remate, como de propiedad de la viuda y de sus hijos menores, de modo que sea la parte alicuota de cada uno de los copietarios, una vez otorgada la escritura por el Juez á nombre de los condóminos, el título traslativo





CON

1. **Condóminos**—En asuntos litigiosos, no pueden oponerse al reconocimiento ó cesión de derechos á un tercero que solo afecta la parte del cedente.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 419, Ser. 2ª.

1ª. **Confesión de la madre**—La prescripción de la ley que niega todo valor á la declaración ó confesión de la madre, negando ó afirmando la paternidad legítima es aplicable á los hijos naturales.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 307, Ser. 2ª.

1ª. **Confesión del reo**—Ante la Policía, forma prueba plena, si concuerda con la prestada estrajudicialmente ante testigos.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 200, Ser. 2ª.

2. **Confesión del reo**—Solo forma prueba, y es indivisible, cuando es la única que existe: si por otras pruebas se justifica el delito, la confesión no es de tenerse en cuenta.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 153, Ser. 2ª.

del dominio quedaría perfecto para el comprador, y habilitado cada coparticipante para tomar del precio la parte que le corresponda.

1—Véase: verb. *Cesión de derechos*, núm. 2.

1ª—El art. 255 del Cód. Civ. que legisla para los hijos legítimos es aplicable á los naturales, porque la misma razón filosófica que tuvo en cuenta la ley al establecerla para aquéllos militan para éstos, pues si el deseo de favorecer á un hijo, si el temor de aparecer deshonrada, puede inducir á una madre á ocultar el verdadero estado de un hijo, imputándoselo á quien no es su padre; otros móviles menos elevados podrían inducir en error á la justicia, desviando sus investigaciones, lo que haría impracticable el esclarecimiento del estado civil de los hijos, ocultando el verdadero ó dándole uno que no le corresponde. Donde concurren las mismas razones igual debe ser la disposición de la ley. *Ubi ladem est ratio, eadem esse debet juris dispositio*.

1ª—A pesar de haber el reo, confesado su delito ante testigos y en la Policía pretendió retractarse después: retractación que no fué tomada en cuenta.

2—Porque solo se admite la indivisibilidad de la confesión del reo, cuando las circunstancias que rodean el proceso la hacen verosímiles.—Véase el número siguiente.—De otra manera no es de tenerse en cuenta.

CON

3. **Confesión del reo**—Si bien es indivisible, la veracidad de la escepción ó defensa, solo puede admitirse en cuanto no aparezcan inverosímiles los hechos—Jur. Crim., tomo 6, pág. 205, Ser. 2ª.

4. **Confesión del reo**—Es indivisible, en tanto no resulte inverosímil ó contraria á la prueba resultante de los autos.—Jur. Crim., tom., 8, pág. 426, Ser. 2ª.

5. **Confesión del reo**—Es indivisible, mientras no aparezca inverosímil, cuando la prueba del delito solo resulta de la del procesado.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 113, Ser. 2ª.

6. **Confesión del reo**—Ante el Juzgado, tiene fuerza de instrumento público, y para que la retractación anule y deje sin valor legal esa prueba, se requiere que de autos

3—Las defensas ó escepciones que opone el procesado, no son consideradas como verdaderas escepciones cuya justificación le incumbe; pero esta doctrina no tiene aplicación cuando dichas defensas resulten inverosímiles.

4—Véase notas precedentes.

5—Véase: Inst., tom. 2º, verb. *Confesión*, núms. 1, 2 y 3.

6—Leyes 2 y 5, tit. 13, Part. 3ª. Una retractación inmotivada y de todo punto arbitraria, no tiene importancia alguna, ni debe ser tomada en consideración. Los criminalistas están contestes en esto. Así Mittermayer dice: «Si la retractación, versa sobre una confesión enteramente regular, ha lugar á aplicársele el principio, según el cual una declaración tardía ó parcial del acusado, dada únicamente en interés de este último, no puede destruir una prueba completa primitivamente presentada. Ahora bien, toda retractación encierra una declaración de esta naturaleza, y á la manera que hecha independientemente de la retractación, no podría aprovechar al acusado, puesto que nadie puede ser creído ha blando en interés de su propia causa, así bajo esta nueva forma con que aparece, no puede destruir una prueba ya existente.»—Tratado de la Prueba en Materia Criminal, pág. 243.—Así lo establece también el Código de Proc. en su art. 319, inc. 2º. Solicitada la retractación, ella debe tramitarse por cuerda separada y debe resultar de pedimento especial.





CON

resulte prueba plena de que físicamente no pudo el reo cometer el delito que se le imputa.—Jur. Crim., tom. 7, página 188, Ser. 2ª.

7. **Confesión del reo**—De ser autor de un delito anterior por el cual fué procesado y absuelto, no puede ser motivo de un fallo, pues existe á ese respecto cosa juzgada.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 227, Ser. 2ª.

8. **Confesión del reo**—La prueba de presunciones, si son graves, precisas y concordantes, basta para fundar la sentencia condenatoria, sin que sea indispensable la confesión del reo, ni la existencia de testigos del hecho.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 330, Ser. 2ª.

9. **Confesión del reo**—La falta de testigos presenciales, hace indivisible la confesión en tanto ella no resulte inverosímil ó contraria á las leyes físicas ó naturales.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 227, Ser. 2ª.

10. **Confesión del reo**—Siendo ella indivisible, procede la absolución del acusado si de ella no resulta la confesión del delito.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 265, Ser. 2ª.

11. **Confesión del reo**—Para que la retractación de ella,

7—El expediente que comprobaba la absolución fué agregado al proceso, obstando á su pronunciamiento el principio *non bis in idem*.

8—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Presunciones*, núm. 1 y su nota, que trata de la importancia de la prueba de presunciones en el estado actual de nuestra legislación penal.

9—El fallo no resuelve tal cosa, solo dice, que la confesión es indivisible. El sumario consagra un principio de derecho penal aceptado por nuestras leyes criminales.—Véase el núm. 2.

10.—En la causa no existían más prueba que la declaración del damnificado y la confesión del reo: esta última es indivisible de acuerdo con la prescripción del art. 318 del Cód. de Proc. Crim. cuando no hay prueba que la desvirtúe, y por el contrario todos los antecedentes hacían que dicha confesión fuese verosímil.

COM

pueda ser tenida en cuenta, debe llenar los requisitos que la ley exige.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 359, Ser. 2ª.

12. Confesión del reo—Es indivisible, y su afirmación de haber pagado al contado los objetos, no importa una escepción que deba probar.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 340, Ser. 2ª.

13. Confesión del reo—Justificada la inverosimilitud de las deposiciones de los testigos de la acusación, solo puede fundarse la sentencia, en la confesión del reo, la que siendo indivisible hace plena prueba.—Jur. Crim., tomo 10, pág. 64, Ser. 2ª.

14. Confesión del reo—Es indivisible cuando no resulta inverosímil.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 50, Ser. 2ª.

Confesión del reo—Véase: *Retractación*, núm. 1.

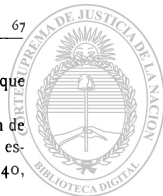
1. Confesión estrajudicial—De un delito, no es prueba

12—El art. 468 del Cód. de Proc. Crim., establece que en todos los casos la prueba de los hechos para justificar la criminalidad del procesado incumbe á la acusación. Por otra parte, el art. 318 consagra el principio de que la confesión no puede dividirse en perjuicio del confesante y que los distintos hechos y circunstancias que ella contenga, no importan escepciones cuya prueba imcumba al acusado, salvo cuando por la calidad de las personas, sus antecedentes ú otras circunstancias del hecho, resulten presunciones graves en contra del confesante.

13—Una de las condiciones que debe reunir la declaración de un testigo para que haga fe con arreglo de la sana critica, es que ella sea verosímil; si esta condición falta, su fuerza probatoria desaparece: y si de autos no consta otra prueba, esta debe tomarse como base para la resolución del proceso, la que hace prueba y es indivisible siempre que sea verosímil y no esté desvirtuada por las constancias de autos.

14—Véase el núm. 2.

1—Es un principio del derecho penal sustentado por todos los autores, que la confesión estrajudicial de un delito no forma prueba plena. La ley 7, tit. 13, Part. 3ª, dice así: «Conociendo algun ome fuera de juyzio que el avia fecho algun yerro ó mal a otro, si despues que le demandassen en juyzio negasse que nunca fiziera aquel yerro: decimos que



CON

bastante de su consumación.—Jur. Crim., tom. 8, página 155, Ser. 2ª.

1ª. **Confesión indivisible**—Siendo la confesión indivisible, corresponde al demandante la prueba de la existencia de condiciones no reconocidas por el demandado: la prueba de ser la operación á plazo corresponde al que afirma que la venta fué con esas condiciones.—Jur. Com., tom. 8, página 220, Ser. 2ª.

1ª. **Conocimiento á la orden**—La transferencia del conocimiento á la orden, no basta para probar la tradición de las mercaderías, y el vendedor, en virtud de la quiebra del comprador, puede entablar acción reivindicatoria, la que

si de otra manera non le puede ser prouado, non le empece la conocencia que assi fizo: como quier que grand sospecha pueuen auer del en razon del fecho ó de la cosa que assi conoció.» Así lo tienen también resuelto uniformemente nuestros Tribunales.—Véase: Inst., tom. 1, verb. *Confesión estrajudicial*, núm. 499 y *Confesión*, núm. 488.

1ª—En cuanto á la divisibilidad de la obligación.—Véase: Inst., tomo 3º, ver. *Confesión*, núm. 3.—En el caso presente se demandó la entrega de mercaderías que se decían vendidas á plazo: el demandado confesó la obligación, pero negó que la venta fué al contado. Se dijo que en este caso la confesión era indivisible y que por consiguiente el plazo invocado debió comprobarse por el que lo alegaba. Consideramos que la Cámara tuvo razón en resolver así la cuestión, pero no porque la confesión sea indivisible, pues es todo lo contrario; en materia civil la confesión es divisible. Es por esto que cuando un deudor confiesa la deuda pero alega haberla pagado es él quien debe comprobar la calificación de la confesión, que en este caso la constituye la circunstancia de haber pagado. La Cámara resolvió así, decimos, pero no porque la confesión sea indivisible, sino porque según disposición expresa del art. 530 del Cód. de Com. ant., las ventas se presumen al contado, y no se puede exigir la entrega de los efectos sin dar al vendedor el precio en el acto de verificar aquélla. Si la ley presume que es al contado, corresponde la prueba de lo contrario al que alegue una estipulación que no consagra el principio general.

1ª—Véase: *Acción reivindicatoria*, núm. 4.



CON

hace procedente el embargo preventivo.—Jur. Com., tomo 8, pág. 154, Ser. 2ª.

Conocimientos especiales—Véase: *Rendición de cuentas*, núm. 2.

1ª. Consignación—Si resulta procedente, las costas son á cargo del acreedor.—Jur. Civil, tom. 10, pág. 53, Ser. 2ª.

2. Consignación—La procedencia de la consignación en pago, solo puede ser declarada al dictarse sentencia definitiva.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 267, Ser. 2ª.

Consignación—Véase: *Consignatario de frutos*, núm. 1.

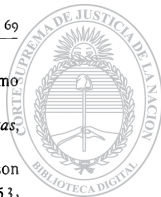
Consignatario—Véase: *Comisionistas*, núm. 2.

1ª. Condenación en costas—No es procedente si ella no ha sido pedida antes de la contestación de la demanda.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 312, Ser. 2ª.

1ª—Es prescripción terminante del art. 760 del Cód. Civ.

2—La oportunidad para aplicar lo dispuesto en el art. 760 del Código Civ. es al resolver en definitiva.

1ª—La Cámara consideró improcedente la condenación en costas por no haber sido ella pedida antes de la contestación á la demanda, con la que viene á quedar trabado el juicio y las partes ligadas, según común doctrina, por cuasi-contrato. El Juez que según el art. 216 del Cód. de Proc., debe fallar con arreglo á las acciones deducidas, resolvería *extra petita* si condenase en costas á una de las partes, cuando no se ha hecho mención de ella antes de la contestación á la demanda. Este sumario no ha sido consignado por el compilador de los fallos pasando por alto la doctrina sentada por la Cámara. Como el punto tiene gran importancia práctica lo hemos consignado nosotros. La Cámara dijo en otra ocasión que no puede haber condenación en costas cuando no se solicita en parte alguna del juicio.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Costas*, número 9.—También ha resuelto otro caso en el mismo sentido del sumario.—Véase el núm. 21 del verb. citado.—Pero en contra de estas dos resoluciones existe otra por la cual se establece que el vencido solo puede ser condenado en las costas con posterioridad á la petición del demandado.—Véase: Inst., tom. 1º, verb. *Costas*, núm. 628.





CON

1ª. **Consignatario de frutos**—Éste en su carácter de comisionista, debe, á su comitente, cuenta detallada y documentada de los fondos que haya producido la consignación.—

Jur. Com., tom. 9, pág. 251, Ser. 2ª.

Construcción—Véase: *Condominio*, núm. 1.

Construtor—Véase: *Derecho de retención*, núm. 1—*Locación de servicios*, núm. 1.

1ª. **Constructores**—Corresponden á la jurisdicción civil

1ª—La forma en que debe rendirse cuenta no ha sido dejada al arbitrio de la parte que debe rendirla: ella debe ser según el precepto del art. 83 del Cód. de Com. ant., «instruida y documentada», y el comisionista debe rendirla «detallada y justificada»—art. 382.—Por cuenta instruida y documentada, se entiende, la especificación clara, precisa y concreta de las operaciones realizadas por cuenta del comitente, con expresión de las personas con quienes se contrata, de los precios y todo esto con inclusión de los recibos, cartas y facturas expedidas en el curso de las operaciones. El cumplimiento de todos estos requisitos, si bien la ley no lo exige de una manera espresa y categórica, ella resulta de varias de sus disposiciones y del común sentir de los autores. La prohibición del art. 367 del Cód. de Com., como asimismo la sanción penal del art. 369 serían ilusorias si la ley no hubiese proporcionado al comitente los medios de evidenciar la sinceridad de los actos del mandatario. La doctrina ha consagrado, la necesidad de rodear de todo recaudo la rendición de cuentas. Así Pereyra Forjas Sampaio Pimentel, en sus Anotaciones al Cód. de Com. Portugués sobre el art. 232, dice: «Para que sea aceptable la cuenta, debe ser practicada en los términos del artículo 232, porque la escrituración mercantil, es la historia viva del comerciante: los documentos de que va acompañada para acreditar los gastos hechos, comprueban su fidelidad». En el mismo sentido se expresan Pothier, *Traité de Proc. Civ.*, tom. 2º, cap. 2º; Dalloz, verb. *Mandat*; Delamarre et Lepoitoin, tom. 2º, núm. 461; Troplong, *Mandat*, número 415.

1ª—Esta resolución está en contra de la jurisprudencia sentada.—Véase: *Inst.*, tom. 2º, verb. *Empresario*, núm. 1.—Esta jurisprudencia ha venido á reformarse en virtud de la teoría sustentada por el Agente Fiscal Dr. Rodríguez Bustamante en los siguientes términos:—La Excma. Cá-

CON

las cuestiones entre empresarios constructores de inmue-

mara de lo Comercial ha resuelto en un fallo que fué dictado con fecha anterior á la vigencia del nuevo Código, que la compra de materiales, que hacen los empresarios de obras, es comercial, porque es hecha con el objeto de revenderlos, siendo aplicable al caso el inc. 1º, art. 7º del anterior Cód. de Com. Entiendo que la jurisprudencia tiene que cambiar en virtud de la vigencia del nuevo Cód. de Com. El legislador se ha separado deliberadamente de la progresista teoría adoptada por el nuevo Código Italiano que clasifica entre los actos de comercio, la compra y la reventa de cosas inmuebles, hecha con el propósito de una especulación comercial y que establece lo mismo por la ley belga, que son comerciales las empresas de construcciones ó empresas de trabajos públicos ó privados, según el texto del art. 2º de esta. La comisión redactora del nuevo Código de Comercio, dice, en la exposición que lo precede: «La organización actual de nuestro derecho civil en materia de derechos reales, exigiendo la tradición para su adquisición, no se presta á una innovación tan violenta y brusca, como sería la que sometiera á la jurisdicción comercial.» «Fuera de la especulación de la compra y venta de inmuebles, que no hay interés público manifiesto en fomentar, no quedan otras operaciones sobre inmuebles que revistan habitualmente el carácter mercantil.» El legislador se ha separado deliberadamente de la teoría de la comercialidad de las transmisiones sucesivas, y con fin especulativo de inmuebles, como de las empresas de construcciones, porque el proyecto del Cód. de Com. y la comisión de la Cámara de Diputados ha tenido en vista para redactar el que está en vigencia, establecer en el art. 4º (que trata de los actos de comercio), que es comercial (inc. 6º) y que son igualmente comerciales las empresas de construcción (inc. 14). Estos dos incisos no figuran en el nuevo Código y la tendencia de la ley al respecto está espesada con claridad en los párrafos transcritos de la comisión redactora. La jurisdicción comercial es de escepción, sus procedimientos son más rápidos, su acción es más imperativa y eficiente que la civil; el sometimiento á ella es una obligación, una carga y un beneficio según los casos. La omisión de la matrícula de comerciante por parte del empresario, es una presunción de que su profesión, industria ó arte, no es de las que se reputan comerciales. No creo como el actor, que una empresa de construcción, ya sea de edificios, de caminos, puentes, etc. sea una empresa de las que la ley coloca bajo la denominación de empresas de fá-



CON

bles aun cuando la base del litigio sea el material empleado.—Jur. Com., tom. 10, pág. 288, Ser. 2^a.

1^a. Consulta—El Superior no puede modificar, la sentencia elevada en consulta, en sentido desfavorable al reo.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 392, Ser. 2^a.

Consulta—Véase: *Sentencia*, núm. 2.

Contador—Véase: *Sociedad*, núm. 1.

1. Contadores—Inscriptos en la matrícula durante el mes de Agosto de 1889.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 104, Ser. 2^a.

Contrademanda—Véase: *Incompetencia*, núm. 1.

Contradocumento—Véase: *Prueba testimonial*, núm. 1—*Prueba sobre falsedad*, núm. 1.

Contratantes—Véase: *Contrato de compraventa*, número 5.

1^b. Contrato—Entre mandante y mandatario, sin instrucciones espresas, permite la revocación del mandato siem-

pre, en el inc. 5º, art. 8º del Cód. de Com. vig. Las empresas a que la ley se refiere son aquellas que desarrollan su trabajo sobre bienes muebles transformando la materia prima, comprando para revender en otra forma, y especular contra la diferencia. Se trata al presente, de apreciaciones de hechos, de simple interpretación de la ley, y por lo tanto la jurisprudencia de los Tribunales no puede invocarse como argumento de carácter decisivo, más aun cuando nuestra legislación comercial ha sido revisada recientemente. A juicio del Agente Fiscal, ni por el acto, ni por las personas, el presente juicio debe continuar en la jurisdicción comercial. El acto que origina la demanda, es una simple locación de obra, sujeta en todo a la legislación civil.» El sumario está de acuerdo con otro caso resuelto y que corre publicado en el tom. 8, pág. 36, Ser. 1ª de la S. C. P.

1ª.—Cuando se trata de pena de presidio ó penitenciaria—art. 693 del Cód. de Proc. Crim.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Cámara de Apelaciones*, núm. 1.

1^b.—Arts. 1970 y 1977 del Cód. Civ.



CON

pre que el mandatario se niegue á las que imponga el mandante. —Jur. Com., tom. 7, pág. 50, Ser. 2ª.

2. **Contrato**—Las transacciones forman para las partes un contrato al cual deben someterse como á la ley misma. —Jur. Civ., tom. 10, pág. 11, Ser. 2ª.

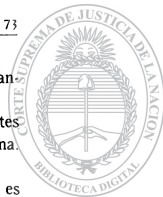
3. **Contrato**—El Juez del domicilio del demandado, es competente para entender en el juicio aun cuando el contrato haya tenido origen fuera de su jurisdicción.—Jur. Com., tom. 9, pág. 60, Ser. 2ª.

4. **Contrato**—Las condiciones ó estipulaciones mediante

2—Art. 1197, Cód. Civ.

3—Se trataba de la obligación emanada de una letra de cambio. El art. 78: del Cód. de Com. ant. establecía que las letras debían pagarse en el lugar en que sean firmadas, cuando no hay lugar designado para el pago—igual al 606 del Cód. vigente.—Sinembargo es un principio general de derecho que tiene su sanción en el art. 4º del Cód. de Proc., que el actor debe seguir el fuero del reo; siendo de aplicarse en el presente caso ese principio porque el demandado es parte obligada en dicha letra. Cuando la ley establece que la letra que no tiene lugar designado para el pago se entiende pagadera en el lugar en que ha sido firmada, esa disposición no tiene más alcance que el establecer esa jurisdicción como competente para entender en su cobro, pero en manera alguna excluye la facultad del actor de demandar su cobro en el domicilio del demandado. La ley ha establecido ese domicilio especial en favor del acreedor, pero no ha querido escluir la facultad de exigirlo en el domicilio del demandado. En el caso resuelto, la letra había sido firmada en Montevideo, en cuyo caso es de aplicarse el artículo 1216 del Cód. Civ., que establece que si el deudor tuviese su domicilio ó residencia en la República y el contrato debiese cumplirse fuera de ella, el acreedor podrá demandar ante el Juez de su domicilio y ante el del lugar del cumplimiento del contrato, aun cuando el deudor no se halle allí: como principio general, esta doctrina del Cód. Civil es aplicable á los contratos mercantiles, según la opinión del doctor Cortés.

4—El contrato decía que durante el primer año de servicios se le abonaría un sueldo mensual interesándolo á la vez en una parte de las



CON

las cuales el dependiente entra á formar parte del personal, no puede interpretarse como un contrato por tiempo determinado si el término no resulta claramente del contrato ó del documento.—Jur. Com., tom. 9, pág. 318, Ser. 2ª.

Contrato—Véase: *Mero tenedor*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núms. 6 y 10—*Estafa*, núm. 2—*Inhibición*, número 6—*Mandatario*, núm. 4—*Dependiente*, núm. 1—*Acreeedores*, núm. 2—*Pena*, núm. 2—*Obligaciones*, núm. 1—*Quitas*, núm. 1—*Prueba escrita*, núm. 1—*Renuncia*, núm. 1—*Simulación*, núm. 1—*Cesión de derechos*, núm. 1—*Inscripción provisoria*, núm. 1—*Jurisdicción*, núm. 3—*Apercibimiento*, núm. 1—*Prueba testimonial*, núm. 4.

1. **Contrato bilateral**—No es requisito esencial para la validez del acto, que la existencia de tantos ejemplares cuantos sean los interesados en un contrato bilateral, re-

utilidades del negocio, y que en el segundo año mejorarían las condiciones en su favor. Se pretendió que este contrato obligaba al principal á conservarlo en la casa por lo menos durante dos años. No sería lógica esta interpretación, pues cualquiera causa podría obligar al dueño del negocio á cerrarlo, limitarlo ó variarlo dedicándolo á otro objeto extraño á la competencia del dependiente: todo esto eximiría al principal de su obligación hacia el dependiente, no pudiendo reclamar una indemnización de daños y perjuicios si se viese obligado á separarlo del negocio. Esa cláusula debió ser explícita, y si el interesado no la exigió así, solo á él es imputable la falta: su único derecho se limita al cobro de un mes de sueldo, así como á exigir las utilidades que le correspondan hasta la fecha de su separación—arts. 158 del Cód. de Com. ant. y 157 del vigente.

1.—Poco importa que el doble ejemplar exista ó nó siempre que la efectividad del contrato se hubiese acreditado; pues ese doble ejemplar es exigido como prueba, no como condición de la existencia del contrato. Esa es la interpretación que ha hecho la Cámara de los arts. 1021 y 1023 del Cód. de Com.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Disposición*, núm. 1.



CON

sulte del ejemplar presentado.—Jur. Civ., tom. 10, página 214, Ser. 2ª.

Contrato bilateral—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 16.

Contrato de arrendamiento—Véase: *Cesión de derechos*, núm. 3.

1. Contrato de compraventa—La falta de pago de la señal en el día fijado, no basta para dar por rescindido el contrato de compraventa si tal pena no se estipuló en el convenio: el acreedor debe exigir el cumplimiento de la obligación.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 192, Ser. 2ª.

2. Contrato de compraventa—Que versa sobre bienes raíces, la jurisdicción comercial es incompetente para entender sobre su cumplimiento, aun cuando uno de sus contratantes sea una sociedad anónima.—Jur. Com., tom. 9, pág. 239, Ser. 2ª.

3. Contrato de compraventa—Las convenciones entre

1—El pacto comisorio debe ser espreso, según el art. 1204 del Cód. Civ., para que en su mérito quede sin efecto una convención, si ella no se cumpliese por una de las partes. De manera que estipulada para un día determinado la entrega de una suma en calidad de señal, si ésta no se entrega, esa falta de cumplimiento no autoriza la rescisión del contrato sino su cumplimiento—art. 1204, citado.

2—La demanda versaba sobre daños y perjuicios ocasionados por falta de cumplimiento de un contrato de compraventa de un terreno: su conocimiento corresponde al fuero civil—arts. 452 del Cód. de Com. vigente y 516 del ant.

3—Un comerciante vende á otro una partida de mercaderías, y este último á su vez las vende á un tercero. La primera venta se verificó al fiado y no pudiendo el vendedor cobrar el precio de la venta trató de recuperar sus mercaderías, las que habían sido depositadas por el segundo comprador. El primer vendedor ignoraba la celebración de la segunda venta. Las mercaderías fueron recuperadas con consentimiento del segundo comprador. El último comprador se presenta entablando acción por defraudación contra el primer vendedor, siendo esta demanda



CON

vendedor y comprador sobre resolución del contrato de compraventa de mercaderías, no afectan los derechos que un tercero hubiese adquirido sobre ellas.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 7, Ser. 2ª.

Contrato de compraventa—Véase: *Daños y perjuicios*, número 5.

Contrato de habilitación—Véase: *Balances*, núm. 1.

1ª. **Contrato de locación**—El uso que haga el locador, de la cosa arrendada, después de vencido el contrato de locación, se considera hecho en iguales condiciones que las estipuladas en el contrato fenecido.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 17, Ser. 2ª.

2. **Contrato de locación**—Su rescisión se rige, en cuanto á la jurisdicción competente para entender en él, por el importe total de la locación.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 275, Ser. 2ª.

1^b. **Contrato de mayor cuantía**—La prueba testimonial, no

rechazada, y mandando entregar las mercaderías al segundo comprador. En cuanto á la responsabilidad criminal del primer vendedor es evidente que no existe, pues nada más justo que tratar de recuperar las mercaderías vendidas á plazo cuando no se le paga el precio de venta. La acción criminal debió más bien dirigirse contra el segundo vendedor por haber entregado mercaderías vendidas á un tercero.

1ª—Art. 1622, Cód. Civ.

2—Véase: *Ins.*, tom. 2º, verb. *Jurisdicción*, núm. 2 y su nota; y *tom. 1º*, verb. *Contrato de locación*, núm. 556. La competencia, en cuanto al cobro de los alquileres, se rige por el alquiler mensual, aunque la suma que se cobre sea de mayor cuantía. La ley de Justicia de Paz, establece, que corresponde á esa jurisdicción toda demanda por cobro de arrendamientos siempre que el alquiler mensual no exceda de 200 ¢.

1^b—La cuestión versaba sobre cumplimiento de un contrato de compraventa por la suma de 2000 y pico de pesos moneda nacional. No procede la prueba testimonial en estos contratos, sino cuando existe principio de prueba escrita. No solo no se otorgó documento alguno



**CON**

basta para justificar la existencia de un contrato de esta naturaleza, aun cuando se trate de muebles.—Jur. Com., tom. 6, pág. 247, Ser. 2^a.

2. **Contrato de mayor cuantía**—Las modificaciones a este contrato, requieren para su prueba los mismos requisitos que la ley exige para lo principal.—Jur. Civ., tom. 10, página 5, Ser. 2^a.

1^a. **Contrato de sociedad**—Por valor de más de mil pesos, no puede ser justificado por testigos.—Jur. Com., tom. 5, pág. 253, Ser. 2^a.

1^b. **Contrato de rescisión**—Siempre que en el contrato de rescisión de una venta, no se estipule espresamente la pérdida de las arras ó cantidades anticipadas, los contratantes tienen derecho para exigir su devolución.—Jur. Com., tom. 5, pág. 425, Ser. 2^a.

1^c. **Contrato privado**—De sociedad, para una negociación

sino que tampoco hubo entrega del precio: siendo esta circunstancia la que podía colocar el caso entre los de escepción establecidos en el artículo 1191 del Cód. Civ.—Véase: Inst., tom. 1^o, verb. *Prueba*, número 2216. Hay que concluir como lo decía la ley romana: *Contra testimonium scriptum non scriptum testimonium non fertur*, Ley 1^a, Cód. de Test.

2—Respecto á modificaciones hechas á un contrato de sociedad mercantil la ley espresamente establece el principio sentado en el sumario—art. 396, Cód. de Com. ant., igual al 295 del vigente.—Véase: Inst., tom. 3^o, verb. *Contrato*, núm. 3; tom. 2, mismo verb., núm. 16; tom. 1^o, verb., núm. 535, y *Contrato escrito*, núm. 572.—Conviene no olvidar que contra el testimonio escrito, no se admite el testimonio no escrito. Según puede verse en un caso que hay en los F. de las C. de Apel. recopilado por el Dr. Ponce; tom. 4, pág. 373.

1^a—Art. 393, Cód. de Com. ant.—La prueba testimonial es admisible cuando se trata de los efectos pasados en cuando á las cuentas que los socios deben rendirse respectivamente—art. 399, *ibid*.

1^b—Art. 558 del Cód. de Com. ant.

1^c—El contrato tenía por objeto adquirir un área de terreno: en este



CON

determinada, debe ser redactado en el sello correspondiente.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 73, Ser. 2^a.

1^a. **Contrato sin pacto comisorio**—En éste, después de pedido y ordenado judicialmente y sin oposición el cumplimiento en un plazo perentorio, corresponde decretarse, á solicitud de parte, la rescisión, sin que para ello deba seguirse juicio ordinario.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 359, Ser. 2^a.

1^b. **Contratos**—Entre el tutor y su pupilo, durante la menor edad de éste, no tienen fuerza legal.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 279, Ser. 2^a.

1^c. **Convención**—No siendo prohibida por la ley, la convención por la que reconoce al dependiente una parte de

caso, no debe tenerse en cuenta la jurisprudencia sentada, de que los boletos de compraventa que versen sobre bienes raíces pueden ser hechos en papel común, porque aquí no se trata del contrato de compraventa, sino del contrato de sociedad para adquirir bienes determinados, el que consiste en un contrato particular estipulado entre los firmantes que queda perfecto, y no necesita ser elevado á escritura pública y puede surtir todos sus efectos en la forma privada. Si se estipulase su elevación á escritura pública, no habría necesidad de hacerlo constar en e. papel sellado que demarque la escala, porque entonces se paga el impuesto al dar cumplimiento á ese requisito.

1^a—Corresponde la rescisión—art. 1375, incs. 1^o y 3^o, Cód. Civ.—Ordenada la oblación del precio de compra dentro de un término dado, bajo apercibimiento, no cumpliéndose con lo ordenado, procede la rescisión del contrato sin que para su declaración sea necesario un juicio ordinario que en última instancia lo declare. Basta con que el Juez haga efectivo el apercibimiento.

1^b—Y hasta pasado un mes de la rendición de cuentas que hubiese hecho—art. 465, Cód. Civ.—Durante la tutela no pueden los tutores vender á sus pupilos bienes propios—art. 1359

1^c—Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla á la cual deben someterse como á la ley misma—art. 1197, Cód. Civ.—Estos dependientes, no tienen el carácter de socios.—Véase:

CON — COP

las utilidades además del sueldo, debe obligársele judicialmente á su cumplimiento.—Jur. Com., tom. 8, pág. 372, Ser. 2ª.

Convención—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 3 - *Intereses*, núm. 1.

1ª. Convenio especial—Sobre devolución de mercaderías, por no ser vendibles, su prueba es de cargo del comprador.—Jur. Com., tom. 5, pág. 385, Ser. 2ª.

1ª. Convenio espreso—El principal, no está obligado por tiempo determinado con su factor ó dependiente, y mientras no exista convenio espreso, las condiciones del primer año y segundo ó siguientes no importan obligación por ese término.—Jur. Com., tom. 9, pág. 318, Ser. 2ª.

Convenio espreso—Véase: *Remuneración*, núm. 1—*Balances*, núm. 1.

Conversión—Véase: *Obligaciones*, núm. 3.

Cónyuge ofendido—Véase: *Adulterio*, núm. 2.

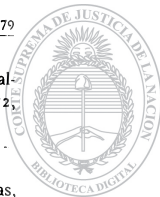
1ª. Copias—Consentido el mandato que ordena la pre-

Ins., tom. 3º, verb. *Dependiente*, núm. 2; *Dependientes habilitados*, números. 1 y 2.

1ª—En virtud del principio general establecido en la Ley 1ª, tit. 14, Part. 3ª.

1ª—Véase: verb. *Contrato*, núm. 4.

1ª—Consentido el auto que ordena la presentación de las copias dentro de un término; no presentándolas debe hacerse efectivo el apercibimiento. Debe tenerse presente que el art. 21 del Cód. de Proc. exige que las copias se acompañarán á la presentación del escrito y que si no se cumple con este requisito, el secretario no recibirá el escrito, produciendo el efecto de no presentado. ¿Cómo es que en el caso presente se recibió el escrito oponiendo escepciones, de las que necesariamente tenía que darse traslado? El secretario no debió recibirlo y si lo hizo fué faltando á su deber. Sin embargo, la Cámara ha autorizado este abuso, incitando á los secretarios á faltar á su deber, cuando ha resuelto que «el escrito cuya copia no se acompaña en los casos que prescribe





COR

sentación de copias en breve término, bajo apercibimiento de ser devuelto el escrito de escepciones, procede su devolución debiendo tenerse como opuestas fuera del término legal.—Jur. Com., tom. 9, pág. 175, Sec. 2ª.

Corredor—Véase: *Boleto de venta*, núm. 1.

1. Corredor de bolsa—El mandante es responsable de las sumas que un corredor de bolsa justifique haber pagado por operaciones verificadas por su orden.—Jur. Com., tomo 6, pág. 370, Ser. 2ª.

2. Corredor de bolsa—El mandante de un corredor de bolsa, es responsable de las sumas que éste justifique haber pagado por operaciones verificadas por su orden.—Jur. Com., tom. 6, pág. 264, Ser. 2ª.

3. Corredor de bolsa—Este se subroga á los comitentes, siempre que obligado por el Reglamento de la Bolsa, cum-

la ley es necesario que el secretario no lo reciba ni le ponga al despacho.—Véase: Inst., tom. 1º, verb. *Escrito*, núms. 1115 y 1116.—El sumario es exactamente igual al resuelto en otro caso.—Véase: el número 1114 del mismo y verb. citado. La Cámara no puede sancionar un procedimiento irregular, cual es la aceptación por el actuaro, de un escrito sin los recaudos que la ley ordena. El art. 21 del Cód. de Procedimientos prohíbe al secretario recibir un escrito del que deba darse traslado, sin las copias; si contra ese mandato espreso lo recibe, el debe tenerse por no presentado, acatando y cumpliendo el precepto legal: lo contrario importa una violación de la ley: violación tanto más inesplicable cuanto ella se lleva á cabo por la misma institución pública encargada de velar por su cumplimiento. Pero la experiencia desgraciadamente nos enseña y la jurisprudencia lo comprueba, que la Cámara no respeta la ley.

1—Está de acuerdo con otros casos resueltos.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Agente de bolsa*, núm. 1.

2—Véase nota precedente.

3—Es exactamente igual al caso resuelto en el tom. 3º de la Inst., verb. *Agente de bolsa*.

COR



ple con las obligaciones que resulten contra él, procedentes de la liquidación.—Jur. Com., tom. 6, pág. 133, Ser. 2ª.

4. Corredor de bolsa—Se considera comisionista obligado directamente hacia las personas con quienes contrata.—Jur. Com., tom. 6, pág. 80, Ser. 2ª.

5. Corredor de bolsa—En defecto de instrucciones de los comitentes, están autorizados á ejecutar las operaciones obrando como lo harían en negocio propio, y se encuentran facultados para llevar á efecto todos aquellos actos que tengan relación con la operación ordenada.—Jur. Com., tom. 6, pág. 80, Ser. 2ª.

6. Corredor de bolsa—En sus relaciones con el comitente, se rige por las disposiciones del mandato.—Jur. Com., tom. 7, pág. 365, Ser. 2ª.

4—Un corredor había comprado por cuenta de sus comitentes una partida de oro; llegado el día no lo retiraron: el corredor se vió obligado á vender igual suma pagando la diferencia de precio, después se presentó cobrando esa diferencia judicialmente, la misma que se le mandaba pagar; porque los corredores ó agentes de bolsa eran considerados como comisionistas antes de la vigencia de la ley de 6 de Nov. del año 1888. Como comisionistas quedan obligados directamente hacia las personas con quienes contratan, y sujetos en consecuencia á lo establecido en el art. 335 y siguientes del Cód. de Com. ant., siendo así que en ese mismo carácter los considera el Reglamento de la Bolsa. Es aquí de estricta aplicación el art. 342, que autoriza al comisionista, en defecto de instrucciones de sus comitentes, á ejecutar la comisión, obrando como lo haría en negocio propio. Los arts. 344 y 348 legislan para el caso presente y autorizan implícitamente el procedimiento seguido por el agente, como perfectamente correcto y ajustado á la ley mercantil.

5—Art. 342, Cód. de Com. ant., igual al 238 del vig.

6—Así eran consideradas esas operaciones antes de la ley de 6 de Nov. de 1888.

COR — COS

Corredor del bolsa—Véase: *Mandato*, núm. 4.

Correaje—Véase: *Jurisdicción comercial*, núm. 1.

1. Cosa agena—La justificación de haberse apropiado una cosa agena ó su precio, corresponde al que afirma el hecho.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 123, Ser. 2^a.

1^b. Cosa juzgada—El sobreseimiento sin acusación por no resultar cargos contra los detenidos, no hace cosa juzgada.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 25, Ser. 2^a.

2. Cosa juzgada—El deudor puede oponer al esposo he-

1—La prueba incumbe al que afirma un hecho nuevo en juicio.

1^b—Se trata de unos delinquentes que habiendo sido detenidos como sospechados de robo fueron puestos en libertad por no haber resultado datos suficientes para formalizar el proceso, dándose éste por terminado y sobreseyéndose. Con posterioridad fué completamente descubierto el robo, iniciando la Policía un nuevo sumario, que el Juez creyó que no podía continuar por obstar la cosa juzgada y la regla *non bis in idem*. Hay error evidente en esta apreciación, pues el sobreseimiento puede tener lugar por muchas causas y en muy diversas circunstancias, debiendo asimismo ser muy distintos sus efectos. Así, el sobreseimiento puede tener lugar porque no se hubiese podido comprobar el cuerpo del delito el que debe ser la base del procedimiento; ó bien porque á pesar de resultar efectiva la comisión de un delito, no se pueda averiguar quiénes fueron sus autores, ó solo resultan ligeras sospechas, insuficientes para formalizar un proceso: fué esto último lo que sucedió en el caso que nos ocupa. En este caso el reo no fué acusado ni se le tomó confesión con cargos, no pudiendo por consiguiente sostenerse que el sobreseimiento produzca cosa juzgada y obste á que posteriormente, con datos más precisos se formalice el proceso. No puede ser absuelto sino el que ha sido acusado: no puede haber sentencia, ni por consiguiente cosa juzgada, sino cuando ha habido una resolución pronunciada en juicio contradictorio. Si no puede haber juicio sin demanda y sin defensa, ¿cómo puede haber sentencia que produzca cosa juzgada? y ¿cómo puede aplicarse con propiedad la regla *non bis in idem*? El Cód. de Proc. vigente ha venido á cortar esta cuestión, pues acuerda el sobreseimiento para estos casos, sin que él obste á que si se adquieren mejores datos se pueda volver sobre el sumario.



COS

redero las causas que lo inhabiliten según la ley, para serlo, pues para él no hace cosa juzgada la declaratoria cuya nulidad, en cuanto afecte sus derechos, puede invocar y conseguir.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 239, Ser. 2^a.

3. Cosa juzgada.—La sentencia definitiva dictada en juicio contradictorio, no hace cosa juzgada para las partes que hayan tenido intervención en el juicio como coadyu-

3.—Se había discutido en un espediente entre dos familias el mejor derecho para ejercer el patronato de una capellanía, declarándose por sentencia que una de ellas lo tenía, por ser parienta del fundador más próxima en grado. Es evidente que esa sentencia solo hacía cosa juzgada respecto de lo que fué materia del juicio en que se dictó. Posteriormente se inició un juicio entre los coherederos de la familia á cuyo favor se había reconocido el derecho preferente, desconociéndose el derecho á una de ellas. Se dijo que ese punto no podía ser materia de nuevo juicio porque había al respecto cosa juzgada. Es evidente que esa excepción no era procedente pues la cuestión no fué jamás materia de una sentencia. Escribhe dice que para que proceda la cosa juzgada se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: identidad de cosa, de causa, de calidad, y que se trate de las mismas personas. Según Bonnier, para que haya cosa juzgada se requiere que haya sentencia dictada en juicio contencioso, pero en manera alguna puede darse tal denominación á las resoluciones que se espiden de común consentimiento entre partes que no litigan sino que se encuentran de acuerdo. «No puede haber autoridad de cosa juzgada sino en cuanto hay sentencia propiamente dicha, es decir, decisión de Juez en materia contenciosa. Los actos de jurisdicción graciosa, no son verdaderas sentencias, sino contratos revestidos de formas judiciales. Así la providencia que autorice definitivamente una adopción, no tiene otro efecto, que permitir al oficial civil recibir el acta del consentimiento de las partes, dejando intacta á los interesados la facultad de hacer valer todos los medios de hecho y de derecho contra la subsistencia de la adopción.»—Véase: *Tratado de las Pruebas*, tom. 2º, pág. 402, núm. 862.—En el caso presente todos los miembros de una misma familia—hermanos—se habían reconocido mutuamente como hijos de los mismos padres al litigar con otra familia. Ahora bien, ¿esos hermanos que se han reconocido recíprocamente en ese carácter, pueden desconocerse después? Rogron,





COS

vantes por existir comunidad de intereses en sus resultados.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 97, Ser. 2ª.

Cosa juzgada—Véase: *Intereses*, núm. 1—*Sumario*, número 2—*Confesión del reo*, núm. 7—*Escepción de cosa juzgada*, núms. 1 y 2—*Regulación*, núm. 1—*Escritura pública*, núm. 2—*Apelación*, núm. 4.

1. **Cosa vendida**—Ante la imposibilidad de entregar la

estudiando esta cuestión, se declara por la negativa—tom. 1º, pág. 255.—Esa opinión fundada en el derecho francés no puede prevalecer en nuestra legislación, pues según el art. 262 de nuestro Cód. Civ. el derecho de reclamar la filiación ó de contestar la legitimidad no se estingue, ni por prescripción, ni *por renuncia expresa ó tácita*, aunque los derechos pecuniarios ya adquiridos están sugetos á la prescripción. De aquí resulta que no hay cosa juzgada, y por consiguiente la escepción no procede.

1—Esta sentencia fué revocatoria de la de 1ª Instancia dictada por el hoy Camarista Dr. Gimenez, habiendo éste resuelto que el vendedor, no obstante haberse producido la imposibilidad por fuerza mayor, estaba obligado á indemnizar los daños y perjuicios. La Cámara dijo que esa sentencia era injusta. Se trataba de la compraventa de un terreno que fué escriturado y cuya entrega se solicitó posteriormente, habiéndose hecho imposible la entrega por estar ocupados por el Gobierno. Si bien es cierto que el vendedor debe entregar la cosa vendida libre de toda otra posesión—art. 1409, Cód. Civ.—también lo es que esa obligación puede hacerse imposible, estinguiéndose cuando la prestación que forma su objeto viene á ser física ó legalmente imposible—artículos 888 y 890—y que la cosa se entiende perdida por existir imposibilidad legal de entregarla, cuando ha sido puesta fuera del comercio aunque no sea en su totalidad—art. 891.—En el caso presente había sido puesta fuera del comercio en virtud de espropiación del Gobierno, que la destinaba para fines de utilidad pública. Es sabido que la espropiación según los autores, es uno de los casos de imposibilidad legal de que nos habla el art. 891 citado. Cuando la obligación se hace imposible, el obligado está en el deber de indemnizar los daños y perjuicios, si esa imposibilidad le es imputable—arts. 628 y 889—pero si por el contrario, la culpa no existe, la obligación queda sin efecto para ambas partes,—arts. 578, 627 y 888.—De aquí resulta que toda la cuestión presente

COS

cosa vendida, por caso fortuito ó fuerza mayor, el vendedor solo está obligado á la devolución del precio con sus intereses á estilo de banco.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 123, Ser. 2ª.

2. Cosa vendida—Si bien el vendedor está obligado á en-

se reduce á saber si ha habido culpa de parte del vendedor en la producción del hecho que ha venido á determinar la imposibilidad del cumplimiento de la obligación. Ante todo debe establecerse que no puede haber culpa de parte del vendedor en el hecho de la espropiación, la que es independiente de su voluntad. Sin embargo, el art. 889 ha establecido de una manera expresa que procede la responsabilidad por el hecho imposible, entre otros casos, cuando el deudor se constituye en mora, en cuyo caso se convierte la obligación primitiva en la de pagar daños y perjuicios. En la venta de inmuebles el deudor cumple otorgando la escritura de enagenación, debiendo hacer la tradición cuando el comprador lo exija—art. 1409.—La mora se opera desde el día en que se le exija la entrega. La mora requiere para su constitución el requerimiento judicial salvo los casos especiales exigidos por la ley—art. 509—entre los cuales no se enumera la obligación que nos ocupa. Si no se demuestra, como no se demostró en el caso ocuriente, que el vendedor fué constituido en mora antes del hecho de la espropiación, es evidente que de acuerdo con las prescripciones legales citadas, y especialmente del art. 888, la obligación cuyo cumplimiento se exige, ha quedado estinguida sin culpa del deudor, y éste no puede ser condenado, ni á la entrega de la cosa, ni á la indemnización de los daños y perjuicios: solo está obligado á la devolución del precio con sus intereses legales como lo preceptúan los arts. 1064 y 513.

2.—El art. 1409 del Cód. Civ., establece que el vendedor debe entregar la cosa vendida libre de toda otra posesión y sin contradictor que se oponga á que el adquirente la tome. Aquí todo se reducía á saber, si los actores comprobaron que al tomar posesión de la cosa vendida, se encontraba parte de ella ocupada por terceros. Este hecho no fué comprobado, y resultaba lo contrario de la misma escritura de compraventa donde se daban por puestas en posesión del área vendida. Si el comprador toma posesión de un inmueble apercibiéndose más tarde que le falta una área, no habiendo protestado á tiempo, tiene en su contra los arts. 2405 y 2411 del Cód. Civ.





COS

tregarla al comprador, libre de toda otra posesión, esa obligación cesa, si hecha la tradición sin reclamo, el comprador no justifica que los ocupantes que perturban su dominio, existían con conocimiento del vendedor al verificar la compraventa.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 325, Ser. 2ª.

1. **Costas**—El ejecutante no debe ser condenado en las costas de la tercería de dominio, si el ejecutado habita la misma casa del tercerista.—Jur. Com., tom. 5, pág. 378, Ser. 2ª.

2. **Costas**—Cuando la causa fenece por gracia, el acusado no es pasible de las costas causadas.—Jur. Crim., tomo 5, pág. 346, Ser. 2ª.

3. **Costas**—Solo procede la condenación en ellas, cuando existe evidente temeridad por parte del vencido.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 116, Ser. 2ª.

4. **Costas**—No procede su imposición, cuando no existe

1—Porque puede el ejecutante presumir que pertenecen al ejecutado los muebles, y una presunción tal es bastante para autorizar una excepción á la regla establecida en el art. 221 del Cód. de Proc.

2—Cuando no hay sentencia condenatoria, no puede imponérsele las costas al procesado. Se dijo por el Fiscal que el auto no era correcto porque no se trataba de un juicio terminado en una forma regular y ordinaria; es decir, por sentencia. Porque no pudiendo privársele al que-rellante de las indemnizaciones que le corresponden, la Cámara le reservó espresamente sus acciones civiles, una de las cuales es sin duda alguna la condenación en costas, sobre la cual corresponde conocer al mismo Juez de lo principal. Esta argumentación falla por su base en presencia de lo dispuesto en el art. 1096 del Cód. Civ.

3—La Cámara no dijo que era necesario que existiese *evidente* temeridad, solo dijo que no podía imponerse la condenación en costas porque no podía imputarse á la parte, ni temeridad, ni malicia. Basta que haya malicia aunque ella no sea *evidente* para que proceda la condenación en costas. Esa es la jurisprudencia generalmente sentada por la Cámara.—Véase: Inst., tom. 2º, verb. *Costas*, núms. 8, 11 y 24.

4—Es la doctrina sentada en el art. 221 del Cód. de Proc.

COS

en autos mérito suficiente para su imposición.—Jur. Civ. tom. 9, pág. 163, Ser. 2ª.

5. *Costas*—La condenación en ellas no procede, si resulta evidente la buena fe del vencido.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 213, Ser. 2ª.

6. *Costas*—La condenación en costas y honorarios incluidos en una sentencia inapelable es inapelable también.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 220, Ser. 2ª.

7. *Costas*—No procede la condenación en costas el vencido en parte por haber pedido más de lo que á su derecho correspondía.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 251, Ser. 2ª.

8. *Costas*—La prueba de presunciones, si bien no per-

5—Para que un litigante sea exonerado de las costas, basta que haya tenido justa causa para litigar ó razón probable para ello.

6—La Cámara de lo civil, ha sentado esta jurisprudencia de una manera uniforme en los casos publicados; pero nosotros conocemos otros en los que se ha resuelto lo contrario reformando regulaciones contenidas en sentencias inapelables, siendo apelante el ejecutado: esas resoluciones no se han publicado: podemos citar entre otras, la dictada en el caso de Merry con Carranza, Juzgado del Dr. Posse, Secretaría del Dr. Ezequiel Repetto. La Cámara de lo Comercial ha resuelto un caso en sentido contrario.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Regulación de honorarios*, núm. 1.

7—La demanda versó sobre arrendamiento, para el cual no se había determinado precio entre locador y locatario. La sentencia hizo lugar á la demanda en parte, pues la estimación hecha por el locador fué considerada elevada. En este caso no procede la condenación en costas ni al actor ni al demandado: al primero porque no es el caso de la Ley 42, tit. 2º, Part. 3ª: el actor puede apreciar el arrendamiento en una suma mayor que la que determinen los árbitros, el criterio de aquél puede ser distinto del de éstos.—Véase: Inst., tom. 2º, verb. *Costas*, núm. 21. —Tampoco procede la condenación del demandado, pues desde que el actor no obtiene todo lo que pide, el demandado ha tenido razón derecha para litigar, y su prueba más evidente consiste en no haber sido completamente vencido. Así lo tiene resuelto la Cámara.—Véase: Inst., tom. 2º, verb. *Costas*, núm. 3, y tom. 3º, mismo verb., núm. 19.





COS

mite declarar la procedencia del embargo, autoriza la exoneración de las costas al tercerista.—Jur. Com., tom. 6, pág. 299, Ser. 2ª.

9. *Costas*—De los incidentes sobre verificación de créditos, son en todos los casos, de cargo del acreedor que pide la verificación.—Jur. Com., tom. 6, pág. 411, Ser. 2ª.

10. *Costas*—Solo la temeridad del escepcionante en juicio ordinario, hace procedente la condenación en costas.—Jur. Com., tom. 6, pág. 23, Ser. 2ª.

11. *Costas*—No procede la condenación en costas al vencido, no obstante su temeridad, si la parte no lo ha solicitado en la estación oportuna del juicio.—Jur. Com., tom. 6, pág. 24, Ser. 2ª.

12. *Costas*—Su imposición no procede, si la jurisdic-

8—Si las apariencias autorizan á considerar á un deudar dueño de las mercaderías, el embargo de esos bienes procede, y esas mismas apariencias coloca al acreedor en situación que justifica su buena fe y la ausencia de toda malicia ó temeridad, no pudiendo por consiguiente ser pasible de una condenación en costas.

9—Cuando el acreedor es moroso en su presentación, el art. 1612 del Cód. de Com. ant. impone el pago de las costas á los acreedores morosos.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Incidente*, núm. 3.

10—Las excepciones opuestas en juicio ordinario están sujetas en cuanto á las costas á los mismos principios del art. 221 del Cód. de Proc., siendo así que es principio recibido que en el juicio ordinario, las costas se imponen al litigante temerario ó de mala fe.

11—La Cámara dijo que «siendo terminante la disposición del artículo 221 del Cód. de Proc.», no procedía la condenación por cuanto no había sido pedida por el actor. ¿Cuál es la estación oportuna del juicio para solicitar la condenación en costas? Si no se pide al entablar ó al contestar la demanda ¿puede pedirse después?—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Costas*, núms. 9 y 21.

12—En este caso no hay mérito para su imposición. Es un punto constantemente resuelto de una manera uniforme tratándose de un juicio

COS

ción es potestativa del que opuso la escepción de incompetencia.—Jur. Com., tom. 6, pág. 232, Ser. 2ª.

13. *Costas*—La verificación, por incidente, en virtud de haber sido objetado un crédito, no hace obligatoria la condenación en costas al acreedor.—Jur. Com., tom. 8, página 33, Ser. 2ª.

14. *Costas*—No procede la condenación en ellas al actor, cuando existe prueba que hace evidente su buena fe.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 5, Ser. 2ª.

15. *Costas*—Cuando el Juzgado no resuelve el punto, la condenación en costas es improcedente.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 51, Ser. 2ª.

16. *Costas*—Al depositario que detiene el depósito por orden de Juez competente, pero en virtud de una mala interpretación de la orden, no se le puede imputar temeridad y por lo tanto, no es pasible de una condenación en costas.—Jur. Com., tom. 9, pág. 113, Ser. 2ª.

17. *Costas*—El vencido puede ser exonerado del pago

ordinario.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Jurisdicción*, núm. 4; tom. 2º, verb. *Jurisdicción potestativa*, núm. 1; tom. 1º, verb. *Condenación en costas*, núm. 472—Cuando la escepción se opone en el juicio ejecutivo, siempre que se declare procedente aunque ella sea potestativa debe imponerse las costas porque así lo establece terminantemente el art. 507 del Cód. de Proc.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Escepción de incompetencia*, núm. 4.

13—No es de aplicarse la disposición del art. 1612 del Cód. de Comercio ant. por cuanto el acreedor no había incurrido en mora, apareciendo por el contrario que el acreedor se presentó dentro del término fijado para la toma de razón de los créditos.

14—Véase el núm. 5.

15—Se alegó además, por el Juzgado, como fundamento de su resolución, la falta de malicia y temeridad.

16—No hay temeridad ni malicia en su conducta.



COS

de las costas, siempre que el Juzgado encuentre mérito para ello.—Jur. Com., tom. 10, pág. 112, Ser. 2ª.

18. **Costas**—El querellante que no justifica su acusación, debe ser condenado en todas las costas del juicio.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 127, Ser. 2ª.

19. **Costas**—La imposición de ellas al vencido, solo es obligatoria en las sentencias definitivas: en las escepciones es potestativa del Juez.—Jur. Com., tom. 10, pág. 135, Ser. 2ª.

20. **Costas**—Si no existe temeridad de parte del ejecutante al pedir el embargo, no debe ser condenado en las costas de tercería.—Jur. Com., tom. 10, pág. 138, Ser. 2ª.

21. **Costas**—Reconocida la procedencia de la escepción

17—Art. 221 del Cód. de Proc.

18—Arts. 143, 144 y 145 del Cód. de Proc. Crim.

19—Se trata de la resolución de la escepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda, declarándose procedente dicha articulación, pero sin condenar en costas al vencido. Apelada la resolución en la parte que no condenaba en las costas, la Cámara dijo que no es de estricta aplicación el art. 221 del Cód. de Proc. cuando se trata de la resolución de una escepción dilatoria, pues el citado artículo se refiere á las sentencias definitivas. El sumario no espresa con fidelidad lo que la Cámara resolvió, pues según lo espuesto, no resulta que ella hubiese dicho que la imposición de las costas sea obligatoria en las sentencias definitivas. Todo lo contrario, el art. 221 autoriza espresamente al Juez para eximir del pago de las costas al vencido siempre que encuentre mérito para ello. Hay juicios especiales en los que las costas son siempre á cargo del vencido, como en el juicio ejecutivo—art. 507 del Cód. de Proc.

20—El juicio de tercería debe regirse por los principios del juicio ordinario—art. 529, última parte, Cód. de Proc.—Si en el juicio ordinario, la condenación en costas no procede cuando no hay temeridad de parte del vencido, lo propio sucede en el juicio de tercería regidos por los mismos principios.

21—Esta resolución está de acuerdo con otra resuelta con anteriori-



COS — CRÉ

de incompetencia por ser extranjero el ejecutado, debe ser condenado el ejecutante en las costas.—Jur. Com., tomo 10, pág. 157, Ser. 2ª.

Costas—Véase: *Tercería*, núm. 1—*Honorario*, núm. 7—*Excepción de incompetencia*, núm. 1—*Lesiones corporales*, núm. 1—*Apoderado*, núm. 1—*Juicio ordinario*, núm. 1—*Incapacidad*, núm. 1—*Consignación*, núm. 1—*Bienes embargados*, núms. 1 y 2—*Letra de cambio*, núm. 1.

Cotejo—Véase: *Peritos*, núm. 2.

1ª. Cotejo de letras—Para él puede servir cualquier documento de la misma letra aunque no esté firmado.—Jur. Com., tom. 5, pág. 221, Ser. 2ª.

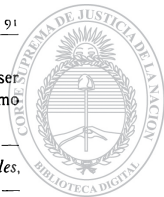
Cotización en la Bolsa—Véase: *Daños y perjuicios*, número 6.

1ª. Crédito—El reconocimiento de un crédito contra la testamentaria hecha por herederos mayores, no afecta el

dad.—Véase: verb. *Excepción de incompetencia*, núm. 1. En contra. Véase el núm. 4.

1ª—Según todos los prácticos, bajo la denominación de documentos privados, están comprendidos todos los que no sean públicos, ya sean esos documentos firmados ó no: y entran en esa denominación, los vales, pagarés, cuentas, libros de comercio ó particulares, cartas misivas ó correspondencias.—Véase: Manresa y Navarro, *Ley de Enj. Civ.*, tom. 2º, pág. 2723, verb. *Documentos privados y correspondencia*.—El cotejo de letras puede recaer sobre toda clase de documentos sin que haya ley alguna que escluya de este medio de prueba los documentos no firmados, los que pueden servir como medio general de prueba.

1ª—La confesión hecha por las partes en juicio, no puede perjudicar sino á la que la hace y en manera alguna á terceros. Sin embargo, á esa confesión la Cámara le ha atribuido la fuerza de un principio de prueba por escrito que hace procedente y admisible lo testimonial.—Véase: *Inst.*, tom. 2º, verb. *Prueba testimonial*, núm. 1.—El sumario está de acuerdo en todo con lo resuelto en otro caso.—Véase: *Inst.*, tom. 3º, verb. *Deuda*, núm. 1.



CRÉ — CUE

derecho de los menores, que solo pueden ser condenados á la parte proporcional en virtud de prueba plena.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 303, Ser. 2^a.

Crédito—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 2—*Embargo*, núms. 2 y 3—*Inhibición*, núm. 4 y 7—*Posiciones*, número 7—*Quiebra*, núm. 4—*Endoso*, núm. 1—*Chancelación*, núm. 2—*Verificación*, núm. 1.

1^a. Crédito endosable—El cesionario de un crédito, carece de acción directa contra el deudor que no ha consentido la cesión.—Jur. Com., tom. 8, pág. 265, Ser. 2^a.

Créditos—Véase: *Inhibición*, núm. 9.

Crimen—Véase: *Escusación*, núm. 3.

Cuenta—Véase: *Aprobación*, núm. 1.

Cuenta detallada—Véase: *Comisionista*, núm. 5—*Consignatario de frutos*, núm. 1.

1^b. Cuenta de venta—Aun debidamente reconocida, no

1^a—Véase: verb. *Cesionario*, núm. 1.

1^b—Esta resolución fué revocatoria del auto de 1^a Instancia, en el que se declaró procedente la ejecución y hábil el título. Un acreedor se presentó con una cuenta de venta pasada por un comisionista, en la que le daba cuenta de haber vendido efectos remitidos á su consignación. La firma que suscribía la cuenta fué reconocida, librándose el correspondiente mandamiento: diligenciado éste y citado de remate el deudor opuso la escepción de inhabilidad de título fundándose, en que su comitente habíale ordenado que el producido de la venta fuese cargado á favor de una tercera persona. La Cámara dijo que el hecho de que un documento esté comprendido entre los que traen aparejada ejecución, como en este caso lo es una cuenta reconocida en juicio—art. 465, incisos 2º y 4º del Cód. de Proc.—no quiere decir que ese título sea hábil para ejecutarse en el sentido del art. 488, inc. 4º. Consideramos que esta es la doctrina correcta, siempre que no se trate de letras de cambio y otros papeles comerciales que les estén equiparados, pues á su ejecución no se puede oponer la escepción de inhabilidad de título porque el art. 852 del Cód. de Com. ant., igual al 676 del vigente no lo com-



CUE — CUR



es título hábil para ejecutar por el saldo, siempre que las relaciones de derecho no hayan sido directas entre ejecutante y ejecutado.—Jur. Com., tom. 8, pág. 123, Ser. 2ª.

Cuenta particionaria—Véase: *Memoria pía*, núm. 1.

Cuestión previa—Véase: *Pena*, núm. 2.

Cuestiones—Véase: *Arbitros*, núm. 3—*Sociedad*, núm. 4

—*Escritura de compromiso*, núm. 1—*Sociedad comercial*, núm. 1—*Papel sellado*, núm. 3 y 4—*Personería*, núm. 3

—*Sentencia*, núm. 6.

Culpa—Véase: *Homicidio*, núm. 3—*Daño*, núm. 1—*Veneno*, núm. 1—*Mandato*, núm. 2—*Diligencias de prueba*, núm. 1—*Mora*, núm. 1—*Testigos*, núm. 9.

Culpa grave—Véase: *Lesiones*, núm. 15.

Culpabilidad—Véase: *Prueba plena*, núm. 4.

Curación—Véase: *Heridas*, núm. 4—*Informe médico*, núm. 1.

1. Curador definitivo—El nombramiento del de un insano, no procede mientras no exista declaratoria en forma de la incapacidad.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 53, Ser. 2ª.

prende entre los que enumera de una manera taxativa. La doctrina sentada en el sumario está en contra de la jurisprudencia constante de los Tribunales que siempre ha exigido como condición indispensable para que la excepción de inhabilidad sea procedente que ella consista y conste del título mismo; doctrina que la consideramos equivocada y que la hemos combatido siempre fundándonos en la letra y en el espíritu de nuestro Código.—Véase: Inst., tom. 2º, verb. *Inhabilidad de título*, núm. 4.—Alguna vez veremos triunfante nuestra opinión, pues ella está basada además en la opinión de los más reputados prácticos, entre los que podemos citar á Reus en su notable obra la Ley de Enjuiciamiento Civil española.

1—Arts. 140 y 142 del Cód. Civ.—Mientras no sea declarada la incapacidad solo procede el nombramiento de un curador provisorio—artículo 147.



1. **Chancelación**—El recibo de chancelación otorgado en virtud de una quita, comprende las obligaciones personales del deudor y además todas aquellas que por garantía ó fianza pudieron vencerse con posterioridad.—Jur. Com., tom. 6, pág. 160, Ser. 2^a.

2. **Chancelación**—El documento chancelatorio con fecha determinada, justifica la chancelación de toda deuda ó crédito de fecha anterior.—Jur. Com., tomo 8, pág. 176, Ser. 2^a.

1—El documento chancelatorio decía: *«dando por chancelado todo crédito en su contra y otorgando como otorgamos la más bastante carta de pago sin restricciones de obligaciones, hasta la fecha ó para lo futuro.»* El sentido lógico de esta cláusula, no podía ser otro que el de dejar completamente extinguidos entre los acreedores signatarios del documento y su deudor todos los créditos de plazo vencido ó á vencerse. Es por esto que el documento habla de obligaciones hasta la fecha ó para el futuro, y ella no puede aplicarse sino á las obligaciones pendientes de plazo no vencido. El art. 934 del Cód. de Com. ant., establece que un recibo concebido en estos términos ó en otros análogos, se presume que comprende toda deuda de fecha anterior. Así lo tiene resuelto esta misma Cámara en otro caso.—Véase: Inst., tom. 3^o, verb. *Saldo*, núm. 1.

2—Véase nota precedente.



Damnificado—Véase: *Delito*, núms. 3 y 4—*Declaración*, núm. 6.

1^a. **Daño**—El autor de un hecho que por su culpa ó negligencia causa un daño, es responsable del perjuicio sobreviniente.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 81, Ser. 2^a.

Daño—Véase: *Incendio*, núm. 1.

1^b. **Daños y perjuicios**—Cuando se reconoce su existencia, sin que pueda fijarse su valor, deben nombrarse peritos amigables componedores.—Jur. Com., tom. 5, pág. 406, Ser. 2^a.

2. **Daños y perjuicios**—Las personas jurídicas que ejercen funciones públicas, no son pasibles de una condenación en daños y perjuicios.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 175, Ser. 2^a.

3. **Daños y perjuicios**—Los Tribunales de la Capital son

1^a—Art. 1109, Cód. Civ.

1^b—Siempre que su liquidación fuese complicada y de lenta y difícil justificación ó requiera conocimientos especiales—art. 557 del Cód. de Proc.—y siempre que se trate de la ejecución de una sentencia. Puede en otros casos someterse la fijación del monto al juramento estimatorio—art. 220 del Cód. de Proc.—Véase: Inst., tom. 3^o, verb. *Daños y perjuicios*, núm. 3.

2—Art. 43 del Cód. Civ.

3—No puede tomarse esta resolución como aplicable á todos los casos en que se trate de daños y perjuicios ocasionados fuera de la Ca-

DAÑO

incompetentes para conocer en una acción por daños y perjuicios causados fuera de su jurisdicción.—Jur. Com., tom. 6, pág. 415, Ser. 2ª.

4. **Daños y perjuicios**—Solo procede el pago de ellos, justificando debidamente su existencia.—Jur. Com., tom 8, pág. 27, Ser. 2ª.

5. **Daños y perjuicios**—Son procedentes por la falta de cumplimiento del contrato de compraventa si no se reciben en la fecha señalada los efectos materia del contrato.—Jur. Com., tom. 7, pág. 300, Ser. 2ª.

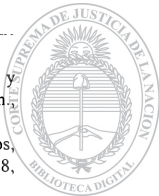
6. **Daños y perjuicios**—Tratándose de papeles de comercio, títulos ó acciones al portador, se determinan por la

pital. Se resolvió que esta jurisdicción no era competente fundándose: 1º En que el demandado estaba domiciliado fuera de la Capital en cuyo caso y tratándose de acciones personales, es Juez competente el del domicilio del demandado; 2º En que los daños y perjuicios resultaban de hechos producidos fuera de esta jurisdicción.

4—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Daños y perjuicios*, núms. 5 y 18; *Daño*, núm. 2; tom. 2º, mismo verb., núm. 7, que tiene relación directa con el caso del sumario; tom. 1º, mismo verb., núm. 719.

5—Siempre que el contrato hubiere dejado de cumplirse por culpa del comprador—art. 219, Cód. de Com. ant.

6—En los daños y perjuicios se comprende la pérdida sufrida y el lucro de que ha sido privado: y tanto la pérdida como el lucro solo deben comprender los que han sido consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación. La diferencia de que nos habla el sumario constituye el lucro cesante, la utilidad que dejaron de percibir los interesados. Como en el caso presente se trataba de una obligación de dar sumas de dinero, era justo incluirse los intereses, por que es evidente que entre los perjuicios que la inexecución causa en este caso, deben figurar los intereses como daño emergente. Basta tener presente que si la suma á entregarse hubiese sido recibida por el acreedor, éste hubiese aprovechado del dinero; y es sabido que el fruto del dinero es el interés que da—art. 225, Cód. de Com. ant. y 622 del Cód. Civ.



DAÑ

diferencia del precio y sus intereses, entre el día de la venta y aquel en que debieron ser entregados, y pagado su precio con arreglo á la cotización de la Bolsa.—Jur. Com., tom. 7, pág. 300, Ser. 2ª.

7. **Daños y perjuicios**—Comprobada legalmente su existencia, debe deferirse al juramento del actor, si no se hubiese justificado su monto.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 81, Ser. 2ª.

8. **Daños y perjuicios**—El propietario de un carruaje, es responsable de los daños y perjuicios que con él ocasione el cochero.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 81, Ser. 2ª.

9. **Daños y perjuicios**—Pedidos como consecuencia de la falta de cumplimiento de una obligación, no pueden ser tomados en consideración en la sentencia si solo se discute el fondo de la acción.—Jur. Com., tom. 9, pág. 113, Ser. 2ª.

10. **Daños y perjuicios**—Esta acción fundada en la falta de cumplimiento de un contrato de locación de servicios, es improcedente si se justifica que la resolución se verificó

7—Así lo establece el art. 220 del Cód. de Proc.—Véase: nota al número 1; Inst., tom. 3º, verb. *Daños y perjuicios*, núms. 3, 5 y 14.

8—Esta sentencia fué confirmatoria de la de 1ª Instancia dictada por el Dr. Gimenez. El sumario se funda en el art. 1122 del Cód. Civ. Laurent, en su monumental obra de Derecho Civil Francés, comentando el art. 1384 del Cód. Nap., concordante con el 1113 del nuestro, dice así: «Los patrones y comitentes, son responsables de los perjuicios causados por sus domésticos y comisionados, en el cumplimiento de las funciones para que han sido empleados»—tom. 20, pág. 606.

9—No se trató de la cuestión subsidiaria de daños y perjuicios, porque no solo no estaba justificada su existencia sino que ni siquiera se ofreció prueba sobre ese punto. Este fallo está de acuerdo con otro publicado en el tom. 21, pág. 348, Ser. 2ª, F. S. C. N.

10—Las convenciones forman para las partes una regla á la cual deben de someterse como á la ley misma—art. 1197 del Cód. Civ.



• DAÑ — DEC

de conformidad de partes.—Jur. Com., tom. 10, pág. 218, Ser. 2ª.

Daños y perjuicios—Véase: *Sociedad anónima*, núm. 2.

Decisión—Véase: *Inscripción provisoria*, núm. 1.

1ª. Declaración—La sola declaración de la víctima sin otra prueba concordante, no basta para fundar una condenación.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 80, Ser. 2ª.

Declaración—Véase: *Delito*, núms. 3 y 4—*Confesión de la madre*, núm. 1—*Prueba*, núm. 12.

Declaración de quiebra—Véase: *Quiebra*, núms. 2 y 4.

Declaración de testigos—Véase: *Calumnia*, núm. 1—*Diligencias preparatorias*, núm. 1.

1. Declaraciones—Los malos antecedentes del reo constantes de documentos públicos, como son los libros de Policía, demuestran la complacencia de los testigos que declaran en sentido contrario y anulan en absoluto tales declaraciones.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 355, Ser. 2ª.

2. Declaraciones—No prestadas por negligencia de la parte que presenta el testigo, no pueden ser decretadas después de vencido el término de prueba.—Jur. Com., tomo 7, pág. 74, Ser. 2ª.

Declaraciones—Véase: *Interrogatorios*, núm. 2—*Prueba testimonial*, núm. 3—*Testigos*, núms. 3, 4, 7, 11, 12 y 13.

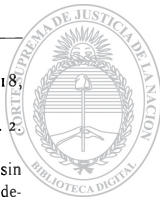
Declaraciones testimoniales—Véase: *Incapacidad física*, núm. 1.

1ª. Declaratoria de herederos—El impuesto de sellos en la

1ª—Para que sea condenado un reo, es necesario la reunión de los requisitos exigidos por el art. 358 del Cód. de Proc.

2—Véase: verb. *Diligencias de prueba*, núm. 1 y siguientes.

1ª—El art. 33 de la ley de sellos de 1889, prohibía á los Jueces hacer declaratoria de herederos sin que previamente se garantizara ó abonara el impuesto. A los efectos del pago de este impuesto basta que se pida



DEC

declaratoria de herederos, debe abonarse con arreglo al valor que tenían los bienes al tiempo del fallecimiento y solo por la parte que corresponde al heredero que la pide.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 211, Ser. 2ª.

2. **Declaratoria de herederos**—El reconocimiento de los coherederos, no basta para la declaratoria de herederos, si existen menores interesados.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 221, Ser. 2ª.

3. **Declaratoria de herederos**—Es nula, la dictada por Juez incompetente para conocer en la testamentaria por falta de jurisdicción.—Jur. Com., tom. 8, pág. 239, Ser. 2ª.

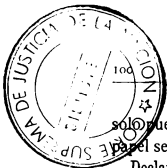
4. **Declaratoria de herederos**—A favor de uno ó de varios, la declaratoria y sin que sea necesario que se proceda á la división de la herencia. Esa declaratoria es necesaria para acreditar la transmisión de los bienes hereditarios á favor del heredero declarado, y por consiguiente el impuesto grava tan solo el patrimonio de cada heredero, pero no obliga á un heredero á abonar el impuesto por sus coherederos, siendo así que los impuestos son personales. Lo que la ley grava es la transmisión de la herencia, debiendo cada heredero pagar el impuesto por la parte de herencia que le toca.

2—Los coherederos del menor, no pueden afectar con el reconocimiento hecho á favor de terceros, los derechos hereditarios del menor.

3—Un Juez de Paz hizo una declaratoria de herederos en un juicio testamentario cuyo acervo excedía con mucho á su competencia: el Juez de 1ª Instancia declaró nula esa declaratoria, porque los Jueces de Paz están impedidos de entender en asunto alguno, cualquiera que sea su naturaleza, siempre que exceda del límite de su competencia ya se trate de juicio contencioso ó voluntario. Siendo la ley que establece la jurisdicción de los Tribunales, ley de orden público, la declaratoria hecha es nula, porque la prórroga de jurisdicción de cantidad á cantidad no es procedente, no pudiendo las partes atribuir á los Jueces una jurisdicción mayor de la marcada por la ley. Esta cuestión no fué estudiada por la Cámara: solo se confirmó la sentencia sin entrar á estudiar este argumento. Sin embargo ella se ajusta á los principios que rijen el caso.

4—Puede también garantizarse el pago del impuesto dando la fianza que la misma ley autoriza.





solo puede hacerse después de satisfecho el impuesto de papel sellado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 265, Ser. 2^a.

Declaratoria de herederos—Véase: *Cosa juzgada*, núm. 2.
Papel sellado, núm. 3—*Hijo natural*, núm. 4—*Sellos*, número 1.

Declaratoria de incapacidad—Véase: *Incapacidad*, núm. 1.
—*Curador definitivo*, núm. 1.

Declaratoria—Véase: *Jurisdicción*, núm. 9.

1^a. Defecto físico—Un pequeño desorden en el funcionamiento del dedo meñique, que no impide trabajar, no puede considerarse el defecto físico que la ley requiere para la agravación de la pena.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 261, Ser. 2^a.

Defecto legal—Véase: *Excepción de defecto legal*, números 3, 4, 5 y 7.

Defectos—Véase: *Títulos*, núms. 3 y 5.

Defendido—Véase: *Honorarios*, núm. 7.

1. Defensa—No puede exigirse del agredido una apreciación exacta y precisa del peligro que corre, sino la que con justa razón pueda temer al agresor, en virtud de antecedentes que hagan legítima la defensa.—Jur. Com., tom. 9, pág. 134, Ser. 2^a.

Defensa—Véase: *Confesión del reo*, núm. 3.

1^b. Defensa ajena—Es tan lícita como la propia: el que por defender á otro, de un ataque ilícito, se ve obligado á herir ó matar, debe ser absuelto.—Jur. Crim., tom. 9, página 27, Ser. 2^a.

1. Defensa propia—La afirmación del reo de que los disparos de arma de fuego fueron hechos en defensa propia

1^a—Véase: Inst., tom. 3^o, verb. *Difformidad física*, núm. 1.

1^b—Véase: verb. *Absolución*, núm. 2.

DEF

sin intención dolosa y al solo objeto de llamar la Policía, basta para eximirle de la pena, si no existen lesiones ni resalta de autos la falsedad de esta circunstancia.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 64, Ser. 2ª.

Defensor—Véase: *Dinero*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núm. 6—*Agravación de la pena*, núm. 2.

1ª. Defensor del reo—La falta de intervención de éste, hace procedente la nulidad de todo lo actuado.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 343, Ser. 2ª.

Defensor del reo—Véase: *Agravación de la pena*, núm. 1.

Deformación—Véase: *Cicatrices*, núm. 1—*Heridas*, número 1—*Mutilación*, núm. 1—*Defecto físico*, núm. 1.

1ª. Defraudación—Por medio de falsificación, solo se conceptúa circunstancia agravante de este último delito sobre el que debe establecerse la pena.—Jur. Crim., tomo 6, pág. 120, Ser. 2ª.

2. Defraudación—Los recibos de mercaderías, firmados por el dependiente á nombre del principal, no importan

1ª—Una condenación sin defensa, carecería de uno de los elementos indispensables para su validez, pues contrariaría el precepto constitucional que sienta el principio de la inviolabilidad de la defensa en juicio. Cuando el art. 9 del Cód. de Proc. faculta al procesado á defenderse personalmente, ese derecho no puede hacerse degenerar en una obligación. Si el procesado no se defiende, debe nombrársele defensor, y si éste no cumple con su deber, hacer que nombre otro y si no cumple se le nombra de oficio. La defensa es indispensable.

1ª—Porque el delito más grave debe castigarse, considerando el más leve como circunstancia atenuante—art. 87, Cód. Pen. vigente.

2—Los recibos otorgados por los dependientes, solo tienen por objeto certificar que los efectos que en ellos se detallan han sido recibidos en la casa de su principal. Ante esta presunción lógica y perfectamente establecida en el comercio, corresponde la prueba de lo contrario al que alega que existió la intención dolosa—arts. 6 y 7 del Código Pen. vig.



DEF

una defraudación mientras no se justifique la intención dolosa.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 344, Ser. 2ª.

3. Defraudación—El comisionista que cobra y no entrega el precio de las mercaderías en cuya venta ha intervenido, comete defraudación.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 37, Ser. 2ª.

4. Defraudación—La que excede de seis mil pesos, debe ser penada con cuatro años de prisión.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 177, Ser. 2ª.

5. Defraudación—Para que ella exista por parte del dependiente administrador, es requisito esencial la prueba de la existencia de un saldo cuya inversión no justifique, ó la negativa á rendir cuenta de su administración.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 86, Ser. 2ª.

6. Defraudación—Por medio de la falsificación de la firma del damnificado, debe ser penada con el máximo de la pena.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 203, Ser. 2ª.

7. Defraudación—Corresponde al Juzgado Correccional el conocimiento de este delito, por haberse dispuesto de la prenda.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 267, Ser. 2ª.

8. Defraudación—El Juez que ha conocido en el juicio de defraudación, es el competente para declarar á quién pertenecen los objetos que sirvieron para efectuar el delito.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 283, Ser. 2ª.

3—Véase: *Comisionista*, núm. 3.

4—Art. 202, inc. 6º—De tres á seis años, dice este artículo.

6—En el caso presente no concurría ninguna circunstancia atenuante, y si más bien existían circunstancias agravantes de reiteración.

7—El delito está previsto y penado en el art. 207 del Cód. Pen., en cuyo caso debe procederse con arreglo á lo dispuesto en el art. 430 del Cód. de Proc. Crim.



DEF — DEL

9. Defraudación—Ésta no existe por el uso de un depósito particular si ha sido hecho voluntariamente y para garantizar una obligación futura.—Jur. Crim., tom. 10, págs. 308, Ser. 2ª.

Delegado—Véase: *Desacato*, núm. 5—*Oficial de justicia*, núm. 1.

1. Delincuente—Justificado plenamente en autos el medio de que se sirvió, se hace innecesaria la justificación de otros medios anteriores por los cuales intentara el mismo fin, aun cuando deben tenerse en cuenta como circunstancias agravantes.—Jur. Crim., tom. 7, págs. 188, Ser. 2ª.

1ª. Delito—No basta para declarar su existencia, la deposición de un testigo.—Jur. Crim., tom. 5, págs. 124, Ser. 2ª.

2. Delito—El mandante de un delito determinado, no es responsable de la estralimitación de los agentes en tanto el cometido no sea consecuencia de lo ordenado: el que ordena una paliza, no es responsable del asesinato.—Jur. Crim., tom. 5, págs. 86, Ser. 2ª.

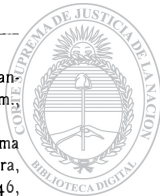
3. Delito—La declaración del damnificado, como sin-

9—Cuando no hay abuso de confianza, no hay lugar a una acción criminal sin embargo de que puede dar lugar a la interposición de una acción civil.

1ª—Este sumario no expresa lo que la Cámara resolvió. Ella dijo que no procedía la imposición de pena alguna «existiendo solamente presunciones respecto de la existencia del delito y de la persona del delincuente.» En el caso que nos ocupa no podía decirse que las presunciones fuesen tales que produjeran certeza moral, sino que por el contrario dejaban entrever la posibilidad de que el acusado era inocente.—Véase: *Inst.*, tom. 3º, verb. *Presunciones*, núms. 1 y 3.

2—El delito ejecutado ninguna relación tiene con el delito sujerido, y entonces el mandante solo puede ser castigado por razón de la tentativa del delito ordenado y no ejecutado—art. 23 del Cód. Pen. vig.





DEL

gular, no basta para proceder contra el acusado, aun cuando se haya justificado la existencia del delito.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 53, Ser. 2ª.

4. Delito—La declaración del damnificado, no forma prueba plena de la existencia del delito: si no existe otra, debe absolverse al acusado.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 46, Ser. 2ª.

Delito—Véase: *Mutilación*, núm. 2—*Libros de comer- cío*, núm. 8—*Prófugo*, núm. 1—*Escarcelación bajo fianza*, núms. 1 y 3—*Bigamia*, núms. 1 y 2—*Encubridores*, número 1—*Robo*, núm. 2—*Calumnia*, núms. 1, 6, 7, 8 y 9—*Escarcelación*, núm. 1—*Confesión del reo*, núms. 2, 5, 6 y 10—*Denuncia*, núms. 1, 2, 4 y 5—*Lesiones de bala*, núm. 1—*Matrimonio*, núm. 1—*Prueba plena*, núm. 4—*Premeditación*, núm. 1—*Lesiones*, núm. 20—*Tentativa de robo*, núm. 1—*Estafa*, núm. 2—*Denunciantes*, núm. 1—*Infanticidio*, núm. 1—*Sentencia ejecutoriada*, núm. 1—*Homicidio*, núm. 24—*Adulterio*, núm. 2—*Entrada*, número 1—*Acusación*, núm. 3—*Sueldo*, núm. 2—*Fianza*, núm. 1—*Sobreseimiento*, núm. 6—*Juez competente*, número 1—*Voluntad*, núm. 2—*Defraudación*, núm. 7—*Detención*, núm. 2.

Delito anterior—Véase: *Confesión del reo*, núm. 7.

Delito de hurto—Véase: *Hurto*, núm. 2.

Delito de lesiones—Véase: *Lesiones*, núm. 19.

Delito denunciado—Véase: *Secuestro*, núm. 1.

1. Delitos—La facultad que el Reglamento de Policía

4.—No puede en manera alguna servir de base á una condenación.

1.—El Jefe de Policía tiene la facultad de suspender ó arrestar por ocho días á sus subordinados, pero esta facultad no puede limitar la que compete á los Jueces para penar las faltas que revisten el carácter de

DEL — DEM

concede para penar á sus subordinados, no limita la jurisdicción de los Tribunales ordinarios para conocer y penar los delitos que aquéllos cometan.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 236, Ser. 2ª.

2. Delitos—Penados con arresto y multa, se prescriben por un año de inacción.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 144, Ser. 2ª.

3. Delitos—La concurrencia de varios delitos, obliga á aplicar la pena máxima del mayor: los demás se conceptúan circunstancias agravantes.—Jur. Crim., tom. 5, página 70, Ser. 2ª.

Delitos—Véase: *Escarcelación bajo fianza*, núm. 6—*Sobreseimiento*, núm. 4—*Fallido*, núm. 2.

Delitos comunes—Véase: *Agente de la autoridad*, número 1.

Delitos imputados—Véase: *Calumnia*, núms. 5, 6, 7 y 8.

1. Demanda—El demandado solo está obligado á reconocer ó negar, contestando la demanda, aquellos hechos que le sean personales: en los de terceros le basta manifestar su ignorancia.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 325, Ser. 2ª.

Demanda—Véase: *Comisionista*, núm. 1—*Letra de cambio*, núm. 2—*Rebeldía*, núms. 2 y 3—*Escritura pública*, núm. 1—*Escepción de arraigo*, núm. 1—*Escepción de defecto legal*, núms. 1, 3, 5, 6, 7 y 9—*Escepción de litispen-*

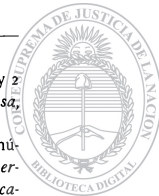
delitos—art. 51, Cód. Pen.—Esas correcciones no se reputan penas, por este artículo del Código.

2—Art. 89, inc. 3º, Cód. Pen. vig.

3—Art. 87 del Cód. Pen. vig.

1—No siendo un hecho propio del demandado, puede éste ignorarlo, en cuyo caso no se encuentra en la obligación de negarlo categóricamente bajo la sanción del art. 100 del Cód. de Proc.: este artículo habla de hechos propios.





DEM—DEN

denuncia, núm. 1—*Excepción de incompetencia*, núms. 1 y 2—*Documentos*, núm. 1—*Recusación*, núm. 6—*Esposa*, núm. 1.

Demandado—Véase: *Absolución*, núm. 1—*Títulos*, número 2—*Despojo*, núm. 2—*Nulidad*, núm. 1—*Acción personal*, núm. 1—*Notificación*, núm. 4—*Préstamo hipotecario*, núm. 1.

Demandante—Véase: *Incompetencia*, núm. 1—*Acción reivindicatoria*, núm. 1—*Nulidad*, núm. 1.

Demencia—Véase: *Incapacidad*, núm. 2.

Demora—Véase: *Diligencias de prueba*, núms. 2, 3 y 4—*Prueba*, núms. 1 y 2.

1. *Denuncia*—La formación de sumarios, es de competencia de los Juzgados de Instrucción, cualquiera que sea la fecha de la denuncia del delito.—Jur. Crim., tom. 6, página 94, Ser. 2ª.

2. *Denuncia*—Para que revista caracteres legales, el denunciante debe afirmar la existencia del delito: no basta la indicación de haber sido denunciada públicamente por un tercero.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 252, Ser. 2ª.

3. *Denuncia*—Si de las constancias de autos resulta la falsedad de la denuncia no debe instruirse sumario.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 155, Ser. 2ª.

4. *Denuncia*—No puede calificarse y castigarse como

1—Se trata de una cuestión de competencia negativa suscitada entre un Juez de Instrucción y otro de sentencia, en virtud de una denuncia hecha antes de crearse la justicia de instrucción criminal. Se resolvió en el sentido de la competencia de esta última, fundándose en la disposición de los arts. 32 y 155 del Cód. de Proc. Crim.

4—Según la doctrina del art. 42 del Cód. Pen., no todo el que tiene conocimiento de un crimen está obligado a denunciarlo. Esa obligación solo existe en realidad respecto en personas determinadas. Dicha-dispo-

DEN — DEO

encubridores de un delito á los que no tienen obligación de denunciarlo.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 172, Ser. 2ª.

5. **Denuncia**—De un delito, solo es obligatoria para determinadas personas que tienen la obligación de hacerlo por su profesión ó empleo.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 172, Ser. 2ª.

1ª. **Denunciantes**—La ignorancia de la víctima de un delito de hurto, no la inhibe de denunciarlo, si por aviso de terceros llega á su conocimiento, sin que por esa denuncia éste pierda su carácter de testigo para convertirlo en denunciante.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 365, Ser. 2ª.

Denunciantes—Véase: *Incapacidad*, núm. 1.

1ª. **De oficio**—Los Jueces pueden de oficio rechazar la acción instaurada, si ella es efectivamente improcedente.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 35, Ser. 2ª.

2. **De oficio**—Los Jueces pueden de oficio rechazar la

sición concurda con la de los arts. 164 y 165 del Cód. de Proc. Criminal.

5—Art. 42, inc. 7º, Cód. Pen. vig.

1ª—Esa ignorancia, no desvirtúa en nada la intención criminosa, pues el delito de hurto casi siempre se efectúa sin que de él tenga conocimiento el damnificado. Si el ladrón fuese sentido no habría hurto posible: es precisamente en la circunstancia de no dejarse sorprender donde estriba la habilidad del delincuente. En cuanto á la segunda parte del sumario, debe tenerse presente que el hecho de llamar á un agente, denunciar al culpable entregándosele, no altera la posición respectiva del testigo ó del acusador.

1ª—Dada la relación de los hechos, resultaba que la acción instaurada, que lo era de calumnia, no procedía, sino la de injuria.

2—Es deber de los Jueces velar por el procedimiento marcado por la ley, evitando en cuanto sea posible la desviación del procedimiento que es de orden público; la intromisión de personas extrañas siempre trae la confusión en los pleitos, obstaculizando su brevedad, que es uno de los objetivos principales que las leyes se proponen.





DEO — DEP

intromisión de estraños en un juicio, mientras no justifiquen su derecho en incidente especial.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 419, Ser. 2ª.

De oficio—Véase: *Nulidad relativa*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núm. 10—*Incontinencia*, núm. 1.

1. **Dependiente**—No siendo prohibida por la ley la convención por la que se reconoce al dependiente con derecho á una parte en las utilidades además del sueldo, debe obligarse á su cumplimiento judicialmente.—Jur. Com., tom. 8, pág. 372, Ser. 2ª.

2. **Dependiente**—Los recibos de mercaderías, firmados por el dependiente á nombre del principal, no importan una defraudación, mientras no se justifique la intención dolosa.—Jur. Com., tom. 8, pág. 344, Ser. 2ª.

3. **Dependiente**—La aprobación tácita y consecutiva de los balances en que se hace constar las condiciones estipuladas con un dependiente, es prueba suficiente del contrato de habilitación, aun cuando no exista convenio espreso.—Jur. Com., tom. 8, pág. 372, Ser. 2ª.

4. **Dependiente**—La renovación ó reforma de una sociedad comercial y su continuación con los mismos dependientes, hace suponer que éstos se hallan sujetos á iguales condiciones á las que tenían con la estinguida sociedad.—Jur. Com., tom. 8, pág. 372, Ser. 2ª.

1—Estas estipulaciones son ley para las partes—art. 1197 del Cód. Civ.—y siempre se han cumplido. Véase Inst., tom. 1º, verb. *Sociedad*, núm. 2483; tom. 3; verb. *Dependiente*, núm. 2; y *Dependientes habilitados*, números 1 y 2.

2—Véase verb. *Defraudación*, núm. 2.

3—Los balances hacen plena fe en cuanto á las enunciaciones que contengan y que hubiesen sido consentidas por las partes—arts. 59 y 76 del Cód. de Com. vigente—Véase: verb. *Balances*, núm. 1.

DEP

5. **Dependiente**—Las condiciones ó estipulaciones mediante las cuales el dependiente entra á formar parte del personal, no pueden interpretarse como un contrato por tiempo determinado, si el término no resulta claramente del contexto del documento.—Jur. Com., tom. 9, pág. 318, Ser. 2^a.

Dependiente—Véase: *Sustracción*, núm. 1—*Convenio espreso*, núm. 1—*Prueba*, núm. 12—*Rendición de cuentas*, núm. 7—*Defraudación*, núm. 5.

Dependientes habilitados—Véase: *Prescripción*, núm. 12.

Deposiciones—Véase: *Confesión del reo*, núm. 13.

Depositario—Véase: *Honorarios*, núm. 3—*Costas*, número 16.

1^a. **Depositario judicial**—Es responsable del depósito ó de su valor, mientras el Juez no deje sin efecto el embargo, aun cuando el pleito haya terminado por pago hecho al ejecutante.—Jur. Com., tom. 8, pág. 70, Ser. 2^a.

1^b. **Depósito**—Al depositario que detiene el depósito por orden del Juez competente, pero en virtud de una mala interpretación de la orden, no se le puede imputar temeridad y por consiguiente no es pasible de condenación en costas.—Jur. Com., tom. 9, pág. 113, Ser. 2^a.

Depósito—Véase: *Jueces de Instrucción*, núm. 1—*Pago*, núm. 4.

1. **Depósito particular**—No existe defraudación por el uso de un depósito particular si ha sido hecho voluntaria-

5—Véase: verb. *Contrato*, núm. 4.

1^a—El depositario judicial depende del Juez que lo nombra y no del dueño de los objetos—art. 459 del Cód. de Proc.

1^b—Véase: verb. *Costas*, núm. 16.

1—Véase: verb. *Defraudación*, núm. 9.



DER

mente y para garantizar una obligación futura.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 308, Ser. 2ª.

Derecho condicional—Véase: *Prescripción*, núm. 3.

Derecho de acusar—Véase: *Bigamia*, núm. 1.

Derecho de repetir—Véase: *Comisionista*, núm. 2.

1. Derecho de retención—De una obra, por el constructor, que la ley acuerda, solo puede ser declarado judicialmente.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 319, Ser. 2ª.

2. Derecho de retención—Los hoteleros y posaderos tie-

1—Este punto no fué resuelto por la Cámara, ni por el Juez de 1ª Instancia. Se trataba de un constructor de obras que pretendió defenderse con el derecho de retención, del interdicto de despojo deducido contra él por el propietario. Se rechazó la pretensión, porque no lo comprobó el que la alegaba, siendo la prueba á su cargo de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 8ª, tit. 3º, Part. 3ª.—Véase: *Interdicto de recobrar*, núm. 2.

2—Nuestro Código, al definir en el art. 2237, como depósito necesario, el de los efectos introducidos en las posadas por los viajeros, ha adoptado la teoría de los Códigos Francés, italiano y otros. Según las leyes romanas y las de partida (véase la nota referente al art. citado), esa clase de depósito no era considerado como un depósito necesario, sino como un cuasi-contrato. Dallóz va más allá. «Es realmente, dice, un contrato de depósito el que se establece entre el viajero y el hotelero, en lo que concierne á los efectos que aquél ha introducido;—con relación á los servicios prestados al huésped, es más bien un contrato de locación el que se forma entre ambos. Rara vez se constituye por escrito, de ordinario es tácito, y resulta de la introducción de los efectos en la fonda ó posada.»—Tom. 15, pág. 489, párrafo 169.—De todo lo cual se sigue, que el posadero es un verdadero depositario, sujeto á todas las responsabilidades inherentes á su calidad de tal: y desde luego responde «de todo daño ó pérdida que sufran los efectos de toda clase introducidos en la posada, sea por culpa de sus dependientes ó de las mismas personas que se alojan en la casa»,—art. 2230, Cód. Civ.—«y aun más, de los robos de esos mismos efectos, cuando estos se llevasen á cabo sin armas y sin escalamiento»—art. 2237 del mismo Código.—Ahora bien, tratándose de un depósito especialísimo como éste, ¿quién



DER

nen privilegio especial y derecho de retención sobre

posee, el hotelero ó el hiesped? Fijar estos extremos, es por demás importante para poder precisar la estensión del derecho que en su caso puede tener uno ú otro. Si el hotelero se constituye en un verdadero depositario de los efectos del viajero, desde el momento en que son introducidos por éste, está demás decir que es el primero quien tiene la posesión aunque reconozca en otro la propiedad y aunque no tenga las cosas en su poder. Y no las tiene, porque es de la esencia de esa clase de depósitos, que sea el hiesped el que ordinariamente retenga los efectos depositados, sin que esta circunstancia pueda llegar á desnaturalizar la índole de ese acto jurídico. El art. 2229 del Cód. Civ., dice así: «El depósito hecho en las posadas, se verifica por la introducción en ellas de los efectos de los viajeros, aunque espresamente no se hayan entregado al posadero ó sus dependientes, y aunque ellos—los viajeros—tengan la llave de las piezas donde se hallan los efectos.» Como se vé, en esta clase de depósito la ley crea una escepción. El depósito según la teoría del Código no se constituye ordinariamente sino por la tradición de la cosa; y el depositario es considerado como un simple tenedor de la misma cosa. En el depósito necesario por asimilación, el depósito se constituye por la introducción de los efectos en el hotel ó casa de hospedaje, sin que sea requisito indispensable la tradición. Esta particularidad que lo distingue y lo especializa, explicará el alcance que le atribuimos á ese acto jurídico. Desde luego, se puede afirmar que el hotelero ó posadero es un verdadero depositario, y que posee los efectos introducidos aunque lo sea en nombre del dueño, lo que en derecho puede darse en llamar una posesión precaria. Demostrado que el hotelero es un depositario de los efectos introducidos por los viajeros, ¿cuáles son los derechos que en su virtud le acuerda la ley? El art. 3886 del Cód. Civ., dice así: «El posadero goza del privilegio del locador bajo las mismas condiciones y escepciones sobre los efectos introducidos en la posada, mientras permanezcan en ella y hasta la concurrencia de lo que se le deba por alojamiento y suministros habituales de los posaderos á los viajeros; no comprende los préstamos de dinero; ni se dá por obligaciones que no sean las comunes á los viajeros.» Es desde luego indiscutible, que el hotelero tiene por la ley un privilegio sobre los efectos introducidos por el viajero y hasta la concurrencia de lo que éste le deba por razón de los gastos por hospedaje. Que ese privilegio deriva de la posesión que se le atribuye al hotelero de esos mismos efectos, y que él cesa una vez sacados de la casa de hospedaje



DER

los equipajes y efectos introducidos en su estableci-

ú hotel. Además del privilegio, ¿goza el hotelero del derecho de retención? El Código no lo establece espresamente, pero se deduce de una manera implícita de los mismos términos con que se espresa el codificador al tratar esta materia, y aun más, de la nota explicativa del art. 3940. En efecto el art. 3939 está así concebido: «El derecho de retención es la facultad que corresponde al tenedor de una cosa ajena, para conservar la posesión de ella hasta el pago de lo que le es debido por razón de la misma cosa. Se tendrá el derecho de retención—art. 3940—siempre que la deuda anexa á la cosa detenida, haya nacido con motivo de un contrato ó de un hecho que produzca obligaciones respecto al tenedor de ella.» En la nota recordada del art. 3940, se enumeran muchos casos en que puede hacerse uso de ese derecho, y entre los cuales no se encuentra comprendido el hotelero, no obstante estar equiparado al depositario que es uno de los que pueden ampararse de esa facultad. Pero más adelante, el mismo codificador, da mayor amplitud á su doctrina en la forma siguiente: «Han nacido graves controversias, dice, sobre el punto de saber si el derecho de retención debe ser admitido solamente en los casos que está formalmente reconocido por la ley, ó si por el contrario debe extenderse á todos los casos en que el tenedor de la cosa, sea acreedor por razón de expensas necesarias ó útiles, hechas en la cosa misma cuya restitución se le demande, y donde exista por consiguiente lo que en doctrina se llama un *debitum cum re conjunctum*. Y prosigue así: «Las opiniones que se han pronunciado por el uno ó por el otro de estos sistemas, nos parecen demasiado absolutas.» El derecho de retención no debe ser restringido á las hipótesis previstas por los artículos del Código, pero tampoco puede ser admitido, tan solo por que exista un crédito unido á la cosa. En nuestra opinión, basta para justificar por analogía la extensión del derecho de retención, que éste se refiera á una convención ó á lo menos á un cuasi-contrato, y que la deuda anexa á la cosa retenida, haya nacido por ocasión de esa convención ó de ese cuasi-contrato etc. Ya se ha visto la significación que al depósito que hacen los viajeros de sus efectos, le daban las leyes romanas y de Partida, y lo que el eminente jurisconsulto Dallóz, dice á ese respecto. Aubry y Rau, sostiene la doctrina en que se funda el codificador argentino; y Mourlou se espresa así en el tom. 3º de su obra, pág. 536 «Además del privilegio, el hotelero tiene un derecho de retención.» «Su privilegio y derecho de retención, no



DER—DES

miento por los viajeros.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 349, Ser. 2ª.

Derecho de retraer—Véase: *Pacto de retroventa*, núm. 1.

Derechos—Véase: *Renuncia*, núm. 2—*Estado civil*, números 2 y 3.

Derechos hereditarios—Véase: *Testamentaria*, núm. 1.

Derechos litigiosos—Véase: *Cesionario*, núm. 2.

Derechos personales—Véase: *Tercería de dominio*, número 1—*Prescripción*, núms. 10 y 11.

1. *Desacato*—El desacato á la autoridad, con circunstancia atenuante, debe ser penado con el minimum de la pena: un año de prisión.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 111, Ser. 2ª.

2. *Desacato*—A la autoridad cometido por un empleado, debe ser penado en la misma forma que si no invistiera ese carácter.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 236, Ser. 2ª.

3. *Desacato*—A la autoridad, y el atentado contra ella,

existen sino en virtud de los créditos contraídos por razón de suministros hechos al viajero; no tendrá pues ni el privilegio ni el derecho de retención, por préstamos que le hubiera hecho de una suma de dinero.»

1—Se cometió desacato, hiriendo al mismo tiempo al agente de la autoridad, aunque de una manera leve, encontrándose ebrio el reo. El atentado se cometió con armas, en cuyo caso debe ser castigado con uno ó dos años de prisión—art. 235. La herida fué insignificante y causada sin intención, de una manera casual, lo que constituye una circunstancia atenuante—art. 83, inc. 5º, Cód. Pen. vigente.

2—No modifica la criminalidad del acto, pues más motivo existe para que un empleado guarde respeto y obediencia á sus superiores, que un particular. Si alguna influencia debiera ejercer sería la de constituir una circunstancia agravante.

3—Un lanzamiento por desalojo fué ordenado por la autoridad judicial, á cuyo efecto se comisionó al oficial de justicia, autorizándosele á usar de la fuerza pública en caso necesario: al serle intimado el desalojo se opuso, á que éste se llevara á cabo, revólver en mano, con el que apuntó al agente de la autoridad. Este delito está calificado como atentado y



DES

deben ser penados con un año y medio de prisión.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 66, Ser. 2ª.

4. **Desacato**—Y atentado contra la autoridad, debe ser penado con un año y medio de prisión.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 129, Ser. 2ª.

5. **Desacato**—Á la autoridad, dada la diferencia que la ley establece entre el desacato á la autoridad y el atentado con armas, la existencia de esta circunstancia en el primer caso, no puede calificarse de agravante.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 294, Ser. 2ª.

5^b. **Desacato**—Las injurias á los magistrados en sus funciones públicas, importan un desacato á la autoridad que invisten.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 184, Ser. 2ª.

Desacato—Véase: *Agente de la autoridad*, núm. 1.

1ª. **Desafío irregular**—Justificada su existencia, el homicidio debe castigarse sin distinguir de quién partió la provocación, ni aun si procede la legítima defensa.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 215, Ser. 2ª.

1^b. **Desalojo**—Por auto judicial, del que ocupaba por el

desacato á la autoridad—art. 235, Cód. Pen.,—y con las circunstancias apuntadas corresponde se le aplique la pena establecida en el citado artículo que castiga el delito con uno á tres años de prisión.

4—Véase nota precedente.

5—La circunstancia de que el atentado se haya cometido con armas, no es sino un hecho constitutivo del delito—art. 235, Cód. Pen.:—lo propio sucede en el parricidio, la circunstancia de ser la víctima el padre del reo, es un hecho constitutivo de ese delito, y no es una circunstancia agravante.

1ª—No se acepta la provocación como circunstancia atenuante, en contra de lo resuelto en otro caso.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Desafío irregular*, núm. 1; pero está de acuerdo con el que se registra en el tom. 1º de la Inst., verb. *Homicidio*, núm. 1347.

1^b—Desalojado un inquilino sin oír al locador, deduce éste el correspondiente interdicto de retener; se declara procedente por haber com-



DES

poseedor, sin la citación de éste, importa la clandestinidad que la ley exige.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 165, Ser. 2ª.

Desglose—Véase: *Pagaré*, núm. 1.

Deshonra—Véase: *Infanticidio*, núm. 1.

Desistimiento—Véase: *Acción*, núm. 2—*Comisión*, número 2—*Títulos*, núm. 2—*Acusador*, núm. 1—*Incontinenencia*, núm. 1—*Sobreseimiento*, núm. 6.

Desórden funcional—Véase: *Lesiones*, núm. 1—*Defecto físico*, núm. 1.

Despachante de aduana—Véase: *Comisionistas*, núm. 1.

1. Despojo—Justificado el despojo violento, procede la reposición del desposeído.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 175, Ser. 2ª.

2. Despojo—Al demandado por despojo, que opone la

probado que estuvo en posesión de la cosa demandada hasta que fué desalojado el inquilino. El demandado no comprobó haber estado ó estar en posesión de la misma. Debe tenerse presente que al declararse procedente el interdicto de retener fué debido á que el desalojo se verificó pero no se comprobó que otro hubiese entrado en posesión: ni fué tampoco materia de discusión si la posesión se perdió por el hecho del desalojo, pues si ese hecho hubiese producido la privación de la posesión, el interdicto procedente habría sido el de recobrar. La demanda de desalojo fué en el carácter de intruso, siendo lanzado á pesar de haber manifestado que poseía á nombre del locador, á quien debió citarse. Esta resolución, por las condiciones especiales que la originaron, no puede establecer jurisprudencia. La Cámara ha dicho en otros casos, que las resoluciones judiciales, no tienen el carácter de clandestinidad que la ley exige para que un interdicto proceda.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Auto judicial*, núm. 1—Sin embargo es necesario tener presente que en el caso del sumario solo se ordenó el desalojo, mientras que en este último el auto judicial dió la posesión.

1—Arts. 581 del Cód. de Proc., y 2369 del Cód. Civ.

2—El art. 4038 del Cód. Civ., establece que se prescribe por un año para responder al despojado ó turbado en la posesión, sobre manutención ó reintegro. Al que alega la prescripción le incumbe la prueba: 1º





DES — DEU

excepción de prescripción anual, corresponde la prueba.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 175, Ser. 2ª.

Despojo—Véase: *Interdicto de retener*, núm. 1—*Interdicto de despojo*, núms. 1, 2 y 3.

Destierro—Véase: *Coacción*, núm. 1.

1ª. Detención—Por delito de injurias, solo procede si el acusado pretende ausentarse del país.—Jur. Crim., tom 8, pág. 157, Ser. 2ª.

2. Detención—Solo procede la del acusado, si existe semiplena prueba de la existencia del delito.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 335, Ser. 2ª.

Determinados trabajos—Véase: *Incapacidad para el trabajo*, núm. 1.

Deuda—Véase: *Embargo*, núm. 6—*Carta privada*, número 1—*Fianza*, núm. 2—*Quiebra*, núm. 11.

Deudas—Véase: *Chancelación*, núm. 2.

Deudor—Véase: *Acreedor prendario*, núm. 1—*Quiebra*, núm. 2—*Cesionario*, núm. 1—*Cosa juzgada*, núm. 2—*Prescripción*, núm. 5—*Mora*, núm. 1—*Pago*, núm. 2—*Protesto*, núms. 4, 5 y 6—*Edictos*, núm. 1—*Artículos acusados*, núm. 1.

Deudores—Véase: *Quitas*, núm. 1.

1ª. Deudores solidarios—El cambio de acción contra otro

En virtud del aforismo de que al reo, en la excepción, le incumbe la prueba; 2º Porque al que alega un hecho nuevo en juicio, le corresponde su comprobación.

1ª—Art. 596 del Cód. de Proc. Crim

2—O indicios vehementes de culpabilidad, dice el art. 2 del Cód. de Proc. Crim.

1ª—Se trataba del cobro de una letra de cambio. El art. 846 del Cód. de Com. ant., igual al 669 del vigente dice, en su 2º inc.: «El portador puede dirigir su acción contra quien mejor le convenga de los referidos librador, endosantes ó aceptantes; pero intentada contra uno de ellos, no

DEV—DIL

de los deudores solidarios de la obligación, no obliga al levantamiento de los embargos é inhibiciones que pesaban contra el presunto insolvente.—Jur. Com., tom. 8, págs. 337, Ser. 2ª.

Devolución—Véase: *Copias*, núm. 1.

Día—Véase: *Posiciones*, núm. 8.

Día señalado—Véase: *Posiciones*, núm. 7.

Días señalados—Véase: *Citación de remate*, núm. 1.

Diario—Véase: *Injurias*, núm. 2—*Edictos*, núm. 2—*Artículos acusados*, núm. 1.

Diarios designados—Véase: *Remate judicial*, núm. 3.

Dictamen—Véase: *Peritos*, núm. 1.

1. Dietas—Las de los Senadores y Diputados no son embargables.—Jur. Com., tom. 9, págs. 237, Ser. 2ª.

Diferencia—Véase: *Desaño*, núm. 5—*Comisionista*, número 4.

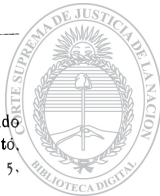
Dilatoria—Véase: *Escepción de falta de personería*, números 5, 9 y 10.

Diligencia—Véase: *Títulos*, núm. 6.

puede ejercerla contra los demás, *sino en caso de insolvencia del demandado.*» El art. 911 consagra asimismo la facultad del acreedor para exigir la totalidad del crédito contra cualquiera de esos coobligados. La insolvencia de que nos habla este artículo queda establecida con el resultado negativo del mandamiento que se libra.—Véase: *Inst.*, tom. 3º, verb. *Acreedor*, núm. 6.—De la inteligencia del art. 846, no surge que del ejercicio de la segunda acción quede sin efecto lo obrado en el juicio anteriormente seguido; todo lo contrario, comparando este artículo con el 268 del Cód. ant. por el cual se establece que la demanda deducida contra uno de los codeudores solidarios, no impide al acreedor que demande á los otros. No solo pues, el embargo debe subsistir sino que todo el juicio queda en pleno vigor, pudiendo seguirse ambas demandas al mismo tiempo.

1—De acuerdo con lo resuelto en el caso del Banco de la Provincia con Baltoré.





DIL

Diligencia judicial.—Véase: *Certificado*, núm. 1.

Diligencias ampliatorias.—Véase: *Acusación*, núm. 1.

1. Diligencias de prueba.—Cuando no se han producido dentro del término, sin culpa de la parte que las solicitó, pueden serlo después de vencido.—Jur. Com., tom. 5, pág. 224, Ser. 2^a.

2. Diligencias de prueba.—Pedidas dentro del término, pueden ser producidas después de vencido, si la demora no es imputable á la parte.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 60, Ser. 2^a.

3. Diligencias de prueba.—No producidas dentro del término por incuria de la parte, no pueden producirse después.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 61, Ser. 2^a.

1—El art. 118 del Cód. de Proc. establece, que las pruebas deben ser pedidas, ordenadas y practicadas dentro del término, incumbiendo á los interesados urjir para que esta condición se cumpla; pero si no lo fueren por omisión de las autoridades, puede el interesado exigir que se practiquen antes de los alegatos. Parece que la equidad aconseja aplicar por analogía este principio al caso en que la prueba no se haya producido por una causa extraña al Juzgado y á la parte, como cuando el testigo citado no comparece á declarar, siendo así que en este caso procede la producción de la prueba aun después de vencido el término; y así parece también desprenderse de la disposición del art. 182 del Cód. de Proc. No se puede decir que la parte sea responsable por la no comparecencia del testigo, y consiguientemente no le puede perjudicar. Esta resolución está fundada en la jurisprudencia constante de nuestros Tribunales.—Véase: Inst., tom. 3^o, verb. *Diligencias de prueba*, núms. 6, 9 y 12.

2—Véase nota precedente.—La parte que presentó los testigos urjio la producción de la prueba, pero ésta no se produjo porque los testigos no comparecieron, habiéndose pedido á los tres días el señalamiento de nueva audiencia.

3—En el presente caso la Cámara consideró que no se había urjido la producción de la prueba, por haberse dejado pasar siete días sin solicitar nueva audiencia para los testigos que no habían concurrido á de-

DIL

4. Diligencias de prueba.—No deben ordenarse después de vencido el término, diligencias de prueba no practicadas dentro de él por incuria de la parte.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 85, Ser. 2ª.

5. Diligencias de prueba.—Deben ser pedidas y practicadas dentro del término.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 192, Ser. 2ª.

6. Diligencias de prueba.—Solo pueden denegarse las

clarar á una citación anterior. Aquí la parte no cumplió con la prescripción del art. 118 que impone al litigante la obligación de urjir la producción de la prueba. El principio consagrado en el sumario es jurisprudencia constante.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Diligencias de prueba*, núms. 1, 4, 10, 13 y 15.

4.—Aquí se declaró que «habiendo transcurrido tres días desde el designado para que declarase el testigo presentado hasta que se presento el escrito sin que se hubiese pedido nada arreglado á la ley para que el testigo declare» no procedía lo solicitado. Parece que en el caso presente ha habido demasiado rigor, y tanto más injusta es esta providencia cuanto que en el núm. 2, se pidió el señalamiento de nuevo día al tercero del señalado para la audiencia anterior: sinembargo en ese caso, cuando se pidió el señalamiento de nuevo día, el término de prueba vencía el día en que se presentó el escrito.

5.—De acuerdo con lo preceptuado en el art. 118 del Cód. de Proc.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Diligencias de prueba*, núm. 2.—Aquí no se hizo lugar á la producción de la prueba porque ella fué ofrecida el día tres debiendo vencer el término el 6 del mismo mes, en cuyo caso no puede darse cumplimiento á lo dispuesto en el art. 184 del Cód. de Proc., pues la lista de testigos no puede permanecer los tres días designados por la ley. La jurisprudencia ha consagrado esta práctica de una manera uniforme.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Testigos*, núms. 5 y 11; tomo 2º, verb. *Diligencias de prueba*, núm. 1; *Diligencias testimoniales*, número 1; tom. 1º, verb. *Prueba*, núm. 2213, y *Prueba testimonial*; número 2256.

6.—Se solicitó la prueba pericial cinco días antes de vencerse el término de prueba, término que se consideró suficiente para su producción. Se dijo, que si en todo caso la prueba no llegaba á producirse dentro del término ó sea durante los cinco días que faltaban para el vencimiento



DIL

diligencias de prueba por falta de tiempo hábil, cuando evidentemente resulta imposible su cumplimiento dentro del término.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 234, Ser. 2ª.

7. *Diligencias de prueba*—Antes de despedirse el Ministerio Fiscal en la acusación, puede pedir las que considere convenientes al esclarecimiento del delito—Jur. Crim., tomo 8, pág. 139, Ser. 2ª.

8. *Diligencias de prueba*—No practicadas dentro del término, sin culpa de la parte, pueden serlo antes de los alegatos.—Jur. Com., tom. 8, pág. 145, Ser. 2ª.

9. *Diligencias de prueba*—Fuera de la jurisdicción del Juzgado, solo pueden decretarse si en tiempo oportuno se pidió el término extraordinario.—Jur. Com., tom. 8, pág. 150, Ser. 2ª.

á la parte contraria le queda á salvo el derecho de pedir que no se interrumpa la secuela del juicio, pidiendo la agregación de la prueba y las demás diligencias conducentes al estado de la causa: que es regla general la recepción de la prueba, la que más se ajusta á la amplitud que debe darse á la defensa, ella no debe rechazarse sino en casos escepcionales como sucedería si se tratara de lo dispuesto en el art. 184 del Cód. de Proc. Esta resolución está de acuerdo con lo resuelto por la Cámara en otros casos.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Diligencias de prueba*, núm. 3; tom. 2º, verb. *Diligencia*, núm. 1, que es igual al caso que nos ocupa.

7—Es práctica constante, pues no se opone á ello disposición legal alguna.

8—Art. 118, Cód. de Proc.—Se había librado un exhorto á las autoridades judiciales de Bélgica, el que no pudo diligenciarse porque no fué competentemente legalizado y se notaron deficiencias en su paginación: devuelto aquí se solicitó se librara uno nuevo, á lo que el contrario se opuso alegando que ello importaría reabrir el término probatorio: el Juzgado ordenó se librara fundándose en que no hubo culpa ni omisión de la parte.

9—El art. 113 del Cód. de Proc. dispone, que cuando la prueba haya de producirse fuera del Juzgado, debe señalarse el término extraordinario en la forma que allí se determina, pudiendo según el art. 201 las partes,



DIL

10. **Diligencias de prueba**—Su procedencia solo puede ser declarada al dictar sentencia.—Jur. Com., tom. 7, página 148, Ser. 2ª.

11. **Diligencias de prueba**—Corresponde al que las ha pedido acelerar su cumplimiento.—Jur. Crim., tom. 7, página 72, Ser. 2ª.

12. **Diligencias de prueba**—Deben ser pedidas en tiempo hábil para que puedan practicarse dentro del término.—Jur. Com., tom. 10, pág. 286, Ser. 2ª.

designan personas que las representen ante el Juez á quien se encargan las diligencias. No puede argumentarse diciendo que sea un principio acordado por la ley á las partes, y que por consiguiente puede renunciarse, sino que esa disposición ha sido consagrada también á favor del contrario á fin de que se haga representar en la audiencia, dándole el tiempo prudencial para designar esa persona; siendo indudablemente por esto que la ley ha fijado diez días desde la apertura de la causa á prueba para solicitar ese término—art. 114, inc. 1º.—Sin embargo, es necesario, no tomar el sumario como absoluto. Aquí se denegó la producción de la prueba, porque solo faltaban ocho días para el vencimiento del término ordinario; pero no hay razón alguna legal para la producción de la prueba fuera del asiento del Juzgado cuando se pueden llenar todos los requisitos, produciéndolas dentro del término.

10—Si bien es un principio de derecho espreso que la prueba debe versar tan solo sobre hechos cuestionados en la demanda—Ley 7, tit. 14, Part. 3ª.—Los prácticos enseñan que no puede resolverse sobre procedencia ó improcedencia de esa prueba, sino al dictarse sentencia.—Véase: Castro, *Práctica forence*.—Así lo tiene resuelto la jurisprudencia.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Prueba*, núm. 7; *Diligencias de prueba*, núm. 14 cuya nota estudia el caso.

11—El auto fijó un término prudencial de quince días dentro del cual debió presentarse un exhorto diligenciado, siendo confirmado por estar de acuerdo con lo preceptuado en el art. 477 del Cód. de Proc. Crim.

12—Se solicitó como medida probatoria la cumpulsa de los libros de comercio el mismo día en que vencía el término probatorio, cuando ya no era posible cumplir con lo preceptuado en el art. 118 del Cód. de Proc., pues el art. 119 establece que ellas deben producirse después



DIL — DIS

Diligencias de prueba—Véase: *Prueba*, núms. 3 y 4—*Prueba testimonial*, núm. 2.

1ª. Diligencias preparatorias—A una declaración de testigos son improcedentes.—Jur. Com., tom. 6, pág. 408, Ser. 2ª.

1ª. Dinero—Secuestrado á los reos, no puede devolverseles hasta la terminación de la causa, ni aun ser entregado al abogado defensor en pago de sus honorarios—Jur. Crim., tom. 5, pág. 51, Ser. 2ª.

Dinero ageno—Véase: *Inhibición*, núm. 2.

Dinero efectivo — Véase: *Obligaciones alternativas*, número 1.

Diputados—Véase: *Dietas*, núm. 1.

Dirección General de Rentas—Véase: *Papel sellado*, números 3, 4 y 5.

Director ó gerente—Véase: *Posiciones*, núm. 10.

Directores—Véase: *Sociedad*, núms. 7 y 8—*Sueldo*, número 2.

Directorio—Véase: *Sociedad anónima*, núm. 1.

Disconformidad—Véase: *Honorarios*, núm. 1—*Remata dor*, núm. 3.

1. Disolución—Para que la disolución de una sociedad colectiva, produzca efectos contra terceros, debe

de notificadas las partes, debiendo esta diligencia cumplirse dentro de 24 horas. Por otra parte el art. 124 establece que para toda diligencia de prueba se señalará el día en que deba tener lugar, y se citará á la parte contraria con un día por lo menos de anticipación.

1ª—No es de la índole de la prueba testimonial: ésta debe ceñirse á lo preceptuado en los arts. 131, 132, 133 y 192 del Cód. de Proc.

1ª—El dinero secuestrado responde á los gastos de justicia y no puede ser distraído con otros fines.

1—Art. 492 del Cód. de Com. ant.



DIS

debe ser anotada en el Registro Público de Comercio.—Jur. Com., tom. 5, pág. 268, Ser. 2ª.

Disolución—Véase: *Nulidad del pago*, núm. 1—*Arbitros*, núm. 5—*Sociedad*, núm. 10.

1. Disparo de arma de fuego—Debe ser penado con dos años de prisión, cuando existen circunstancias atenuantes y agravantes.—Jur. Crim., tom. 7, págs. 233 y 293, Ser. 2ª.

2. Disparo de arma de fuego—La afirmación del reo de que los disparos de arma de fuego fueron hechos en defensa propia sin intención dolosa y al solo objeto de llamar la policía, basta para eximirle de pena, si no existen lesiones ni resulta de autos la falsedad de esta aseveración.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 64, Ser. 2ª.

3. Disparo de arma de fuego—No obstante la lesión producida, debe ser penado con dos años de prisión si no resulta comprobada la intención homicida.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 299, Ser. 2ª.

4. Disparo de arma de fuego—Que produzca lesiones, debe ser castigado con el término medio si no existen circunstancias atenuantes ni agravantes.—Jur. Crim., tomo 10, pág. 304, Ser. 2ª.

5. Disparo de arma de fuego—Contra una persona, agrava por lesiones leves debe ser penado con dos años de prisión.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 313, Ser. 2ª.

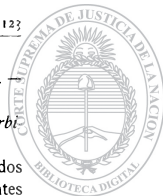
Distancia—Véase: *Prueba*, núm. 7—*Término extraordinario*, núm. 4.

1—Debe imponerse el término medio de la pena mayor—art. 53 del Cód. Pen. vig.

3—Arts. 52 y 99 del Cód. Pen. vig.

4—Véase nota precedente.

5—Véase: el núm. 3.



DIS — DOC

Distintos juicios—Véase: *Embargos*, núms. 1 y 2.

División de condominio—Véase: *Condominio*, núm. 2.

División de sociedad—Véase: *Balance de liquidación*, núm. 1.

1ª. Documento—En que se funda la ejecución, debe entregarse al ejecutante, en tanto no exista constancia del pago.—Jur. Com., tom. 8, pág. 341, Ser. 2ª.

Documento—Véase: *Honorarios*, núm. 11—*Acreedor prendario*, núm. 1—*Cotejo de letras*, núm. 1—*Papel sellado*, núm. 1—*Contrato*, núm. 4—*Prueba escrita*, núm. 1—*Tercería de dominio*, núm. 1—*Defraudación*, núm. 1—*Jurisdicción prorrogada*, núms. 1 y 2.

Documento á la orden—Véase: *Endoso*, núm. 1.

Documento cancelatorio—Véase: *Chancelación*, núm. 2.

1ª. Documentos—Los que se mencionan en la demanda, y hacen al fondo de la causa, no pueden ser acompañados en el término de prueba, aun cuando existan en poder de terceros.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 217, Ser. 2ª.

2. Documentos—El hecho de no acompañar los que fun-

1ª—Habiéndose solicitado el desglose de un documento que servía de base á una ejecución, el Juez ordenó que se manifestara previamente si se desistía del juicio. Apelada la resolución fué revocada, fundando la revocatoria en que el documento es propiedad del ejecutante, y en que ese desglose no perjudica al ejecutado. Sin embargo no debe olvidarse que hay casos en que no puede desglosarse un documento, como si se tratara de uno argüido de falso.

1ª—Los documentos pertenecían á la parte demandada y se encontraban en poder de un Escribano Público: no se permitió su agregación por que no se habían llenado los requisitos de los arts. 72 y 73 del Cód. de Proc., y porque ello importaría obligar á una de las partes á producir prueba contra sí misma.

2—Esta es la jurisprudencia constante consagrada por los Tribunales, fundada en los arts. 72 y 73 del Cód. de Proc. Doctrina admitida por los prácticos.—Véase: Caravantes, tom. 2º, núm. 657, pág. 89; Inst.,



DOC — DOM

dan la acción, no puede dar origen á una escepción dilatoria.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 15, Ser. 2ª.

3ª. Documentos—Solo debe darse traslado al actor, de los documentos en que el demandado funda su acción: los simplemente aclaratorios, deben agregarse sin más sustanciación.—Jur. Com., tom. 9, pág. 419, Ser. 2ª.

Documentos públicos—Véase: *Peritos*, núm. 2—*Declaraciones*, núm. 1—*Juramento*, núm. 1—*Personería*, núm. 2—*Prueba*, núm. 2.

Documentos públicos—Véase: *Personería*, núm. 6.

Dolo—Véase: *Homicidio*, núm. 1—*Rendición de cuentas*, núm. 1—*Voluntad*, núm. 2.

1. Domicilio—El menor que se encuentre en poder del padre, debe ser reclamado en el domicilio de éste.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 246, Ser. 2ª.

2. Domicilio—Constituido, se reputa subsistente á los efectos de la notificación, hasta tanto se haya constituido otro.—Jur. Com., tom. 9, pág. 373, Ser. 2ª.

3ª. Domicilio—No puede tenerse por válidamente notificado al demandado en el domicilio denunciado, aunque sea

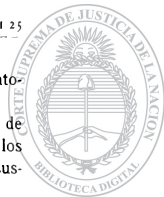
tom. 3º, verb. *Escepciones dilatorias*, núms. 3 y 4; tom. 2º, verb. *Escepción dilatoria*, núm. 1; *Acción*, núm. 6; tom. 1º, verb. *Defecto legal*, núm. 761; *Documentos*, núms. 910 y 911, *Escepciones dilatorias*, núms. 1073 y 1076.

3ª—El sumario está equivocado; solo se trataba de si una cuenta acompañada por el demandado como elemento ilustrativo de su contestación debía acompañarse ó no. Se resolvió afirmativamente porque no se trataba de un documento que sirviera de base á la defensa, siendo aplicable el art. 73 del Cód. de Proc.

1—La esposa reclamaba del marido un hijo: esta acción, como personal, debe sustanciarse en el domicilio del esposo.

2—Art. 12 del Cód. de Proc.

3ª—El actor no afirmó cuál era el domicilio del demandado: solo se limitó á indicar el designado en el documento. El art. 77 del Cód.



DOM — DUE

el designado en la letra, si resulta que allí no vive.—Jur. Com., tom. 10, pág. 104, Ser. 2ª.

4. Domicilio—La escepción de nulidad de la ejecución, fundada en la falta de notificación, debe ser desechada si se justifica que al hacerse la primera citación, el ejecutado vivía en el domicilio indicado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 256, Ser. 2ª.

Domicilio—Véase: *Violación de domicilio*, núm. 2—*Término de prueba*, núm. 1—*Robo*, núm. 2—*Notificación*, número 2—*Nulidad*, núm. 1—*Préstamo hipotecario*, núm. 1—*Acción personal*, núm. 1—*Obligación de hacer*, núm. 3—*Edictos*, núm. 1—*Juez competente*, núm. 1—*Protesto*, núm. 4—*Letra de cambio*, núm. 4.

Domicilio constituido—Véase: *Domicilio*, núm. 2—*Nulidad*, núm. 10.

Domicilio del demandado—Véase: *Contrato*, núm. 3.

Domicilio legal—Véase: *Escepción de arraigo*, núm. 2.

Domicilio particular—Véase: *Notificación*, núm. 1.

Dominio—Véase: *Acciones personales*, núm. 1—*Cosa vendida*, núm. 2—*Interdicto de adquirir*, núm. 1—*Acción reivindicatoria*, núm. 3.

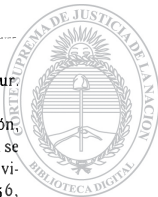
1ª. Donación—De bienes inmuebles, solo puede justificarse por escritura pública.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 166, Ser. 2ª.

1ª. Duelo—Los Tribunales de la Capital, son incom-

de Proc. exige que el domicilio denunciado sea efectivamente el del emplazado, pues si resultase no serlo se consideraría nulo todo lo obrado: si el citado no vive en el domicilio designado en la letra ó ignorándose el domicilio, la citación debe hacerse en la forma prevenida en el art. 80.

1ª—Arts. 1810, 1811 y 1812 del Cód. Civ., Ley 9, tit. 4, Part. 5ª.

1ª—El duelo fué concertado en la Capital Federal y llevado á efecto



DUE

petentes para perseguir a los reos de duelo, si éste tuvo lugar fuera de su jurisdicción.— Jur. Crim., tom. 10, página 11, Ser. 2^a.

en la Provincia. El Juez de Instrucción sobreseyó en el asunto por carecer de jurisdicción. El Fiscal Dr. Cortes, opinó que la resolución debía revocarse, porque la jurisdicción penal no es puramente territorial, pues hay delitos que aunque se cometan en el extranjero pueden ser castigados en la República; y respecto del duelo en particular, el Cód. Pen. castiga los actos preparatorios, aun cuando aquél no llegue á realizarse. La Cámara confirmó la resolución del inferior, fundándose en que el hecho de concertar un duelo solo da lugar á la detención preventiva del provocador y del retado—art. 107 del Cód. Pen.—y habiéndose demostrado que el duelo se realizó fuera del territorio de la capital, sus autoridades judiciales carecen de jurisdicción para entender en él.





1. **Ebriedad**—Incompleta y voluntaria, no puede aceptarse como circunstancia atenuante del homicidio.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 432, Ser. 2ª.

Ebriedad—Véase: *Arma de fuego*, núm. 1—*Disparos de arma de fuego*, núm. 1.

1. **Edictos**—Véase: *Notificación*, núm. 2—*Nulidad*, número 1.

1. **Edictos**—La citación del deudor por edictos, solo procede después de verificada la notificación en el domicilio indicado en la letra; la omisión de esta diligencia á

1—Según disposición del art. 81, inc. 1º del Cód. Pen., la embriaguez para que exima de pena debe ser completa é involuntaria. El art. 83, en su inc. 1º establece que son circunstancias atenuantes las espresadas en los arts. 81 y 82 *cuando no concurren todos los requisitos necesarios para eximir de la responsabilidad criminal en los respectivos casos*; es decir, que cuando *no concurre ninguno de los requisitos*, no constituye circunstancia atenuante. Así pues, si la embriaguez no es voluntaria ni completa, no es causal que exima de pena en la perpetración de los delitos. Esta es la doctrina sustentada por Escriche en su Diccionario de Leg. y Jur. verb. *Embriaguez*. Véase: Inst. tom. 3º, verb. *Ebriedad*, núm. 7.

1—El ejecutado fué citado de remate en un domicilio denunciado por el acreedor, informándose al Oficial público encargado de la notificación que allí no vivía. La citación por edictos solo procede, según derecho, cuando siendo el demandado desconocido, ó encontrándose ausente se ignora además su paradero, debiendo acreditarse sumariamente estos es-

EDI

su cumplimiento en otro domicilio indicado por el ejecutante vicia de nulidad el procedimiento y en consecuencia debe quedar sin efecto la ejecución.—Jur. Com., tom. 10, pág. 30, Ser. 2ª.

2. **Edictos**—La publicación en esta forma, puede hacerse en el diario que convenga á la parte, con aquiescencia del Superior.—Jur. Com., tom. 10, pág. 293, Ser. 2ª.

Edictos—Véase: *Estatutos*, núm. 1.

tremos, á fin de que pueda tener lugar la citación por edictos. Cuando en una letra se espresa el domicilio del obligado, es allí donde debe exigirse el pago. Así se desprende de los arts. 641, 652, 659 y 662. Por consiguiente la citación ó emplazamiento debe hacerse en el domicilio especial designado en la letra, á falta de otro domicilio conocido donde puede ser habido, y solo en caso de no dar resultado esta notificación podrá el emplazamiento hacerse por edictos.

2.—Esta resolución es sumamente obscura y vaga. El Juez de 1ª Instancia ordenó que la publicación se hiciera en el «Boletín Judicial» y en «La Prensa». La parte pidió reposición del auto en que se mandaba hacer la publicación en el último, fundándose en que el precio pedido para dicha publicación era excesivo, y pedía al mismo tiempo la designación de otro diario. El Juez no hizo lugar, y elevado el caso en apelación, la Cámara dijo: «Siendo perfectamente legales las consideraciones del auto, se confirma el apelado, y devuélvanse, con declaración de que si conviniese al interesado puede hacerse la publicación ordenada en cualquier otro periódico.» Ahora bien, si se confirma el auto recurrido, es porque la Cámara ordena que la publicación se haga como lo mandó el Juez de 1ª Instancia. La Cámara no tenía necesidad de declarar que el interesado podía publicar en otro diario puesto que ello es facultativo de la parte. Si esta pidió reposición del auto en que se mandaba hacer la publicación en «La Prensa», fué por tal de evitar fuertes erogaciones, y no es de suponerse que además de dicha publicación se encontrase dispuesto á hacerla en otro diario más, lo que sería un absurdo. Si hubiéramos de interpretar lógicamente esta resolución, llegaríamos á establecer que la Cámara faculta al interesado para publicar los edictos en cualquier otro diario eliminando el designado por el Juez. Pero si le damos esta interpretación tenemos que concluir estableciendo que el auto de 1ª Instancia en vez de ser confirmado fué revocado.



EDI—EFE

1ª. **Editor**—La presentación del verdadero autor de la publicación acusada, después del vencimiento del término de prueba, no exime de responsabilidad al editor.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 220, Ser. 2ª.

2. **Editor**—Siendo varios los artículos acusados, si el presentado como autor responsable, negara que alguno le pertenezca, la responsabilidad renace contra el editor.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 110, Ser. 2ª.

1ª. **Editores**—De un periódico, solo pueden ser responsabilizados en caso de no presentar al autor de los artículos acusados.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 399, Ser. 2ª.

Efecto devolutivo—Véase: *Apelación*, núm. 1.

Efecto legal—Véase: *Retractación*, núm. 1.

1ª. **Efecto retroactivo**—Las leyes de Procedimientos en

1ª—El editor se escusó diciendo que un tercero era el autor de la publicación acusada, exhibiendo al efecto un documento y abriéndose a prueba el incidente para comprobar su autenticidad; vencido el término sin comprobarla se presentó el tercero diciendo que era exacto ser él el autor, pero no se le permitió asumir la responsabilidad que le incumbía por no haber comprobado ese extremo dentro del término de prueba.

2—Véase: verb. *Artículos acusados*, núm. 1.

1ª—Así lo entendió la parte querellante, diciendo en su escrito de demanda «que se ordenara al editor manifestara en el día y en el acto de la notificación, quién era el responsable de las publicaciones acusadas, y que el Juzgado ordenara se entendiese con él la acusación.». La Cámara confirmó la resolución por sus fundamentos, y además basándose en las leyes 2ª y 5ª, tít. 13, Part. 3ª.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Editor*, núm. 1.

1ª—En materia penal la doctrina establece la retroactividad de las leyes en cuanto favorezcan al demandado, siendo extensivo este principio a las leyes de procedimientos. El caso es el siguiente: el nuevo Cód. de Proc. empezó a rejir cuando ya habían pasado los primeros diez días del término de prueba. El Código vino a establecer la necesidad de que toda la prueba se solicite en los primeros diez días de abierta la causa a prueba. Es evidente que esa disposición de la nueva



EFE — EMB

materia criminal, solo tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al reo.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 36, Ser. 2ª.

Efecto suspensivo—Véase: *Apelación*, núm. 1.

Efectos introducidos—Véase: *Derecho de retención*, número 2.

Ejecución—Véase: *Excepciones*, núms. 1, 3 y 4—*Remate público*, núm. 1—*Embargo*, núm. 5—*Boletos*, núm. 1—*Documento*, núm. 1—*Quiebra*, núm. 1—*Moratorias*, núm. 5—*Vale*, núm. 1—*Domicilio*, núms. 3 y 4—*Excepción de compromiso*, núm. 2—*Excepción de inhabilidad de título*, núm. 5—*Notificación*, núm. 6—*Nulidad de la ejecución*, núms. 2, 3 y 4—*Préstamo hipotecario*, número 1.

Ejecutado—Véase: *Excepciones*, núm. 1.

Ejecutante—Véase: *Bienes*, núm. 1—*Pagaré*, núm. 1.

Ejemplares—Véase: *Contrato bilateral*, núm. 1.

1. **Embargo**—Siempre que se presenten bienes determinados á embargo, si el Juzgado los conceptúa suficientes,

ley de forma, no podía aplicarse porque se empeoraría la situación del acusado. Por otra parte, las leyes penales no pueden aplicarse por analogía, y no encontrándose espresamente prevenida para el caso, la formalidad exigida por la ley vigente no debe aplicarse, porque así el querrellado no podría producir prueba testimonial, lo que sería contrario al principio que rige la defensa en juicio. Se haría mas gravosa la situación del reo, siendo así que las leyes penales solo tienen efecto retroactivo cuando ellas mejoran la situación del acusado.

1.—El art. 461 del Cód. de Proc., establece en su última parte, que la inhibición quedará sin efecto tan luego como se presenten bienes á embargo, ó se diese caución bastante. ¿Quién es el que debe apreciar si esa caución, ó se los bienes ofrecidos son bastantes? Aquí no se dice, pero en el art. 501, se autoriza al Juez para clasificarla exclusivamente: este artículo puede aplicarse por analogía, lo mismo que el art. 525. Ese auto no puede dictarse sin audiencia de la parte que solicitó el embargo.—Véase: *Inst.*, tom. 3º, ver. *Embargo*, núms. 3 y 7.



EMB

debe quedar sin efecto la inhibición.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 206, Ser. 2ª.

2. **Embargo**—Depositado el importe del crédito que dió origen al embargo, procede el levantamiento sin la previa conformidad del acreedor.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 58, Ser. 2ª.

3. **Embargo**—Si la compra de oro hecha por el ejecutante al ejecutado, no autorizó el Juez que conocía en la ejecución, aunque el importe de aquella no alcance á cubrir el crédito, no procede el embargo de bienes contra el deudor, por la diferencia.—Jur. Com., tom. 6, pág. 33, Ser. 2ª.

4. **Embargo**—Probada por el tercerista la propiedad del bien embargado, procede el levantamiento del embargo.—Jur. Com., tom. 6, pág. 299, Ser. 2ª.

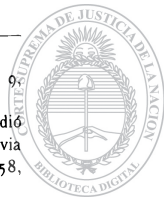
5. **Embargo**—La ejecución de sentencias dictadas en

2—Cuando se presentan bienes á embargo en sustitución de una inhibición debe oírse al acreedor, porque puede el inmueble no responder al pago del crédito que se ejecuta con sus intereses y costas: pero si se deposita el importe del capital y accesorios no puede haber oposición legítima de parte del acreedor y es inútil oírlo. Esta resolución está de acuerdo con otro caso resuelto.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Embargo*, núm. 2; debe tenerse presente que en este caso no se cuestionó de si debía ó no ser oído el acreedor.—Véase, tom. 1º, verb. *Inhibición general*, núm. 1435.

3—De los datos que suministra el fallo, no se puede deducir si el sumario está ó no bien hecho. Los antecedentes son completamente deficientes: la resolución tal cual está consignada no sirve como precedente.

4.—Los embargos tienen su fundamento en el derecho de propiedad atribuido al deudor: si ese derecho no existe, desaparece la razón de ser del embargo.

4—Se trata de un exhorto librado por las autoridades de Montevideo solicitando un embargo preventivo contra una casa de comercio de aquí. Se hacía presente en el exhorto que ante aquellas autoridades se había promovido una ejecución en virtud de documentos firmados, cuya auten-



EMB

país extranjero, no debe concederse si de los recaudos resulta que no se han llenado los requisitos esenciales para que tales medidas sean procedentes.—Jur. Com., tom. 2, pág. 176, Ser. 2ª.

ticidad había sido reconocida, librándose el correspondiente mandamiento el que no dió resultado, y no conociéndole bienes pedían se ordenara el embargo de los que los deudores tuviesen aquí. No se trata por consiguiente del cumplimiento de una sentencia definitiva, sino de una diligencia de embargo, la que debió cumplirse de acuerdo con los trámites establecidos para el juicio ejecutivo. Hay diferencias sustanciales respecto de las formas que deben rejir cuando se solicita la ejecución de una sentencia definitiva ó cuando se pide alguna diligencia ordenada durante el juicio, como el embargo que debe llevarse á cabo, no por un subalterno sino por un Juez independiente del que conociendo en la causa lo hubiese dictado. * En el primer caso la sentencia se supone justa con tal que revista las formas esternas de legalidad, pues ellas excluyen ya todo recurso: y las sentencias llevan en sí la presunción *juris et de jure* de su justicia, debiendo cumplimentarse ante cualquier Juez que sean presentados sin más examen, y sin serle permitido reabrir el juicio para descender al fondo de la cuestión y sin reverla, pues ello importaría un atentado á la jurisdicción del Juez que la hubiese pronunciado. Las ejecutorias, en estos casos, no requieren la inserción de todo lo concerniente al mérito de la prueba que hubiese servido de fundamento á la resolución ó sentencia que se trata de cumplir. El Juez ante quien se presenta la petición solo tiene que cerciorarse de si su jurisdicción no ha sido invadida, y de que en la sustanciación de la causa se hayan observado las formas sustanciales del juicio. Lo que se le permite es cerciorarse de que al postulante le asiste la justicia en el derecho que reclama, y para ello se requiere la presentación de los recaudos necesarios. No se puede ordenar un embargo preventivo en un juicio ejecutivo sin que previamente se haga constar de una manera indudable la existencia de esa deuda por documentos fehacientes que motiven y legalicen la medida solicitada, siendo esencial que esos recaudos vengan adjuntados al exhorto. Si éstos no comprenden los requisitos esenciales, no se le dará cumplimiento. De los recaudos resultó que la firma había sido reconocida, pero no constaba la exigibilidad de la obligación, que es condición necesaria para que el embargo proceda, según lo establece el art. 465 del Cód. de Proc.



EMB

6. **Embargo**—Solo procede, si está debidamente justificada la deuda.—Jur. Com., tom. 7, pág. 281, Ser. 2ª.

7. **Embargo**—Para que proceda, es requisito indispensable fijar la suma con que debe contribuir el obligado por alimentos.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 266, Ser. 2ª.

8. **Embargo**—Indebidamente trabado, debe quedar sin efecto por resolución del Juez que lo decretó y no del que careciendo de jurisdicción se vió obligado á solicitarlo.—Jur. Com., tom. 9, pág. 201, Ser. 2ª.

9. **Embargo**—Procede su levantamiento sin necesidad

6—De los recaudos presentados no resultaba, ni la existencia, ni el monto de la deuda, en cuyo caso no procede la traba. Se trataba de un embargo preventivo que no era procedente en este caso—artículos 443 y 444, Cód. de Proc.

7—El mandamiento debe librarse por cantidad líquida: si no hay cantidad líquida, puede apreciarse prudencialmente por el Juzgado. Sin embargo rara vez será esto necesario en un juicio de alimento, pues es el juicio más breve que en procedimiento se conoce.

8—Un embargo fué trabado por la autoridad judicial de esta Capital á solicitud de la de La Plata. Se solicitó después el levantamiento del embargo ante el Juez de aquí y éste resolvió levantarlo sin tener en cuenta que ese embargo había sido ordenado por el de otra jurisdicción y al proceder así se fundaba en que se había dado cumplimiento á un exhorto que no venía con los recaudos de ley, y en que se había ordenado asimismo su cumplimiento sin perjuicio de la jurisdicción del proveniente, de donde resulta que el ejercicio de su jurisdicción quedaba espedito y libre, sobre la cual se hizo reserva expresa al decretar el embargo solicitado.

9—El derecho del ejecutante para pedir el embargo de bienes no es absoluto, pues debe limitarse á aquellos que estuviesen en poder del deudor—art. 478 del Cód. de Proc.—En los bienes muebles la posesión vale por título y crea á favor del que los posee la presunción de propiedad. El que tiene la presunción legal de la propiedad de la cosa embargada, no puede ser obligado á deducir una acción tendente á comprobar esa propiedad. Al que alega en contra de esa presunción es á quien incumbe la prueba.

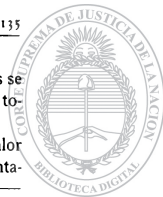


EMB

de deducir juicio de tercería, si los muebles embargados se encuentran en poder del tercer opositor.—Jur. Com., tomo 10, pág. 131, Ser. 2ª.

10. **Embargo**—Es facultativo del Juez apreciar el valor de los bienes dados á embargo para ordenar el levanta-

10—Esta resolución es una de las más arbitrarias que registran los fallos de los Tribunales. Con ella se pone á merced de la buena ó mala disposición de los Jueces la suerte de los pleitos. Si un Juez tiene la facultad de resolver que cualquier bien dado á embargo es suficiente para garantizar las resultas del juicio, se corre el riesgo de que los resultados de un juicio sean completamente ilusorios. Felizmente esta resolución es una de aquellas confirmadas «por sus fundamentos.» El Juez de 1ª Inst. decía que: «es del resorte de los Jueces, á falta de peritos, apreciar si los bienes dados á embargo son suficientes para cubrir el importe de un crédito que se ejecuta.» ¿Quién le ha dicho al mencionado señor Juez, que en la Capital de la República faltan peritos para apreciar el valor de la propiedad raíz? Decía además que «no se puede por ahora juzgar del valor del bien dado á embargo.» Y ¿cómo puede considerarse suficientemente garantido el crédito con el inmueble, si su valor no puede apreciarse? Estos son los fundamentos que sirvieron de base á Cámara para confirmar la resolución de 1ª Inst. Estos Jueces son los árbitros de los intereses litigiosos, pues de ellos depende que los litigantes estén garantidos ó queden burlados, porque la 2ª Inst. ha sido suprimida de hecho á causa de la poca atención que ella presta á los asuntos que van en apelación. Despachan la enorme mayoría de los autos interlocutorios «por sus fundamentos.» Otro caso igual al del sumario puede verse en el verb. *Inhibición*, núm. 3. Parece que el artículo 461 del Cód. de Proc. autorizara esta inteligencia de la ley; pero no es así, porque allí se establece que la inhibición quedará sin efecto tan luego como se presenten bienes á embargo ó se diere caución bastante. Esto no quiere decir que el Juez sea el árbitro para resolver si esos bienes son bastantes: hay peritos que deben asesorar al Juez, el que generalmente no entiende de estas cosas. En contra del sumario puede verse el verb. *Inhibición*, núm. 7 que consagra la verdadera interpretación de la ley. Estas contradicciones son las que desprestigian la autoridad científica de las Cámaras. Puede verse además en este último orden de ideas.—Inst., tom. 1ª, verb. *Inhibición general*, núm. 1435.



EMB

miento de la inhibición.—Jur. Com., tom. 10, pág. 330, Ser. 2ª.

Embargo—Véase: *Inhibición*, núm. 7—*Depositorio judicial*, núm. 1—*Citación de remate*, núm. 2—*Dietas*, número 1—*Costas*, núm. 20.

1. **Embargo preventivo**—El boleto aprobatorio de una operación de bolsa, no basta para dictar embargo preventivo ó inhibición.—Jur. Com., tom. 5, pág. 361, Ser. 2ª.

2. **Embargo preventivo**—El cesionario de un crédito con la cláusula de intransferible, carece de personería para pedir á nombre propio un embargo preventivo.—Jur. Com., tom. 5, pág. 68, Ser. 2ª.

3. **Embargo preventivo**—Ó inhibición, solo procede en las obligaciones de dar.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 52, Ser. 2ª.

4. **Embargo preventivo**—No procede cuando se demanda el cumplimiento de una obligación de hacer.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 64, Ser. 2ª.

1—Esta resolución fué dictada por la Cámara constituida en Tribunal de interlocutorias y por mayoría de votos: la que dijo, que no es aplicable al caso el 2º inc. del art. 443, por cuanto no se trata de un crédito cuya existencia esté acreditada en la forma exigida por el mencionado artículo.

2—Desde que es intransferible, la cesión no puede hacerse y por consiguiente es título inhábil para pedir el embargo preventivo. Las convenciones son ley para las partes—art. 209, Cód. de Com.

3—Es jurisprudencia constante de la Cámara de lo Civil.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Embargo preventivo*, núms. 3, 4, 5, 6, 10 y 12; *Obligación de hacer*, núms. 1, 2 y 5; tom. 2º, verb. *Embargo preventivo*, número 20, en cuya nota impugnamos esta jurisprudencia: pueden verse asimismo los núms. 19, 22 y 25; *Obligación de hacer*, núms. 2 y 3; tomo 1º, verb. *Mandamiento de embargo preventivo*, núm. 1703.

4—Véase nota precedente.



EMB

5. **Embargo preventivo**—Es procedente, aun tratándose de una obligación de hacer, para asegurar la suma entregada á cuenta, pero no para el cumplimiento de la obligación.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 71, Ser. 2ª.

6. **Embargo preventivo**—El que la ley permite contra el

5—No se trataba de una obligación de hacer escritura, sino de afianzar una suma entregada á cuenta, en cuyo caso es aplicable el art. 443, inc. 2º.

6—Esta resolución es una consecuencia del principio general sentado por la Cámara de que al ausente no le es apelable el procedimiento en rebeldía.—Véase: Inst., tom. 2º, verb. *Ausente*, núm. 2; verb. *Juicio*, número 1; tom. 1º, verb. *Juicio*, núm. 1551.—Todos estos casos fueron resueltos por la Cámara de lo Com.; la Cámara de lo Civil había sentado la misma jurisprudencia, pero en los últimos fallos la ha reformado, estableciendo que el ausente del Código de Procedimientos no es el ausente del Cód. Civ., como lo tenemos demostrado en el tom. 2º de la Inst., verb. *Ausente*, núm. 1. En el caso del sumario, la Cámara decía que de acuerdo con lo preceptuado en el art. 80 del Código de Proc., se le nombró al ausente un Defensor que lo representase en juicio, y que ese Defensor debe ser notificado de todas las providencias—art. 1870 del Cód. Civ.—Que la parte no había sido declarado *rebelde* sino *ausente*, no siéndole aplicable el art. 433, inc. 2º del Cód. de Proc. Decir, que la persona citada por edictos á causa de no conocersele el domicilio, que no comparece, ha sido declarada ausente y no rebelde, es cometer un grave error jurídico. Al citado por edictos y que no comparece no se le declara ausente, porque eso la ley no lo ordena; por el contrario, se le declara rebelde porque la ley lo manda. El artículo 80 dice: «Si vencido el término de los edictos, no compareciese el citado, se le nombrará defensor que lo represente»: no dice que se le declarará ausente. Por el contrario el art. 433, dice: «Cuando un litigante, citado con arreglo á lo dispuesto en el art. 77 y siguientes, no comparezca dentro del término del emplazamiento ó abandonase el juicio después de haber comparecido será declarado en *rebeldía* pidiéndolo la otra parte.» Declarada la rebeldía contra un litigante, es porque la ley lo considera rebelde: ella considera tal, al que abandona el juicio después de haber comparecido; al que citado personalmente no comparece; al que emplazado por edictos á causa de



EMB

rebelde, no procede contra el ausente á quien se le ha nombrado defensor.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 96, Ser. 2ª.

7. **Embargo preventivo**—Procede siempre que se deduce petición de herencia ó reivindicación.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 190, Ser. 2ª.

8. **Embargo preventivo**—Hecha la intimación del artículo 460, y vencido el término, el embargo debe ser levantado.—Jur. Com., tom. 6, pág. 40, Ser. 2ª.

9. **Embargo preventivo**—Procede en obligaciones no vencidas, siempre que por información sumaria se justifique que ha disminuido la responsabilidad del deudor.—Jur. Com., tom. 6, pág. 114, Ser. 2ª.

ignorarse su domicilio, tampoco comparece. Antes de ahora se ha confundido al ausente del Código de Procedimientos con el ausente del Cód. Civ. Pero este error ha sido reconocido por la Cámara, la que últimamente ha hecho las distinciones del caso. Es por esto que el ausente que no ha sido declarado tal, según la prescripción del Cód. Civ., no es incapaz y por consiguiente no está representado por el Asesor de Menores é Incapaces: es simplemente ausente, representado por el Defensor de Ausentes. En resumen, de lo espuesto resulta, que el embargo preventivo autorizado por el art. 437 del Cód. de Proc. es aplicable al ausente que citado en forma no concurre, porque el art. 433 dice que *se le declarará en rebeldía*, y el art. 437 que le sigue dice, el embargo preventivo procede desde el momento en que un litigante *haya sido declarado en rebeldía*.

7—Cuando se deduce acción reivindicatoria, procede el embargo preventivo—art. 447 del Cód. de Proc.—La petición de herencia ha sido equiparada á la reivindicación por su objeto y resultados, proponiéndose recuperar una cosa ó bien determinado.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Embargo preventivo*, núm. 1; tom. 2º, mismo verb. núm. 3; tom. 1º, verb. *Petición de herencia*.

8—La intimación fué hecha bajo apercibimiento de declarar caducados los derechos que incumbían á la parte, esa intimación importa la facultad de exigir su cumplimiento y efectividad.

9—Siempre que se justifique que ha disminuido notablemente la responsabilidad del deudor, dice el art. 443, en su inc. 5º.



EMB

10. **Embargo preventivo**—El Juez que se considera in competente, debe de oficio escusarse de decretar el embargo preventivo.—Jur. Com., tom. 6, pág. 213, Ser. 2^a.

11. **Embargo preventivo**—La orden de operaciones de compra y venta en la Bolsa, no basta para hacer procedente el embargo preventivo.—Jur. Com., tom. 8, pág. 143, Ser. 2^a.

12. **Embargo preventivo**—La transferencia del conocimiento á la orden, no basta para probar la tradición de las mercaderías, y el vendedor en virtud de la quiebra del comprador, puede entablar acción reivindicatoria, la que hace procedente el embargo preventivo.—Jur. Com., tom. 8, pág. 154, Ser. 2^a.

10—Pendiente la sustanciación de una escepción de incompetencia, se solicitó un embargo preventivo, al que se hizo lugar, porque el artículo 463 del Cód. de Proc. dispone que los Jueces deberán escusarse de oficio de dictar embargo preventivo en asuntos en que el conocimiento de la causa no fuera de su competencia, lo que era de perfecta aplicación porque en el estado en que se hallaba el juicio no se sabía el resultado de la escepción. Consideramos que un Juez solo puede estar autorizado á resolver un incidente en esa forma cuando llegara el caso del art. 75 en su última parte. El embargo puede denegarse cuando la competencia fuese por lo menos dudosa, pero no cuando el Juez se considera competente, pues una negativa á la petición del embargo hasta cierto punto importaría un prejuzgamiento. Deben los Jueces tratar siempre de obtener dos fines con los embargos preventivos: no causar perjuicios indebidos con embargos preventivos, y garantizar el resultado de los juicios.

11—Esta resolución fué revocatoria de un auto de 1^a Inst. en el que se acordó el embargo preventivo fundándose en que la firma había sido abonada en forma, y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 443, inciso 3^o del Cód. de Proc. La Cámara dijo simplemente que no estando comprendido el caso de que se trata en lo dispuesto en el art. 443, en vista de la calidad de la acción instaurada no procedía el embargo.—Véase el núm. 1.

12—Véase: verb. *Conocimiento á la orden*, núm. 1.



EMB

13. **Embargo preventivo**—Para hacerlo procedente en una obligación condicional, no basta llenar los requisitos del inc. 3º del art. 443 del Cód. de Proc., deben acreditarse los del 5º.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 409, Ser. 2ª.

14. **Embargo preventivo**—De los frutos, solo procede cuando se ha justificado la propiedad.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 416, Ser. 2ª.

15. **Embargo preventivo**—La falta de cumplimiento de una obligación de hacer, no basta para fundarlo.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 422, Ser. 2ª.

17. **Embargo preventivo**—Para que un contrato bilateral pueda fundarlo, debe justificarse el cumplimiento de las obligaciones que impone al que lo solicita.—Jur. Com., tom. 10, pág. 261, Ser. 2ª.

18. **Embargo preventivo**—Procede si el deudor enajena sus bienes.—Jur. Com., tom. 10, pág. 92, Ser. 2ª.

Embargo preventivo—Véase: *Recurso de reposición*, número 1—*Inhibición*, núm. 10—*Obligación de hacer*, número 4.

1. **Embargos**—Pueden coexistir dos embargos sobre los mismos bienes, aun por distintos juicios y decretados por diferentes Jueces.—Jur. Com., tom. 8, pág. 158, Ser. 2ª.

13—El contrato que dió margen al caso era bajo forma privado y bajo condición, debiendo por consiguiente llenarse los requisitos exigidos en los incisos citados.

14—De los antecedentes suministrados en los fallos no se puede deducir si el sumario espresa ó no lo que la Cámara resolvió.

15—Véase el núm. 3.

17—Art. 443, inc. 3º del Cód. de Proc.

18—Véase: verb. *Acreeidos con plazo*, núm. 1.

1—No hay disposición legal que lo prohíba, y por el contrario los prácticos establecen que si los bienes estuviesen embargados corresponde sean reembargados, cuyo segundo embargo debe hacerse saber al



EMB — EMP

2. **Embargos**—El cambio de acción contra otro de los deudores solidarios de la obligación, no obliga al levantamiento de los embargos é inhibiciones que pesaban contra el presunto insolvente.—Jur. Com., tom. 8, pág. 337, Ser. 2ª.

11. **Empedrado**—La escepción de falta de personería opuesta por el ejecutado, por el importe del empedrado

Juez que ordenó el primero.—Véase: Escrich, verb. *Embargo*, § VIII.—Se ha establecido que cuando hay varios embargos tiene prelación el primero trabado, pues equivale á una hipoteca.—Véase: Inst., tom. 1º verb. *Embargo anotado*, núm. 971.

2.—Véase: verb. *Deudores solidarios*, núm. 1.

11—Ejecutada una persona por el importe del empedrado correspondiente á un inmueble, opuso la escepción de falta de personería, fundándose en que él no era el propietario. Es evidente que el fundamento de esta escepción es completamente improcedente. La falta de personería se refiere á la incapacidad de hecho para estar en juicio por sí mismo, como el menor de edad, la mujer casada, etc.: no puede jamás referirse al fondo de la cuestión, al derecho en que se funda la acción: la primera es una escepción dilatoria, la segunda es perentoria. Sin embargo, la Cámara la declaró procedente, y al resolver así tuvo indudablemente en cuenta, pues ella no lo dijo, la circunstancia de que se trataba de un juicio ejecutivo en el que se oponen conjuntamente todas las escepciones sin distinguir las dilatorias de las perentorias, pues todas tienen la misma sustanciación. Siendo así que no puede condenarse á un litigante cuando ha comprobado la falta de derecho del actor para deducir la acción instaurada. El Juez ante todo debe hacer justicia, fundándose en ley. Por lo que respecto al sumario, debe tenerse presente que para que con una cuenta de empedrados pueda deducirse acción ejecutiva se requiere que ese título reuna las condiciones establecidas por la ley de la materia: la ejecución de la obra y la calidad de propietario. El crédito procedente de empedrados no arranca de un hecho personal del deudor, sino que tiene su origen en la ley que impone al propietario la obligación de abonarlo. El título con el cual se inicia la ejecución, justifica que el trabajo se ha hecho, pero no comprueba la calidad de propietario del ejecutado. El propietario es el deudor; si el ejecutado comprueba que no lo es, la ejecución no procede.



EMP — END

por no revestir el carácter de propietario, es procedente.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 396, Ser. 2ª.

Emplazamiento—Véase: *Nulidad del emplazamiento*, núm. 1,

Empleado—Véase: *Desacato*, núm. 2—*Falsificación*, número 4.

Empleado municipal—Véase: *Protesto*, núm. 3.

Empleo—Véase: *Suspensión de empleo*, núm. 1.

Empresario de obras—Véase: *Jurisdicción comercial*, número 2.

1ª. **Empresarios**—Corresponden á la jurisdicción civil las cuestiones entre empresarios constructores de inmuebles, aun cuando sea la base del litigio el material invertido.—Jur. Com., tom. 10, pág. 288, Ser. 2ª.

Empresas—Véase: *Vías férreas*, núm. 1.

Empresas privilegiadas—Véase: *Privilegios*, núm. 1.

Encausados—Véase: *Recurso*, núm. 1.

1ª. **Encubridores**—No puede calificarse y castigarse como encubridores de un delito á los que no tenían la obligación de hacer la denuncia.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 172, Ser. 2ª.

1ª. **Endoso**—La nulidad ó validez del endoso de un documento á la orden, no puede fundar la oposición al recono-

1ª—Véase: verb. *Constructores*, núm. 1. En contra del sumario, véase: *Jurisdicción Comercial*, núm. 2.

1ª—Véase: verb. *Denuncia*, núm. 4.

1ª—En el acto de la verificación de créditos no se trata de su pago, sino simplemente de su existencia en favor ó en contra de la masa, y por consiguiente, la validez ó nulidad de la forma del endoso debe ser juzgada en otra oportunidad: no debiendo olvidarse además que la presentación de un crédito para su verificación lo puede hacer el simple mandatario.



END — ESC

cimiento del crédito en el acto de la verificación.—Jur. Com., tom. 8, pág. 164, Ser. 2ª.

2ª. **Endoso**—En forma, hace improcedente contra el tenedor, todas las escepciones personales que el ejecutado hubiera podido hacer valer contra el endosante.—Jur. Com., tom. 8, pág. 392, Ser. 2ª.

1ª. **Enfermedad**—Si causa inhabilitación para el trabajo por más de un mes, debe penarse al reo con dos años de prisión.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 5, Ser. 2ª.

1ª. **Entrada**—La entrada por vía no destinada á tal objeto, si bien no basta para que exista escalamiento, hace que el delito sea calificado de tentativa de robo y no de hurto.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 86, Ser. 2ª.

Entrada—Véase: *Inquilinos*, núm. 1.

1. **Envenenamiento casual**—No es pasible de pena.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 249, Ser. 2ª.

Equipajes—Véase: *Hotelero*, núm. 1—*Posadero*, número 1—*Derecho de retención*, núm. 2.

Error—Véase: *Balance de liquidación*, núm. 1—*Testigo*, núm. 1—*Prueba de presunciones*, núm. 1.

1ª. **Escalamiento**—Existe, siempre que la entrada se haya verificado por lugar no destinado á tal objeto, aun

2ª—El endoso es una verdadera cesión, sometida en sus formas y en sus efectos á las disposiciones del Cód. de Com.—art. 801, del Cód. de Com. ant. igual al 624 del vigente.—Uno de los efectos legales del endoso, según Bravard Veyrierre, es libentar al cesionario de todas las escepciones que no le son personales y que podían ser opuestas al cedente, siendo esta la distinción entre el endoso y la cesión de los créditos no endosables.

1ª—El art. 120 del Cód. Pen. en su inc. 1º establece para estos casos la pena de uno á tres años de prisión.

1ª—Art. 190, inc. 1º del Cód. Pen. vigente.

1ª—Art. 190, inc. 1º del Cód. Pen. vigente.



ESC

cuando sea efectuado con la aquiescencia de personas que ignoraban la intención del reo.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 61, Ser. 2ª.

Escalamiento—Véase: *Robo*, núms. 4 y 7—*Entrada*, núm. 1.

1ª. **Escarcelación**—En tanto no exista sentencia ejecutoriada que declare al acusado responsable del delito, no se puede disponer de la suma depositada como fianza de escarcelación aun cuando el reo sea prófugo.—Jur. Crim., tom 10, pág. 103, Ser. 2ª.

Escarcelación—Véase: *Sentencia*, núm. 4.

1º. **Escarcelación bajo fianza**—Para fijar la suma para la escarcelación, el Juez debe tener presente el delito y las responsabilidades civiles que puedan recaer sobre el acusado.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 366, Ser. 2ª.

2. **Escarcelación bajo fianza**—Es improcedente, mientras no se deslinde la responsabilidad de cada reo, cuando la acusación pesa sobre varios.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 13, Ser. 2ª.

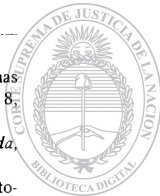
3. **Escarcelación bajo fianza**—De delitos castigados con

1ª—El art. 379 del Cód. de Proc. en lo Crim. establece que la caución garante la pena pecuniaria, las costas del juicio y las responsabilidades civiles del delito, es evidente que mientras no se resuelva que existe delito, no puede hacerse efectiva esa responsabilidad.

1ª—Se desprende de lo establecido en los arts. 378 y 379 del Cód. de Proc. Crim. Conviene tenerse presente que los delitos á que se refiere el art. 381 del mismo Cód. son de otro carácter del que motivaba el presente caso.

2—El grado de responsabilidad corresponde establecerse en la sentencia. Si se juzga con anterioridad á ella puede considerarse como un prejuzgamiento.

3—Se trataba de un delito castigado con uno á tres años de prisión, la Cámara dijo que no procedía la escarcelación, porque si bien el Cód.



ESG

pena divisible, para que proceda, debe tenerse presente el máximo y no el término medio.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 363, Ser. 2ª.

4. Escarcelación bajo fianza—Si el delito puede ser penado con más de dos años de prisión, no procede la escarcelación bajo fianza.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 137, Ser. 2ª.

5. Escarcelación bajo fianza—No procede, si á *prima facie*, la pena á imponerse excede de dos años de prisión.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 77, Ser. 2ª.

6. Escarcelación bajo fianza—No procede cuando hay concurrencia de delitos.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 360, Ser. 2ª.

7. Escarcelación bajo fianza—Para que pueda hacerse

Pen. establece como legal el término medio entre el mínimo y el máximo, dicho término no es admitido por el nuevo Cód. de Proc. A los efectos de la escarcelación que fija como límite el máximo de la pena —art. 376.

4—Véase nota precedente.

5—Véase el núm. 3.

6—El art. 377 del Cód. de Proc. Crim. dice, en uno de sus incisos: «No podrá sin embargo decretarse la libertad bajo caución, cuando mediase reiteración ó concurrencia de varios delitos.»

7—Esta resolución fué revocatoria de la de 1ª Instancia. La Cámara dijo que escarcelar es poner en libertad al que está preso; que no estando preso no puede escarcelársele, pues está prófugo. No es esta la interpretación que ha dado esta misma Cámara al solicitar el fallido su escarcelación bajo fianza: allí se dijo que podía él solicitar su escarcelación bajo fianza, sin constituirse en arresto. Véase Inst., tom. 1, verb. *Fallido*, núm. 1181. El sumario fué revocando un auto bien fundado del Dr. Lopez Cabanillas en el que se establecía la procedencia de la escarcelación aduciendo las siguientes consideraciones: Que el tit. XVIII, Lib. II del Cód. de Proc. Crim., no contiene disposición alguna espresa que prohíba la libertad provisional bajo caución, y que en el silencio de la ley debe resolverse el caso en un sentido favorable al reo—art. 13



ESC

lugar á ella, es necesario que el reo se constituya en prisión.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 399, Ser. 2^a.

8. Escarcelación bajo fianza—Excediendo de dos años de prisión la pena fijada al adulterio, no procede la escarcelación bajo fianza.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 98, Ser. 2^a.

Escarcelación—Véase: *Fallido*, núm. 1.

del mismo Cód.—y en virtud de la regla *Odio restringit et favores convenit ampliare*: Que las leyes 5 y 6 del Estilo que prohibían la concesión de la libertad provisional á favor del reo prófugo, ha caído en desuso—Tejedor, Curso de Derecho Criminal, tom. 2, pág. 379—En nuestro país, como en todas las naciones civilizadas, la libertad bajo fianza es la regla dentro de los términos del art. 376 del Cód. de Proc., que no admite más caso de escepción que los dos espresamente designados en ese art. Si se niega la escarcelación al reo prófugo es crear una tercera escepción no autorizada y contraria á la ley. Mangin ha estudiado y resuelto el caso en sentido favorable á la escarcelación del reo ausente—De l'instruction, tom. 2, núm. 175—Constrastan notablemente los argumentos sólidos de este fallo de 1^a Instancia, con el razonamiento despojado de todo mérito científico que sirven de base á la resolución de la Cámara. Es tanto menos aceptable este proceder de la Cámara en este caso que resuelve en contra del precedente sentado por ella en otro análogo anterior. Ha sido práctica constante establecida por los Tribunales Correccionales de esta Capital el conceder la escarcelación, sobre todo para un reo ausente. De este modo se levanta el auto de prisión, y puede el procesado presentarse con toda libertad ante los jueces acercándose á la justicia, lo que hace que los delitos se esclarezcan con más facilidad, haciendo posible la terminación de innumerables juicios que de otro modo no terminarían jamás quedando siempre las causas abiertas y la justicia impedida de llenar su misión social. El temor de ser detenido hace de que un delincuente que puede comprobar causales que lo eximirían de toda pena, no se presente. La cuestión de escarcelación bajo fianza es de gran importancia para la sociedad y no puede ser resuelta con el desparpajo que lo hace la Cámara. Es sensible que aquí en la Capital de la República se desprecien tanto las garantías individuales, y que las cuestiones más preciosas del derecho se resuelvan sin el estudio que tan importante materia requiere.

8—Art. 376 Cód. de Proc. Crim.



ESC

1ª. **Escepción**—El Juzgado puede declarar la improcedencia de la escepción antes de dictar sentencia de remate.—Jur. Com., tom. 6, pág. 231, Ser. 2ª.

2ª. **Escepción** —Improbada, procede se lleve adelante la ejecución.—Jur. Com., tom. 9, pág. 99, Ser. 2ª.

3. **Escepción**—La confesión del acusado es indivisible y su afirmación de haber pagado al contado los objetos, no importa una escepción que deba probar.—Jur. Crim., tomo 10, pág. 340, Ser. 2ª.

Escepción—Véase: *Confesión del reo*, núm. 3—*Protesto*, núm. 1—*Rebeldía*, núm. 3.

1ª. **Escepción de arraigo**—Del juicio, es improcedente si el demandante solo se ausenta periódicamente.—Jur. Com., tom. 5, pág. 40, Sr 2ª.

2ª. **Escepción de arraigo**—El domicilio legal, no basta á los efectos de la ley; si el real se encuentra fuera de la jurisdicción del Juzgado, la escepción de arraigo es procedente.—Jur. Com., tom. 5, pág. 214, Ser. 2ª.

Escepción de caducidad—Véase: *Nulidad*, núm. 9.

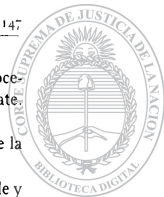
1ª.—Y ese auto es apelable—art. 491 del Cód. de Proc.

2ª.—El demandado se convierte en actor en la escepción y consiguientemente le corresponde la prueba. Si ella es negativa debe llevarse adelante la ejecución—art. 498, Cód. de Proc.

3.—Véase: *Confesión del reo*, núm. 12.

1ª.—La Cámara no dijo que la ausencia periódica no obliga al arraigo del juicio, pero lo dijo el Juez de 1ª Inst.; lo que dijo la Cámara fué que «no habiéndose justificado que el demandado está domiciliado fuera de la Capital, se confirma por sus fundamentos.» Por lo demás, el principio señalado en el sumario es exacto, pues el domicilio de una persona es allí donde tiene su residencia habitual—art. 92, Cód. Civ.—y la intención de conservarlo—art. 91.

2ª.—La ley, cuando trata del arraigo del juicio en el art. 85 del Código de Proc., no puede referirse al domicilio legal sino al real de que nos habla el art. 89 del Cód. Civ.



ESG

1ª. **Excepción de compensación**—Contra la acción ejecutiva fundada en una letra de cambio, son improcedentes las excepciones de litispendencia y pago ó compensación, si no se refieren espresamente á la letra en que funda la acción.—Jur. Com., tom. 10, pág. 252, Ser. 2ª.

1ª. **Excepción de compromiso**—Es improcedente opuesta á la ejecución de un pagaré equiparado por la ley á una letra de cambio.—Jur. Com., tom. 8, pág. 236, Ser. 2ª.

2. **Excepción de compromiso**—Es improcedente si se opone á la ejecución de una letra de cambio.—Jur. Com., tomo 10, pág. 82, Ser. 2ª.

1ª. **Excepción de cosa juzgada**—Aun cuando exista identi-

1ª—La Cámara no resolvió lo que espresa el sumario. Dijo que la excepción de litispendencia no procedía, porque no está autorizada por el art. 852 del Cód. de Com. ant., 676 del vigente, contra la acción ejecutiva de una letra de cambio. En cuanto á la excepción de pago se declaró improcedente porque éste había sido hecho por consignación, no habiéndose llenado los requisitos que exigen las leyes para que la consignación surta los efectos del pago—arts. 758 del Cód. Civ., 949 del Cód. de Com.—El sumario contiene un verdadero error jurídico.

1ª—Porque esta excepción no está comprendida entre las enumeradas por el art. 852 del Cód. de Com. ant. igual al 676 del vigente.—Véase la nota al núm. 6 del verb. *Excepción de falta de personería*.

2—Véase el número precedente.

1ª—Las leyes fundándose en razones de orden público establecieron que «la cosa que es juzgada por sentencia de que no se puede alzar, que la deben tener por verdad» ó como decía el Derecho Romano, *Res judicata pro veritate habetur*; Regla 32, tit. 34. Part. 7ª; Ley 207 del Digesto de *Regulis juri*. Para que esta excepción proceda, es necesario que concurren tres elementos indispensables, á saber: identidad de objeto ó cosa demandada, identidad de persona y sus calidades, é identidad de causa: de tal manera que faltando una de ellas sería improcedente la excepción —Leyes 19 y 20, tit. 22, Part. 3ª.—En el caso del sumario no concurre la identidad de causa, por consiguiente no procede la excepción.



ES:

dad de persona y de objeto, no procede esta escepción, si la causa en que se funda la acción es distinta de la invocada en el anterior litigio y sobre la que se fundó la sentencia.—Jur. Com., tom. 7, pág. 294, Ser. 2ª.

2ª. Escepción de cosa juzgada—No procede, aun cuando el litigio se inicie por la misma persona, si invoca distinta personería.—Jur. Com., tom. 7, pág. 91, Ser. 2ª.

1ª. Escepción de defecto legal—Cuando los hechos y el derecho que de ellos surge se encuentren debidamente expresados, esta escepción debe ser rechazada.—Jur. Com., tom. 5, pág. 14, Ser. 2ª.

2ª. Escepción de defecto legal—Esta escepción es improcedente, si los hechos se encuentran claramente relacionados.—Jur. Com., tom. 6, pág. 214, Ser. 2ª.

3. Escepción de defecto legal—En el modo de proponer la demanda, no procede cuando ésta llena las prescripciones de la ley.—Jur. Com., tom. 7, pág. 153, Ser. 2ª.

4. Escepción de defecto legal—En el modo de proponer la demanda, fundada en la improcedencia de la acción de-

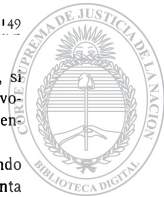
2ª—Véase nota precedente.

1ª.—El art. 84, en su inc. 4º, del Cód. de Proc., autoriza esta escepción, cuando no se llenan los requisitos exigidos por el art. 71 del mismo; entre esos requisitos se encuentran los incs. 4º y 5º. Si se llenan todos los requisitos de este artículo, la escepción no puede prosperar.—Véase: Inst. tom. 1º, verb. *Defecto legal*, núms. 1 y 2; *Escepción de defecto legal*, núm. 2; tom. 1º, este mismo verb. núm. 1037.

2ª—Véase nota precedente.

3.—Véase el núm. 1.

4.—La improcedencia de la acción, solo puede deducirse como medio general de defensa, lo que no podría ser materia de una resolución previa, sino en definitiva; de lo contrario se preguzaría en la causa, estando esto terminantemente prohibido por la Ley 13, tit. 4º, Part. 3ª. Estas cuestiones, no pueden ser materia de articulaciones dilatorias, solo



ESC



ducida, debe ser rechazada.—Jur. Com., tom. 7, pág. 155, Ser. 2ª.

5. **Escepción de defecto legal**—Es improcedente, si la demanda contiene los requisitos que la ley exige.—Jur. Com., tom. 7, pág. 292, Ser. 2ª.

6. **Escepción de defecto legal**—En el modo de proponer la demanda, esta escepción es improcedente, siempre que el escrito reuna los requisitos exigidos por la ley.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 34, Ser. 2ª.

7. **Escepción de defecto legal**—No procede, cuando en la demanda se esponen con claridad los hechos en que se funda y contiene los requisitos del art. 71 del Cód. de Proc.—Jur. Com., tom. 7, pág. 163, Ser. 2ª.

8. **Escepción de defecto legal**—Si la demanda no llena los requisitos de la ley, esta escepción es procedente.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 403, Ser. 2ª.

9. **Escepción de defecto legal**—Si la demanda espone los hechos y aplica el derecho que de ellos surge, esta excep-

pueden constituir medios generales de defensa al contestar la demanda. Es por esto que la Cámara ha declarado constantemente que no pueden resolverse como dilatorias, las cuestiones que hacen al fondo del litigio.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Escepciones dilatorias*, núm. 4; tom. 2º, verb. *Escepción dilatoria*, núm. 1; *Acción*, núm. 6; tom. 1º, verb. *Escepción previa*, núm. 1080; *Escepciones*, núm. 1088; *Escepciones perentorias*, número 1106.

5—En la demanda se habían llenado los requisitos del art. 71 del Código de Proc.

6—La escepción opuesta hacía al fondo de la demanda, no pudiéndose aplicarse lo dispuesto en el inc. 4º del art. 84 del Cód. de Proc.

8—En la demanda no se explicaron los hechos que la servían de base, ni iba élla fundada en derecho, circunstancias que constituyen un defecto en el modo de proponerla, haciendo procedente la escepción—art. 71 del Cód. de Proc.

9—Arts. 71 y 84 del Cód. de Proc.

ESC

ción es improcedente.—Jur. Com., tom. 10, pág. 141, Ser. 2ª.

1ª. Escepción de falsedad—Es improcedente, si se funda en la falta de causa: solo puede referirse al cuerpo del instrumento tratándose de pagarés equiparados por la ley á una letra de cambio.—Jur. Com., tom. 8, pág. 392, Ser. 2ª.

2. Escepción de falsedad—Improbada, debe llevarse adelante la ejecución.—Jur. Com., tom. 7, pág. 11, Ser. 2ª.

3. Escepción de falsedad—De la cláusula *por igual valor recibido*, aun justificada, no basta para enervar la fuerza ejecutiva de la letra de cambio.—Jur. Com., tom. 7, pág. 323, Ser. 2ª.

1ª. Escepción de falta de personería —Por carecer de derecho el demandante, debe ser rechazada si se opone como dilatoria.—Jur. Com., tom. 5, pág. 16, Ser. 2ª.

1ª—Este sumario está equivocado. Se dijo que la escepción de inhabilidad no podía ser tomada en consideración porque el art. 852 del Cód. de Com. ant., igual al 676 del vigente no lo ha enumerado entre las admisibles contra la acción ejecutiva de una letra de cambio; que tampoco procedía la de falsedad porque no se había atacado la verdad del documento en su esencia, ni en ninguna de sus circunstancias más subalternas. Es decir, que declaró infundada la escepción de falsedad por no tener razones en que fundarla, pero no se declaró su improcedencia por no permitirlo la ley: todo lo contrario, la ley la admite espresamente entre las que enumera—art. 676, Cód. de Com. vigente.

2—Como en el caso de cualquiera otra escepción que no se compruebe.—Véase: verb. *Escepciones*, núm. 1.

3—La enunciación de esta cláusula, no es necesaria para su regularidad, según disposición del art. 779 del Cód. de Com. ant., igual al 602 del vigente.

1ª—La escepción consistió en negar el derecho con que se instauró la acción, siendo esta defensa por su naturaleza misma, de carácter perentorio, la que solo puede aducirse al contestar la demanda. Como esas cuestiones deben resolverse en definitiva, si lo fueran como previas se





ESC

2. **Escepción de falta de personería**—Por carecer del derecho que se ejerce, es improcedente si se opone como dilatoria.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 51, Ser. 2ª.

3. **Escepción de falta de personería**—En el heredero que inicia la acción de petición de herencia, es improcedente si se funda en la no justificación de su carácter de heredero.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 75, Ser. 2ª.

4. **Escepción de falta de personería**—Cuando se funda en la falta de derecho para entablar la acción, es improcedente.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 195, Ser. 2ª.

prejuzgaría en ellas contra el precepto terminante de la Ley 13, tit. 4º, Part. 3ª.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Escepción de falta de personería*, núms. 1, 2, 6 y 9; *Falta de personería*, núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7; tom. 2º, verb. *Acción*, núm. 6; *Falta de personería*, núms. 1, 4 y 5; tom. 1º, verb. *Escepción mista*, núm. 1078; *Escepción de falta de personería*, núms. 1045 y 1048.

2—La escepción se fundaba en que los actores deducían la demanda invocando un derecho propio, siendo así que habían intervenido en la negociación como corredores ó simples intermediarios. Es evidente, que iniciada la demanda por derecho propio, la escepción tendía á destruir la acción instaurada y como tal reviste el carácter de perentoria. Esta escepción no puede fundar un artículo de incontestación sino que debe oponerse al contestar la demanda.—Véase nota precedente.

3—Es cierto que esta acción solo corresponde á los herederos, pero esto no quiere decir que ese carácter deba ser reconocido ó declarado con anterioridad, pues basta que justifique su carácter en el término de prueba, sin que sea necesario para la interposición de la demanda que ese carácter haya sido verificado en juicio previo y separado. Por otra parte, las declaratorias de herederos se hacen, en cuanto ha lugar por derecho, sin que ellas tengan el sello de la cosa juzgada para terceros que no han intervenido en ellas. El carácter de heredero es el fundamento de la acción y como tal no puede ser materia de una escepción dilatoria porque constituye la base de la acción, y la falta de derecho es materia á resolverse en definitiva.—Véase el núm. 1.

4—Cuando esta escepción importa la de *sine actione agis*, no puede oponerse como dilatoria.—Véase nota precedente.

ESC

5. **Escepción de falta de personería**—Por carecer el actor del derecho que invoca, es improcedente si se opone como dilatoria.—Jur. Com., tom. 6, pág. 34, Ser. 2ª.

6. **Escepción de falta de personería**—Y nulidad del título, es improcedente contra la ejecución de una letra de cambio.—Jur. Com., tom. 6, pág. 231, Ser. 2ª.

7. **Escepción de falta de personería**—La procedencia de la falta de personería en el acusador, no basta para libertar al acusado.—Jur. Com., tom. 8, pág. 138, Ser. 2ª.

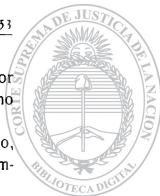
8. **Escepción de falta de personería**—La presentación de nuevo poder ó la satisfacción del acusador, hace improcedente la escepción de falta de personería.—Jur. Crim., tomo 8, pág. 168, Ser. 2ª.

5—La escepción que autoriza el art. 84 del Cód. de Proc. solo es procedente cuando se ataca la capacidad legal, la capacidad de hecho como la llama Freitas, del actor para estar en juicio, cuando se presenta por sí y á nombre propio, ó por la insuficiencia de los poderes cuando se presenta á nombre ageno objetando el título habilitante. Las otras defensas hacen al fondo de la cuestión y no pueden ser materia de resoluciones previas.—Véase el núm. 1 y siguientes.

6—No se encuentra esta escepción enumerada entre las del art. 852 del Cód de Com. ant., igual al 676 del vigente, únicas escepciones admisibles contra la acción ejecutiva de una letra de cambio. Las escepciones establecidas por el Cód. de Proc.—art. 488—para el juicio ejecutivo no son aplicables, porque según prescripción del art. 813 del Cód. de Proc., sus disposiciones son aplicables á los casos de comercio cuando no se oponen, lo que el Cód. Mercantil preceptúa: y como en este caso hay oposición, debe aplicarse lo que éste preceptúa.—Véase: Inst., tom. 1º, verb. *Escepción de falta de personería*, núms. 1046 y 1049.

7—Esa escepción no obsta á que se subsane el defecto de la personería ni al ejercicio de las acciones que el interesado pueda hacer valer.

8—El poderdante intervino personalmente ratificando lo dicho á su nombre; y el apoderado presentó nuevo poder: en cualquier de estos dos casos no hay motivo suficiente para negarle personería al apoderado. La ratificación equivale al mandato.



ESC

9. **Excepción de falta de personería.**—Por carecer de acción, solo procede como perentoria.—Jur. Com., tom. 7, pág. 358, Ser. 2ª.

10. **Excepción de falta de personería.**—En el demandado, si afecta al fondo de la demanda, no procede como dilatoria.—Jur. Com., tom. 7, pág. 81, Ser. 2ª.

Excepción de falta de personería.—Véase: *Comisionista*, número 4—*Sobreseimiento*, núm. 4—*Empedrado*, núm. 1.

1. **Excepción de incompetencia.**—La procedencia de esta excepción por ser de jurisdicción voluntaria del demandado, no permite la imposición de las costas al demandante.—Jur. Com., tom. 5, pág. 169, Ser. 2ª.

9—Se dijo en la excepción que los demandados nada tenían que ver con la demanda, pues no tenían compromiso ni vínculo alguno los que aparecían como directamente obligados, y que la acción debía dirigirse contra éstos, pues los excepcionantes no tenían solidaridad alguna con los otros. Esta defensa no puede oponerse como dilatoria porque hace al fondo de la cuestión, solo puede constituir un medio general de defensa al contestar la demanda, como que ella se funda en la falta de acción.—Véase el núm. 1.

10—Véase el núm. 1.

1—Es necesario distinguir, si la excepción se opone en un juicio ejecutivo ó en un juicio ordinario. En el caso en que nos ocupa no se puede saber de cuál de los dos se trataba, porque el fallo no arroja suficientes datos: pero nos inclinamos á creer que se trataba de un juicio ordinario: en este caso es procedente y justa la resolución, porque no existe razón alguna para la imposición de las costas. Si el actor ignora la nacionalidad del demandado y luego se le prueba que es extranjero, no puede imputársele ni temeridad, ni malicia, ni mala fe, máxime si se tiene en cuenta que la presunción legal está en favor de la nacionalidad nativa de los habitantes. Mas, tratándose de un juicio ejecutivo las costas son de precepto imperativo de la ley: el art. 507 establece que «las costas serán de cargo del vencido en último grado». Este artículo no confiere al Juez facultad de imponer ó no las costas al vencido, según su criterio lo aconseje, sino que ellas son impuestas por la ley.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Excepción de incompetencia*, núm. 4.



ESC

2. **Escepción de incompetencia**.—Justificada la distinta nacionalidad del demandado, procede la escepción de incompetencia.—Jur. Com., tom. 9, pág. 405, Ser. 2ª.

3. **Escepción de incompetencia**.—La incontestación á la demanda inhabilita al demandado á oponer la escepción de incompetencia *ratione materiæ*.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 166, Ser. 2ª.

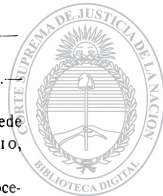
4. **Escepción de incompetencia**.—Fundada, en el carácter de extranjero, del demandado y comprobado el hecho, debe

2.—Demandado un extranjero opuso la escepción de incompetencia fundado en su carácter de tal. El demandado reconocía la justicia de la escepción, y el actor produjo además prueba para acreditar su carácter de extranjero, acreditándolo efectivamente. La escepción fué admitida con costas, regulándose los honorarios de la parte vencedora. Apelada esta resolución fué confirmada por la Cámara con costas. La imposición de las costas no procedía, según la jurisprudencia de nuestros Tribunales.—Véase: el número siguiente.

3.—Entablada una demanda se dió por contestada en rebeldía del demandado. Sustanciada por todos los trámites, sentenciada y apelada, se opuso en la Cámara al informar *in voce* la escepción de incompetencia *ratione materiæ*. Se declaró que no podía oponerse esta escepción en ese estado del juicio: 1º Porque para entender en la acción deducida era competente la jurisdicción que conocía en ella; 2º Porque el demandado no contestó la demanda, perdiendo el derecho para oponer escepciones dilatorias, pues el término que al efecto señala el Cód. de Proc. es perentorio—art. 46, incs. 1º, y 83—y 3º Porque el Juez de 1ª Inst. se había declarado competente para entender en el juicio, siendo consentido el auto, no siendo posible volver sobre él—art. 87 del Cód. de Proc., y de acuerdo con la jurisprudencia sentada por la Cámara en casos análogos.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Competencia*, núm. 12. Esta resolución es de la Cámara de lo Comercial. En el tom. 2º, verb. *Competente*, núm. 2, puede verse una resolución de la Cámara de lo Civil, igual á la del sumario.

4.—Está en contra de otra resolución de la misma Cámara.—Véase el núm. 1.—El sumario fué establecido en una escepción opuesta en juicio ordinario. Tenemos aquí dos resoluciones contradictorias de la misma Cámara.





ESC

declararse procedente imponiendo las costas al actor.—Jur. Com., tom. 9, pág. 405, Ser. 2ª.

5. **Excepción de incompetencia**—El ejecutado solo puede oponerla al ser citado de remate.—Jur. Com., tom. 10, pág. 133, Ser. 2ª.

6. **Excepción de incompetencia**—Reconocida la procedencia de esta excepción por ser extranjero el ejecutado, debe el ejecutante ser condenado en las costas.—Jur. Com., tom. 10, pág. 157, Ser. 2ª.

Excepción de incompetencia—Véase: *Costas*, núm. 12.

1. **Excepción de inhabilidad de título**—Opuesta á la ejecución de un pagaré, equiparado por la ley, á una letra de cambio, debe rechazarse por no ser de las permitidas por la ley.—Jur. Com., tom. 6, pág. 341, Ser. 2ª.

2. **Excepción de inhabilidad de título**—Es improcedente contra la ejecución fundada con una letra de cambio.—Jur. Com., tom. 8, pág. 392, Ser. 2ª.

3. **Excepción de inhabilidad de título**—Es improcedente si se opone á la ejecución de un pagaré á la orden que la ley equipara á la letra de cambio.—Jur. Com., tom. 9, pág. 308, Ser. 2ª.

5.—La excepción de incompetencia solo es procedente cuando está trabado el pleito.—F. S. C. N., tom. 9º, pág. 409, Ser. 2ª.—Como en el caso presente se opuso esta excepción al ser citado á efecto de reconocer la firma de un documento, y como esta diligencia no implica prórroga de jurisdicción como lo tiene resuelto la Cámara en el caso de Suvo con Ortiz—F. S. C. N., tom. 9º, pág. 412, Ser. 1ª.—No había juicio trabado, ni procedía la excepción en ese estado de la causa.

6.—Véase el núm. 1.

1.—Por las mismas razones espuestas en el verb. *Excepción de falta de personería*, núm. 6.

2.—Véase nota precedente.

3.—Véase: verb. *Excepción de falta de personería*, núm. 6.

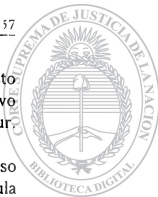
ESC

4. **Excepción de inhabilidad de título**—La falta de protesto personal, no puede fundar esta excepción, si el acto tuvo lugar antes de la vigencia del nuevo Cód. de Com.—Jur. Com., tom. 10, pág. 168, Ser. 2ª.

5. **Excepción de inhabilidad de título**—Resultando falso el reconocimiento de la firma á ruego, debe declararse nula la ejecución y procedente la excepción de inhabilidad de título.—Jur. Com., tom. 10, pág. 197, Ser. 2ª.

4—Según el art. 465, inc. 6º del Cód. de Com., las letras de cambio y pagarés protestados con arreglo á las prescripciones del Cód de Com., son títulos que traen aparejada ejecución. Según el art. 891 del Cód. de Com. anterior, el protesto debía ser hecho personalmente al sugeto á cuyo cargo esté girada la letra; exactamente la misma disposición contiene el art. 715 del vigente. El nuevo Código en su art. 675 requiere para que la ejecución proceda que el protesto haya sido notificado personalmente, requisito que no exigía el antiguo Código.

5—La ejecución fué iniciada en virtud de un documento firmado á ruego. Se pidió el reconocimiento de la firma, cometiéndose la diligencia á un juez de Paz de campaña: allí se reconoció como cierto y verdadero el pagaré suscrito á ruego. Hecha la citación de remate, se opuso por el ejecutado la excepción de falsedad del título, fundándose en primer lugar, en que no autorizó á nadie para que firmase la obligación en su nombre; y en segundo lugar, en que era incierto que hubiese comparecido á reconocer la firma ante el juez de Paz. Abierta la excepción á prueba, se constataron plenamente las defensas aducidas, y en consecuencia no se hizo lugar á la ejecución. Parece que la excepción no debiera considerarse como procedente, porque contra la acción ejecutiva de las letras de cambio, no se admiten otras excepciones que las determinadas en el art. 676 del Cód. de Com. Pero debe tenerse presente que la falsedad invocada respecto á la diligencia de reconocimiento, es perfectamente viable como excepción, desde que probada produciría su nulidad, y como consecuencia forzosa la del procedimiento ulterior. Comprobado el hecho de no haberse practicado el reconocimiento judicial de la firma, como lo determina el art. 675 del Cód. de Com. vigente y 467 del Cód. de Proc., es evidente que el documento no puede servir de base para un procedimiento ejecutivo, desde el momento que el título es inhábil para ello, por falta de reconocimiento previo.



ESC

1ª. **Excepción de legítima defensa**—Su prueba es á cargo del acusado si no resulta de las constancias de autos.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 180, Ser. 2ª.

Excepción de legítima defensa—Véase: *Legítima defensa*, núms. 1, 2, 4, 5 y 6—*Homicidio*, núms. 7 y 16.

1ª. **Excepción de litispendencia**—Fundada en una demanda criminal por calumnia, es improcedente si se opone á una correccional por injuria.—Jur. Crim., tom. 5, página 344, Ser. 2ª.

2. **Excepción de litispendencia**—Solo procede, cuando se funda en la identidad de acción y entre las mismas personas.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 414, Ser. 2ª.

3. **Excepción de litispendencia**—Consentida la procedencia de esta excepción, no procede la alteración del estado del litigio en que se fundó.—Jur. Com., tom. 9, página 181, Ser. 2ª.

1ª—Véase: Inst., tom. 3, verb. *Prueba*, núms. 19, 20 y 21.

1ª—Se acusaba por injurias vertidas en un escrito presentado ante un Juez del Crimen en un expediente seguido por calumnia. Aquí no hay litispendencia, porque ésta tiene lugar cuando se entabla el mismo pleito que ha sido ya iniciado ante otro Juez, de modo que el primero que entendió en el asunto anterior puede avocarse el conocimiento de la causa y resolverlo conjuntamente con él. Para que haya litispendencia es necesario que haya identidad entre uno y otro juicio, como lo ha dicho la Cámara. Véase: Inst., tom. 3, verb. *Excepción de litispendencia*, núms. 1 y 2; tom. 2, *Litispendencia*, núm. 1; tom. 1º *Excepción de litispendencia*, núm. 1064. El objeto que se propone esta excepción es evitar la concurrencia de dos sentencias contradictorias sobre la misma cosa. Se requiere que concurren identidad de causa, personas y objeto. La calumnia y la injuria son dos cosas distintas y no constituyen el mismo pleito, luego no hay litispendencia.

2—Véase nota precedente.

3—Pasa en autoridad de cosa juzgada, y no es dable volver sobre el particular, sin intentar contra la regla de jurisprudencia que inviste á la cosa juzgada con el sello de la verdad.



ESC

4. **Excepción de litispendencia**—Contra la acción ejecutiva, fundada en la letra de cambio son improcedentes las excepciones de litispendencia y pago ó compensación, si no se refieren espresamente á aquella en que se funda la acción.—Jur. Com., tom. 10, pág. 252, Ser. 2ª.

1ª. **Excepción de novación**—Opuesta á la ejecución de un pagaré á la orden, es improcedente.—Jur. Com., tomo 5, pág. 120, Ser. 2ª.

2. **Excepción de novación**—Opuesta á la ejecución de una letra de cambio, es improcedente.—Jur. Com., tom. 5, pág. 306, Ser. 2ª.

1ª. **Excepción de nulidad**—Procede contra la ejecución

4—Véase: verb. *Excepción de compensación*, núm. 1.

1ª—Un pagaré á la orden está equiparado por el art. 740 del Cód. de Com. vig., á una letra de cambio. Contra la acción ejecutiva de esta clase de documentos no puede oponerse sino las excepciones enumeradas en el art. 676 del Cód. de Com. vig. igual al art. 852 del Cód. ant. Las excepciones autorizadas por el art. 488 del Cód. de Proc., no son aplicables en este caso porque el art. 813 del Cód. de Proc., establece que sus disposiciones solo son aplicables á los negocios mercantiles en cuanto no se opongan al Cód. de Com., y como hay oposición entre el art. del Cód. de Proc. y el del Cód. de Com., resulta que éste debe aplicarse. Véase: Inst., tom. 2, verb. *Excepción de novación*, núm. 1.

2—Véase nota precedente.

1ª—El Juez de 1ª Instancia sostuvo, que la nulidad del procedimiento no puede alegarse en un juicio ejecutivo entablado para el cobro de una letra de cambio ó pagaré á la orden. Esta doctrina ¿es correcta? Sostenerla, tanto valdría como afirmar que en el juicio ejecutivo no hay formas sustanciales, y que todo queda librado al arbitrio del Juez, pues á no ser así, la ley resultaría en contradicción consigo misma al prescribir por una parte tales formas, quedando por otra parte suprimida toda queja y todo recurso por su omisión. En sentido estricto y riguroso, la palabra *excepción* puede distinguirse de la *defensa* fundada en la nulidad que no se refiere al título, sino al procedimiento ejecutivo: esta distinción es manifiesta en los arts. 488 y 489 del Cód. de Proc., porque después de detallar en el primero las excepciones admisibles en el juicio ejecutivo,



ESC

fundada en una letra de cambio, pues las escepciones que fija el Cód. de Com. como admisibles, hacen relación á la letra, mientras que aquella escepción afecta tan solo al

se agrega en el segundo, que también puede alegarse la nulidad del procedimiento, por violación de las formas que para su ejecución han sido establecidos. Es evidente que si la ley considerase esta defensa como una de tantas escepciones propiamente dichas, no tenía para que introducir á su respecto una disposición especial en artículo separado, pues al tratar de aquellos en el primero de dichos artículos habría aumentado simplemente un inciso al art. 488. No lo ha hecho así, y se ve claramente que no confunde, y por el contrario distingue de un modo preciso las escepciones de la nulidad del procedimiento por violación de las formas. Esta observación es importante, porque ella salva de todo punto la contradicción que se cree existe entre las disposiciones concernientes al juicio ejecutivo, entre el Cód. de Proc. y el de Com., siendo este último el que reglamenta precisamente lo que comprende á las letras de cambio. El art. 852 del ant. Cód. de Com. igual al 676 del vigente, determina efectivamente las mismas escepciones que puedan oponerse en el juicio ejecutivo fundado en esta clase de documentos; pero como se acaba de ver, la ley no clasifica como una escepción propiamente dicha, la defensa fundada en la nulidad del procedimiento, desde que el Cód. de Com. no la comprende entre las escepciones que enumera, no se deduce que escluya también las demás no mencionadas ó prohibida la indicada defensa. El citado artículo habla solamente de las escepciones que pueden alegarse contra la acción ejecutiva de las letras de cambio, mientras que viéndolo bien, la nulidad del procedimiento por violación de las formas esenciales en nada afecta la acción ejecutiva de las letras, cuya fuerza y eficacia no se destruyen, ni se invalidan, permaneciendo intactos, sino que dirige solamente á la tramitación. Dicho art. 852, ant., 676 vig., solo menciona y se refiere únicamente á las escepciones perentorias, que derimen completamente la obligación contraída en la letra, salvo la de espera—no se ocupa de las dilatorias ni ha sido tampoco su mente excluirlas. ¿Quién sostendría, que en la ejecución de una letra no puede observarse la incompetencia del Juez ante quien aquella se inicia? Y sin embargo esta escepción no se halla comprendida entre las que menciona y determina el artículo que nos ocupa, como lo tiene resuelto la jurisprudencia. No debe olvidarse que las nulidades por violación de las formas sustanciales del juicio afectan al de-



ESC

procedimiento ejecutivo.—Jur. Com., tom. 10, pág. 30.
Ser. 2ª.

2ª. **Escepción de nulidad**—De la ejecución, fundada en la falta de notificación, debe ser desechada si se justifica que al hacerse la primera notificación, el ejecutado vivía en el domicilio indicado.—Jur. Com., tom. 10, pág. 256.
Ser. 2ª.

1. **Escepción de pago**—Al que se ampara ella, corresponde la prueba.—Jur. Com., tom. 6, pág. 133.
Ser. 2ª.

2ª. **Escepción de pago**—Contra la acción ejecutiva fundada en una letra de cambio, son improcedentes las escepciones de litispendencia, y pago ó compensación, si no se refieren espresamente á aquella en que se fundó la acción.—Jur. Com., tom. 10, pág. 252, Ser. 2ª.

recho natural de la defensa, y siendo inviolable por la Const. Nacional —art. 18—la defensa en juicio de las personas y de los derechos, el art. 852 del Cód. de Com. ant., y 676 del vigente, no la comprende, pues este artículo se refiere á las escepciones comunes que son las propiamente llamadas escepciones, pero no pueden referirse ni comprender la nulidad que importan la supresión de las formas sustanciales del juicio, porque tal alcance repugnaría á la garantía constitucional citada.

1ª.—Véase: verb. *Domicilio*, núm. 4.

1.—*Reus in excipiendo fit actor*, como dice la ley romana. Es un principio de procedimiento, que el que aduce como argumento un hecho nuevo en juicio, debe comprobarlo. En el presente caso se alegó el pago, y para comprobarlo se produjo prueba de testigos. La Cámara dijo que esa prueba además de no comprobar el hecho, es improcedente, pues se trata de un contrato que excede de 200 \$—arts. 975 y 1193 del Cód. Civil.—Consideramos que la Cámara se equivoca cuando dice que la prueba es improcedente en este caso, porque la prueba de testigos, no es permitida, cuando se trata de comprobar *contratos* cuyo valor exceda de doscientos pesos, pero es perfectamente procedente cuando se trata de comprobar el pago, que no es un contrato sino un hecho.

2ª.—Véase: verb. *Escepción de compensación*, núm. 1.



ESC

Excepción de prescripción—Véase: *Prescripción*, núms. 7 y 10—*Despojo*, núm. 2.

1ª. **Excepción de quita**—La aceptación judicial de un concordato, hace procedente la excepción de quita contra todos los créditos de fecha anterior, y favorece á todos los socios que formaban la sociedad.—Jur. Com., tom. 5, página 306, Ser. 2ª.

1ª. **Excepción dilatoria**—La existencia del delito para fundar la incompetencia del Juzgado, no puede ser discutida como dilatoria.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 168, Ser. 2ª.

Excepción dilatoria—Véase: *Excepción de falta de personería*, núm. 1—*Documentos*, núm. 2.

1ª. **Excepciones**—Cuando el ejecutado, no justifica las opuestas, debe llevarse adelante la ejecución.—Jur. Com., tom. 5, pág. 10, Ser. 2ª.

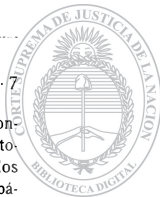
2. **Excepciones**—Declarada competente la jurisdicción

1ª.—Véase: verb. *Concordato*, núm. 1.

1ª.—Se argumentaba diciendo que el cuerpo del delito no se había comprobado; esta cuestión no es propia para ventilarse como cuestión previa, cuyo objeto es esquivar la controversia sin entrar de lleno en el litigio. Por otra parte, esta discusión lejos de afectar la cuestión de competencia, implica por el contrario que ella ha sido ya resuelta.

1ª.—Ley 2ª, tit. 18, Lib. 4º, R. C., y Ley 8ª, tit. 3º, Part. 3ª; art. 498, Cód. de Proc.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Excepción*, núm. 1; tom. 2º, verb. *Excepciones*, núms. 1 y 3; verb. *Excepción*, núm. 3; tom. 1º, verb. *Excepciones*, núms. 1082, 1086, 1093, 1094 y 1097.

2.—Sin embargo es conveniente que el Inferior resuelva todas las cuestiones, porque si el Superior considera que la excepción debe ser rechazada habiéndola declarado procedente el Inferior, tendría que volver el expediente á 1ª Inst. á fin de resolverse las demás excepciones para habilitar á la Cámara á resolverlo en grado de apelación. El sumario está en contra de la doctrina admitida por la Cámara.—Véase: Inst., tom. 2º, verb. *Nulidad*, núm. 36, donde se ha dicho que «la nulidad debe ser declarada, y debe quedar sin efecto la sentencia que al resolver



ESC

federal, las demás escepciones opuestas, no deben resolverse.—Jur. Com., tom. 5, pág. 169, Ser. 2ª.

3. **Escepciones**—Consentido el auto por el cual se mandan presentar las copias en breve término bajo apercibimiento de ser devuelto el escrito de escepciones, procede su devolución habiéndose por no opuestas dentro del término.—Jur. Com., tom. 9, pág. 175, Ser. 2ª.

4. **Escepciones**—La audiencia que se acuerda á la parte contra quien se pide la ejecución de una sentencia dictada en país extranjero, solo tiene por objeto oír sus observaciones sobre la forma: las escepciones deben oponerse en la debida oportunidad.—Jur. Com., tom. 9, pág. 406, Ser. 2ª.

5. **Escepciones**—La imposición de las costas al vencido, solo es obligatoria en las sentencias definitivas, en las es-

la primera cuestión rechace la demanda omitiendo el estudio y resolución de las demás cuestiones.» De acuerdo con esta jurisprudencia, véase: verb. *Jueces*, núm. 6 del mismo tomo de la Inst. La Cámara de lo Civil tiene declarado lo contrario en algunos casos,—véase: Inst., tomo 2º, verb. *Nulidad*, núm. 19,—pero tiene asimismo casos resueltos de acuerdo con el sumario.—Véase: Inst., tom. 2º, verb. *Nulidad*, núm. 31.

3—Véase: verb. *Copias*, núm. 1.

4—Presentada ante nuestros Tribunales una sentencia dictada en país extranjero, ante todo se llenan las prescripciones del art. 560, dando previamente audiencia á la parte contra quien se dirige. Después de resuelto el incidente de si debe ó no otorgarse la ejecución recién procede la iniciación de su ejecución en el primer caso—art. 562—y se procederá de acuerdo con el procedimiento marcado por el Código para la ejecución de las sentencias. De manera que la audiencia previa que se le da al preunto ejecutado es al solo objeto de ver si ella reúne las condiciones del art. 559. Este caso está de acuerdo con otros resueltos.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Sentencia extranjera*, núm. 1; tom. 1º, verb. *Sentencia*, núms. 2427 y 2428, y *Sentencias*, núms. 2444 y 2445.

5—Véase: verb. *Costas*, núm. 19.



ESC

cepciones es potestativa.—Jur. Com., tom. 10, pág. 135, Ser. 2ª.

6. **Escepciones**—No procede el recibimiento de prueba sobre las escepciones, si las opuestas son inadmisibles.—Jur. Com., tom. 10, pág. 229, Ser. 2ª.

7. **Escepciones**—Improbadas, debe llevarse adelante la ejecución.—Jur. Com., tom. 10, pág. 324, Ser. 2ª.

8. **Escepciones**—No procede la concesión del término extraordinario para la prueba de las escepciones dilatorias.—Jur. Com., tom. 10, pág. 332, Ser. 2ª.

Escepciones— Véase: *Quiebra*, núm. 3 — *Término extraordinario*, núm. 3 — *Rebeldía*, núm. 3 — *Sentencia de remate*, núm. 1.

1ª. **Escepciones personales**—El endoso en forma, hace improcedente contra el tenedor todas las escepciones personales que el ejecutado hubiera podido hacer valer contra el endosante.—Jur. Com., tom. 8, pág. 392, Ser. 2ª.

Escribano—Véase: *Pago*, núm. 4 — *Protesto*, núm. 4.

1. **Escribanos**—Inscriptos en la matrícula durante los meses de Agosto y Setiembre de 1889.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 101 y 104, Ser. 2ª.

6—Las escepciones opuestas fueron las de inhabilidad de título, transacción ó compromiso, las que fueron declarados inadmisibles por tratarse de papeles que están equiparados á las letras de cambio por el Cód. de Com.—Arts. 916 y 917 del Cód. de Com. ant., igual al 740 y 741 del vigente.—Se citó en apoyo de la improcedencia de la escepción el artículo 852 del Cód. de Com. ant.—676 del vigente.—No procede el recibimiento de las escepciones á prueba, cuando las opuestas son improcedentes—art. 490, Cód. de Proc.

7—Véase el núm. 1.

8—El art. 89 dispone que en ningún caso el término de prueba podrá exceder de la mitad del ordinario.

1ª—Véase: verb. *Endoso*, núm. 2.



ESC

2. **Escribanos**—De registro, no deben transcribir en sus protocolos, documentos privados, que no se encuentren en el papel sellado correspondiente.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 73, Ser. 2ª.

3. **Escribanos**—De registro, solo pueden certificar sobre los actos que consten en sus registros, y á cerca de los hechos en que hayan intervenido son testigos que deben declarar en forma legal.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 192, Ser. 2ª.

Escrito—Véase: *Excepción de defecto legal*, núm. 6—*Copias*, núm. 1.

1ª. **Escritura de compromiso**—La fijación de cuestiones á resolver, solo debe hacerse en la escritura de compromiso. Jur. Com., tom. 6, pág. 104, Ser. 2ª.

Escritura de compromiso—*Nulidad del laudo*, núm. 1.

1ª. **Escritura pública**—Durante el término de prueba, puede pedirse la agregación de toda escritura que se hubiese mencionado en la demanda.—Jur. Com., tom. 5, página 210, Ser. 2ª.

2ª. **Escritura pública**—No existiendo acción de nulidad

3—Esta cuestión no fué materia de resolución en la Cámara: el Juez de 1ª Inst. la produjo como argumento de uno de los considerandos de su sentencia, siendo ésta confirmada en todas sus partes. La declaración fué prestada en forma de certificado: si los hechos sobre que ésta versa, no constan de documentos en que ha actuado como oficial público ó no proceden de espedientes tenidos á la vista, carecen de valor probatorio. Fuera de estos casos, los escribanos solo pueden declarar como testigos en la forma general establecida por la ley.

1ª—Art. 771, inc. 3º del Cód. de Proc.

1ª—Se habían llenado los requisitos de los arts. 72 y 73 del Cód. de Proc.

2ª—Se pretendía anular una escritura pública resultante de un procedimiento que se dijo adolecer de vicios de nulidad, cuyo procedimiento



ESC

contra la cosa juzgada, no puede declararse nula la escritura pública resultante de una sentencia ejecutoriada cualesquier que fueren los vicios que se aleguen contra ella, mientras no afecten el orden público y las buenas costumbres.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 386, Ser. 2ª.

3. Escritura pública.—El reconocimiento judicial de la

debía rejirse por las leyes de Part. Si se omitió algún trámite durante la secuela de la causa y si esa omisión hubiese podido generar nulidades, según las leyes que regían en aquella época: parece incorrecto pronunciar su nulidad después de transcurridos largos años fundándose en defectos de procedimientos, pues sería contrario á la estabilidad de las resoluciones judiciales consagradas por esas mismas leyes. El antiguo derecho permitía deducir la nulidad de una sentencia por vía de acción ó por vía de excepción: esta última forma procedía cuando el vencedor pretendía ejecutar la sentencia. Cuando la nulidad era notoria ó la sentencia manifiestamente contraria á la ley, á la naturaleza, ó á las buenas costumbres, ó faltaba la contestación á la demanda, el derecho era perpetuo, y cuando la sentencia se fundaba en falsos testigos el derecho se extinguía á los 20 años. La ley 2, tit. 17, lib. 4º, R. C., fijó el término de sesenta días, para de este modo hacer que los pleitos tuvieran fin. Si esta ley dejó ó no subsistentes los casos de excepción, discuten los prácticos, resolviendo unos en pró y otros en contra, pero esa discusión nada tiene que ver con nosotros, pues las leyes que actualmente nos rijen, reaccionaron contra aquellas disposiciones fundadas precisamente en el principio de orden público que constituye la necesidad de poner fin á los pleitos. Hoy, contra las resoluciones judiciales, no hay otros recursos que los determinados espresamente en nuestro Código según la índole del recurso y la naturaleza del juicio. La acción de nulidad y la excepción de nulidad de las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada han desaparecido de nuestras prácticas judiciarias. El artículo 814 ha derogado las antiguas leyes en esta parte.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Nulidad*, núm. 10.

3.—La simulación no es un acto prohibido por la ley—art. 957, Cód. Civ.—sino en casos determinados—art. 959.—Al que alega la simulación de un acto le incumbe probarla—Ley 1ª, tit. 14, Part. 3ª.—¿Cómo debe ser esta prueba? Ella varía según las personas que intervienen en la controversia, si son las mismas partes, ó terceros. En el primer caso



ESC

verdad de una escritura pública, inhabilita al que la ha hecho, para pedir la simulación del acto que contiene.—Jur. Com., tom. 6, pág. 174, Ser. 2ª.

Escritura pública.—Véase: *Renuncia*, núm. 1—*Simulación*, núm. 2—*Cesión de derechos*, núms. 1 y 3—*Hijo natural*, núm. 2—*Inhibición*, núm. 1—*Donación*, núm. 1—*Oblación*, núm. 2—*Personería*, núm. 6.

solo se admite la prueba documentada que emane de las mismas partes que han intervenido ó de sus antecesores—art. 960—se requiere un contradocumento público ó privado con exclusión espresa de la prueba testimonial. En el segundo caso, se admite la prueba privilegiada. Si se tiene en cuenta que el tercero generalmente desconoce en su origen el acto: que las partes toman todas las medidas para ocultar su consumación: que tratan de borrar todo aquello que la descubra: que se rodean de todos los medios para imprimir al acto el sello de la verdad y seriedad que se requieren, si conyence de la justicia que ha determinado al legislador á admitir la prueba privilegiada, que la constituye una prueba amplia y fácil. A no ser así se carecería de los medios eficientes para oponer al fraude celebrado la eficacia de la prueba. Si se examina la Ley 13, tit. 16, lib. 5, R. C., se ve por sus términos que los privilegios ó exenciones que establece han tenido por objetivo principal el interés de los terceros. La prueba es difícil porque la simulación se lleva á cabo entre pocas personas interesadas en su recato y secreto, como dice la ley. La prueba privilegiada ha sido puesta en manos de terceros para descorrer el velo cuidadosamente tegido por los que simulan el *acto* para lesionar derechos de terceros. La parte que ha ejecutado la simulación, no está en el caso del tercero: interviene en el acto, conoce sus consecuencias y tiene en sus manos los medios de munirse de la prueba directa de la simulación, obligándolo á suscribir un contradocumento. Es por esto que la ley le admite tan solo esta prueba, pues de no ser así la estabilidad de las convenciones sería casi imposible: la efectividad de los derechos carecería de su base indispensable, pues ningún acto escaparía al ataque que en nombre de una simulación podría intentar la parte que lo celebró por la facilidad de la prueba testimonial ó con la de presunciones. Esta es la jurisprudencia constante de nuestros Tribunales.— Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Simulación*, núm. 2; tom. 2º, mismo verb., núms. 1, 7 y 11.



ESC

1ª. **Escrituración**—El comprador que no la lleva adelante es responsable de la diferencia del precio, si el remate fue ordenado judicialmente.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 66, Ser. 2ª.

Escrituración—Véase: *Títulos*, núm. 2.

Escusa—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 10.

1ª. **Escusación**—Los Jueces de Instrucción, al ser nombrados de sentencia, en materia comercial, no pueden escusarse, por prejuzgamiento, de entender en causa en que hayan instruido sumario criminal.—Jur. Com., tom. 8, pág. 226, Ser. 2ª.

2. **Escusación**—No procede, mientras las causas en que se funde no aparezcan claramente justificadas en autos.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 70, Ser. 2ª.

1ª—«Siendo el comprador responsable de la disminución del precio del segundo remate, de los intereses acrecidos y de las costas causadas con este motivo» dice el art. 519 del Cód. de Proc.

1ª—Se trataba de un contrato de seguro. El Juez de Instrucción se había limitado á declarar la inexistencia del delito. En la demanda comercial no se discutía la existencia del mismo delito sino que el demandado se limitaba á oponer la defensa de no cumplimiento con las obligaciones que la póliza imponía y las que debían llenarse después del siniestro tratándose como se ve de cuestiones completamente diversas y sin conexión alguna. La Cámara dijo además, que la materia de recusación ó escusación, es un principio de nuestro sistema de enjuiciamiento, que debe ser aplicado estrictamente, no pudiendo hacerse extensiva por razones de analogía á casos ó personas no comprendidos en el texto de las leyes. Esta doctrina reposa sobre el conocido principio de que la jurisdicción es de orden público y escapa á la voluntad de los magistrados el eludirla. El caso que nos ocupa, no cae bajo el imperio de los arts. 367 y 368 del Cód. de Proc. Además, el Juez de Instrucción, no tiene jurisdicción para juzgar, pues su jurisdicción se limita á instruir, á formar, á organizar las piezas del proceso, no puede sentenciar: desde luego no puede ser escludido por prejuzgamiento el que no tiene autoridad para juzgar.

2—Véase nota precedente.



ESC

3. **Escusación**—Procede, cuando la víctima del crimen se encuentra en uno de los casos de la ley, aun cuando hacia el reo no existan los motivos que la ley exige.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 161, Ser. 2^a.

4. **Escusación**—Las frases inconvenientes vertidas contra el Juez del litigio, no son causa de escusación.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 16, Ser. 2^a.

3—El Dr. Soneyra se escusó de entender en el juicio instaurado contra el asesino de Lopez Jordan fundándose en que este general habia asumido la responsabilidad de la muerte del general Urquiza de quien el Dr. Soneira era pariente dentro del cuarto grado. La escusación fué admitida consultando el deseo de dicho Juez de conservar su buena reputación, pues aunque el caso no está comprendido en las disposiciones de los arts. 13 y 75 del Cód. de Proc. Crim., puede equivaler á la enemistad manifiesta, pues que en esta materia parece que no debe procederse con inoportuno rigor y estricta sujeción á la letra de las disposiciones que nos rigen cuando la causa pública no lo perjudica. Como se ve los fundamentos de esta resolución están en abierta oposición con lo resuelto en el núm. 1 donde se dijo que en materia de escusación debe procederse estrictamente no pudiendo hacerse extensiva por analogía á cosas ó personas en el texto de las leyes.

4—Los conceptos más ó menos inconvenientes que emplean los litigantes tienen su correctivo en el mismo Cód. de Proc. que faculta á los Jueces para imponer penas disciplinarias, pero no pueden constituir una causal de escusación, puesto que si esto se permitiera quedaría librado al arbitrio del Juez el desprenderse del conocimiento de cualquier asunto con perjuicio de los demás Jueces á quienes se recargaría de trabajo que debiera corresponderle al Juez que se escusa. Además si se autorizara este procedimiento, dependería de los abogados el separar á los Jueces del conocimiento de los juicios que la ley les atribuye. Estos inconvenientes se han visto realizados en la práctica, pues hay Jueces, como el Dr. Mendez Paz, á quien los litigantes le huyen por su incompetencia notoria y por su retardo en la resolución de los juicios. Cuando no se le recusa, él se escusa, para de ese modo quedar libre de un trabajo pesado. Este sistema le ha dado el resultado apetecido, pues su Juzgado es un verdadero jubileo, donde los secretarios se desesperan por falta de trabajo. Tenemos entendido que el Juez que le sigue en





ESC—ESP

Escusación—Véase: *Acusador*, núm. 1.

1^a. **Espedientes**—El nombramiento de nuevo Juez hace procedente la devolución, al Juzgado originario de los expedientes en que el cesante había sido recusado.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 196, Ser. 2^a.

2. **Espedientes**—Cuando son pedidos como prueba, y por referencias generales, procede su agregación.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 277, Ser. 2^a.

Espedientes—Véase: *Término de la prescripción*, núm. 1—*Honorarios*, núm. 10.

1^b. **Esposa**—No puede intervenir sin poder en forma, en las demandas contra el marido.—Jur. Com., tom. 9, página 171, Ser. 2^a.

Esposa fugada—Véase: *Exhorto*, núm. 1.

Esposo—Véase: *Cosa juzgada*, núm. 2—*Nulidad del pago*, núm. 1—*Inhibición*, núm. 1—*Heredero*, núm. 1—

el orden del turno se quejó á la Cámara, diciendo que con dicho magistrado se le imponían dos turnos: el propio y el de aquél, quedando sumamente recargado su despacho: la Cámara había atendido el reclamo pues alteró el turno á fin de salvar esta dificultad.

1^a—Porque ese hecho hace desaparecer la causa por la cual pasaron los autos al Juez que correspondía en el orden del turno.

2—Todo el expediente era necesario como prueba; de manera que habría tenido que sacarse compulsas de todo su contenido, con un gravamen inútil y dispendioso. Con agregar el expediente quedaba salvada la dificultad. Este caso no puede considerarse igual á los demás casos resueltos por los Tribunales, pudiendo por otra parte ser aplicable la disposición del art. 304 de la Ley Org. de los Tribs. de lo Capital, que autoriza á sacar del archivo los expedientes por sesenta días.

1^b—Entablada una demanda contra el marido, un apoderado de la esposa se presentó con poder de ésta otorgado con autorización de su esposo. Este poder sería bastante para entender en una demanda contra la esposa si ésta hubiese sido demandada, pero no en la instaurada contra el marido—arts. 188 del Cód. Civ. y 59 de la Ley de Matrimonio Civil.

ESP — EST

Jurisdicción, núm. 2—*Posiciones*, núms. 5 y 13—*Bienes propios*, núm. 1.

Espresar agravios—Véase: *Agravación de la pena*, número 1.

Espresión de agravios—Véase: *Juramento*, núm. 1.

1^a. *Espropiación*—La fijación de la línea de edificación que cause pérdida de terreno al propietario, no puede dar lugar á un juicio de espropiación, siempre que el ancho de la calle, se haya fijado por ordenanza anterior á su adquisición.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 245, Ser. 2^a.

1^b. *Estado civil*—Una sentencia declaratoria del estado civil, dictada en país extranjero, no puede protocolizarse judicialmente, ni aun con audiencia de los que puedan ser afectados por tal declaración.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 225, Ser. 2^a.

1^a—El ancho de la calle estaba fijado en 30 varas por ordenanza municipal—calle San Juan; vide *Digesto Municipal*, pág. 285, decreto de 9 de Mayo de 1827.—El terreno comprado se hallaba baldío en el momento en que se efectuó la compra como el mismo interesado lo reconoció: esa circunstancia de hallarse baldío el terreno inhabilita al comprador para pretender indemnización de perjuicios que no ha podido sufrir, desde que jamás se le había acordado otra línea que pudiera considerarse alterada por la última que se le dió. Se pretendió por el propietario que el caso era de espropiación: pero no es así porque se acogió al recurso que le acuerda el inc. 3º del art. 80 de la Ley Org. de los Tribunales de la Cap., no siendo por consiguiente aplicable el art. 2511 del Cód. Civ. Se le concedió una disminución en el precio de compra con arreglo al número de varas perdidas por la nueva delincación.

1^b—Tal protocolización no se encuentra en ninguno de los casos en que la ley autoriza esa diligencia. Esa declaratoria no es un testamento ni un contrato, únicos casos en que esa diligencia procedería: es nada más que un instrumento declarativo del estado civil, cuyo valor legal no puede ser aumentado, disminuido ni modificado en ningún sentido con su incorporación á un registro público. No puede protocolarse esa declaratoria, como no podría protocolarse una partida de bautismo ó de



EST

2. Estado civil—El derecho de los coherederos, para contestar el estado el estado civil de cualquier de ellos, no se pierde por haber consentido y aun reconocido un carácter determinado que no era el verdadero.—Jur. Com., tomo 10, pág. 97, Ser. 2ª.

3. Estado civil—Tada persona que conceptúe propios los derechos que disfrute un hijo espúreo, tiene personería para impugnar su estado civil y probar su origen á fin de recuperar el que respectivamente le corresponde ante la ley.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 97, Ser. 2ª.

Estado civil—Véase: *Filiación adulterina*, núm. 1—*Paternidad*, núms. 1 y 2—*Maternidad*, núm. 1.

matrimonio espedita en el extranjero. Está de acuerdo esta resolución con otra anterior.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Protocolizados*: Véase además el tom. 2º, verb. *Información*, núm. 5.

2—Tres familias se disputaban el preferente derecho al patronato de una capellanía: resuelta la cuestión en favor de una de ellas, sus miembros disputaron entre sí á cerca de quien debiera ejercer el patronato, el que se había establecido á favor del hijo mayor. Los mismos hermanos que habían litigado conjuntamente y reconocídose implícitamente como tales hermanos, disputaron el carácter de tal. Como la sentencia declaraba pertenecer el patronato á la hija mayor de una de las tres familias, y como la familia favorecida por la sentencia desconociera más tarde el carácter de tal á la persona favorecida por la sentencia, ésta opuso la escepción de cosa juzgada, la que fué desechada, porque aquella sentencia no había sido dictada en juicio contradictorio en que se desconociese espresamente el carácter que ella se atribuía. Solo se resolvió, á cuál de las dos familias como más próxima en grado al fundador, correspondía el patronato. Es evidente que esa sentencia solo hace cosa juzgada respecto de lo que fué materia del juicio en que se dictó. El nuevo juicio, no reúne respecto del que motivó la sentencia, los requisitos exigidos para que haya cosa juzgada, la que como dice Escriche deben concurrir las circunstancias siguientes: identidad, de causa, cosa, personas y calidad.—Véase: autor citado, verb. *Cosa juzgada*.

3—En uso del derecho imprescriptible que le acuerda el art. 262 del Cód. Civ.



ESC



1. **Estafa**—Al que acuse por este delito le corresponde la prueba: los indicios por vehementes que aparezcan, no bastan para fundar una condenación.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 369 Ser. 2ª.

2. **Estafa**—Por el uso de la prenda, no existe delito en tanto no esté vencido el término fijado en el contrato para su devolución.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 282, Ser. 2ª.

3. **Estafa**—Menor, solo debe conceptuarse circunstancia agravante de la mayor, aplicándose en consecuencia la pena con arreglo á esta última.—Jur. Crim., tom. 7, página 227, Ser. 2ª.

4. **Estafa**—Solo puede calificarse como estafa la entrega de mercaderías por voluntad propia, si ésta tuvo lugar mediando las circunstancias que la ley determina para la calificación del delito.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 144, Ser. 2ª.

5. **Estafa**—El acusado por este delito, aun cuando re-

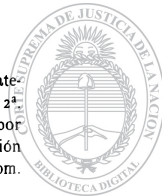
1—No se trataba de indicios *vehementes*: solo se dijo «que aun cuando del sumario resultan algunos otros indicios contra el procesado, no autorizarían ni remotamente una condenación, debiendo tenerse presente que la falta de prueba sobre su culpabilidad se estiende á la existencia misma del delito.

2—El delito previsto por el art. 207 del Cód. Pen., no puede tener aplicación cuando las obligaciones originadas por el contrato de prenda no están vencidos.

3—Arts. 85, 86 y 87 del Cód. Pen.

4—Para que haya estafa se requieren las condiciones características establecidas en el art. 202 del Cód. Pen. vigente: el uso de nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, ó influencia mentida para defraudar á otros.

5—Acusado por estafa un individuo se le secuestró un cheque por 23.000 pesos moneda nacional papel: ese cheque le había sido entregado en pago de 10.000 pesos oro vendidos por el presunto estafador, también en un cheque, perteneciente á tercera persona, el que resultó falso. Es

**EST**

sulte absuelto, solo puede reclamar el objeto que fué materia de la ejecución.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 393, Ser. 2ª.

6. **Estafa**—El Juez que entiende en la acusación por estafa, es el competente para entender en la reconvencción que por calumnia deduzca el acusado.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 95, Ser. 2ª.

7. **Estafa**—La falsificación, como acto preparatorio de la estafa, debe considerarse circunstancia agravante.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 186, Ser. 2ª.

8. **Estafa**—La tentativa por medio de la falsificación de firma debe ser penada con un año de prisión.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 186, Ser. 2ª.

1. **Estatutos**—Sus reformas, deben publicarse por edictos en la forma que la ley fija.—Jur. Com., tom. 10, página 293, Ser. 2ª.

Estatutos—Véase: *Sociedad anónima*, núms. 1 y 2—*Sociedad*, núm. 7.

decir, el cheque por 23.000 pesos papel fué entregado en pago de un cheque por 10.000 oro vendidos. El comprador del oro descubrió la falsificación, y como el cheque á papel había sido secuestrado, pidió la entrega de éste por pertenecerle. El Juez ordenó la entrega. Absuelto después el acusado por no haberse descubierto quién fuera el falsificador, pidió la entrega de los 23.000 pesos importe del cheque secuestrado á lo que la Cámara no hizo lugar: Porque si bien el procesado fué absuelto de culpa y cargo, esto no importa establecer que el comprador del oro debe perder el precio entregado. De la causa no resultó comprobado que los cheques ó conformes adulterados hubiesen sido los mismos entregados por el acusado.

6—Véase: verb. *Calumnia*, núm. 10.

7—Véase: *Defraudación*, núm. 1.

8—La pena del delito consumado es de 2 á 3 años de prisión—artículo 202, inc. 3º, Cód. Pen.—Cuando solo hay tentativa, hay que disminuir entre la cuarta parte y la mitad—art. 12, inc. 2º.

1—Art. 323 del Cód. de Com., última parte.

EST — EVI

Estipulaciones—Véase: *Contrato*, núm. 4.

Estralimitación—Véase: *Delito*, núm. 2.

Estranjero—Véase: *Fuero Federal*, núm. 1—*Excepción de incompetencia*, núm. 6.

1. Evicción—Solo procede la citación de evicción contra el vendedor del inmueble.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 90. Ser. 2ª.

2. Evicción—La Municipalidad no puede ser citada como vendedora de un terreno enagenado en virtud de ejecución sobre cumplimiento de ordenanzas municipales.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 194, Ser. 2ª.

3. Evicción—La citación de evicción solo procede cuando el propietario es demandado, pero no tratándose de una turbación de hecho que obliga al poseedor á repeler el ataque por medio de las acciones que permite la ley.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 415, Ser. 2ª.

1—El citado de evicción no había vendido el terreno materia de pleito. Los arts. 2089 y 2108 del Cód. Civ. imponen la obligación de evicción al enagenante.

2—La citación de evicción se fundó en que la finca objeto del litigio había sido vendida á petición de la Municipalidad en su carácter de ejecutante por infracción á la ordenanza de 1870 sobre cercos y veredas. En este caso la Municipalidad no es la vendedora sino la ejecutante, no siéndole aplicable las disposiciones de los arts. 2089 y 2108 del Cód. Civ. El Ejecutante no es vendedor, pues de lo contrario resultaría que ejecuta su propia cosa, lo que es un absurdo. A este respecto hay jurisprudencia formada en el sentido del sumario.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Citación*, núm. 2.

3—El art. 2091 del Cód. Civ., en su segunda parte, dice que «no habrá lugar á garantía, en razón de turbaciones de hecho, ni aun en razón de las turbaciones de derecho,» etc. El art. 2108 del mismo Código demuestra que el vendedor puede ser obligado á concurrir á la defensa cuando son demandados, pero jamás puede ser obligado á constituirse en actor.



EXH

Exhibición—Véase: *Libros de comercio*, núm. 1, 4 y 6

Exhibición general—Véase: *Libros de Comercio*, núm. 9

Existencia legal—Véase: *Capellanía*, núm. 1.

1. **Exhorto**—Para la captura de la esposa fugada, debe librarse á las autoridades del lugar donde se suponga que ha podido ó puede guarecerse: no es requisito indispensable su residencia al librarse la orden.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 411, Ser. 2ª.

Exhorto—Véase: *Interrogatorios*, núm. 1.

1—Se dijo que la extradición solo podía fundarse en la ejecución de algún delito cometido por persona cuya detención se solicita, el que debe acreditarse legalmente. Los Jueces que entienden en los juicios de divorcio, en el ejercicio de su jurisdicción están en su derecho de impedir la salida de la esposa, y su depósito á solicitud del marido. Si este derecho existe, es correlativa la facultad que le incumbe, de reclamarla en caso de fuga de cualquier punto de la República, donde se hubiese refugiado ó se encuentre y las autoridades están en el deber de entregarla, porque todos los Jueces y Tribunales deben auxiliarse reciprocamente en el desempeño de su misión. Admitir lo contrario sería establecer el precedente de que la esposa que se fugue de la casa marital ó que de cualquier modo abandone el hogar, pueda considerarse segura desde que salga de la jurisdicción del Juez, sin que al marido le asista el medio de hacer valer su derecho para volverla á su poder. Lo propio le sucedería á un padre en caso de fuga de su hijo. La sociedad tiene su base en el ejercicio de este derecho y los Tribunales le deben la más amplia y decidida protección. Si se aceptara lo contrario, sería sumamente fácil burlar impunemente ese derecho con traslaciones maliciosas de una provincia á otra, dadas las facilidades de la traslación. Los exhortos pueden dirigirse á cualquiera autoridad de la República en que se considere probable su traslación.





Facultad—Véase: *Causas correccionales*, núm. 1.

1ª. **Factor**—El principal no está obligado por tiempo determinado con su factor ó dependiente, y siempre que no exista convenio espreso las condiciones del primer año y segundo ó siguientes, no importa obligación por ese término.—Jur. Com., tom. 9, pág. 318, Ser. 2ª.

Facultades—Véase: *Corredor de bolsa*, núm. 5—*Mandatario*, núm. 2.

1. **Falsedad**—Reconocida é invocada por el Síndico la falsedad de las obligaciones en el acto de la verificación, no puede desconocerla con posterioridad en el caso de que esas mismas obligaciones favorezcan los intereses de la masa.—Jur. Com., tom. 5, pág. 171, Ser. 2ª.

2. **Falsedad**—La prueba de la falsedad de una liquidación, corresponde al que la aduce.—Jur. Com., tom. 10, pág. 277, Ser. 2ª.

Falsedad—Véase: *Excepción de falsedad*, núms. 1, 2 y 3—*Concordato*, núm. 2—*Defensa propia*, núm. 1—*Prueba sobre falsedad*, núm. 1—*Denuncia*, núm. 3—*Instrumento privado*, núm. 2—*Aprobación*, núm. 1—*Certificado*, número 1—*Reconocimiento*, núm. 1—*Sumario*, núm. 4.

1ª—Véase: Verb. *Convenio espreso*.

2—Arts. 542 y 551 del Cód. de Proc. Civ.

**FAL**

1 **Falsificación**—El delito de defraudación por medio de la falsificación solo se conceptúa circunstancia agravante del último sobre el cual debe fundarse la pena.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 120, Ser. 2ª.

2. **Falsificación**—De la firma de un funcionario público, solo debe penarse como la de un particular, si el documento no tenía carácter oficial.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 365, Ser. 2ª.

3. **Falsificación**—El conocimiento de las causas por falsificación, corresponde á los Jueces de Instrucción.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 197, Ser. 2ª.

4. **Falsificación**—De sellos oficiales y de firmas de funcionarios públicos, llevada á cabo por un empleado, debe ser castigada con el máximo de la pena.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 353, Ser. 2ª.

5. **Falsificación**—El comprador del objeto que se reconoce falsificado, solo puede ser obligado al pago del precio, previa justificación de que no es él el autor.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 393, Ser. 2ª.

6. **Falsificación**—Como acto preparatorio de la estafa, debe considerarse circunstancia agravante.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 186, Ser. 2ª.

7. **Falsificación**—La defraudación por medio de la falsi-

1—Véase: *Defraudación*, núm. 1.

2—El art. 277 del Cód. Pen. vig., habla de falsificación hecha en documentos en que sea necesaria la firma ó el sello.

3—La redacción del art. 31 de la Ley de Proc. Crim. indica que sus incisos importan otras tantas escepciones motivadas por la naturaleza de los delitos. Lo propio resulta de lo dispuesto en el art. 28, al determinar la jurisdicción del Juez Correccional.

4—Arts. 277 y 279 del Cód. Pen. vig.

6—Véase: verb. *Estafa*, núm. 7.

7—Véase: verb. *Defraudación*, núm. 6.

FAL

ficación de la firma del demandado, debe ser penado con el máximo de la pena.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 203, Ser. 2ª.

Falsificación—Véase: *Estafa*, núm. 8.

Falta de causa—Véase: *Excepción de falsedad*, número 1.

Falta de derecho—Véase: *Excepción de falta de personería*, núm. 4.

Falta de personería —Véase: *Excepción de falsedad*, número 1—*Sobreseimiento*, núm. 4.

Fallecimiento—Véase: *Recurso*, núm. 1—*Lesión*, núm. 1—*Herederó*, núm. 1—*Capellanía*, núm. 2.

1. Fallido—Su fallecimiento, hace procedente el levantamiento de la fianza de escarcelación, si los acreedores debidamente citados no se opusieren.—Jur. Com., tom. 5, pág. 149, Ser. 2ª.

2. Fallido—Ante la ley criminal se encuentra éste amparado por las mismas disposiciones que los reos de otros delitos, aun cuando debido al estado del juicio de quiebra se encuentre sujeto á la jurisdicción comercial.—Jur. Com., tom. 9 pág. 349, Ser. 2ª.

1—Los acreedores fueron citados bajo apercibimiento de que en caso de no comparecer se levantaría la fianza: no comparecieron, correspondiendo hacer efectivo el apercibimiento.

2—Se trata de saber si el comerciante declarado en quiebra y constituido en arresto puede ser encarcelado bajo fianza. La Cámara resolvió afirmativamente, por mayoría de votos, la que se fundaba en que, el arresto del fallido procede en los casos determinados por el art. 1396 del Cód. de Com. cuando no hubiese dado cumplimiento á lo dispuesto en el art. 1389, ó por su fuga ú ocultación; debiendo tenerse presente que estos hechos no bastan para autorizar la presunción de culpa ó fraude, que es lo que da lugar al procedimiento criminal, pues pueden haber sido producidas por otras causas.



FAL

3. **Fallido**—Carece de personería para gestionar la revocatoria del auto de quiebra, mientras no se constituya en arresto.—Jur. Com., tom. 9, pág. 369, Ser. 2^a.

4. **Fallido**—La prisión preventiva que la ley estatuye

3—Se desprende de lo dispuesto en el art. 1396, inc. 6º del Cód. de Comercio.

4—El Juez de 1ª Inst. decretó la prisión de los gerentes, y apelado el auto fué revocado por la Cámara, fundándose en que las sociedades anónimas son personas jurídicas y como tales son consideradas como personas enteramente distintas de sus miembros—arts. 33 y 39 del Código Civ.—Que al establecer el art. 1396 del Cód. de Com. en su inc. 6º, que la providencia de declaratoria de quiebra deberá contener la orden de arresto del fallido cuando éste no hubiese cumplido con las disposiciones del art. 1389 al presentarse en estado de quiebra y cuando la declaración se hiciera á instancia de los acreedores ó por fuga ó ocultación del comerciante: Que tanto las disposiciones de este artículo como su correlativo, el art. 1389, importan medidas precaucionales, que se toman contra la persona de los fallidos, solo son aplicables á las personas naturales, responsables individualmente por los hechos en ellos previstos, y no á las personas jurídicas, como entes ideales no pasibles de pena, por no ser capaces de cometer delitos: Que los mandatarios ó administradores de las personas jurídicas tampoco se encuentran comprendidos en las precitadas disposiciones por ser enteramente distintos de la sociedad que administran: Que si bien son justiciables de las responsabilidades por dolo ó fraude en el ejercicio de sus funciones, no por eso puede decretarse la prisión preventiva. Todos estos argumentos pueden aceptarse como principio general cuando existe una sociedad anónima; pero en el caso presente, no existía tal sociedad en el sentido legal de la palabra, porque para que una corporación sea considerada persona jurídica, se requiere la autorización del Estado, y recién entonces comienza su existencia—art. 45, Cód. Civ.—La sociedad anónima que motivó este fallo no tenía el carácter de persona jurídica por que sus estatutos no habían sido aprobados por el Superior Gobierno y por consiguiente tenía y debía ser considerada como simple asociación comercial—art. 46, *ibid.*—Sugeta por consiguiente, en todo á las leyes mercantiles, y por tanto á la disposición del inc. 6º del art. 1396. Del fallo no resulta que la sociedad que motivó las actuaciones no estaba inscrita en el Registro Público



FAL — FIL

contra el fallido, no es procedente contra el gerente de una sociedad anónima declarada en quiebra.—Jur. Com., tomo 9, pág. 421, Ser. 2ª.

Fallido—Véase: *Simulación*, núm. 3—*Quiebra*, núm. 8.—*Posiciones*, núm. 11—*Fianza*, núm. 1.

Fallo rápido—Véase: *Incidentes*, núm. 1.

Fecha—Véase: *Letra de cambio*, núm. 2.

Fecha determinada—Véase: *Chancelación*, núm. 2.

1ª. Fianza—No procede la libertad bajo fianza si el delito puede ser penado con más de dos años de prisión.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 200, Ser. 2ª.

2. Fianza—Debiendo ésta responder al cumplimiento de la pena impuesta al fallido, debe tenerse en cuenta sólo la pena y no el importe de las deudas del concurso.—Jur. Com., tom. 10, pág. 285, Ser. 2ª.

Fianza—Véase: *Escarcelación bajo fianza*, núms. 3, 4, 5, 6, 7 y 8—*Fallido*, núm. 1—*Adulterio*, núm. 3 y 4—*Escarcelación* núm. 1.

Filiación—Véase: *Poder especial*, núm. 3.

1ª. Filiación adulterina—La prohibición de indagarse á

de Comercio, pero nos consta personalmente que este era el caso, la sociedad no estaba inscrita.

1ª—Art. 376 del Cód. de Proc. Crim.—Se trataba del delito de disparo de arma de fuego, que es penado con uno á tres años: habiendo pedido el Agente Fiscal la imposición de año y medio, y á pesar de esto se opuso á la escarcelación habiendo la Cámara confirmado el auto, por sus fundamentos.—Véase: verb. *Escarcelación bajo fianza*, núm. 3.

2.—La fianza de los fallidos es tan solo de cárcel segura, según se desprende de lo dispuesto por la ley de 6 de Octubre de 1890, y art. 1396, inc. 6º del Cód. de Com.

1ª.—Puede suceder que el hijo reclame el estado que le corresponde ó que cualquier otro, para constestar é impugnar el que alguno se atribuye sin derecho, lo haga. Como dice Marcadé, la contestación de estado, es la



FIL — FIR

cerca de ésta, no es absoluta, solo es aplicable á los hijos espúreos en las acciones que iniciasen contra sus padres, pero no cuando ellos pretendan usurpar un estado civil que no les corresponde.—Jur. Com., tom. 10, pág. 97, Ser. 2ª.

1. **Filiación natural**—Reconocida ésta, la madre carece de personería para intervenir en la administración de los bienes de su hijo natural.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 54, Ser. 2ª.

Firma—Véase: *Cotejo de letras*, núm. 1—*Tentativa de estafa*, núm. 1—*Falsificación*, núm. 2—*Letra de cambio*, núm. 3—*Moratorias*, núm. 1—*Defraudación*, núm. 6—*Estafas*, núms. 7 y 8—*Jurisdicción prorrogada*, núms. 1 y 2.

acción por la cual se pretende que ese estado, sea de hijo legítimo, sea de natural, de que alguien se encuentra en posesión no le pertenece; y recíprocamente la acción por la cual el hijo quiere hacerse atribuir un estado, de que no se encuentra legalmente en posesión pero que pretende establecerlo—tom. 2º, pág. 18, art. 315, núm. 1.—En cuanto á lo que concierne al estado de hijo legítimo, nuestro Código, empieza á tratar de ello desde el art. 259. A esta acción, Freitas la llama cuestión de filiación, y en realidad no es sino una especie particular de las que se dan en contestación de la legitimidad, refiriéndose á la hipótesis de que se escluya al hijo de un modo indebido, de la familia á que legítimamente pertenece: el derecho para reclamar el estado que le corresponde en la familia se le concede perpétuamente, y viceversa se acuerda también, para impugnar la pretensión de quien intentando usurpar un estado que no le pertenece, trata de introducirse indebidamente en una familia, pudiendo oponerse á ello cualquiera á quien perjudique, en todo tiempo, porque tal acción es imprescriptible pues el estado de familia hallándose fuera del comercio, no se adquiere ni se pierde por prescripción—arts. 257 y 262 del Cód. Civ.—Es imprescriptible asimismo, porque no se designa término para entablar dicha acción.

1.—La madre natural no tiene la administración de los de su hijo—art. 336 del Cód. Civ.—Esta resolución está de acuerdo con la jurisprudencia que la Cámara tiene establecida.



FIR—FUE

Firma á ruego—Véase: *Esección de inhabilidad de título*, núm. 5.

Firma social—Véase: *Obligaciones*, núm. 1—*Quitas*, núm. 1—*Socios*, núm. 2.

Firma de funcionarios públicos—Véase: *Falsificación*, número 4.

Firmante—Véase: *Letra de cambio*, núm. 1—*Intereses*, núm. 2.

Fiscal—Véase: *Agravación de la pena*, núm. 1.

Formalidad—Véase: *Protesto*, núms. 2, 5 y 6—*Peritos*, núm. 2.

Formalidades—Véase: *Protesto*, núm. 2.

1. Fractura—Para entrar á una habitación, solo puede ser penada como violación de domicilio, mientras no exista prueba plena sobre la tentativa del robo.—Jur. Crim., tomo 6, pág. 317, Ser. 2ª.

Fractura—Véase: *Robo*, núm. 3.

Frasas inconvenientes—Véase: *Escusación*, núm. 4.

Fraude—Véase: *Rendición de cuentas*, núm. 1.

Frutos—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 14.

1ª. Fuero federal—No puede ser invocado por el argentino, si el actor extranjero inicia el litigio ante la jurisdicción común—Jur. Civ., tom. 10, pág. 260, Ser. 2ª.

2. Fuero federal—La acción de rendición de cuentas

1ª—Si bien el art. 2, inc. 2º de la Ley sobre jurisdicción y competencia de los Trib. Nac., establece que los Jueces de Sección conocerán de las causas en que sean parte un ciudadano argentino y un extranjero, dicho artículo no es aplicable cuando el extranjero renunciando al fuero federal inicia el juicio ante la jurisdicción ordinaria, queda la causa radicada ante la justicia ordinaria, que no puede ser traída á la jurisdicción nacional por recurso alguno, salvo en los casos especificados en el art. 14 de la misma ley—Véase: art. 12, inc. 4º.



FUE—FUR

corresponde á la jurisdicción común, aun cuando las operaciones encomendadas pudieran corresponder al fuero federal.—Jur. Com., tom. 10, pág. 295, Ser. 2ª.

Fuero federal—Véase: *Jurisdicción federal*, núms. 1 y 2.

Fuerza—Véase: *Violación de domicilio*, núm. 2.

Fuerza ejecutiva—Véase: *Escepción de falsedad*, núm. 3.

Fuerza legal—Véase: *Contratos*, núm. 1.

Fuerza mayor—Véase: *Cosa vendida*, núm. 1.

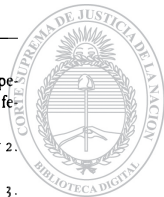
Funcionarios públicos—Véase: *Falsificación*, núm. 2—

Personería, núm. 6—*Violencia*, núm. 1.

Funciones—Véase: *Protesto*, núm. 3.

Funciones públicas—Véase: *Personas jurídicas*, núm. 1.

Furor—Véase: *Premeditación*, núm. 1.





Gananciales—Véase: *Jurisdicción*, núm. 2.

Ganzúa—Véase: *Robo*, núm. 6.

Garantía—Véase: *Chancelación*, núm. 1.

1^a. **Gastos**—Estando el comisionista ó despachante de aduana equiparado al mandatario, tiene derecho para exigir del mandante todos los gastos que el mandato haya ocasionado, aun cuando no justifique haberlos pagado, siempre que hayan resultado indispensables.—Jur. Com., tom. 7, pág. 42, Ser. 2^a.

2. **Gastos**—No pueden ser reconocidos como de legítimo abono, los gastos que el comisionista no justifique plenamente.—Jur. Com., tom. 9, pág. 294, Ser. 2^a.

Gastos—Véase: *Sociedad*, núm. 1—*Jurisdicción*, número 8.

1^b. **Gerente**—La prisión preventiva que la ley estatuye contra el fallido, no es procedente contra el gerente de una sociedad anónima declarada en quiebra.—Jur. Crim., tomo 9, pág. 421, Ser. 2^a.

Gerente—Véase: *Posiciones*, núm. 10—*Personas jurídicas*, núm. 2.

1^a—Véase: verb. *Comisionista*, núm. 1.

2—Arts. 81, 83, 382 y 383 del Cód. de Com. ant.

1^b—Véase: verb. *Fallido*, núm. 4.

GES — GRA

Gestiones estrajudiciales—Véase: *Honorarios*, números 9 y 10.

Girante—Véase: *Acción ejecutiva*, núm. 3.

Giro—Véase: *Pago á cuenta*, núm. 1.

Gracia—Véase: *Reivindicación*, núm. 2.

Grados—Véase: *Parentesco*, núm. 1.

Gravamen—Véase: *Inhibición*, núm. 7.





1ª. **Habilitación**—La aprobación tácita y consecutiva de los balances en que se hacen constar las condiciones estipuladas con un dependiente, es prueba suficiente del contrato de habilitación, aun cuando no exista convenio es preso.—Jur. Com., tom. 8, pág. 372, Ser. 2ª.

Habitación—Véase: *Fractura*, núm. 1.

Habitante—Véase: *Incendio*, núm. 1.

Hechos—Véase: *Certificado*, núm. 1—*Excepción de defecto legal*, núm. 9—*Libros de comercio*, núm. 8—*Prueba*, núm. 14.

Hechos alegados—Véase: *Rebeldía*, núm. 3.

Hechos concomitantes—Véase: *Negativa*, núm. 2.

Hechos criminales—Véase: *Sociedad*, núm. 8.

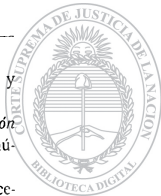
1ª. **Heredero**—Mientras no se justifique el fallecimiento de los herederos forzosos, el marido no puede ser declarado único heredero de su esposa.—Jur. Civ., tom. 9, página 208, Ser. 2ª.

2. **Heredero**—El deudor puede oponer al esposo heredero las causas que lo inhabiliten según la ley, para serlo, pues para él no hace cosa juzgada la declaratoria, cuya

1ª.—Véase: verb. *Balances*, núm. 1.

1ª.—De acuerdo con los principios legales que rigen el caso.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Cónyuge*, núm. 2.

2.—Véase: verb. *Cosa juzgada*, núm. 2.



HER

nulidad en cuanto afecta sus derechos puede invocar y conseguir.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 239, Ser. 2ª.

Heredero—Véase: *Administrador*, núm. 1—*Excepción de falta de personería*, núm. 3—*Posesión al heredero*, números 1 y 2—*Prescripción*, núm. 9—*Títulos*, núm. 6.

1. **Herederos**—Los conocidos por testamento, no necesitan justificar su carácter por otros medios si no les fuere contestado.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 223, Ser. 2ª.

2. **Herederos**—Carecen de acción para querellarse por delitos cometidos contra su causante, si éste no hubiese iniciado la acusación, en cuyo caso aquéllos tienen personería para continuarla.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 428, Ser. 2ª.

Herederos—Véase: *Personería*, núm. 5—*Acción*, núm. 2—*Prescripción*, núm. 8.

1ª. **Herederos legítimos**—Reconocido por éstos el carácter de coheredero, el Juzgado debe declararlo.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 23, Ser. 2ª.

1ª. **Herederos mayores**—El reconocimiento de un crédito contra la testamentaria, hecho por los herederos mayores, no afecta el derecho de los menores, que solo pueden ser condenados en la parte proporcional en virtud de prueba plena.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 303, Ser. 2ª.

Herederos mayores—Véase: *Prescripción*, núm. 11.

Herederos menores—Véase: *Obligación de hacer*, núm. 2.

2—Véase: verb. *Acusación*, núm. 3.

1ª—De acuerdo con la jurisprudencia constante de nuestros Tribunales—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Heredero*, núm. 6, y *Herederos*, núm. 11. —Es necesario tener presente que ese reconocimiento no puede perjudicar los derechos de terceros que puedan alegar interés en contestarlo. —Véase: verb. *Derechos hereditarios*, núm. 1.

1ª—Véase: verb. *Crédito*, núm. 1.

HER—HIJ

Herida—Véase:—*Informe médico*, núm. 1—*Alevosía*, núm. 2—*Homicidio*, núm. 26.

1. **Heridas**—Justificada la intención de deformar á la víctima, las heridas deben ser penadas con cuatro años y medio de prisión si el reo consiguió su objeto.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 165, Ser. 2ª.

2. **Heridas**—Causadas por imprudencia deben ser penadas.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 225, Ser. 2ª.

3. **Heridas**—Siendo la peritonitis consecuencia posible de las heridas inferidas en el abdomen, deben considerarse causa eficiente de la muerte.—Jur. Crim., tom. 8, página 111, Ser. 2ª.

4. **Heridas**—Inferidas en riña, cuya curación dure un mes, deben ser penadas con el minimum de la pena, si existiesen circunstancias atenuantes.—Jur. Crim., tom. 7, página 124, Ser. 2ª.

Heridas—Véase: *Lesiones*, núm. 2—*Mutilación*, núm. 1—*Asesinato*, núm. 2—*Incapacidad para el trabajo*, núm. 1.

Herido—Véase: *Lesiones*, núm. 11.

Hijo espúreo—Véase: *Estado civil*, núm. 3—*Filiación adulterina*, núm. 1.

1—Art. 119, inc. 3º, Cód. Pen. Este artículo no exige la intención de deformar á la víctima, basta que la lesión se cometa voluntariamente.

2—La herida causada no fué intencional sino simplemente culpable.

3—De informes médicos expedidos por varios facultativos resultaba uniforme la aseveración de que la peritonitis es una de las consecuencias posibles de dichas heridas, y que esta enfermedad se produce en la generalidad de los casos.

4—Se trata de heridas calificadas por el art. 119 del Cód. Pen., de heridas corporales, correspondiendo la aplicación del art. 120, inc. 1º, que fija la pena de 1 á 3 años. Si concurren circunstancias atenuantes está el Tribunal facultado para aplicar el minimum.



HIJ — HOM

1ª. **Hijo natural**—Justificada la posesión del estado que implica el reconocimiento tácito del hijo natural, los Tribunales deben amparar la patria potestad, entregando el menor al padre natural para su educación.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 307, Ser. 2ª.

2. **Hijo natural**—El reconocimiento hecho por escritura pública, solo forma prueba contra el que lo ha practicado, pero carece de valor contra los que desconozcan y reclamen la paternidad.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 307, Ser. 2ª.

3. **Hijo natural**—La prescripción de la ley que niega valor alguno á la confesión ó declaración de la madre, negando ó afirmando la paternidad legítima, es aplicable á los hijos naturales.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 307, Ser. 2ª.

4. **Hijo natural**—No reconocido en debida forma, no puede ser incluido en la declaratoria de herederos como legítimos, no obstante el subsiguiente matrimonio de los padres.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 274, Ser. 2ª.

1. **Homicidio** — Cometido incidentalmente, se supone

1ª —Arts. 328 y 330 del Cód. Civ.

2.—Dos personas se arrogaban recíprocamente el carácter de padre de una niña: uno de ellos que vivía haciendo vida marital con la madre, reconoció en documento público como hijo natural después que el otro entabló demanda sobre paternidad: ese reconocimiento hecho por uno de ellos en nada puede perjudicar al otro, porque si bien es cierto que el reconocimiento es irrevocable, lo que solo quiere decir que el que lo practica no puede volver sobre él, pero en manera alguna importa cerrar las puertas á los demás para hacer uso de igual derecho probando su paternidad, siendo así que el art. 335 del Cód. Civ. establece que el reconocimiento que de sus hijos hagan los padres naturales pueden ser contestados por sus propios hijos ó por los que tengan interés en hacerlo.

3.—Véase: *Confesión de la madre*, núm. 1.

4.—Es necesario que el reconocimiento sea hecho por los padres en debida forma—arts. 317 y 318 del Cód. Civ.



HOM

por culpa ó negligencia pero sin dolo, y en consecuencia exclusivamente el delito sin que la culpa pueda conceputarse circunstancia agravante.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 16, Ser. 2ª.

2. **Homicidio**—No puede el reo ser responsabilizado cuando el fallecimiento ha tenido lugar por causas extrañas á las lesiones.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 43, Ser. 2ª.

3. **Homicidio**—El causado por culpa ó negligencia, pero sin intención criminal, debe ser penado con año y medio de prisión.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 128, Ser. 2ª.

4. **Homicidio**—El cometido en virtud de provocaciones

2—No constaba que la herida hubiese sido de las calificadas por la ciencia médica como mortal, ni que la muerte hubiese sido una consecuencia necesaria de la herida recibida, y sí más bien una consecuencia de la mala constitución física de la víctima.

3—El conductor de un coche de tramway llevó por delante dos criaturas, lesionando gravemente á una de ellas y ocasionando la muerte de la otra: para excusarse el cochero dijo, que el mayoral le había dicho que iban atrasados y que apurara: que al efecto dió unos latigazos á los caballos y soltó el freno del coche, habiendo asimismo recibido orden de no parar para señoras: que debido a estas circunstancias le fué imposible impedir el accidente, pues no pudo pararse á causa de la velocidad con que marchaba. Estas circunstancias fueron corroboradas por el mayoral y testigos presenciales. Dichas excusas no son de tenerse en consideración por cuanto la orden recibida no podía tener más alcance que tratar de recuperar el tiempo perdido pero sin infringir las ordenanzas municipales que fijan la marcha de los coches. En consecuencia el accidente es imputable á su autor, siendo calificado como homicidio el primero—arts. 94 y siguientes del Cód. Pen. vig.—y como lesiones corporales el segundo—arts. 119 y siguientes.—Ambos delitos causados por culpa ó imprudencia, siendo esa culpa calificada como grave por los arts. 15 y 16.

4—El homicidio fué cometido por un marido en la persona del amante de su esposa. Conocidas las relaciones ilícitas por el esposo, logró éste restablecer la paz conyugal debido á la intervención de la Curia. Posteriormente estando el esposo en la puerta de su casa se



HOM

graves é ilícitas debe ser penado con tres años de prisión.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 193, Ser. 2ª.

5. **Homicidio**—Sin premeditación ni alevosía, debe ser castigado con seis años de presidio, si existe como circunstancia atenuante el terror, aunque sea infundado.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 71, Ser. 2ª.

6. **Homicidio**—Aun cuando concurran la premeditación

presentó el amante de la esposa pretendiendo ver á ésta: el esposo le pidió que se retirase á lo que el amante contestó agrediéndolo á empujones y derribándolo. Levantado el esposo tomó un cuchillo infiriéndole aquél una herida de cuyas resultas falleció á los dos días. Corresponde la aplicación de la pena del sumario de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 96 y 83, pues no milita á su favor ninguna de las reglas que establece el art. 81 del mismo.

5—De acuerdo con lo preceptuado en el art. 196 del Cód. Pen. antiguo, que se refiere al delito cometido sin reflexión ni premeditación.

0—Para que pueda aplicarse la disposición del art. 95 del Cód. Penal, se requiere que exista la intención homicida, el *animus occidendi*. En el presente caso el hecho tuvo lugar con la concurrencia de los siguientes antecedentes. Una persona era acreedora de otra, esta última evadía el pago por todos los medios á su alcance: por último resolvió el acreedor hacerse justicia cobrándose por su propia mano y vengarse en consecuencia. A este efecto se armó de un revólver y fué á la casa de aquél á buscarlo, cobrándole nuevamente con el mismo resultado negativo, y lejos de obtener el cobro fué insultado por el deudor; salieron juntos á la calle, donde fué insultado nuevamente, y entonces quedándose atrás el acreedor hizo fuego por la espalda contra el deudor hiriéndole y ocasionándole la muerte á consecuencia de la herida. Este delito ¿debe ser calificado y penado como asesinato? El art. 95 del Cód. Pen., en su inc. 1ª, considera como asesinato el homicidio ejecutado con alevosía, como asimismo el cometido con premeditación. Sin embargo, si bien es cierto que en el homicidio simple basta para caracterizarlo el dolo indeterminado, no sucede lo propio en el asesinato y otros delitos que requieren una intención directa que es la que constituye el dolo determinado según explica Haus, cuya teoría conviene tener presente por la importancia de la materia y por la frecuente aplicación de que puede ser objeto esta doctrina en nuestros Tribunales. «Cuando el



HOM

y alevosía, no puede ser calificado y penado el homicidio como asesinato si no existe prueba plena de la intención homicida del reo.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 398, Ser. 2ª.

7. **Homicidio**—Justificada la existencia de un desafío irregular, el homicidio debe pensarse sin determinar de quién partió la provocación, ni aun si procede la legítima defensa.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 215, Ser. 2ª.

8. **Homicidio**—Si del informe médico resulta que la lesión no tiene carácter grave, no puede pensarse como homicidio el fallecimiento sobreviniente, si no se justifica plenamente que fué causado por la lesión.—Jur. Crim., tomo 8, pág. 86, Ser. 2ª.

agente», dice, «ha cometido el hecho con intención indeterminada de dañar se le debe imputar como voluntario é intencional el resultado de su acción, cualquiera que sea; pero no se le imputa sino este resultado: *dolus indeterminatus determinatus eventum*. Sin embargo, si se ha causado la muerte, habrá homicidio voluntario pero no calificado. Si el atentado cometido voluntariamente pero con la intención indeterminada de dañar, ha causado la muerte de la persona que fué objeto de él, es un homicidio voluntario pero no calificado—parricidio, asesinato, envenenamiento, etc.—por más que esta intención comprenda en su generalidad el designio de matar.—Derecho Pen., Belga, tom. 1º, pág. 223, núms. 312 y 313.—Aun dado el caso pues, que la concurrencia de la alevosía y de la premeditación no conviertan el delito de homicidio en asesinato, no por eso debe prescindirse de ellos como circunstancias agravantes, ni pueden dejar de influir en la determinación de la pena.

7—Siempre que ese desafío haya sido aceptado por la otra parte. En cuanto á la última parte del sumario debemos hacer notar que no está de acuerdo con otro caso resuelto en el que se dijo que hacia impreciso la legítima defensa, pero debía tomarse en cuenta de parte de quién procedía la provocación.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Desafío irregular*, núm. 1. Puede verse además el tom. 1º, verb. *Homicidio*, número 1347.

8—De acuerdo con lo resuelto en el núm. 2.



HOM

9. **Homicidio**—Simple, cometido por provocación de la víctima, debe ser penado con diez años de presidio.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 111, Ser. 2ª.

10. **Homicidio**—Simple con circunstancias agravantes, debe ser penado con diez años de penitenciaría.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 130, Ser. 2ª.

11. **Homicidio**—Si no existen circunstancias agravantes ni atenuantes debe ser penado con ocho años de prisión.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 231, Ser. 2ª.

12. **Homicidio**—Con circunstancias atenuantes y agravantes, debe ser penado con seis años de presidio.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 426, Ser. 2ª.

13. **Homicidio**—Simple, debe ser penado con seis años de penitenciaría.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 262, Ser. 2ª.

14. **Homicidio**—Con provocación por parte de la víctima, debe ser penado con cuatro años de presidio.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 415, Ser. 2ª.

15. **Homicidio**—Debe ser penado con cuatro años y medio de penitenciaría, si el reo es menor de edad.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 188, Ser. 2ª.

16. **Homicidio**—La provocación sin armas, no puede

9—Aquí se castigó el homicidio simple con diez años de prisión por que concurrían como circunstancias agravantes, la premeditación y alevosía, siendo aplicable el art. 96, inc. 1º: cuando hay circunstancia atenuante, como lo es la provocación, corresponde de tres á seis años de presidio, como lo establece el inc. 3º.

10—Art. 96, inc. 1º, Cód. Pen.

11—De seis á diez años, dice el art. 96 en su inc. 2º.

12—Véase: *Circunstancias atenuantes*, núm. 1.

13—Con presidio de seis á diez años, dice art. 96 en su inc. 2º.

14—Véase el núm. 9.

15—Arts. 96, inc. 3º; y 83, inc. 2º, Cód. Pen. vigente.

16—Arts. 94 y siguientes, 96, inc. 3º; y 83, inc. 4º, Cód. Pen.



HOM

fundar la escepción de legitima defensa, pero atenúa la pena del homicidio, la que debe reducirse á tres años.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 206, Ser. 2ª.

17. **Homicidio**—La tentativa de homicidio debe ser penada con dos años de prisión, si existen circunstancias atenuantes y agravantes.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 55, Ser. 2ª.

18. **Homicidio**—Por sofocación, estando la víctima insensibilizada, debe calificarse de asesinato y castigarse con pena capital.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 188, Ser. 2ª.

19. **Homicidio**—El hecho de saltar una cerca de día y sin violencia, no basta para justificarlo, solo puede considerarse como circunstancia atenuante.—Jur. Crim., tomo 7, pág. 386, Ser. 2ª.

20. **Homicidio**—Sin circunstancias agravantes ni atenuantes, debe ser penado con ocho años de presidio.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 427, Ser. 2ª.

21. **Homicidio**—Sin circunstancias agravantes ni ate-

17.—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 53 del Cód. Pen., cuando concurren circunstancias agravantes y atenuantes, los Tribunales, según su prudente arbitrio, aplicarán la pena dentro de los límites señalados en el art. 52: la pena del sumario está fundada en el art. 99, pues se trata del disparo de arma de fuego.

18.—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 95 del Cód. Pen. en su inc. 1ª, cuando dice que el que mata á otro será castigado con la pena de muerte cuando se perpetra con alevosía siempre que no haya circunstancia atenuante.

19.—No queda exento de pena, porque el hecho no reúne las condiciones requeridas por el art. 81, en su inc. 11, donde se exige que el que penetre lo haga con escalamiento, fractura ó fuerza, ó que encontrado dentro del hogar opusiese resistencia.

20.—Con presidio de seis á diez años, dice el art. 96, inc. 2º del Código Pen.

21.—El Juez de 1ª Inst. condenó al procesado á cuatro años y medio



HOM

nuantes, debe ser penado con cuatro años y medio de penitenciaría.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 36, Ser. 2ª.

22. **Homicidio**—Cometido en riña, debe ser penado con cuatro años y medio de penitenciaría, si existen circunstancias atenuantes.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 93, Ser. 2ª.

23. **Homicidio**—Si el homicidio tuvo lugar en presencia de varias personas, no existe alevosía, la que requiere la ausencia de todo peligro para el agresor.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 161, Ser. 2ª.

24. **Homicidio**—Este supone siempre la intención criminal del reo, cualesquier que hayan sido los antecedentes que hayan dado origen al delito.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 243, Ser. 2ª.

25. **Homicidio**—Cometido con premeditación y alevosía, debe ser castigado con presidio por tiempo indeterminado, si existe una circunstancia atenuante.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 339, Ser. 2ª.

26. **Homicidio**—A los efectos de la responsabilidad del

de penitenciaría, porque según él¹ concurrían circunstancias atenuantes. La Cámara dijo que no habían tales escepciones y que por consiguiente debía castigarse como homicidio cometido sin circunstancias atenuantes ni agravantes, pero que dada la disposición del art. 693 del Cód. de Proc. la pena no podía variarse.

22—Según el art. 96, inc. 3º, la pena es de tres á seis años de presidio si hubiese una sola circunstancia atenuante.

23—El art. 84 del Cód. Pen. para caracterizar la alevosía requiere que se proceda «sin peligro para el agresor, á traición y sobre seguro.»

24—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Lesiones corporales*, núms. 2 y 4; tomo 1º, verb. *Voluntad criminal*, núms. 2718, 2719 y 2720.

25—Art. 95, inc. 2º del Cód. Pen.

26—Este caso tiene alguna analogía con los núms. 2 y 8. Cuando la muerte sigue á las heridas inferidas, aunque ellas no sean necesariamente mortales, esta circunstancia en nada influye para la aplicación de la pena.



HOM

acusado por este delito, basta que la muerte se haya producido á consecuencia de la herida, aun cuando resulte científicamente que ésta no era necesariamente mortal.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 233, Ser. 2ª.

27. **Homicidio**—En pelea, con provocación de la víctima, debe ser penado con cuatro años y medio de penitenciaría.—Jur. Crim., tom. 10, página 180, Ser. 2ª.

28. **Homicidio**—Con circunstancias agravantes y atenuantes, debe ser penado con seis años de penitenciaría si el reo es menor de edad.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 246, Ser. 2ª.

Homicidio—Véase: *Infanticidio*, núm. 1—*Circunstancias atenuantes*, núm. 3.

1. **Homicidio simple**—Con circunstancias atenuantes, debe ser penado con tres años de prisión.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 54, Ser. 2ª.

2. **Homicidio simple**—Sin circunstancias atenuantes ni agravantes, debe ser castigado con cuatro años y medio de presidio.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 439, Ser. 2ª.

3. **Homicidio simple**—Con circunstancias agravantes y

27—Arts. 83, inc. 4º; y 94, Cód. Pen. vig.

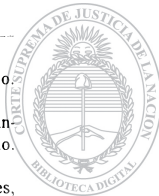
28—Arts. 53, 62 y 96, inc. 3º del Cód. Pen. vig.

1—Si hay una sola circunstancia atenuante, el homicidio se castiga con tres á seis años de presidio—art. 96, inc. 3º del Cód. Pen.—Si hay dos ó más circunstancias, con tres á seis años de penitenciaría—inciso 4º *ibid*.

2—Con presidio de seis á diez años dice el art. 96, en su inc. 2º. Aquí se aplicó la pena de cuatro años y medio, porque el Fiscal de 1ª Inst. consintió la sentencia y en este caso no puede el Superior reformarla en sentido desfavorable al reo—art. 693 del Cód. de Proc.—Tampoco puede el Fiscal de las Cámaras adherirse á la apelación interpuesta por el reo, pues la ley no lo autoriza.

3—El art. 53 del Cód. Pen. establece, que si concurriesen á la vez circunstancias agravantes y atenuantes, los Tribunales aplicarán las pe-



**HOM — HON**

atenuantes, debe ser castigado con diez años de presidio.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 133, Ser. 2ª.

4. **Homicidio simple**—Con una circunstancia atenuante, debe ser penado con cuatro años y medio de presidio.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 139, Ser. 2ª.

5. **Homicidio simple**—Con circunstancias atenuantes, debe ser penado con cuatro años de presidio.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 96, Ser. 2ª.

6. **Homicidio simple**—Con circunstancias agravantes, debe ser penado con doce años y medio de penitenciaría.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 125, Ser. 2ª.

7. **Homicidio simple**—Sin circunstancias atenuantes ni agravantes, debe ser penado con ocho años de presidio.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 50, Ser. 2ª.

8. **Homicidio simple**—Sin circunstancias agravantes ni atenuantes, debe ser penado con ocho años de prisión.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 172, Ser. 2ª.

1ª. **Homicidios**—La comisión de dos, solo importa una circunstancia agravante de la pena con que debe castigarse uno de ellos, y la existencia de circunstancias atenuantes permite ejercer el prudente arbitrio judicial.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 133, Ser. 2ª.

Honorabilidad—Véase: *Injurias*, núm. 1.

1ª. **Honorarios**—La manifestación de disconformidad con las dentro de los límites señalados, según su prudente arbitrio. La pena del sumario corresponde aplicarse de acuerdo con lo establecido en el art. 96, inc. 2º.

4—Art. 96, inc. 3º del Cód. Pen.

5—Art. 96, inc. 4º del Cód. Pen.

6—Art. 96, inc. 1º, Cód. Pen.

7—Art. 96, inc. 2º, Cód. Pen. vigente.

8—Véase nota precedente.

1ª—Art. 87, Cód. Pen.

1ª—De acuerdo con lo preceptuado en el art. 16 del Cód. de Proc.

HON

los honorarios, hecha por el mandatario debe considerarse hecha por el mandante sin que deba entenderse con éste personalmente.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 50, Ser. 2ª.

2. **Honorarios**—El abogado, en el incidente seguido sobre cobro de honorarios, tiene derecho á hacerse patrocinar por otro letrado y á nombrar su representante.—Jur. Com., tom. 5, pág. 150, Ser. 2ª.

3. **Honorarios**—El Juez del concurso tiene jurisdicción para fijar los honorarios del depositario.—Jur. Com., tomo 5, pág. 213, Ser. 2ª.

4. **Honorarios**—Manifestada conformidad con la cuenta de honorarios, el Juzgado carece de jurisdicción para reformarlos aunque la parte retracte y eslique su manifes-

2—Se aducía como argumento para oponerse al pago de los honorarios las circunstancias de que el ejecutante era letrado y concurría diariamente á los Tribunales. Esos hechos no eximen al ejecutante del derecho que le acuerdan los arts. 8 y 9 del Cód. de Proc. para valerse ó no de la dirección de letrado para defenderse ni para valerse de apoderado que lo represente.

3—Es una consecuencia de la jurisdicción que ejerce el Juez en el juicio de concurso y en todos sus incidentes.

4—Presentada una cuenta de honorarios, el Juzgado ordenó se hiciera la manifestación de práctica: el interesado declaró que estaba conforme con dicha cuenta. Posteriormente dijo que había sufrido error tratando de explicarlo, y dice que no está conforme por considerarla exhorbitante. El Juzgado consideró que dicha rectificación había sido hecha en tiempo, pues no hay cosa juzgada, ni la cuenta había sido aceptada ni confirmada por el Juzgado, por tratarse además de trabajos de carácter causídico que deben apreciarse en equidad y justicia por el Juzgado. La Cámara revocó el auto diciendo que la explicación dada para retractar la manifestación de voluntad, era tardía, y que ella no estaba basada en ninguna de las causas que anulan el consentimiento: que tratándose de estos honorarios el Juzgado no ha podido hacer regulación, ni en más ni en menos, de la cantidad en que las partes como únicas interesadas, se habían conformado.



**HON**

tación de conformidad.—Jur. Com., tom. 5, pág. 222, Ser. 2ª.

5. **Honorarios**—La condenación en costas y los honorarios incluidos en una sentencia inapelable, son inapelables también.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 220, Ser. 2ª.

6. **Honorarios**—La regulación de honorarios contenida en una sentencia inapelable, es inapelable también.—Jur. Com., tom. 6, pág. 31, Ser. 2ª.

7. **Honorarios**—El abogado y procurador, carecen de acción contra el condenado en costas, para el cobro: solo tienen relaciones de derecho con la parte á quien han defendido.—Jur. Com., tom. 7, pág. 101, Ser. 2ª.

8. **Honorarios**—Regulados por la Cámara en la sentencia condenatoria, no son susceptibles de nueva regulación por el Inferior.—Jur. Com., tom. 7, pág. 160, Ser. 2ª.

9. **Honorarios**—De abogado, por trabajos estrajudiciales, cualquiera que sea el carácter que haya investido, deben ser fijados por peritos arbitradores.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 291, Ser. 2ª.

5—Se declaró que la sentencia era inapelable porque no se opusieron excepciones.—art. 501, Cód. de Proc.—Y consiguientemente se declaró inapelable en cuanto á las costas por estar éstas incluidas en aquélla y por ser parte integrante de ella. Esta ha sido la jurisprudencia constante de la Cámara de lo Civil: en la de lo Comercial se ha resuelto en el sentido de la apelabilidad de dichos autos.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Regulación de honorarios*, núm. 1.

6—Véase nota precedente.

7—No hay ninguna relación de derecho entre el vencido y el procurador y abogado del vencedor, porque éstos no son cesionarios de los derechos del vendedor.—Véase: Inst., tom. 1º, verb. *Honorarios*, núm. 1357, y con especialidad el verb. *Abogado*, núm. 5 del mismo tomo.

8.—Art. 63 del Apéndice al Cód. de Proc.

9—Véase: verb. *Abogado*, núm. 2.

HON — HUR

10. **Honorarios**—Justificada la prestación de servicios extraordinarios, el locador está obligado al pago de los honorarios de abogado, y procede su fijación por peritos cuando por tratarse de gestiones estrajudiciales no existen en expedientes determinados las respectivas constancias.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 66, Ser. 2ª.

11. **Honorarios**—La parte que presenta un documento en idioma extranjero, es la responsable del honorario del traductor.—Jur. Com., tom. 9, pág. 44, Ser. 2ª.

12. **Honorarios**—De los peritos nombrados por el Síndico debidamente autorizado, deben ser regulados por el Juez del concurso.—Jur. Com., tom. 9, pág. 49, Ser. 2ª.

Honorarios—Véase: *Dinero*, núm. 1—*Inapelable*, núm. 1—*Regulación*, núm. 1.

Hora señalada—Véase: *Posiciones*, núms. 1, 3 y 18—*Acusador*, núm. 1.

1ª. **Hotelero**—Los posaderos y hoteleros tienen privilegio especial y derecho de retención sobre los equipajes y efectos introducidos en sus establecimientos por los viajeros.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 349, Ser. 2ª.

1ª. **Hurto**—Con abuso de confianza, de más de quinientos pesos, debe ser penado con uno á tres años de presidio.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 200, Ser. 2ª.

10—Véase nota precedente.

11—De acuerdo con la jurisprudencia establecida por la S. C. N. en el tom. 11, pág. 262, Ser. 2ª.

12—En el auto en que se verificó el nombramiento, se consignó expresamente que el punto debía quedar sujeto á la disposición del artículo 1586 del Cód. de Com. ant. que regía entonces, y que dispone que esa clase de honorarios deben ser regulados judicialmente, siendo su abono á cargo del concurso—art. 1387 del mismo.

1ª—Véase: *Derecho de retención*, núm. 2.

1ª—Arts. 84, inc. 6º, y 193, inc. 2º.





HURTO

2. **Hurto**—El hecho eventual de salir premiado un billete de lotería, no cambia el delito de hurto si tuvo lugar antes del sorteo.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 219, Ser. 2ª.

3. **Hurto**—La ignorancia de la víctima del delito de hurto, no la inhibe el denunciarlo, si por aviso de terceros llega á su conocimiento, sin que estos pierdan su carácter de testigos para convertirlos en denunciantes.—Jur. Criminal, tom. 8, pág. 365, Ser. 2ª.

4. **Hurto**—Para el castigo de la tentativa de hurto, no debe tenerse en cuenta el poco monto de la cantidad sobre que podría recaer, pues debe graduarse sobre el minimum que fija la ley.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 365, Ser. 2ª.

5. **Hurto**—Con circunstancias agravantes, debe ser penado con dos años y medio de prisión.—Jur. Crim., tomo 10, pág. 208, Ser. 2ª.

Hurto—Véase: *Entrada*, núm. 1.

2—Y consiguientemente á los efectos de la escarcelación solo debe tenerse presente el valor del billete haciendo caso omiso del premio que llegue á obtener.

3—Véase: *Denunciantes*, núm. 1.

4—La ley establece el límite de 500, bajo esa suma el Juez debe graduar prudencialmente la pena—art. 193, inc. 1º del Cód. Pen.

5—Art. 193 del Cód. Pen.



Identidad de persona—Véase: *Escepción de cosa juzgada*, núms. 1 y 2.

Idioma extranjero—Véase: *Honorarios*, núm. 11.

Imperfecciones—Véase: *Posesión*, núm. 2.

Improrrogable—Véase: *Término de prueba*, núm. 1.

Imprudencia—Véase: *Veneno*, núm. 1—*Heridas*, número. 2.

Impuesto de papel sellado—Véase: *Papel sellado*, núm. 2
Declaratoria de herederos, núms. 1 y 4—*Sellos*, núm. 1.

Inacción—Véase: *Delitos*, núm. 2.

1. Inapelable—El auto en que no se hace lugar á que el apoderado manifieste su conformidad ó disconformidad con los honorarios del abogado, es apelable.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 50, Ser. 2ª.

Inapelable—Véase: *Honorarios*, núm. 6—*Rematador*, núm. 3—*Mejor proveer*, núm. 1—*Sentencia de remate*, núm. 1.

1—El Juez de 1ª Ins. dijo que no era apelable, porque el auto no estaba comprendido entre los enumerados en el art. 226 del Cód. de Proc. La Cámara declaró procedente el recurso porque consideró que el caso estaba comprendido entre los enumerados en el art. 226 citado. El apoderado tiene personería para intervenir en el incidente sobre cobro de honorarios, de acuerdo con lo establecido en el art. 16 del Cód. de Proc.

INC

1ª. Incapacidad—Si no se hace lugar á la declaratoria de incapacidad, las costas son á cargo de los denunciantes.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 72, Ser. 2ª.

2. Incapacidad—La de obligarse por ser demente el obligado, solo puede justificarse por declaratoria judicial anterior al acto.—Jur Civ., tom. 10, pág. 215, Ser. 2ª.

Incapacidad—Véase: *Curador definitivo*, núm. 1.

1ª. Incapacidad física—La prueba de ella puede resultar del conjunto de las declaraciones testimoniales, pero principalmente debe fundarse en los informes científicos de los médicos que hayan asistido al incapaz. —Jur. Civ., tomo 10, pág. 312, Ser. 2ª.

1ª.—Es de aplicarse lo dispuesto en el art. 221 del Cód. de Proc., que declara las costas á cargo del vencido.

2.—En principio general es exacto este sumario, pues así lo establece el art. 142 del Cód. Civ., al exigir un examen pericial previo para la declaratoria de incapacidad. Sin embargo, el art. 473 establece que los actos anteriores á la declaración de incapacidad podrán ser anulados, si la causa de la interdicción declarada por el Juez, existía públicamente en la época en que los actos fueron celebrados.—Véase: Inst., tom. 2º, verb. *Actos*, núm. 1.

1ª.—Tratándose de la prueba pericial, y hallándose el dictámen de los peritos uniformemente contestes, es considerada como que hace prueba plena—art. 178 del Cód. de Proc.—La incapacidad física puede y debe ser comprobada por facultativos y por consiguiente es la prueba principal que debe producirse y pesar en el ánimo de los jueces. Nadie puede dar mayor luz sobre el estado de incapacidad de una persona que un médico, y por consiguiente, es á él á quien debe recurrirse para su comprobación. Lo que se busca y desea, en los juicios, es el descubrimiento de la verdad, desentendiéndose de solemnidades y sutilezas, como lo dice el Conde de la Cañada.—Part. 1ª, Cap. 7º.—O como dice Caravantes, que los medios de prueba han sido establecidos por el legislador al solo efecto de evitar que el interés mal dirigido ó la falta de ilustración echase mano de medios que no contuviesen los límites de probabilidad que se requieren para considerar un hecho como existente. Si se trata de establecer un hecho verdadero, nada más correcto que



INC

Incapacidad física.—Véase: *Testamento*, núm. 1.

1ª. Incapacidad para el trabajo.—Para que pueda considerarse circunstancia agravante de las heridas, debe ser general, y no relativa para ciertos y determinados trabajos.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 44, Ser. 2ª.

Incapacidad del acreedor.—Véase: *Pago*, núm. 2.

1ª. Incendio.—Si el reo es el único habitante del almacén, la pena debe graduarse simplemente por el valor del perjuicio.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 413, Ser. 2ª.

2. Incendio.—Si pudo ser sofocado sin causar daño, solo debe ser calificado y penado como tentativa.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 193, Ser. 2ª.

1ª. Incidente.—Los jueces pueden rechazar de oficio la in-

dar la primacía á aquella prueba que se aproxime más á la verdad y esa prueba no puede ser otra que la suministrada por los testigos entendidos en la materia y cuyo dicho merece más fe, y necesariamente pueden estar más distantes de errar, que el testimonio de los profanos.

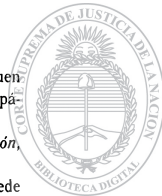
1ª.—Cuando la incapacidad es relativa, debe referirse á la profesión ó modo de vivir del lesionado. Así se desprende de la resolución de la Cámara cuando dice: «Que su profesión es la de maestro de piano, aquella circunstancia no puede tener la importancia decisiva que se le acuerda para la fijación de la pena establecida en dicho inciso, porque según sus propios términos, la incapacidad á que se refiere es para el trabajo en general y no para uno relativo, como el de tocar el clarinete y que no constituía su profesión ó modo habitual de vivir, según la declaración mencionada.»

1ª.—El art. 209 del Cód. Pen. establece la pena de diez á quince años de presidio cuando el incendio se ejecuta en casa habitada. El art. 210 en su inc. 2º señala la pena de tres á seis años si el perjuicio no excede de 500 pesos.

2.—Porque hay tentativa siempre que no se logre el fin que se propone el agente. La pena impuesta por el art. 210 combinado con el 12 del Cód. de Proc. es de tres años de prisión.

1ª.—La intromisión de extraños en un juicio, no puede traer otra consecuencia que causar la confusión, obstaculizando la breve resolución de





ING

tromisión de extraños en un juicio, mientras no justifiquen su derecho en incidente especial.—Jur. Civ., tom. 10, página 419, Ser. 2ª.

Incidente—Véase: *Honorarios*, núm. 2—*Verificación*, núm. 1—*Acreedores*, núm. 3—*Recusación*, núm. 1.

1ª. **Incidentes**—La formación de incidentes, no procede si el Juzgado conceptúa los puntos á resolver de fácil sustanciación y fallo rápido.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 419, Ser. 2ª.

1ª. **Incompetencia**—El demandante al ser contrademandado, no puede oponer la incompetencia del Juzgado.—Jur. Com., tom. 7, pág. 156, Ser. 2ª.

Incompetencia—Véase *Escepción dilatoria*, núm. 1—*Contrato*, núm. 2—*Escepción de incompetencia*, núms. 2 y 3—*Jurisdicción*, núm. 2.

Incompetente—Véase: *Competencia*, núm. 2—*Embargo preventivo*, núm. 10.

las cuestiones. Además, es deber de los jueces velar por la correcta tramitación de los pleitos, evitando en cuanto sea posible la desviación del procedimiento marcado por la ley.

1ª—La formación de incidentes tiene por base la no paralización de la causa principal: si el temor de esa paralización que causaría graves perjuicios á los litigantes no existe, desaparece la razón que aconseja la formación de incidentes por separado, y consiguientemente no deben formarse.

1ª—Porque la contrademanda facilita la disminución de los pleitos. El actor está obligado á responder á la reconvencción ante el mismo juez ó tribunal ante el cual hubiese instaurado su demanda como lo prescriben las leyes 32, tit. 2, 4 y 10 del mismo título, art. 3º y el art. 102 del Cód. de Proc. Cuando la reconvencción es por mayor suma de la establecida por la ley, como de competencia del Juzgado, la reconvencción se entiende deducida hasta ese límite, porque la jurisdicción por razón de la suma es de orden público y no puede ser alterado por voluntad de las partes.

INC

1ª. **Incomunicación**—Siendo facultativo de la policía, instruir sumarios de prevención en las causas correccionales, no puede imputársele transgresión por la incomunicación del reo durante el tiempo que la ley le permite á los jueces. —Jur. Crim., tom. 9, pág. 194, Ser. 2ª.

1. **Incontinencia**—El Ministerio Fiscal, carece de per-

1ª—Véase *Causas correccionales*, núm. 1.

1—En un juicio seguido por raptó y estupro cometidos en la persona de una menor de 14 años, se presentó el padre manifestando que venia á desistir de la demanda entablada, y que asimismo renunciaba á toda otra acción que pudiera tener origen en la causa, en vista de las esplicaciones recibidas del acusado. El Juez de 1ª Inst. Dr. Díaz no hizo lugar al desistimiento. Apelada la resolución fué revocada por la Cámara, no obstante la opinión contraria del Dr. Cortés. La Cámara dijo que de lo establecido en el art. 141 del Cód. Pen. resulta que el Juez no procede de oficio en estas causas; debiendo tenerse presente que esta prescripción se funda en motivos de conveniencia social y decencia pública. Que siendo delitos privados deben considerárseles sujetos á desistimiento, de acuerdo con lo dispuesto el art. 15 del Cód. de Proc. El Juez Dr. Díaz fundó su resolución contraria á la de la Cámara diciendo que si bien el querellante está autorizado á renunciar á su acción con arreglo al art. 15 del Cód. de Proc., no sucede lo mismo con relación á la remisión ó perdón de la pena de los delitos imputados. El Cód. Pen. al legislar sobre los delitos contra la honestidad, en el título III de la Sección 1ª, no menciona en manera alguna el principio de que el ofendido pueda remitir la pena al ofensor. El Código solo admite esto, por escepción, en delito de adulterio, respecto al cónyuge ofendido: y así el art. 123, dice: «El cónyuge ofendido puede, en cualquier tiempo remitir la pena á su consorte, debiendo en su caso, también perdonar al cómplice. En los capítulos relativos á los delitos de violación, estupro, corrupción de menores y raptó, no existe disposición alguna que autorice al ofendido ó á su representante legal, á remitir la pena. Si la mente del legislador hubiese sido hacer extensiva á todos los delitos contra el pudor, la disposición escepcional sentada para el adulterio lo habría consignado espresamente. La ley al conceder semejante privilegio al esposo, lo ha hecho fundándose en los altos intereses del matrimonio y de la familia, facilitando la reconstrucción de los hogares dis-



INC

sonería para perseguir de oficio los delitos sobre inconformidad después del desistimiento del querellante.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 385, Ser. 2ª.

locados. Chauveau Adolphe dice á este respecto, que la sociedad tiene más interés en la reunión de los esposos que en el castigo de un delito que no deja trazas que lo hagan cierto y manifiesto para el público. La razón filosófica en que se basa la ley que faculta el perdón en el delito de adulterio no existe en los delitos que importan un atentado al pudor; y es un principio de derecho, que allí donde no alcanza la razón de la ley, no procede su aplicación. Además el art. 140 del Cód. Pen. establece que en caso de violación, estupro ó rapto, quedará exento el ofensor, si se casa con la ofendida, prestando ella su libre consentimiento. Esta disposición viene á demostrar que la parte ofendida carece de la facultad de remitir la pena, pues cuando establece como medio para quedar exento de pena, el casamiento, lógicamente debe creerse que excluye otros motivos ó causales. La razón de esta disposición, es que la ofendida ó su representante puede preferir el silencio á hacer pública la deshonra por medio de un proceso: pero cuando esa publicidad que se ha querido evita, es un hecho irrevocable, desaparece de la ley y no justifica la inacción de la justicia. Mal puede creerse que la ley deja librada la penalidad de un delito tan grave como éste, á la voluntad de la persona ofendida, pues aparte de que los que asumen este carácter tocan el orden público y la paz de las familias, son asimismo ofensivos á la moral pública y corruptoras de las buenas costumbres. Las leyes penales son por su naturaleza de orden público y como tales no admiten conciliación, de donde resulta que todo convenio por el cual se supriman las consecuencias penales de un delito de mayor valor, cuando la ley no las exceptúa de una manera expresa. Cuando se dice que los delitos de estupro y rapto son privados, no se significa que ellos no perjudiquen á la moral ó al orden público, ó que la sociedad no esté interesada en su castigo. Sucede todo lo contrario; y basta para demostrarlo, la observación de que, cuando la menor estuprada carece de padres ú otros representantes legales, cualquiera del pueblo puede acusar el delito. Es que se ha querido decir tan solo que la ley, mirando los intereses de familia, á los que puede convenir ocultar el hecho, no permiten que se proceda de oficio á la averiguación, exigiendo la denuncia ó acusación del agraciado; pero una vez producidas éstas, la acción ya no pertenece exclusivamente al particular, sino que la ley



ING

Incuria.—Véase: *Diligencias de prueba*, núms. 3 y 4.

prescribe también la intervención fiscal, siendo éste un representante de la vindicta pública por la que debe velar en primer término. Desde ese momento no le es dado al acusador particular impedir que el Fiscal cumpla con su deber, ni le es posible trabarlo en el ejercicio de su cargo. Podía el acusador separarse del juicio, desistir de la acusación, ó perdonar el delito, pero esto tan solo en la parte que le concierne personalmente, y en manera alguna en lo que respecta á vindicta pública. La jurisprudencia de nuestros Tribunales está de acuerdo con el modo de pensar de los Dres. Cortés y Díaz, como puede verse en algunos casos resueltos.—Inst., tom. 1º, verb. *Violación*, núms. 2710 y 2711; *Acusación*, núm. 107.—Hay un caso que podría considerarse como contrario á la jurisprudencia, pero que estudiado detenidamente se ve que no es así.—Véase: Inst., tom. 2º, verb. *Violación*, núm. 1.—Aquí la víctima del delito de violación fué una mujer casada y no habiéndose querellado el marido, se dijo que no podía ser perseguido sino á instancia del esposo. En estos delitos se trata del interés privado que prima sobre el interés público: pero cuando la parte se querella y hace público el delito por medio de una acusación, ya no le pertenece el secreto pues se hace público. Si la parte se querella, no es necesaria su intervención para la prosecución del juicio hasta obtener el castigo del delito. La razón de la disposición desaparece: el público conoce judicialmente el hecho delictuoso y la vindicta pública exige el condigno castigo. La doctrina sentada por la Cámara en el presente caso, es hasta inmoral, porque con ella se autoriza el comercio en estos delitos los que pueden considerarse como un atentado diario á la tranquilidad de las familias. Si la ley ha tenido razones especiales para consagrar la impunidad de esta clase de delitos, debe aplicarse única y exclusivamente á esos casos y en manera alguna ampliarse á otros, pues esa ampliación es prohibida en materia penal, como asimismo es odiosa. Da pena ver cómo la Cámara resuelve cuestiones de tan vital interés social, sin preocuparse de destruir ó contestar argumentos sólidos que se aducen en su contra. El Dr. Cortés ha sido uno de nuestros más ilustrados juristas y sus argumentos no se destruyen con un simple «no obstante lo dictaminado por el Agente Fiscal.» Decir esto es muy fácil, pero no es ni serio ni propio del más alto Tribunal de la Capital de la República. Felizmente hoy la Cámara de lo Comercial ha sido renovada y sus nuevos miembros responden á las necesidades judiciales.



IND

1. **Indemnización**—Aun tratándose de la rectificación de vías de comunicación, la Municipalidad no puede proceder a su apertura sin previa indemnización fundada en ley.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 175, Ser. 2ª.

2. **Indemnización**—Por pérdida de un miembro de la familia y que debe ser abonada por el autor de un acto ilícito, debe fijarse con arreglo a la condición social de la víctima.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 425, Ser. 2ª.

1—La Municipalidad por el hecho de constituir un poder público, no puede por sí y ante sí, invadir la propiedad ajena por más que el interés general lo exija, pues la propiedad es inviolable, según el precepto constitucional—art. 17 de la Const. Nac.—Nadie puede ser privado de lo que le pertenece sino en virtud de sentencia fundada en ley, debiendo la expropiación por utilidad pública ser fundada en ley y previamente indemnizada. El art. 2511 del Cód. Civ., concuerda con la disposición constitucional, y ambas responden, no solo á garantizar los derechos de los particulares, sino á contener los avances que los poderes públicos pueden cometer en perjuicio de aquéllos. Nuestra ley no hace distinción entre unos y otros, y los coloca en igualdad de condiciones, sujetándolos al mismo procedimiento. La Municipalidad alegó la incompetencia de jurisdicción, siendo dicha escepción improcedente, desde que no se trataba de remover obstáculos opuestos á la libre circulación, que es lo que está encomendado al Poder Administrativo en su calidad de tal, sino que se trataba de la apertura de una calle que es otra cosa bien distinta.

2—Se trata de una persona víctima de un accidente la que murió dejando esposa y dos hijos menores: ganaba 42 pesos mensuales cuando sucedió el hecho que fué en 1880, habiéndose sentenciado el pleito en el año 1888. Esta circunstancia debe asimismo tenerse presente porque desde aquella época hasta la presente, el jornal del obrero ha aumentado considerablemente. Tampoco debe olvidarse que los perjudicados estuvieron privados del apoyo de la víctima durante ocho años. Todas éstas son circunstancias, son antecedentes que deben tenerse presente al fijar el *quantum* de la indemnización, sin perjuicio de otras muchas que no es posible enumerar y que se dejan libradas al arbitrio judicial.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Daño*, núm. 1, cuya nota trata el caso con especialidad.—El sumario está de perfecto acuerdo con otro caso re-



IND—INF

3. **Indemnización**—Del terreno necesario para la construcción de una vía férrea, si el pago tiene lugar mucho después de terminada la obra, debe hacerse sin tenerse en cuenta el mayor valor que por esta causa hayan adquirido los inmuebles de la zona que ella recorre: sólo debe tenerse en cuenta el aumento que en general hayan podido tener.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 166, Ser. 2ª.

Indemnización—Véase: *Jurisdicción*, núm. 3—*Vías férreas*, núm. 1.

Indivisibilidad—Véase: *Confesión del reo*, núms. 10, 12, 13 y 14.

Indivisible—Véase: *Confesión del reo*, núms. 2, 3, 4 y 5—*Confesión indivisible*, núm. 1—*Instrumento privado*, número 1.

1. **Infanticidio**—Siendo el temor á la deshonra una circunstancia que la ley tiene en cuenta para dar esta calificación al homicidio, no puede considerarse como circunstancia atenuante del delito.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 348, Ser. 2ª.

2. **Infanticidio**—La tentativa de este delito sin circunstancias atenuantes, debe ser castigada con el mínimum de la pena que el Código señala para el delito consumado.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 349, Ser. 2ª.

Informe pericial—Véase: *Prueba plena*, núm. 2.

suelto.—Véase: *Inst.*, tom. 3º, verb. *Indemnización*, núm. 3.—El Juez fijó el *quantum* en 7,560 \$ siendo confirmado por la Cámara.

3.—De acuerdo con la jurisprudencia establecida.—Véase: tomo 3º, pág. 543, Ser. 2ª, de la Jur. Civ.

1.—La circunstancia de que una madre obre impulsada por el pudor y con el propósito de ocultar su deshonra, es una condición característica del delito y no atenuante de él, pues sin esa circunstancia degeneraría en homicidio.

2.—Arts. 12, inc. 2º, y 100 del Cód. Pen.



INF

Información sumaria—Véase: *Embargo preventivo*, número 9.

1. **Información supletoria**—Es procedente para comprobar el matrimonio, cuando la partida no existe ó cuando se hubiese celebrado en país distante.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 56, Ser. 2ª.

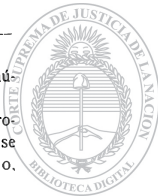
2. **Información supletoria**—Si no aparece asentada la partida en los registros parroquiales, procede la información supletoria.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 50, Ser. 2ª.

3. **Información supletoria**—El informe del funcionario

1—Se trataba de comprobar un matrimonio celebrado en Italia. El Juez de 1ª Inst. Dr. Mendez Paz dijo, que el matrimonio celebrado en país extranjero solo puede acreditarse en la forma establecida en el art. 179 del Cód. Civ. el que exige para su comprobación la inscripción en los registros de las parroquias ó de las comunidades á que pertenezcan los contrayentes: solo cuando no existiese registro ó no pudiese presentarse por haberse celebrado en país distante, puede probarse en otra forma. Que para que esa prueba supletoria fuese admisible sería necesario comprobar la falta de asiento, lo que no se había comprobado, y que la Italia no podía considerarse país distante. Esta resolución fué revocada por la Cámara fundándose en que Italia es un país distante, estando por consiguiente el caso ocurrente entre los esceptuados por el mencionado art. 179. Tenemos entendido que el Juez dictó al rededor de treinta resoluciones en el mismo sentido, habiendo sido revocadas todas ellas.

2—Este es otro de los numerosos casos del Juez designado en número anterior. Aquí se dijo por este Sr. Juez, que entre los casos de escepción se encuentra la ausencia de registros, lo que no sucedía en el presente, pues al contrario, de la prueba que se había producido para subsanar la falta de partida, resultaba que los registros existían, y el hecho de no estar en ellos la partida de la referencia, puede comprobar que el matrimonio no se celebró, pero de ninguna manera que ha habido omisión por parte de las autoridades encargadas de tales archivos públicos. La Cámara dijo que ella encontraba comprobada la imposibilidad de presentar la partida, quedando comprendido el caso entre los de escepción del art. 179 del Cód. Civ.

3—Este es otro caso más de los revocados al Juez Dr. Mendez Paz: este funcionario consideró que no constaba de autos la imposibilidad



INF

encargado de la custodia del Registro Parroquial sobre la no existencia de la partida de bautismo hace procedente la información supletoria. — Jur. Civ., tom. 10, pág. 57. Ser. 2ª.

4. Información supletoria.—Para comprobar la posesión de estado de casado, solo procede cuando se justifica la

de obtener la partida; no estando por consiguiente comprendido en lo dispuesto en el art. 85 del Cód. Civ. La Cámara revocó el auto diciendo que existía mérito bastante para hacer admisible la prueba supletoria.

4—Para que pueda recurrirse á la prueba supletoria, á fin de comprobar un matrimonio, debe acreditarse la falta de los registros en que debieron anotarse, ó la falta de asiento; y también es admisible en caso de haberse celebrado en un país distante. La jurisprudencia ha sentado el principio de que la prueba de los actos concernientes al estado, como son los nacimientos, matrimonios y defunciones, debe hacerse por escrito: es decir, por certificados expedidos por autoridad competente, en conformidad á los asientos de los registros públicos que con ese objeto se llevan. La prueba por testigos es puramente supletoria, y solo admisible en defecto de aquélla, cuando no hayan existido tales registros ó se hayan perdido, ó cuando á pesar de haberse llevado se hubiese incurrido en alguna omisión ó resultasen defectuosos: estas circunstancias deben ser previamente acreditadas. Así Freitas, después de establecer en el art. 1270 de su Proyecto, que el matrimonio se prueba por certificados auténticos extraídos de los asientos de los registros públicos, agrega en el siguiente artículo: «A falta de los asientos en los registros, ó si éstos se perdiesen, ó no estuviesen en debida forma, se admitirá cualquier especie de prueba, como está ya previsto en los arts. 235 y 242, sobre asientos de nacimientos ó defunciones.» El Proyecto de Cód. Civ. para España, después de haber declarado que nadie puede ser tenido por casado, ni reclamar los efectos civiles del matrimonio si no presenta la respectiva partida legalmente estendida, determinando también la misma clase de prueba para los nacimientos y defunciones, agrega en el art. 347: «Sin embargo, acreditándose que no ha existido ó se ha perdido ó inutilizado el registro, podrán probarse los nacimientos, matrimonios y defunciones tanto por papeles emanados del padre ó de la madre que hayan muerto, como por testi-



INF

existencia del matrimonio y su falta de asiento en el registro y á falta de testigos del acto celebrado ante la autoridad competente.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 249, Ser. 2ª.

1ª. Informe de los árbitros—En los casos de recusación colectiva puede ser presentado conjuntamente. — Jur. Com., tom. 7, pág. 147, Ser. 2ª.

Informe del alcalde—Véase: *Reincidencia*, núm. 4.

1. Informe médico—Policial, espedido á cerca de una herida, no forma prueba: debe tenerse en cuenta el tiempo que ha durado la curación, para graduar la pena.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 5, Ser. 2ª.

Informe médico—Véase: *Homicidio*, núm. 8—*Competencia*, núm. 2.

1ª. Informes—Los espeditos por el médico de los Tribunales, no pueden ser visados por el de Policía.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 228, Ser. 2ª.

2. Informes—Las presunciones que sobre la forma del

gos.» Explicando Goyena esta materia, dice: «El citado art. 63, Sordo, estiende esta disposición, no solo al caso de no existir los registros, sino al de la omisión ó falta de una partida en los mismos; y tal debe ser el espíritu de nuestro artículo, porque no puede negarse la prueba subsidiaria al que por omisión ó culpa del encargado del registro no puede producir la ordinaria, auténtica y legal.» Rogron, consecuente con esta doctrina cita dos fallos del Tribunal de Casación y dice, «lo primero y preferente es asegurar y restablecer el estado civil de los hombres»—Concordancias, tom. 1º, pág. 322.—Nuestro Código como todos los modernos, requiere respecto del matrimonio y demás actos del estado civil, la prueba escrita en la forma prevenida—art. 179—y solo en defectos de ella admite la forma subsidiaria.

1ª—La ley no condena el informe colectivo.

1ª—No puede tener el dictamen de esta última repartición, valor alguno, especialmente si trata por inducciones de establecer la exactitud ó inexactitud del informe anterior.

2—Es evidente que las declaraciones contestes de varios testigos



INF—INH

hecho deduzcan los médicos en sus informes, no pueden modificar la prueba que resulte de testigos presenciales: el informe solo puede prevalecer en la parte científica.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 130, Ser. 2ª.

Informes científicos—Véase: *Incapacidad física*, núm. 1.

Infracciones—Véase: *Papel sellado*, núm. 1.

Inhabilidad—Véase: *Cosa juzgada*, núm. 2.

Inhabilidad de título—Véase: *Cuenta de venta*, núm. 1—
Excepción de inhabilidad de título, núms. 2, 3, 4 y 5.

Inhabilitación—Véase: *Enfermedad*, núm. 1.

1. Inhibición—La sentencia definitiva en el juicio de alimentos provisorios, no basta para decretar una inhibición contra el esposo, si éste satisface corrientemente la prestación.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 69, Ser. 2ª.

presenciales deben prevalecer sobre las presunciones más ó menos probables establecidas sobre un hecho que nada tiene de científico.

1.—Decretada la inhibición después de terminado el juicio de alimentos provisorios, el alimentario se presentó pidiendo su levantamiento fundándose en que satisfacía con toda puntualidad la cuota fijada. El Juzgado ordenó el levantamiento fundándose en que los términos del art. 448 del Cód. de Proc. demuestran que «él se refiere á las sentencias dictadas en los juicios ordinarios; de suerte que no puede reputarse como una sentencia á los efectos de la medida preventiva que él autoriza: ni por la resolución definitiva en el juicio de alimentos provisorios, que siempre puede quedar sin efecto ó ser modificada por la que se pronuncie en el juicio ordinario que las partes tienen derecho á promover: Que si bien la esposa está facultada, en los casos de los arts. 211 y 1295 del Cód. Civ., para pedir las medidas conducentes á la no enajenación de los bienes del marido y de la sociedad conyugal, en manera alguna puede proceder tal medida en este juicio sin que previamente se rindan las justificaciones necesarias sobre los hechos que fundasen las presunciones á que se refiere el art. 211.» Fijada la cuota alimenticia debe ordenarse su depósito en el Banco dentro de 24 horas: si no cumple se libra mandamiento por su importe y si éste no da resultado puede pedirse la inhibición como en los demás casos de la ley.



INHI



2. **Inhibición**—Para que proceda la inhibición de enagenación del inmueble comprado con dinero ajeno, es necesario que esta circunstancia conste en la escritura de adquisición.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 90, Ser. 2ª.

3. **Inhibición**—Siempre que se presenten bienes determinados á embargo, si el Juzgado los conceptúa suficientes, debe quedar sin efecto la inhibición.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 206, Ser. 2ª.

4. **Inhibición**—No procede si el crédito depende de la sentencia que en definitiva se pronuncie.—Jur. Com., tomo 6, pág. 218, Ser. 2ª.

5. **Inhibición**—El cambio de acción contra otro de los deudores solidarios de la obligación, no obliga al levantamiento de los embargos é inhibiciones que pesaban contra el presunto insolvente.—Jur. Com., tom. 8, pág. 337, Ser. 2ª.

6. **Inhibición**—Aunque la obligación surja de un contrato, aquella no procede mientras no se justifique haberse llenado las condiciones que la hagan imposible.—Jur. Com., tom. 7, pág. 68, Ser. 2ª.

7. **Inhibición**—Solo puede levantarse justificando suma-

2—De acuerdo con lo establecido en el art. 3927 del Cód. Civ.

3—Art. 461 del Cód. de Proc. en su última parte.

4—De los antecedentes presentados no resultan *prima facie* la existencia del crédito.

5—Véase: *Deudores solidarios*, núm. 1.

6—Art. 443, inc. 5º, Cód. de Proc.

7—El bien dado á embargo reconocía varios gravámenes por fuertes valores. Si bien la ley ordena que la inhibición quede sin efecto por la presentación de bienes á embargo, ésta debe entenderse cuando los tales bienes fuesen suficientes para responder por la cantidad demandada y las costas del juicio, pues de otro modo quedarían sin efecto los derechos del acreedor ejecutante que no le conociera otros bienes al

INHE

riamente que el bien presentado á embargo se encuentra libre de gravamen y que alcanza manifiestamente á cubrir el crédito reclamado.—Jur. Com., tom. 7, pág. 256, Ser. 2ª.

8. **Inhibición**—Acuerdo sobre la forma de los Registros de Inhibiciones.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 62, Serie 2ª.

9. **Inhibición**—Solo procede su levantamiento previa citación de los acreedores ó justificación por el deudor de que los créditos han sido satisfechos.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 60, Ser. 2ª.

10. **Inhibición**—Procede siempre que sea procedente el embargo preventivo.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 41, Ser. 2ª.

11. **Inhibición**—Si los bienes embargados, no bastan á cubrir el crédito y las costas, debe decretarse la inhibición.—Jur. Com., tom. 10, pág. 160, Ser. 2ª.

12. **Inhibición**—Es facultativo del Juez apreciar el valor de los bienes dados á embargo para ordenar el levanta-

deudor. No puede ser otra la inteligencia del art. 474 si se tiene en cuenta: 1º que las disposiciones del juicio ejecutivo han sido establecidas en favor del acreedor; 2º que en el caso del art. 477 puede sustituirse el embargo con otros bienes *que estén libres*, ó que *aun cuando estuviesen gravados bastaran manifiestamente á cubrir el crédito reclamado*. La inhibición debe subsistir hasta tanto se justifique que los bienes presentados bastan manifiestamente al fin que se propone la ley.

8—Debe llevarse en la misma forma adoptada para los libros de Hipotecas y Embargos.

9—En cuanto á la citación previa del acreedor está de acuerdo con la jurisdicción establecida.—Véase: *Embargo*, núms. 3 y 4; *Inhibición*, números 3 y 5.

10—Siempre que el embargo preventivo no pueda hacerse efectivo por no conocersele bienes al deudor—art. 461, Cód. de Proc.

11—Véase: *Bienes embargados*, núm. 1.

12—Véase: *Bienes embargados*, núm. 2.



INH — INJ

miento de la inhibición.—Jur. Com., tom. 10, pág. 330, Ser. 2ª.

Inhibición—Véase: *Embargo preventivo*, núms. 2 y 3—*Separación de bienes*, núm. 1.

Iniciador—Véase: *Accionista*, núm. 1—*Sociedad anónima*, núm. 2.

1ª. **Injuria**—Si no existe comprobada la intención criminal, no puede calificarse de injuria la carta privada en que se cobra una deuda.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 107, Ser. 2ª.

1ª. **Injurias**—En estos juicios, el reconocimiento de honorabilidad en el querellante hecha por el acusador importa una retractación.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 21, Ser. 2ª.

2. **Injurias**—Las vertidas contra un diario, se conceptúan hechas á sus redactores, y en consecuencia éstos tienen personería para iniciar la correspondiente acción.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 344, Ser. 2ª.

1ª—Véase: *Carta privada*, núm. 1.

1ª—En este caso no solo se reconoció la honorabilidad del acusador, sino que se concluyó por retirar lo que hubiese podido ofender su delicadeza. El solo reconocimiento de la honorabilidad del acusador no implica una retractación si al mismo tiempo se desconoce la existencia de la injuria, como lo tiene resuelto la Cámara.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Injurado*, núm. 1.—Arts. 315 del Cód. Pen. antiguo, igual al 186 del vigente.

2—Es evidente que un periódico puede ser injuriado, y por consiguiente, éste puede con perfecto derecho, por medio de sus directores, acusar á quien lo injuria, pues ésta recae sobre las personas que tienen su representación, siendo el representante el que viene á ser directamente dañado. Si el editor de un periódico es justiciable por las injurias que vierte, del propio modo ese mismo editor puede acusar las injurias que se dirijen al diario que representa.



INJ

3. **Injurias**—Corresponde la absolución del acusado por este delito, si el acusador no prueba plenamente su existencia.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 435, Ser. 2ª.

4. **Injurias**—La negación de haber injuriado, no importa la retractación y la causa debe llevarse adelante.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 49, Ser. 2ª.

5. **Injurias**—Para que las injurias recíprocamente eximan de pena al acusado, deben haber tenido lugar en el mismo acto.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 76, Ser. 2ª.

6. **Injurias**—La detención por este delito, solo procede si el acusado pretende ausentarse del país.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 157, Ser. 2ª.

7. **Injurias**—Importa este delito, la imputación de una

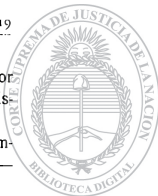
3—El actor incumbe la prueba de su demanda—Ley 1ª, tit. 14, Part. 3ª.

4—En 1ª Inst. se dijo que las esplicaciones dadas importaban una retractación, correspondiendo de acuerdo con lo establecido en el art. 186, inc. 3º del Cód. Pen., dar por terminado el juicio. La Cámara revocó el auto diciendo que el acusado negó haber dirigido los insultos que dieron margen á la acusación, lo que demuestra á la evidencia que no se trata de una retractación.

5—El art. 186 del Cód. Pen. vigente igual al 315 del ant., establece en su inc. 2º, que el culpable de calumnia ó injuria queda exento de pena si media provocación. Ahora bien, para que la provocación cause exención de pena debe suceder inmediatamente, ó á los pocos intervalos: el trascurso de algunas horas hace improcedente la escepción.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Provocación*, núm. 2.

6—Véase: verb. *Detención*, núm. 1.

7—La Instituta definía la injuria diciendo: «*generaliter injuria dicitur omne quod non jure fit specialiter alios contumendo dicta est.*» Se dice además que «se comete injuria, escribiendo, componiendo, publicando un libelo ó versos infamantes»—parágrafo 1º.—Esta doctrina pasó á las leyes de Partida, las que llaman injuria todo dicho ó hecho que tiene por objeto el desprecio, infamia ó el daño de otro. Gregorio Lopez al comentar esta ley dice: «Aunque la presente ley señala algunos casos de injuria



INJ—INQ

acción desdolorosa, aunque no pueda calificarse como vicio determinado.—Jur. Crim., tom. 9, página 184, Ser. 2ª.

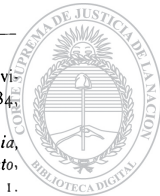
Injurias— Véase: *Compensación*, núm. 1—*Calumnia*, núm. 2—*Escepción de litispendencia*, núm. 1—*Desacato*, núm. 5—*Oficial de justicia*, núm. 1—*Acusador*, núm. 1.

Inmueble—Véase: *Acción personal*, núm. 1—*Indemnización*, núm. 3—*Tercería de dominio*, núm. 1—*Condominio*, núms. 1 y 3—*Evicción*, núms. 1 y 2—*Inhibición*, número 2—*Protocolización*, núm. 1—*Préstamo hipotecario*, núm. 1—*Interdicto de despojo*, núms. 2 y 3—*Constructores*, núm. 1—*Precio*, núm. 3.

1. **Inquilinos**— El propietario no puede impedir el acceso á los inquilinos, y la Policía una vez requerida, tiene

verbal, sin embargo no determina ni podía determinar que palabras se tengan por injurias, porque con los tiempos cambian la fuerza y significación de las mismas y muchas veces, hasta con las circunstancias particulares del caso y personas, y aun con el gesto y con la inflexión de la voz.» El Cód. Pen. español sigue la misma doctrina cuando dice en su artículo 379: «Es injuria toda espresión proferida ó acción ejecutada en deshonor, descrédito ó menosprecio de otra persona.» El art. 304 de nuestro Cód. Pen. ant. repitió esta misma definición, la que pasó á los arts. 179 al 181 del que nos rije: siendo evidente que se puede desacreditar ó menospreciar á otro por medio de palabras ó escritos aunque no se impute un vicio determinado. Así Haus, comentando los artículos 444 y 445 del Cód. Pen. Belga dice: «Todo ataque hecho al honor ó á la consideración de una persona, sea por hechos ó por gestos, por imágenes ó espresiones que no encierren la imputación de un hecho preciso es una injuria propiamente dicha.» Más adelante agrega: «hemos dicho que es imposible definir las espresiones y las acciones que puedan afectar el honor ó la consideración de las personas. Todo depende sobre este punto de las circunstancias que los Jueces de hecho solamente pueden apreciar.»

1—Si el propietario no quiere que el inquilino penetre á su casa, debe pedir el desalojo de ella.



INS

el deber de obligarlo á permitirles la entrada.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 232, Ser. 2^a.

Insano—Véase: *Curador definitivo*, núm. 1.

1^a. **Inscripciones**—No procede la de un contrato cuya nulidad está sometida á la decisión judicial.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 94, Ser. 2^a.

1. **Inscripciones**—En la matrícula durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 1879.—Jur. Civ., tom. 10, págs. 65, 430 y 431, Ser. 2^a.

Insolvente—Véase: *Deudores solidarios*, núm. 1.

1^b. **Inspección ocular**—Es diligencia facultativa del Juzgado.—Jur. Com., tom. 6, pág. 408, Ser. 2^a.

Instrucciones especiales—Véase: *Rematador*, núm. 1.

Instrucciones espresas—Véase: *Contrato*, núm. 1.

Instrumento de mandato—Véase: *Mandato*, núm. 2.

1^c. **Instrumento privado**—La prueba resultante de su reconocimiento es indivisible.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 105, Ser. 2^a.

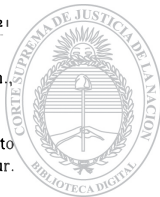
2. **Instrumento privado**—Para justificar la autenticidad de un acto por instrumento privado no redargüido de falso, no son necesarios los requisitos que prescribe la ley para los casos en que abiertamente se opone su falsedad.—Jur. Civ., tom. 10 pág. 214, Ser. 2^a.

Instrumento público—Véase: *Confesión del reo*, núm. 6.—*Certificado*, núm. 1.—*Cesión de derechos*, núm. 3.

1^a—Porque comprobada la nulidad haría innecesaria la inscripción.

1^b—Y puede practicarse en cualquier estado del juicio, á fin de que el Juez pueda ilustrarse á cerca de la cuestión que se ventila—art. 57, inc. 3^o del Cód. de Proc.

1^c—Y tiene la misma fuerza contra aquellos que lo reconocen como contra los que los presentan—art. 1029, Cód. Civ.



INS — INT

Instrumento público ó privado—Véase: *Simulación*, número 2.

Intención criminal—Véase: *Homicidio*, núms. 3 y 24—*Tentativa de homicidio*, núm. 3—*Carta privada*, núm. 1.

Intención de matar—Véase: *Heridas*, núm. 1—*Tentativa de homicidio*, núm. 1.

Intención del reo—Véase: *Escalamiento*, núm. 1.

Intención dolosa—Véase: *Defraudación*, núm. 2.—*Dependiente*, núm. 2—*Defensa propia*, núm. 1.

1^a. **Intención homicida**—Mientras ella no resulte plenamente comprobada, el delito de disparar arma de fuego debe ser penado con el término medio, que es dos años de prisión.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 326, Ser. 2^a.

Intención homicida—Véase: *Lesiones*, núms. 7 y 14—*Tentativa de heridas*, núm. 1—*Arma de fuego*, núm. 2—*Homicidio*, núm. 6—*Disparo de arma de fuego*, núm. 3.

1^b. **Intereses**—Aun cuando la parte presente una liquidación con intereses, no hace cosa juzgada si la sentencia que la ordenaba no los concedía.—Jur. Com., tom. 5, página 157, Ser. 2^a.

2. **Intereses**—El firmante de la letra es responsable de

1^a—De uno á tres años de prisión dice el art. 99 del Cód. Pen., siempre que el hecho no importe un delito mayor.—Véase: verb. *Arma de fuego*, núms. 2, 3 y 4.

1^b—En el caso occurrente la liquidación no había sido aun aprobada. Y aunque lo hubiese sido, desde que se ha padecido un error de hecho, no puede éste perjudicar ni mucho menos crear un derecho á favor de la parte, de conformidad con lo dispuesto en las leyes 28 y 37, tít. 14, Part. 3^a, las que dan acción al que lo hubiese sufrido, hasta para repetir lo pagado indebidamente, no pudiendo por consiguiente hacer cosa juzgada.

2—El art. 912 del Cód. de Com. ant. establecía que todos los que giran, endosan ó aceptan letras de cambio quedan obligados á su pago con



INT

los intereses, gastos y costas desde el vencimiento, aun pagando en el acto del mandamiento.—Jur. Com., tom. 6, pág. 100, Ser. 2ª.

3. **Intereses**—En una liquidación judicial, no procede la capitalización trimestral, si no hubiese sido estipulada en la convención.—Jur. Com., tom. 10, pág. 5, Ser. 2ª.

Intereses—Véase: *Tercería*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núm. 6—*Letra de cambio*, núm. 2—*Juicio ordinario*, núm. 1—*Precio*, núm. 1—*Cosa vendida*, núm. 1—*Memoria pía*, núm. 1.

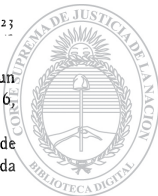
Intervención personal—Véase: *Renuncia*, núm. 1.

1. **Interdicto de adquirir**—Es procedente, siempre que

sus intereses y todos los gastos y costas legales. El hecho del protesto constituye en mora á los deudores, y responsables desde el día del protesto—art. 913.—El Cód. de Proc. en su art. 483 establece más ó menos el mismo principio cuándo dice: «Aunque pague el deudor dentro de las 24 horas posteriores al requerimiento, y aun en el acto de éste, serán de su cargo las costas del juicio.»

3—De acuerdo con la jurisprudencia sentada uniformemente por nuestros tribunales, y de conformidad con lo preceptuado en los arts. 567 y 570 del Cód. de Com. vig.

1—El comprador de un inmueble se presentó deduciendo este interdicto fundado en que el vendedor no le había hecho tradición de él; éste se defendió, diciendo que la tradición se había hecho y que la posesión la tenía en carácter de inquilino. El Juez no hizo lugar al interdicto, fundándose en el art. 574 del Cód. de Proc., pues si bien es cierto que el actor había comprobado el extremo exigido en el inc. 1º de dicho artículo, exhibiendo título suficiente para adquirir el dominio, no se había justificado el requisito establecido en el inc. 2º, que aparecía como que el vendedor jamás había hecho tradición de la cosa, siendo éste un requisito indispensable para que el contrato de compraventa quedara perfeccionado. La Cámara revocó esta sentencia fundándose en que el hecho mismo en que el Inferior se fundaba, de encontrarse aun el vendedor en posesión de la finca vendida y de la que no había hecho tradición, no cabe en la letra del inc. 2º, puesto que éste se refiere al propietario ó usufructuario, y el demandado no re-



INT

presentado título que justifique el dominio, nadie posea a título de propietario ó usufructuario, sin que sea necesario que el actor haya tenido jamás la posesión.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 408, Ser. 2ª.

1. **Interdicto de despojo**—Es procedente contra las personas jurídicas que ejercen funciones administrativas, como la Municipalidad.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 175, Ser. 2ª.

2. **Interdicto de despojo**—Solo procede justificada la posesión de la cosa.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 45, Ser. 2ª.

vestía ni uno ni otro carácter. No es propietario porque ha enagenado su propiedad; tampoco es lo segundo, porque él mismo se declara arrendatario. Parece que la sentencia hubiese entendido que para la procedencia del interdicto era necesaria la tradición sin la cual la compra-venta no quedaba perfeccionada: pero ésto importaría la negación del interdicto mismo, puesto que él no se acuerda al que tiene la posesión ni al que la ha perdido, sino al que nunca la tuvo; y se ha introducido en beneficio del que con un título de dominio tiene derecho á la posesión, como lo tiene el comprador á quien no se le ha hecho la tradición—art. 2468, Cód. Civ.—La generalidad de los términos del artículo 564 y siguientes del Cód. de Proc., demuestra que la ley ha entendido conceder el interdicto á todo tenedor de un título suficiente para adquirir la posesión con arreglo á derecho, á diferencia de otras legislaciones que como la actual de España, lo limitan al título hereditario. Se diferencia además nuestra ley de las de ese país en que á diferencia de éste, nuestra ley acuerda el interdicto aunque la cosa se encuentra con detentador. Todo lo contrario, el art. 570 del Cód. de Proc. establece el procedimiento á seguirse cuando el interdicto se dirige contra el detentador de los bienes. El actor comprobó que la tradición no se había efectuado, mientras que el demandado no comprobó su carácter de inquilino invocado.

1—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 42 del Cód. Civ.; el 43, no es aplicable, porque solo se refiere á las acciones criminales.—Véase la nota del Código á este artículo.

—Es uno de los extremos exigidos por el art. 581 del Cód. Civ.



INT

3. Interdicto de despojo—Justificada la posesión y su pérdida clandestina, el interdicto de despojo es procedente.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 370, Ser. 2^a.

1^a. Interdicto de obra nueva --Es improcedente, mientras no se justifique la posesión del actor.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 421, Ser. 2^a.

1^b. Interdicto de recobrar—Es procedente, siempre que justificada la posesión y su pérdida clandestina, la del demandado no sea anual.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 240, Ser. 2^a.

2^a. Interdicto de recobrar—Procede, siempre que se justifique la posesión y su pérdida clandestina.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 319, Ser. 5^a.

1^c. Interdicto de retener—Procede contra el autor de la turbación ó del despojo, aunque éste pretenda haber obrado en el interés de un tercero.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 156, Ser. 2^a.

2^b. Interdicto de retener—Justificadas la posesión y la turbación, este interdicto es procedente.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 156, Ser. 2^a.

3—Arts. 2498 del Cód. Civ. y 581 del Cód. de Proc.

1^a—El actor debe comprobar los extremos legales de los arts. 2498 y 2499 del Cód. Civ.

1^b—Se pierde la posesión cuando se deja que alguno la usurpe, entre en posesión de la cosa y goce de ella durante un año, sin que el anterior poseedor haga durante ese tiempo acto alguno de posesión, ó haya turbado la del que la usurpó—art. 2456 del Cód. Civ.—Para que el interdicto de recobrar sea procedente debe además llenarse los requisitos del art. 581 del Cód. de Proc.

2^a—Y siempre que no se deje trascurrir un año desde la pérdida de dicha posesión.—Véase nota precedente.

1^c—Arts. 2464 y 2482 del Cód. Civ.

2^b—Art. 574 del Cód. de Proc.





INT

3. **Interdicto de retener**—Es procedente, siempre que se justifique la posesión y su pérdida violenta ó clandestina.

—Jur. Civ., tom. 9, pág. 165, Ser. 2ª.

Intervalo—Véase: *Premeditación*, núm. 1.

Intervención—Véase: *Recusación*, núm. 1—*Defensor del reo*, núm. 1.

1. **Interrogatorio**—Su presentación al solicitar prueba

3—Véase nota precedente.

1—La Cámara dice: que el hecho de no acompañar los interrogatorios á cuyo tenor hayan de ser examinados los testigos, al mismo tiempo que se presenten éstos, no es un requisito esencial de la sustanciación de la prueba, de modo que la pedida y ofrecida dentro del término legal que no ha sido aceptada por omitirse esa formalidad, quede viciada y anulada como si no hubiese sido ofrecida y presentada en tiempo oportuno. La presentación de interrogatorios es exigida por el Código conjuntamente con la lista de los testigos como una medida conveniente, como una forma sustancial del procedimiento, de modo que si ella no es observada, la lista de testigos que se presente dentro del término preventivamente fijado, en la primera parte del artículo, no sea aceptada y se tenga como no pedidas las diligencias de la prueba. Esta opinión está basada en el sistema de publicidad de la prueba establecido por nuestro Código, el que consiste, según el art. 479, solamente en que ella sea recibida en audiencia pública, de modo que los interrogatorios son conocidos de la contra parte en la audiencia, pues en ninguna parte está mandado que se le dé vista de ellos. Corroborá esta interpretación el que las partes pueden, después de presentar los interrogatorios á la vez que la lista de testigos, acompañar nuevos interrogatorios antes de que esos mismos testigos sean examinados, ampliando ó modificando los primeros. Conclúyese pues, que no siendo la omisión en que había incurrido la parte una forma sustancial del procedimiento y habiendo ella instado con tenaz repetición por la prueba de testigos, debe ella recibirse por aplicación del art. 477 del Cód. de Proc.; omisiones de este carácter no pueden hacer decaer derechos que tan directamente afectan á la defensa natural de los acusados; que si hubiese duda sobre la aplicación del art. 483, ella debe resolverse á favor del reo, según la regla establecida en el art. 13 del mismo Código.» Esta resolución fué dictada por la Cámara constituida en Tribunal de Inter-

INT

de testigos en causas criminales, no es ineludible.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 274, Ser. 2ª.

Interrogatorio.—Véase: *Término de prueba*, núm. 1.—*Testigos*, núm. 3.

1. Interrogatorios.—De los testigos que declaran por me-

locutorias y por mayoría de votos. La minoría sostuvo que la resolución no se armoniza con el texto claro y terminante del art. 483 del Cód. de Proc. Consideramos que la mayoría de la Cámara está equivocada, pues el art. citado no puede ser materia de una interpretación como la que espresa el sumario, porque lo claro no debe interpretarse. La ley es terminante en su precepto cuando dice: «La prueba testimonial será ofrecida necesariamente dentro de los primeros diez días del término de prueba, á cuyo efecto la parte á quien interese presentará una lista de los testigos, con espresión de sus nombres, profesión y domicilio, y *el interrogatorio*, á cuyo tenor hayan de ser aquéllos examinados.» Cuando la ley quiere establecer una escepción, lo hace de una manera espresa y terminante, como lo establece el art. 181 del Cód. de Proc. en lo Civil, el que consagra el mismo principio. «Cuando las partes pretendan producir prueba de testigos; presentarán una lista de ellos» dice el recordado artículo, «y el interrogatorio á cuyo tenor hayan de ser examinados. *El interrogatorio podrá reservarse* por las partes, hasta la audiencia en que deben presentarse los testigos á examen.» Esto no necesita comentarios. Los autores del Cód. de Proc. en lo Crim., conocían perfectamente esta disposición del Cód. de Proc. en lo Civ., y cuando no han consignado la escepción es porque la consideran inconveniente. Pero la Cámara en su prurito de innovarlo todo, ha querido dar una prueba más del poco respeto que la merece la ley, amoldándola á su capricho. La Cámara no quiere ocupar el rol que le corresponde en la constitución de los Poderes Públicos, interpretando la ley, sino que quiere crearla, puesto que en su interpretación se aparta por completo de su letra y de su espíritu. Felizmente la Constitución actual de la Cámara, formada con los nuevos miembros Dres. Saavedra, Esteves, y Lopez Cavanillas, son una garantía de la laboriosidad y acierto en sus decisiones. Ya no se ven aquellos fallos en que se confirmaban las resoluciones y sentencias «por sus fundamentos», como lo hace todavía la Cámara de lo Civil.

1.—Porque la publicidad de la prueba tiene por objeto que la parte



INT — IRR

dio de exhorto ú oficio, deben ser conocidos por la parte contraria á fin de que pueda formular las preguntas que crea convenientes á su derecho.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 36, Ser. 2ª.

2. Interrogatorios—El acusador tiene derecho para conocer los de los testigos del acusado y la omisión de ese derecho anula las declaraciones prestadas.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 168, Ser. 2ª.

Intimación—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 8.

Intimidación—Véase: *Atentado*, núm. 2.

Inverosímil—Véase: *Confesión del reo*, núm. 5—*Presunciones favorables*, núm. 1.

Inversión —Véase: *Comisionista*, núm. 6—*Defraudación*, núm. 5.

Ira—Véase: *Premeditación*, núm. 1.

Irregularidades—Véase: *Protesto*, núm. 1.

contra quien se produce, instruyéndose de lo que se trata de acreditar, pueda contrarrestarla por otra contraria, ó completar los hechos á que se refiere, preguntando á los testigos. Ese derecho quedaría burlado, cuando éstos sean examinados por oficio, si los interrogatorios se conservasen y remitiesen cerrados. La parte contra quien esa prueba se dirigiese vendría á conocerla recién cuando ya no le sería posible contrarrestarla, y por consiguiente debe darse conocimiento del contenido de los interrogatorios, por si quisiese adicionarlos incluyendo las preguntas que le convenga hacer.

2.—Se falta á una de las formas sustanciales del procedimiento.





Jueces—Véase: *Término para la prescripción*, núm. 1.
—*De oficio*, núm. 1.

Jueces correccionales—Véase: *Suspensión de empleo*, número 1.

1^a. Jueces de instrucción—Son competentes para entender en una querella por sustracción de menores, aun cuando éstos sean depositados por resolución de un Juez de lo Civil posterior al hecho que se persigue.—Jur. Crim., tomo 5, pág. 206, Ser. 2^a.

Jueces de instrucción—Véase: *Escusación*, núm. 1—*Falsificación*, núm. 3.

Juez—Véase: *Escarcelación bajo fianza*, núm. 1—*Esperdientes*, núm. 1.—*Recusación*, núm. 2—*De oficio*, núm. 2—*Incidente*, núm. 1.

1^b. Juez competente—Lo es el del lugar donde se come-

1^a—La sustracción tuvo lugar un día antes de dictado el auto ordenando el depósito de los menores: en este caso la acusación tiene su fundamento en un hecho anterior al auto, y no es posible establecer que la resolución posterior despoje al hecho consumado, del carácter criminal que se le atribuye.

1^b—Entre las diversas causas que producen fuero en lo Criminal, no admite duda que la primera y principal de todas ellas, es el del lugar en que el delito se comete, y solo por circunstancias particulares puede llegar á ser competente el de la residencia del reo ó del lugar en que ha sido aprehendido.

JUE—JUI

tió el delito, aun cuando los acusados tengan su domicilio fuera de su jurisdicción.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 370, Ser. 2^a.

Juez competente—Véase: *Calumnia*, núm. 3—*Querella*, núm. 1.

Juez de instrucción—Véase: *Competencia*, núm. 2—*Sumario*, núms. 2 y 3—*Querella*, núm. 1.

Juez del concurso—Véase: *Honorarios*, núm. 3.

Juicio—Véase: *Papel sellado*, núm. 1—*Escepciones*, números 3 y 4—*Sentencia*, núm. 7.

Juicio contradictorio—Véase: *Cosa juzgada*, núm. 3—*Sentencia definitiva*, núm. 1.

Juicio criminal—Véase: *Quiebra*, núm. 9—*Acusación particular*, núm. 1.

1. Juicio ejecutivo—Aunque el acreedor reciba el importe del mandamiento, siempre queda el deudor responsable por las costas é intereses que por no estar liquidados no pudieron incluirse en el mandamiento librado.—Jur. Com., tom. 6, pág. 100, Ser. 2^a.

1.—Según terminante disposición del art. 912 del Cód. de Com. antiguo, todos los que giran, endosan ó aceptan letras de cambio quedan obligados á su pago, con los intereses y todas las costas ó gastos legales. El protesto constituye en mora á los obligados y los responsabiliza por el pago de los intereses desde el día del protesto—art. 113 *ibid*.—En el presente caso se alegó que habiéndose abonado el importe del mandamiento, no estaba el deudor obligado al pago de las costas causidicas é intereses devengados; porque estinguida la obligación principal se estinguen las accesorias. Esta argumentación fué desechada por la Cámara, fundándose en que el recibo fué otorgado por el ejecutante, en virtud de la ejecución iniciada y á mérito del mandamiento librado en el que se intimaba al deudor al pago del capital solamente, pues ésta era la única suma liquidada, siendo así que el art. 475 del Cód. de Proc. solo autoriza el despacho de la ejecución siempre que haya cantidad líquida: si hay una suma ilíquida ó indeterminada, se re-



JUI

Juicio ejecutivo—Véase: *Protesto*, núm. 1—*Término extraordinario*, núm. 3—*Apelación*, núm. 3—*Nulidad de la ejecución*, núm. 1.

1^a. Juicio ordinario—Fundado en el juicio ejecutivo, solo procede si existe depositado el capital, intereses y costas. Jur. Com., tom. 8, pág. 144, Ser. 2^a.

Juicio ordinario—Véase: *Jurisdicción*, núm. 5—*Rendición de cuentas*, núm. 5.

Juicio por calumnia—Véase: *Calumnia*, núms. 2 y 3.

Juicio principal—Véase: *Recusación*, núm. 1.

1^b. Juicio sumario—Aun tratándose de esta clase de juicios, la falta de intervención del ministerio pupilar, vicia

servará la petición por esta suma para otro juicio. A fin de evitar toda dificultad á este respecto, es práctica determinar en el mandamiento una suma prudencial que fija el Juez para responder por los intereses y las costas de la ejecución. Si el cobro fuese estrajudicial, el derecho á cobrar los intereses y las costas quedaría estinguido.—Véase: Inst., tomo 1^o, verb. *Chancelación*, núm. 359.

1^a—Se dijo que este es el espíritu de la ley resultante de las disposiciones contenidas en los arts. 508 y 525 del Cód. de Proc. Nos parece completamente arbitraria esta resolución: el art. 508 no puede servir lógicamente de base á ella, porque nada dice ni explícita ni implícitamente. El art. 525 acuerda al ejecutado la facultad de promover el juicio ordinario, pero no limita la época en que puede promoverse. Así ha pensado la Cámara en otros casos cuando ha declarado que la excepción de litispendencia es improcedente cuando se opone en el juicio ejecutivo fundándose en un juicio ordinario.—Véase: Inst., tom. 1^o, verb. *Litispendencia*, núm. 1677; y tom. 2^o, mismo verb., núms. 2, 3, 4, 5 y 6.—En otro caso ha dicho este mismo Tribunal que: «El juicio ordinario que permite la ley al vencido en el ejecutivo, es procedente aunque no haya opuesto excepción.» Y daba como fundamento de tal resolución, que el art. 500 del Cód. de Proc. que acuerda el derecho para promover el juicio ordinario, *no reconoce limitación alguna á la cual esté subordinado el derecho* tanto del actor como del demandado. Ésts es la doctrina correcta en nuestra opinión.

1^b—Arts. 39 y 494 del Cód. Civ.





JUI — JUR

de nulidad el procedimiento, si existen menores intereses en su resultado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 93, Ser. 2^a.

Juicio sumario—Véase: *Prenda*, núm. 1.

Juicios criminales—Véase: *Apelación*, núm. 1.

Juicios voluntarios—Véase: *Recusación*, núm. 4—*Peritos*, núm. 4.

Junta especial—Véase: *Acreedores verificados*, núm. 1.

1^a. Juramento—El hecho de haber mencionado los documentos, en la demanda, no exime de prestar el juramento de ley al acompañarlos á la espresión de agravios.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 88, Ser. 2^a.

1^b. Jurisdicción—Debe resolverse por la cantidad que espresa la obligación, prescindiendo del hecho de tratarse de moneda especial.—Jur. Com., tom. 5, pág. 246, Ser. 2^a.

2. Jurisdicción—No adolece de nulidad el juicio testa-

1^a—El art. 245 del Cód. de Proc., establece que pueden en esa estación acompañarse documentos, prestando juramento de no haber tenido hasta entonces conocimiento de ellos. La Cámara ordenó la devolución de los documentos porque no fueron acompañados con el juramento prescripto por la ley. Contrasta esta resolución con lo resuelto en otro caso en que se ordenó la prestación del juramento como medida de para mejor proveer.—Véase: Inst., tom. 1^o, verb. *Juramento*, núm. 1579.—¿Por qué la Cámara no ordenó la prestación de juramento en el caso del sumario? Hay que advertir que en el caso presente el litigante tuvo la entereza de recusar al presidente de la Cámara, lo que no deja de ser un delito para ella.

1^b—Para resolver la competencia por razón de la cantidad, debe estarse á la suma material que causa *prima facie* el título con que se demanda, prescindiendo de si por la naturaleza de la obligación puede ella ser mayor ó menor, según la clase de moneda en que debe solventarse, pues este punto debe ser resuelto por la sentencia definitiva.—Véase: Inst., tom. 3^o, verb. *Jurisdicción*, núm. 7.

2—La competencia de los Tribunales para entender en los juicios debe versar sobre el acervo sucesorio, en el cual no están comprendidos los gananciales del cónyuge supérstite los que son propios de éste.

JUR

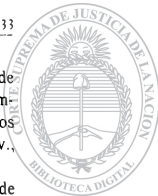
mentario seguido ante un Juez incompetente en virtud de que el acerbo sobrepase al monto de su jurisdicción, siempre que fuese seguido por el esposo, y una vez detraídos los gananciales resultase ser de su competencia.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 146, Ser. 2ª.

3. Jurisdicción—La del Juzgado en las obligaciones de hacer, debe fijarse por el contrato principal y no por la indemnización á pagar por su rescisión.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 197, Ser. 2ª.

4. Jurisdicción—Cuando las acciones que deduce el ac-

3—En la demanda se pedía el pago de los daños y perjuicios y la rescisión del contrato. La Cámara por mayoría resolvió que el asunto era de su competencia fundándose en que en la demanda se pedía la rescisión del contrato sin la cual no es procedente la indemnización del perjuicio causado por falta de cumplimiento de aquél, puesto que según el art. 1187 del Cód. Civ., la obligación de escriturar se resuelve en la de pagar daños y perjuicios cuando el obligado resiste su cumplimiento. La minoría dijo que la demanda no pedía el cumplimiento del contrato bajo la pena de resolverse la obligación en pérdidas é intereses, sino que determinadamente se pedía que por falta de cumplimiento de dicho contrato en la estación oportuna, se le condenase al demandado á la indemnización de las pérdidas é intereses. Que aun cuando á continuación se agrega en la demanda «y declarar rescindido el contrato», esta adición no es ni puede considerarse el objeto principal de la demanda por la indemnización de pérdidas é intereses, sino la consecuencia necesaria y lógica de que se declarase procedente la acción. No nos es posible decidirnos por una ú otra opinión, pues los antecedentes que suministran los fallos no dan ninguna luz al respecto, pero podemos decir que la competencia se establece por el objeto principal que se propone la acción, y bajo este punto de vista es necesario estudiar los casos que se presenten para deducir las consecuencias.

4—La demanda versaba sobre tres puntos ó cuestiones distintas: 1º sobre un contrato de sociedad, 2º sobre locación de servicios, 3º sobre alquileres. Para la tramitación del primero debía seguirse el juicio ordinario, pues no tiene una tramitación especial marcada por la ley—artículo 66 del Cód. de Proc.—Para el segundo debía nombrarse árbitros



JUR

tor, se fundan en causas y hechos distintos, y también con distinta tramitación deben ser divididas y ocurrirse para la tramitación de cada una de ellas á la jurisdicción que determina la ley.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 203, Ser. 2ª.

5. Jurisdicción—Los Tribunales civiles carecen de jurisdicción para entender en el juicio sobre cobro de un pagaré á la orden, aun en juicio ordinario.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 227, Ser. 2ª.

6. Jurisdicción—La designación de pesos oro, en la obligación, no basta para alterar la jurisdicción, pues la competencia por razón de la cantidad supone igualdad de valor en pesos moneda nacional.—Jur. Com., tom. 8, página, 303, Ser. 2ª.

7. Jurisdicción—El Juez que conoció en la formación del compromiso arbitral, es el competente para resolver sobre la aplicabilidad de la multa estipulada: los árbitros carecen de jurisdicción.—Jur. Com., tom. 9, pág. 53, Ser. 2ª.

8. Jurisdicción—Por razón de la cantidad, se fija en atención á la cantidad demandada aunque al monto de la

una vez acreditada la locación—art. 1627 del Cód. Civ.—lo propio que para el tercero. De aquí resulta que no concurren los requisitos establecidos por el art. 74 del Cód. de Proc. para poderse acumular las acciones, pues no corresponden á la jurisdicción del mismo Juez, ni pueden sustanciarse por los mismos trámites.

5—Un pagaré á la orden está equiparado por la ley, á una letra de cambio, y es sabido que el conocimiento de estas causas corresponde exclusivamente á la jurisdicción mercantil por la naturaleza comercial del acto.

6—Véase: verb. *Competencia*, núm. 4; *Jurisdicción*, núm. 4.

7—Véase: *Árbitros*, núm. 4.

8—La demanda excedía de la suma de 2000 nacionales, en cuyo caso correspondía su conocimiento á los Jueces de 1ª Inst.—art. 11, inc. 1º



JUR

obligación se agreguen los intereses y gastos.—Jur. Com., tom. 10, pag. 328, Ser. 2ª.

9. Jurisdicción.—La declinatoria de jurisdicción solo puede interponerse después de deducida la demanda.—Jur. Com., tom. 10, pag. 140, Ser. 2ª.

Jurisdicción.—Véase: *Juez competente*, núm. 1—*Excepción de arraigo*, núm. 2—*Declaratoria de herederos*, número 3—*Competencia*, núm. 3—*Diligencias de prueba*, núm. 4—*Costas*, núm. 12—*Cámara*, núm. 1—*Escusación*, núm. 1—*Quiebra*, núm. 8—*Contrato*, núm. 4—*Papel sellado*, núms. 3 y 4—*Embargo*, núm. 8—*Suspensión de empleo*, núm. 1—*Término extraordinario*, núm. 4—*Personería*, núm. 6—*Préstamo hipotecario*, núm. 1—*Honorarios*, núm. 3—*Contrato de locación*, núm. 2—*Fuero federal*, núm. 1—*Delitos*, núm. 1—*Obligación de hacer*, número 3.

1. Jurisdicción arbitral.—La acción de rendición de cuen-

de la Ley Org. de los Trib. de la Cap.—La competencia del Juzgado por razón de la cantidad se rige por la suma que expresa la demanda.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Competencia*, núm. 1; Jur. Civ., tom. 1º, página 401, Ser. 1ª; Inst., tom. 1º, verb. *Competencia*, núm. 422.

9—Así lo tiene resuelto un caso que se registra en el tom. 9, página 409, Ser. 2ª de los F. S. C. N.

1—La cuestión suscitada es la siguiente: la acción de rendición de cuentas que corresponde al socio contra el liquidador ¿es una acción *pro socio* suscitada entre socios y sometida como tal al arbitraje forzoso establecido por el art. 511 del Cód. de Com. anteriores? Ella no es una acción *pro socio*. Los liquidadores no representan á los socios, representan á la sociedad que es una persona jurídica distinta de la de sus miembros: es por esto que los actos de dichos liquidadores obligan solidariamente á los antiguos socios y hacen efectivas contra ellos las acciones que tuviese la sociedad. Este es el carácter predominante de los liquidadores de una sociedad disuelta: ella se supone existente para los efectos de la liquidación, y está representada por el liquidador cons-





JUR

tas que corresponde á los socios contra el liquidador nombrado, es de competencia de los Tribunales de Comercio; no corresponde al Tribunal arbitral, aunque el encargado de la liquidación de la sociedad reuna el carácter de socio de la misma.—Jur. Com., tom. 5, pág. 392, Ser. 2ª.

Jurisdicción arbitral—Véase: *Rendición de cuentas*, número 1—*Sociedad*, núm. 5.

1. **Jurisdicción civil**—Corresponde á esta jurisdicción el autorizar á la mujer casada para ejercer el comercio.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 39, Ser. 2ª.

titudino en su mandatario.—Así lo enseñan Troplong, SOCIÉTÉ, números 1004 y 1010; Alauzet, Droit Commercial, núms. 428 y 432; Massé, núm. 1961.—La acción de los socios contra el liquidador, sobre rendición de cuentas, debe ventilarse ante la jurisdicción ordinaria, porque ella es la consecuencia inmediata del mandato, y afecta al liquidador tan solo en su carácter de mandatario, sin que en manera alguna pueda cambiar esta situación la circunstancia de que el liquidador sea á la vez uno de los socios. Así Alauzet en el núm. 432, citado, dice: «La cualidad de liquidador es distinta de la de socio; si esas dos cualidades pueden reunirse en una misma persona, ellas no se confunden en manera alguna.»

1—Este auto fué revocatorio del de 1ª Inst. El actual Camarista Dr. Gimenez, entonces Juez de 1ª Inst., decía al fundar su auto que: «corresponde á la jurisdicción comercial el conocimiento del asunto de que se trata, con arreglo á lo preceptuado en el art. 2º del Cód. de Com. que el caso está perfectamente previsto en el Cap. II del mismo Código, que trata de la capacidad legal para ejercer el comercio, por cuya razón la competencia del Juzgado comercial es incuestionable.» El Dr. Cortés, no pensó del propio modo que el Juez de 1ª Instancia, pero consideró *incuestionablemente equivocada* dicha resolución, por que siendo el derecho civil el que determina el estado y capacidad de la persona y reglamenta los efectos legales del matrimonio con relación á la persona y á los bienes de los suyos, estableciendo la inhabilidad de la mujer para obligarse sin consentimiento del marido, los casos y la manera en que aquél puede ser suplido, cualquier que sea el objeto con que se necesite. La Cámara tuvo como resolución la vista fiscal. Esta reso-

JUR

Jurisdicción civil—Véase: *Empresarios*, núm. 1—*Constructores*, núm. 1.

1ª. Jurisdicción comercial—Las cuestiones sobre comisión, corretaje ó mandato sobre compraventa de títulos, corresponde á la jurisdicción comercial.—Jur. Com., tomo 5, pág. 35, Ser. 2ª.

2ª. Jurisdicción comercial—Las cuestiones entre el empresario de obras y sus obreros, corresponden ser conocidas por la jurisdicción mercantil. —Jur. Com., tom. 5, página 243, Ser. 2ª.

Jurisdicción comercial—Véase: *Sociedad anónima*, número 1—*Contrato*, núm. 3—*Fallido*, núm. 2—*Servicios*, núms. 2—*Vale*, núm. 1.

Jurisdicción común—Véase: *Fuero federal*, núm. 2.

1ª. Jurisdicción federal—El Banco Nacional, está obligado á ocurrir á la jurisdicción federal para ejecutar á sus deudores.—Jur. Com., tom. 10, pág. 143, Ser. 2ª.

2ª. Jurisdicción federal—Los Tribunales de la Capital,

lución está de acuerdo con otra del mismo Tribunal.—Véase: Inst., tomo 2º, verb. *Mujer casada*, núm. 1.

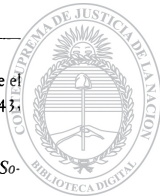
1ª—Esta acción es mercantil por su naturaleza—art. 70, Cód. de Com. ant.

2ª—Los actos de los empresarios de obras, relativos al ejercicio de esta profesión, son actos de comercio—Arts. 578, 589, 599 y 600 del Cód. de Com. ant.—En estos actos hay la idea de especular, cuya circunstancia caracteriza su comercialidad—Massé, núm. 2675.—Por esta causa, deben considerarse mercantiles las cuestiones suscitadas entre el empresario y los obreros que emplea.

1ª—Véase: *Banco Nacional*, núm. 1.

2ª—La jurisdicción federal en las causas regidas por la Constitución, leyes y tratados del Congreso es privativa y excluyente de la de los Tribunales de Provincia, según la disposición terminante del art. 14, acápite 1º de la ley sobre jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de 14 de Setiembre de 1863. La aplicación práctica que la





JUR

carecen de jurisdicción para conocer en asuntos en que el fuero federal es privativo.—Jur. Com., tom. 10, pág. 143, Ser. 2ª.

Jurisdicción federal—Véase: *Excepciones*, núm. 2.

Jurisdicción ordinaria—Véase: *Personería*, núm. 3 —*Sociedad*, núm. 5.

1ª. Jurisdicción prorrogada—El hecho de comparecer á reconocer la firma de un documento no importa prorrogar la jurisdicción.—Jur. Com., tom. 10, pág. 133, Ser. 2ª.

2. Jurisdicción prorrogada—El hecho de concurrir al reconocimiento de una firma no importa prorrogar la jurisdicción.—Jur. Com., tom. 10, pág. 140, Ser. 2ª.

1ª. Jurisdicción pública—Las Cámaras Sindicales de la Bolsa, carecen de jurisdicción pública.—Jur. Com., tomo 5, pág. 35, Ser. 2ª.

S. C. N. ha hecho de este artículo está de perfecto acuerdo con el sumario.—Véase además verb. *Banco Nacional*, núm. 1.

1ª—Citado el firmante de un documento para reconocer su firma, articuló de incompetencia, siendo rechazada la articulación, fundándose en que al solicitar el reconocimiento de una firma se hace uso de un derecho acordado por el art. 466 del Cód. de Proc., debiendo tenerse presente que la incompetencia deducida fuera de la citación de remate es estemporánea—art. 485.—Teniendo en cuenta la naturaleza del juicio ejecutivo, no debe admitirse articulación de ningún género cuyo resultado sea ordinarizarlo, pues lo contrario sería quebrantar el espíritu de la ley que tiene determinado un procedimiento breve y sumario, sin dilaciones de ningún género. Además es principio consagrado que el hecho de comparecer á reconocer un documento no implica una prórroga de jurisdicción como lo tiene resuelto la S. C. N. en el tom. 9º, pág. 512, Ser. 1ª de sus fallos.

2—Véase nota precedente.

1ª—La jurisdicción pública debe derivar de la ley, y como no existe disposición alguna que se la haya dado, es evidente la exactitud del sumario.

JUR-JUZ

Jurisdicción voluntaria.—Véase: *Escepción de incompetencia*, núm. 1.

1. *Justa causa*.—La imposibilidad en que se encuentra el abogado patrocinante para concurrir á la audiencia, es justa causa para fijar nuevo día.—Jur. Com., tom. 9, pág. 58, Ser. 2ª.

Justa causa.—Véase: *Posiciones*, núms. 1 y 6.

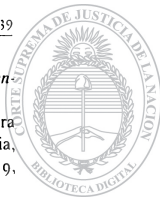
Juzgado.—Véase: *Síndico definitivo*, núm. 1.

Juzgado correccional.—Véase: *Competencia*, núm. 1.—*Defraudación*, núms. 7 y 8.

Juzgado de Paz.—Véase: *Competencia*, núm. 3.

Juzgado de instrucción.—Véase: *Denuncia*, núm. 1.

1.—Al presentar una parte su escusación, para concurrir á la audiencia, antes de la hora señalada, demuestra no solo que acata las resoluciones del Juzgado, sino que asimismo pone de manifiesto que no existe de su parte, falta de voluntad en concurrir al juicio. Pretender que en algunos juicios, no sea necesaria la concurrencia de abogado patrocinante, es desconocer manifiestamente el derecho que cada litigante tiene, y es ponerse en contradicción con lo que establece el art. 8 del Cód. de Proc. en lo Civil y Com., como asimismo contra lo que se deduce del art. 9 del mismo. El art. 592 del Cód. de Proc. en lo Crim. establece igual principio.





1ª. **Laudo arbitral**—La renuncia de todo recurso contra el laudo bajo pena de multa, no importa renunciar también a la acción de nulidad que la ley concede.—Jur. Com., tom. 10, pág. 136, Ser. 2ª.

Laudo arbitral—Véase: *Nulidad del laudo*, núm. 1.

1ª. **Legado**—Las restricciones y limitaciones que puedan afectar perpetuamente a la ejecución del legado, importan una condición resolutoria que llenada lo hace caducar.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 269, Ser. 2ª.

1. **Legado condicional**—El legado de cosa cierta, pero sujeto a una condición de plazo determinado, se conceptúa legado condicional y no puro y simple.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 269, Ser. 2ª.

1ª—Contra el laudo de árbitros-arbitradores solo procede la acción de nulidad—art. 808 del Cód. de Proc.—En el compromiso se estableció una multa que debía abonar la parte que *apelara* del laudo. La cláusula del compromiso que establece la inapelabilidad del laudo y la multa establecida para mayor garantía, son completamente ineficaz, puesto que la ley no admite la apelabilidad del laudo. En caso de duda deben las convenciones interpretarse en el sentido más favorable a la amplitud de la defensa: de donde resulta que la cláusula establecida imponiendo una multa para el que apele, no debe interpretarse como establecida para el que diga de nulidad.

1ª—Arts. 553, 569, 2663 y 3957 del Cód. Civ.



LEG

1. **Legítima defensa**—El ataque y aun las heridas, no bastan para fundar la escepción de legítima defensa, si el homicida pudo evitar el ataque, ó si hubiese cesado el peligro: solo pueden considerarse como provocación grave é ilícita.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 352, Ser. 2ª.

2. **Legítima defensa**—No procede esta escepción, si el procesado pudo evitar el ataque ó si no era de tal naturaleza que pusiese en peligro su vida.—Jur. Crim., tomo 6, pág. 255, Ser. 2ª.

3. **Legítima defensa**—No puede considerarse que hubo legítima defensa, si el reo pudo esquivar el ataque.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 54, Ser. 2ª.

4. **Legítima defensa**—La provocación sin armas, no puede fundar esta escepción, pero atenúa la pena del homicidio que debe reducirse á tres años de prisión.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 206, Ser. 2ª.

1—Porque no reunen las condiciones exijidas por el art. 81 del Cód. Pen. vigente.

2—Véase: Inst., tom. 3º. verb. *Legítima defensa*, núm. 1 y su nota.

3—Véase nota precedente.

4—Un dependiente fué, acompañado de otro, á cobrar una cuenta exijiendo en su defecto la devolución de las mercaderías: el deudor dijo que no pagaba ni devolvía los efectos, entonces el primero dijo que no se iría si no se le abonaba ó devolvía las mercaderías. Entonces el deudor, cerrando los puños, se vino en actitud agresiva sobre el cobrador, y éste le disparó un tiro causándole la muerte. Esa provocación no basta á determinar el estado de legítima defensa, porque la víctima estaba sola mientras que el amenazado tenía otro que lo acompañaba y estaba armado, circunstancias que por sí solas bastan para comprobar que no concurren los requisitos exijidos por la ley para que haya legítima defensa. Pero debe tenerse presente el estado de irritación en que se encontraban los ánimos, siendo menester convenir en que solo atenúa la pena conforme al art. 27 del Cód. Pen. ant.



LEG — LES

5. **Legítima defensa**—Justificada la existencia de un desafío irregular, el homicidio debe penarse sin determinar de quién partió la provocación, ni aun si procede la legítima defensa.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 215, Ser. 2ª.

6. **Legítima defensa**—Esta escepción es improcedente en el delito de atentado con arma contra la autoridad, si no se justifica que existió inminente peligro de muerte.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 355, Ser. 2ª.

Legítima defensa—Véase— *Escepción de legítima defensa*, núm. 1.

Legitimación—Véase: *Hijo natural*, núm. 4.

Legítimo abono—Véase: *Gastos*, núm. 2.

1ª. **Lesión**—Si del informe médico resulta, que ella no tiene carácter grave, no puede penarse como homicidio el fallecimiento sobreviniente sin que se justifique plenamente que fué causado por la lesión.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 86, Ser. 2ª.

Lesión—Véase: *Arma de fuego*, núms. 2 y 4.

1ª. **Lesiones**—Las inferidas con alevosía, que produzcan

5—Véase: *Desafío irregular*, núm. 1.

6—Porque no concurren los requisitos exigidos por el art. 81, inc. 8º del Cód. de Proc.

1ª—Véase: *Homicidio*, núm. 8.

1ª—Las lesiones consistieron en dos heridas inferidas de atrás, «quedando como desórden funcional un entorpecimiento inamovible en la estensión completa del antebrazo, el cual permanecía en una semiflexión.» Esta circunstancia no puede considerarse como que quedara impedido para el trabajo, pues el brazo tenía movimiento. Debe además tenerse en cuenta, que los resultados poco favorables de las heridas no fueron una consecuencia necesaria de ellas, sino ocasionada por un flemon que apareció al rededor de la herida y de la inflamación consiguiente de los elementos de la articulación. De aquí resulta que el delito está comprendido entre los determinados en el art. 120, inc. 1º del Cód. Pen., y no en el inc. 3º del art. 119. Además de las cons-

LES

un desorden funcional, aun cuando no la pérdida de un miembro, deben ser penadas con el máximun de la pena.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 37, Ser. 2^a.

2. **Lesiones**—Si la muerte fué ocasionada por causas ajenas á la herida, aunque fuese una incidencia de la riña, el reo solo puede ser penado por las lesiones.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 192, Ser. 2^a.

3. **Lesiones**—No habiendo pena para la tentativa de lesiones, el que ordena una paliza que no se lleva á efecto, no es pasible de pena.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 86, Ser. 2^a.

4. **Lesiones**—Con bala, cuya curación dura más de un tancias del proceso resultaba la circunstancia agravante de la alevosía—art. 134, incs. 2º, 13 y 18,—por cuyo motivo debe aplicarse el máximun de la pena—art. 120, inc. 1º citado.

2—Al inferirse la herida, el lesionado cayó al suelo fracturándose un hueso, falleciendo á consecuencia de dicha fractura á los diez días del suceso. El médico manifestó en su informe que el fallecimiento fué debido á la fractura ocasionada por la caída, no pudiendo en consecuencia hacerse cargo alguno al autor de la herida por ser aquélla la consecuencia de un hecho que no ejecutó, y que se puede considerar como imprevisto. Debe tenerse asimismo presente, que por haber fallecido el herido á los diez días, no pudo fijarse el tiempo de curación de la herida para el caso que la víctima hubiese sobrevivido, pues no puede considerarse bastante el informe médico que establecía que la curación duraría más de un mes. Debe tenerse en cuenta que el inc. 1º del art. 120 legisla para el caso en que la lesión *produce* incapacidad para el trabajo por más de un mes, no siendo bastante que se pruebe que la lesión *pueda producir* esa incapacidad durante ese tiempo determinado, sino que es necesario que se demuestre que ese hecho se ha producido: esto es, que se compruebe que la víctima estuvo materialmente incapacitada para el trabajo durante dicho término.

3—El art. 46 del Cód. Pen. establece que no serán castigados otros actos ú omisiones que los que la ley con anterioridad haya calificado de delito.

4—La lesión se cometió en estado de embriaguez, pero no tal que



LES

mes, deben ser penadas con año y medio de prisión si existe una circunstancia agravante.—Jur. Crim., tom. 5, página 114, Ser. 2ª.

5. **Lesiones**—Si por muerte de la víctima no puede saberse el tiempo que hubieran tardado en curar las heridas, debe tomarse el término medio para la aplicación de la pena.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 192, Ser. 2ª.

6. **Lesiones**—Inferidas sin riña pero sin intención homicida y cuya curación dure más de un mes, deben ser penadas con dos años de prisión.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 261, Ser. 2ª.

7. **Lesiones**—Las inferidas sin intención homicida y cuya curación dure más de un mes, deben ser penadas con dos años de prisión.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 321, Ser. 2ª.

8. **Lesiones**—La pena impuesta por lesiones, no puede ser sustituida por otra pecuniaria.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 141, Ser. 2ª.

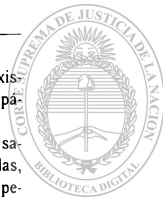
importara una perturbación de la inteligencia no imputable al reo y durante la cual no haya tenido conciencia de dicho acto ni de su criminalidad, sirviéndole tan solo como circunstancia atenuante—arts. 99, 81, inc. 1º, y 83, inc. 1º.

5—El término medio de la pena, debe considerarse como que la curación no dura mas un mes como se ha establecido en la nota al número 2 de este mismo verbo.

6—Art. 120, inc. 1º del Cód. Pen.

7—Véase nota precedente.

8—El Juez de 1ª Inst. condenó al reo á la pena de seis meses de arresto, con declaración que podía sustituir la pena á razón de ₡ 1.25 por día. La Cámara confirmó la sentencia en lo principal y revocó en cuanto á la sustitución, porque el art. 120 del Cód. vig., que establece las penas para las lesiones, no impone la pecuniaria para estos delitos, sino simplemente la de arresto, y por consiguiente ella no puede sustituirse.



LES

9. **Lesiones**—La pena corporal por lesiones, no puede substituirse por la pecunaria.—Jur. Crim., tom. 8, página 300, Ser. 2ª.

10. **Lesiones**—Las agravadas con atentado á la autoridad que representaba la víctima, deben ser penadas con 2 años y ocho meses de prisión.—Jur. Crim., tom. 8, página 105, Ser. 2ª.

11. **Lesiones**—Deben ser penadas con año y medio de prisión, si el herido tarda más de un mes en quedar curado.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 201, Ser. 2ª.

12. **Lesiones**—Inferidas á diversas víctimas, permiten aplicar la pena en virtud de las más graves; las leves solo pueden tomarse como causa de agravación en los casos en que la ley la permite.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 5, Ser. 2ª.

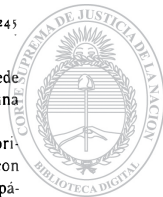
13. **Lesiones**—Que tardan más de un mes en curar, sin que concurren circunstancias atenuantes ni agravantes, deben ser penadas con dos años de prisión.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 31, Ser. 2ª.

9—La ley penal en el Cód. de Proc. Crim. no permite esa substitución. La ley provincial la autoriza pero ella no puede aplicarse porque ha quedado en desuso en esta Capital después de sancionado el Cód. de Proc. vigente. El art. 396 de este Código se opone á esa medida pues establece que la fianza carcelera termina por el hecho de presentarse el reo llamado á cumplir la condena.

10—También concurrían circunstancias atenuantes: en este caso corresponde aplicar la pena establecida en el sumario, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 120, inc. 1º del Cód. Pen. vig.

11—El art. 120, inc. 1º establece la pena de prisión de 1 á 3 años. Como en el presente caso concurría una circunstancia atenuante, la aplicación de la pena establecida en el sumario era procedente—artículo 83, *ibid.*

13—Las lesiones incapacitaron á la víctima, para el trabajo por más de un mes. En este caso la pena aplicable es la establecida en los arts. 52 y 120 del Cód. Pen. vig.





LES

14. **Lesiones**—Sin intención homicida, deben ser castigadas con el término medio que la ley fija, si no concurren circunstancias agravantes ni atenuantes.—Jur. Crim., tomo 7, pág. 108, Ser. 2ª.

15. **Lesiones**—Por culpa grave, deben ser penadas aun cuando no exista voluntad criminal.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 144, Ser. 2ª.

16. **Lesiones**—En materia criminal, se conceptúa arma todo objeto que pueda ofender causando lesiones más o menos graves.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 398, Ser. 2ª.

17. **Lesiones**—Las que causen la pérdida de un miembro importante, deben castigarse con tres años de penitenciaría, si existe una circunstancia atenuante.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 15, Ser. 2ª.

18. **Lesiones**—La provocación de la víctima de lesiones hechas con arma de fuego, hace procedente la aplicación del minimum de la pena.—Jur. Crim., tomo 9, pág. 222, Ser. 2ª.

19. **Lesiones**—Este delito cometido con arma de fuego, debe ser penado con dos años de prisión.—Jur. Crim., tomo 9, pág. 332, Ser. 2ª.

14—Arts. 52 y 53 del Cód. Pen. vig.

15—Un carrero cruzó una bocacalle, al trote de los caballos, llevándose por delante a dos niños y causándoles graves lesiones. Este hecho constituye el delito por culpa grave de que nos habla el art. 16 en sus incs. 4º y 5º.

16—Las lesiones fueron ocasionadas con un rebenque, alegándose después que ese instrumento no es un arma. Es sabido que en materia penal, la palabra arma, se toma en un sentido general, que comprende todo aquello con que se puede ofender, como palo, piedra, etc.

17—Art. 119, inc. 3º del Cód. Pen.

18—Arts. 81, inc. 6, y 99, Cód. Pen.

19—Arts. 99 y 120 del Cód. Pen.

LES

20. **Lesiones**—Para que la mutilación sea causa agravante, debe resultar haber sido la causa determinante del delito: si solo fué accidental no debe tenerse en cuenta.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 16, Ser. 2ª.

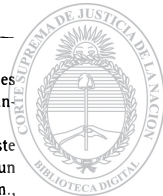
Lesiones— Véase: *Homicidio*, núm. 2—*Atentado*, números 3 y 8—*Arma de fuego*, núm. 4—*Defensa propia*, núm. 1—*Disparo de arma de fuego*, núms. 3 y 4.

1. **Lesiones corporales**—Cuya curación dura un mes, deben ser castigadas con cuatro meses de arresto é indemnización de perjuicios y las costas del litigio.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 96, Ser. 2ª.

20—La mutilación consistió en la pérdida de tres dedos de la mano, quedando la víctima privada de un miembro principal como es aquella. En este caso la herida fué causada accidentalmente. Es decir, que no hubo voluntad de mutilar un determinado miembro, y solo hubo voluntad de lesionar pero sin causar mutilación alguna. En este caso la pena aplicable no es la que establece el art. 119, inc. 2º del Cód. Pen. vigente, el que se refiere á mutilaciones especialmente intencionadas y con prescindencia de la voluntad criminal de lesionar. En estos hechos, como dice Pacheco, son posibles dos intenciones, dos propósitos: uno es el de herir, otro el de mutilar, y con cualquier de ellos puede resultar la mutilación efectiva. Cuando el apresamiento de Cristo, San Pedro dió un golpe á Mateo cortándole la oreja. Su intención evidente fué herir pero no mutilar. La mutilación fué un hecho accidental por el cual no se le habría penado. Por el contrario: en la mutilación del amante de Eloísa, el propósito fué mutilar, y no causar una herida.—Véase Pacheco: El Cód. Pen., tom. 3º, pág. 46.—En el caso del sumario se trata de una mutilación causada en pelea, cortándole tres dedos de la mano. Siguiendo el espíritu filosófico de las palabras citadas, que debe suponerse forma parte de la ley y es su fundamento, como en el caso del inc. 3º, en el que no se encuentra el que nos ocupa, debe considerarse únicamente aplicable la pena fijada en el artículo 120, inc. 1º. Y si no hay circunstancias agravantes ni atenuantes, debe aplicarse el término medio de la pena.

1—Art. 120, inc. 2º del Cód. Pen.





LES

2. **Lesiones corporales**—Para que este delito exista, es necesario que las lesiones hayan sido inferidas con voluntad de herir.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 43, Ser. 2ª.

1. **Lesiones de bala**—Cuando por la ley la pena de este delito es menos de la que fija por el hecho de disparar un arma de fuego, solo debe penarse este delito.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 426, Ser. 2ª.

Lesiones leves—Véase: *Disparo de arma de fuego*, número 5.

2—La Cámara dijo que para que haya delito de lesiones corporales, es necesario que ellas hayan sido inferidas con voluntad de herir. El elemento de la intención criminal entra en estos delitos como en todos los demás, y es por esto que tanto el antiguo Código—art. 230—como el que nos rige—art. 119—exigen que las heridas hayan sido inferidas voluntariamente. En el caso que motivó el fallo que nos ocupa el procesado descerrajó un tiro contra la puerta del cuarto donde su esposa se había refugiado, á fin de evitar que su esposo, en estado de ebriedad, continuara castigándola con un rebenque. La bala atravesó la madera de la puerta y fué á herir en el ojo á la esposa que se hallaba dentro. Teniendo en cuenta el estado de ebriedad del agente, se ve que no hubo la voluntad de herir exigida por la ley. Falta uno de los elementos del delito, y por consiguiente no hay lesión punible. Esta fué la opinión de tres de los miembros de la Cámara. En cuarto dijo que no cabía la calificación de casual ó culpable, pues el hecho había sido ejecutado con intención criminal, pues el esposo después de estropear á su consorte de una manera brutal la persiguió hasta el lugar donde se había guarecido donde descerrajó un tiro de revólver logrando fatalmente herirla. El quinto Camarista dijo que no consideraba casual la herida, sino el resultado de un acto imprudente que debiera castigarse de acuerdo con lo establecido en el título respectivo del Código Penal. Es indudable que la opinión de este último, es la más acertada y está de acuerdo con la jurisprudencia de la Cámara.—Véase: *Lesiones*, núm. 15.

1—Arts. 120, 99, 83, inc. 4º y 52 del Cód. Pen. vig.—La curación de la herida duró un mes y el agente obró bajo la presión de la embriaguez parcial é involuntaria.



LET

Letra—Véase: *Cotejo de letras*, núm. 4.

1. **Letra de cambio**—El firmante de ella es responsable de los intereses, gastos y costas, desde el vencimiento aun que pague en el acto del mandamiento.—Jur. Crim., tomo 6, pág. 100, Ser. 2ª.

2. **Letra de cambio**—Si no ha sido protestada, los intereses solo son á cargo del deudor desde la fecha de la demanda.—Jur. Com., tom. 7, pág. 158, Ser. 2ª.

3. **Letra de cambio**—Si no tiene lugar designado para el pago, puede ser ejecutada en el lugar en que fué firmada.—Jur. Com., tom. 9, pág. 261, Ser. 2ª.

4. **Letra de cambio**—Si no existe lugar designado para el pago, el acreedor puede exijirlo, á opción, en el domicilio del deudor ó en el lugar donde aparezca firmada.—Jur. Com., tom. 10, pág. 262, Ser. 2ª.

Letra de cambio—Véase: *Protesto*, núms. 2, 3, 4, 5 y 6—*Escepción de novación*, núms. 1 y 2—*Escepción de compromiso*, núms. 1 y 2—*Escepción de falsedad*, núm. 1—*Escepción de falta de personería*, núm. 1—*Escepción de inhabilidad de título*, núms. 1, 2 y 3—*Escepción de nulidad*, núm. 1—*Escepción de litispendencia*, núm. 4—*Acción ejecutiva*, núm. 1—*Contrato*, núm. 13—*Notificación*, núm. 5—*Domicilio*, núm. 3—*Edictos*, núm. 1—*Nulidad de la ejecución*, núms. 1 y 2.

Letra imperfecta—Véase: *Acción ejecutiva*, núm. 3.

1—Desde el vencimiento y protesto.—Véase: verb. *Intereses*, núm. 1.

2—El art. 913 del Cód. de Com. ant. establecía, que los intereses de la letra protestada por falta de pago, se deben desde el día del protesto: á falta de este requisito, se deben desde el día de la demanda. artículo 225 *ibid.*

3—Arts. 783 del Cód de Com. ant. y 606 del vigente.

4—Véase nota precedente.

**LEY—LIB**

Ley criminal—Véase: *Fallido*, núm. 2.

Leyes de procedimientos—Véase: *Efecto retroactivo*, número 1.

Leyes físicas—Véase: *Confesión del reo*, núm. 9.

Leyes naturales—Véase: *Confesión del reo*, núm. 9.

Libertad—Véase: *Fianza*, núm. 1.

Libros—Véase: *Liquidador*, núm. 1.

1. Libros de comercio—Todo comerciante está obligado á exhibir sus libros en la parte que se refiere al litigio.—Jur. Com., tom. 5, pág. 152, Ser. 2ª.

2. Libros de comercio—Solo forman prueba entre comerciantes y respecto de actos de comerciantes.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 303, Ser. 2ª.

3. Libros de comercio—Que no llenen las formalidades que exige la ley, no forman prueba.—Jur. Com., tom. 6, pág. 174, Ser. 2ª.

4. Libros de comercio—Para la separación de un socio y consiguiente liquidación de utilidades, deben entregarse los libros al liquidador nombrado.—Jur. Com., tom. 8, pág. 147, Ser. 2ª.

5. Libros de comercio—Para que el boleto de la venta efectuada por el corredor ó comisionista forme prueba contra las partes, debe ser reconocido por aquél y constar la operación de sus libros de comercio.—Jur. Com., tomo 8, pág. 220, Ser. 2ª.

1—Arts. 71, 72 y siguientes del Cód. de Com.

2—Art. 76, Cód. de Com.

3—No prueban á favor del comerciante que los presenta, pero hacen fe en su contra—art. 58, Cód. de Com. ant.

4—La liquidación debe hacerse según lo que resulte de los libros de la casa, lo que no puede cumplirse sin su entrega y sin tenerlos á la vista para su examen.

5—Véase: verb. *Boleto de venta*, núm. 1.

LIB

6. Libros de comercio—Su exhibición general solo procede en los casos espresamente previstos en el Código.—Jur. Com., tom. 8, pág. 347, Ser. 2ª.

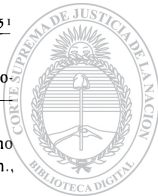
7. Libros de comercio—De un tercero en el litigio, no pueden ser compulsados contra su voluntad.—Jur. Com., tom. 7, pág. 82, Ser. 2ª.

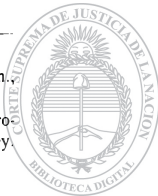
8. Libros de comercio—El hecho de apoderarse de los

6—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 71 del Cód. de Com. ant., y 58 del vig. cuya enunciación es taxativa.

7—La ley al establecer el exámen de los libros del comerciante, se funda en el propio interés de él, á la vez que en el respeto que es debido al secreto de las operaciones mercantiles. Es por esto que el Código prohíbe las pesquisas de oficio, y establece taxativamente los casos en que procede la compulsación general en los arts. 71 y 72—Cód. ant.—Este último artículo solo se refiere á los libros de las partes en juicio. El art. 68 también concurre á fijar la verdadera inteligencia de la ley, pues quiere que se juzgue la controversia por los libros del adversario, cuando la contraparte omitiese ú ocultase alguno de los libros reputados como indispensables; y el art. 76 que habla de la prueba de los libros en favor de sus dueños, cuando el adversario no presente asientos legítimos en contrario, fijándose en su último inciso el procedimiento á seguirse cuando *resulte prueba contradictoria de los libros de las partes* que litigan. Nuestra ley sobre este punto, tiene su fuente en el art. 51 del Cód. Español, y en el 15 del francés. Pues bien, Masse al estudiar este último, dice que la producción ó presentación de los libros de un tercero solo puede ser voluntaria; negando de la manera más categórica á las partes, el derecho de pedirla, así como al Juez, de concederla, por la alta consideración de que los comerciantes tienen interés en que el secreto de sus negocios no sea divulgado—tom. 4º, pág. 516.—La misma doctrina sostienen Alauzet, tom. 1º, pág. 347 y Delamarre y Le Poitvin, tom. 1º, página 289. En el propio sentido se espresa el Dr. Tejedor en su curso de Derecho Mercantil, tom. 1º, pág. 89. Puede verse además la obra del Dr. Obarrio sobre el Cód. de Com.

8—De dos socios, uno se llevó los libros á su casa, y por medio de hipótesis se dió á este hecho el carácter de una defraudación por una suma dada; pero con los hechos denunciados, no podía constituirse tal delito por lo que se declaró incompetente el Juez de Instrucción.





LIB—LIQ

libros uno de los socios, no importa un delito.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 279, Ser. 2^a.

9. Libros de comercio—Su exhibición general, solo procede en los casos espresamente determinados por la ley.—Jur. Com., tom. 10, pág. 298, Ser. 2^a.

Libros de comercio—Véase: *Secuestro*, núm. 1.

Libros de Policía—Véase: *Declaraciones*, núm. 1.

Linderos—Véase: *Mensura*, núm. 1.

Línea de edificación—Véase: *Espropiación*, núm. 1.

1^a. Liquidación—Para la separación de un socio, y consiguiente liquidación de utilidades, deben entregarse los libros al liquidador nombrado.—Jur. Com., tom. 8, pág. 147, Ser. 2^a.

Liquidación—Véase: *Intereses*, núm. 1—*Arbitros*, número 3—*Jurisdicción arbitral*, núm. 1—*Sociedad*, núm. 1—*Falsedad*, núm. 2—*Balance de liquidación*, núm. 1—*Libros de comercio*, núm. 4—*Personería*, núm. 3—*Prescripción*, núm. 6—*Corredor de bolsa*, núm. 3—*Condominio*, núm. 2.

1^b. Liquidación judicial—En la de intereses, no procede la capitalización trimestral, si no hubiese sido estipulada en la convención.—Jur. Com., tom. 10, pág. 5, Serie 2^a.

1. Liquidador—De una sociedad, está obligado á la rendición de cuentas documentadas y detalladas: no basta la presentación de los libros en que conste que ha practicado regularmente dicha operación.—Jur. Com., tom. 5, página 392, Ser. 2^a.

9—Véase el núm. 6.

1^a—Véase: *Libros de comercio*, núm. 4.

1^b—Véase: *Intereses*, núm. 1.



LIQ — LOC

2^a. Liquidador—Procede su separación, cuando no ha llenado su cometido dentro del término que se fijó.—Jur. Com., tom. 9, pág. 182, Ser. 2^a.

Litigio—Véase: *Bienes*, núm. 1—*Libros de comercio*, núm. 1—*Escepción de cosa juzgada*, núms. 1 y 2—*Escepción de litispendencia*, núm. 3.

Litispendencia—Véase: *Escepción de litispendencia*, número 3.

Locación —Véase: *Contrato de locación*, núm. 2.

1. Locación de servicios—El locador de servicios ó constructor de una obra posee para el propietario, y todo cambio hecho por voluntad propia, se reputa clandestino.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 319, Ser. 2^a.

2^b. Locación de servicios—Probada la existencia del trabajo prestado, el que lo aprovechó debe retribuirlo, ya sea la consecuencia de un mandato ó de una locación de servicios.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 291, Ser. 2^a.

3. Locación de servicios—La acción de daños y perjuicios fundada en la falta de cumplimiento de este contrato,

2^a—El liquidador en este caso es un mandatario. El mandato se acaba por el vencimiento del término por el cual fué conferido. Vencido el término cesa el mandato.

1—El locador no posee para sí sino para el que contrata sus servicios, y si se convierte en poseedor por acto propio, despoja al propietario, de su posesión, y ese hecho tiene lugar clandestinamente, puesto que portal debe entenderse un acto oculto, como lo es el de cambiar la causa de la tenencia de una cosa, sin que el propietario se aperciba, siendo así que no ve en aquél sino un poseedor para él. Esta resolución está de acuerdo con otra que corre publicada en el tom. 4^o, pág. 535, Ser. 2^a de la Jur. Civ.—Véase: Inst., tom. 3^o, verb. *Interdicto de despojo*, núm. 1.

2^b—Arts. 1627 y 1871 del Cód. Civ.

3—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 10.

LOC—LUG

es improcedente si se justifica que la resolución se operó de conformidad de partes.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 218, Ser. 2ª.

Locador—Véase: *Contrato de locación*, núm. 1.

Locatario—Véase: *Violación de domicilio*, núm. 2.

Locatarios—Véase: *Testigos*, núm. 7.

Lotes comprados—Véase: *Posesión*, núm. 1.

1. Lugar—Si no existe designado para el pago de la letra, puede exigirse su cumplimiento, á opción, en el domicilio del deudor ó en el lugar en que ha sido firmado.—Jur. Com., tom. 10, pág. 262, Ser. 2ª.

1—Véase: *Letra de cambio*, núm. 4.





Madre—Véase: *Filiación natural*, núm. 1.

Magistrados—Véase: *Desacato*, núm. 5.

Mala administración—Véase: *Sociedad*, núm. 8.

Malos antecedentes—Véase: *Declaraciones*, núm. 1.

Mandamiento—Véase: *Intereses*, núm. 2.

1^a. **Mandante**—Está obligado á abonar al mandatario todos los gastos que haya hecho para llenar su encargo.—Jur. Com., tom. 7, pág. 365, Ser. 2^a.

2. **Mandante**—Los pagos hechos por el mandatario sin autorización del mandante son de cuenta exclusiva del primero, quien deberá entregar al segundo todas las sumas percibidas.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 153, Ser. 2^a.

Mandante—Véase: *Corredor de Bolsa*, núms. 1 y 2—*Comisionistas*, núms. 1, 2, 4 y 5—*Contrato*, núm. 1—*Mandatario*, núms. 3 y 5—*Rematador*, núm. 1—*Honorarios*, núm. 1—*Poder especial*, núm. 1.

1^b. **Mandante y mandatario**—En materia criminal, deben

1^a—Arts. 1949, 1950 y 1951 del Cód. Civ., y 310 y 311 del Cód. de Com. ant.

2—Arts. 1931, 1932 y 1934 del Cód. Civ.

1^b—Se trata del delito de circulación de billetes falsos de banco: uno suministró los billetes y otro se encargó de su circulación. Este delito está previsto por el art. 285 del Cód. Pen. vigente. La complicidad

MAN

recibir la misma pena, á menos que el mandatario hubiera excedido los términos del mandato en su ejecución.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 314, Ser. 2ª.

1. **Mandatario**—Consentido el auto en que se tiene por parte al mandatario, todo ulterior desconocimiento de dicha personería, debe ser rechazada.—Jur. Com., tom. 6, pág. 385, Ser. 2ª.

2. **Mandatario**—La ratificación del mandante, hace impropcedente la nulidad de lo actuado fundada en la estralimitación del mandato ó en la carencia de facultades del mandatario.—Jur. Com., tom. 8, pág. 173, Ser. 2ª.

3. **Mandatario**—Que haya renunciado al mandato tiene

es indudable y los arts. 32 y 33, inc. 2º determinan su alcance con especialidad.

1—La Cámara había resuelto ya con anterioridad aceptando la personería invocada, y una vez devuelta al Inferior se desconoció esa personería. Esto no podía hacerse porque la resolución de la Cámara hacia cosa juzgada, y porque el Inferior, no puede rever ni dejar sin efecto los autos del Superior. Esta resolución está de acuerdo con otro caso resuelto.—Véase: Inst., tom. 1º, verb. *Personería*, núm. 2012.

2—Arts. 1936 y 1937 del Cód. Civ.

3—El procurador de una de las partes litigantes renunció el poder y presentó su cuenta de honorarios: el Juez no hizo lugar á la regulación, porque ésta solo procede cuando ha cesado el mandato por conclusión del pleito, ó cuando ha cesado el ejercicio del mandato por revocación ó renuncia. Se dijo además que el abogado solo puede pedir regulación cuando se ha separado de la dirección del asunto. La Cámara revocó el auto fundándose, en que á pesar de la renuncia expresa, la ley impone al abogado ó apoderado, la obligación de continuar sus gestiones—arts. 20 del Cód. de Proc. y 1979 del Cód. Civ.—y en este concepto no es posible seguir otro temperamento que esperar que el poderante comparezca dentro del término que le acuerde el Juez, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 20 citado, del Cód. de Proc. Y mientras esto sucede, nada se opone á que el apoderado formule los pedidos conducentes al cobro de sus honorarios. Con relación al abo-



MAN

derecho para ejecutar al mandante no obstante su obligación de continuar la representación hasta el vencimiento del término fijado para la presentación personal de aquél.—Jur. Com., tom. 7, pág. 167, Ser. 2ª.

4. **Mandatario**—Al que invoca este carácter, corresponde justificarlo para limitar su responsabilidad respecto á terceros, aun cuando al celebrar el contrato se le haya reconocido representación.—Jur. Com., tom. 7, pág. 375, Ser. 2ª.

5. **Mandatario**—O Comisionista, que compra para sí los efectos materia de la comisión, es responsable siempre que el mandante haya ratificado la operación, expresa ó tácitamente.—Jur. Com., tom. 7, pág. 300, Ser. 2ª.

gado, no puede decirse que la resolución del Juez de 1ª Inst. se hubiese ajustado á la ley y á la equidad. Exijir que el abogado renuncie á la dirección del asunto para que pueda cobrar judicialmente sus honorarios ya devengados, es establecer un plazo ó una condición para el cobro de ese trabajo, condición y plazo que la ley no establece y que tampoco los jueces pueden establecer sino fundándose en lo arbitrario. Si un abogado es exigente para el cobro de sus honorarios, esa es cuestión que compete á su cliente, que puede abandonarlo por otro que mejor consulte sus intereses. El abogado puede exigir el cobro de sus honorarios cuando quiera, sin renunciar la dirección del pleito, y el procurador puede ejecutar á su representado sin perjuicio de continuar en el ejercicio del mandato recibido de él.

4.—Arts. 309 y 315 del Cód. de Com. ant.

5.—Le está prohibido al comisionista adquirir por sí, ó por interpósita persona, efectos cuya enagenación le haya sido confiada, á menos de mediar el consentimiento expreso del comitente—art. 367 del Cód. de Com. ant.—La expresión de este consentimiento puede resultar de signos inequívocos que lo comprueben—art. 917 del Cód. Civ.—El hecho de adquirir el mandatario para sí lo que se le ordenó vender, importa un acto practicado fuera de los límites del mandato, y es sabido que estos actos quedan válidos y firmes una vez ratificados por el mandante—arts. 308, Cód. de Com. ant., y 1918, Cód. Civ.—Esa ra-



MAN

Mandatario—Véase: *Bienes*, núm. 1—*Comisionistas*, números 1, 2, 5 y 6—*Contrato*, núm. 1—*Mandante*, núm. 1—*Mandato*, núm. 2—*Operaciones de bolsa*, núm. 2—*Comisión*, núm. 1—*Rendición de cuentas*, núm. 4.

Mandatario judicial—Véase: *Apoderado*, núm. 1.

1. **Mandato**—Rijiéndose éste por las leyes del país donde ha sido otorgado, el albacea constituido por testamento otorgado en Inglaterra, puede representar á la sucesión.—Jur. Com., tom. 6, pág. 385, Ser. 2ª.

2. **Mandato**—Su revocación, antes de terminar el acto para que fué conferido, por culpa del mandatario, solo obliga al mandante al pago de la parte cumplida.—Jur. Com., tom. 7, pág. 50, Ser. 2ª.

3. **Mandato**—Renunciado el poder y consentida por el

tificación tiene efecto retroactivo al día del acto—arts. 1936 y 1937, Cód. Civ.

1—Se dijo que el albacea no representa á la sucesión y que por consiguiente éste no tenía personería para intervenir en los pleitos en que dicha sucesión fuese parte; á lo que se contestó diciendo que el albaceazgo había sido constituido en un testamento otorgado en Inglaterra, y por cuyas cláusulas se conferían amplias facultades. Que la cuestión de si el albacea representa ó nó á la sucesión, solo podría suscitarse en caso de que la testamentaria se abriese aquí y el testamento se hubiese otorgado asimismo en la República, pues importando el testamento también un apoderamiento y siendo éste válido en el país de su otorgamiento, debe ser válido también en la República, porque el mandato se rige por las leyes del país en que se otorga—art. 12, Cód. Civ.

2—Arts. 304 y 327 del Cód. de Com. ant., y 1970 y 1977, Cód. Civ.—El art. 1958 de este último Código dice testualmente: «Resolviéndose el mandato sin culpa del mandatario, ó por la revocación del mandante, deberá éste satisfacer al mandatario la parte de la retribución que corresponde al servicio hecho.

3—El mandato se acaba por renuncia del mandatario, dice el artículo 1963, inc. 2º del Cód. Civ. Para recuperar esa personería que se pierde por la cesación del mandato, es necesario un nuevo acto reves-



MAN — MAR

mandante la providencia, se requiere nuevo instrumento de mandato, aun cuando el mandatario sea el mismo renunciante.—Jur. Com., tom. 7, pág. 145, Ser. 2ª.

4. **Mandato**—Las relaciones entre comitente y el corredor de Bolsa, se rigen por las disposiciones del mandato.—Jur. Com., tom. 7, pág. 365, Ser. 2ª.

5. **Mandato**—El comitente debe al comisionista, la mitad de la comisión por las mercaderías no vendidas, siempre que el mandato haya sido retirado sin causa justificada.—Jur. Com., tom. 9, pág. 294, Ser. 2ª.

Mandato—Véase: *Delito*, núm. 2—*Jurisdicción comercial*, núm. 1—*Mandante y mandatario*, núm. 1—*Comisionista*, núms. 3 y 5—*Contrato*, núm. 1—*Mandatario*, número 3—*Rematador*, núms. 1 y 2—*Albaceas*, núm. 1.

Manifestación jurada—Véase: *Albacea*, núm. 1.

Mano armada—Véase: *Atentado*, núm. 5.

Marido—Véase: *Esposa*, núm. 1—*Heredero*, núm. 1—*Paternidad*, núm. 2.

1. **Martillero**—La comisión debe abonársele tantas veces cuantas se le nombre para efectuar la venta, aun cuando el mandato se refiera á la misma finca.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 170, Ser. 2ª.

2. **Martillero**—Aprobado el remate, el desistimiento posterior del comprador, no inhibe al martillero para el cobro de su comisión.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 170, Ser. 2ª.

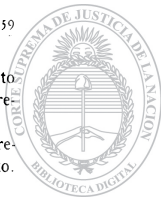
tido de las formas legales, sin que sea bastante la simple manifestación hecha por el ex-mandante y aceptada por el ex-mandatario.

4—Véase: verb. *Corredor de Bolsa*, núm. 6.

5—Véase: verb. *Comisión*, núm. 4.

1—Véase: verb. *Comisión*, núm. 1.

2—Véase: verb. *Comisión*, núm. 2.



MAS — MAT

Masa—Véase: *Acreeedor*, núm. 1.

Material invertido—Véase: *Empresarios*, núm. 1.

1ª. **Maternidad**—La disposición que prohíbe su indagación cuando se atribuye el hijo á una mujer casada, no es aplicable si ésta no lo negase.—Jur. Civ., tom. 10, página 25, Ser. 2ª.

1. **Matricula**—Inscripciones durante los meses de Agosto y Setiembre de 1889.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 104 y 239, Ser. 2ª.

Matricula—Véase: *Inscripciones*, núm. 1.

1ª. **Matricula de comercio**—Para ser declarado comerciante, no es requisito indispensable estar inscripto en la matrícula de comercio.—Jur. Com., tom. 5, pág. 138, Ser. 2ª.

1ª. **Matrimonio**—Siendo la celebración de doble matrimonio el acto penado, debe considerarse como delito ins-

1ª—El art. 325 establece, como regla general, el derecho del hijo para pedir ser reconocido por su padre: este derecho está limitado por el artículo 326 que establece una escepción á favor de la mujer casada. Siendo esto así, es necesario, para la aplicabilidad de este artículo, que la demanda verse sobre filiación natural y que ella se deduzca contra una mujer casada que niega su maternidad. Si no la niega, la razón de la ley desaparece, pues no hay temor de que la madre reputada antes como una mujer honesta llegase á perderse en el concepto de los suyos y especialmente en el de su esposo. La notoriedad anterior del hecho hace que no se tema el escándalo que, por otra parte, no puede existir por lo mismo que se produjo con anterioridad.

1ª—Siempre que la declaración del carácter de comerciante no le favorezca, pues el comerciante no matriculado tiene todas las cargas de tal pero no goza de ninguno de sus beneficios. Así el comerciante no matriculado puede ser declarado en quiebra pero no puede gozar del beneficio de las moratorias.—Véase: *Inst.*, tom. 2º, verb. *Comerciante*, número 2.

1—Véase verb. *Prescripción*, núm. 1.



MAT—MÉD

tantáneo, y en consecuencia el término para la prescripción empieza á correr desde el día en que tuvo lugar el segundo matrimonio.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 388, Ser. 2ª.

2. **Matrimonio**—A falta de partidas, ó por haber sido celebrado en país distante, puede probarse por información.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 56, Ser. 2ª.

3. **Matrimonio**—La información supletoria para comprobar la posesión de estado de casado, solo procede cuando se justifica la existencia del matrimonio y su falta de asiento en el respectivo registro y falta de testigos del acto ante la autoridad competente.—Jur. Civ., tom. 10, página 249, Ser. 2ª.

4. **Matrimonio**—La prueba de los testigos tendente á justificarlo, omitiendo la presentación de la partida, solo es procedente justificando la imposibilidad material de obtenerla.—Jur. Com., tom. 10, pág. 96, Ser. 2ª.

Matrimonio— Véase: *Bigamia*, núm. 1—*Nulidad del pago*, núm. 1—*Hijo natural*, núm. 4.

1. **Matrimonio ilegal**—O bigamia, debe ser penado con penitenciaría de tres á seis años.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 365, Ser. 2ª.

Máximo de la pena—Véase: *Atentado*, núm. 3—*Falsificación*, núm. 4.

Mayor cuantía—Véase: *Contrato de mayor cuantía*, números 1 y 2—*Modificaciones*, núm. 1—*Prueba testimonial*, núm. 4.

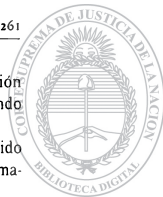
Médico de los Tribunales—Véase: *Informes*, núm. 1.

2—Véase: verb. *Información supletoria*, núm. 1.

3—Véase: verb. *Información supletoria*, núm. 4.

4—Véase la nota al verb. *Información supletoria*, núm. 4.

1—Véase: verb. *Bigamia*, núm. 2.



MÉD — MEJ

Médicos—Véase: *Informes*, núm. 2—*Homicidio*, núm. 8—*Incapacidad física*, núm. 1.

1. **Mejor proveer**—Las reservas que haga el Juzgado sobre medidas para mejor proveer en la estación oportuna, no causan agravio y son inapelables.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 217, Ser. 2^a.

2. **Mejor proveer**—Los jueces pueden ordenar con ca-

1—La Cámara dijo que el auto no traía gravamen irreparable, por que no establecía una decisión positiva y espresa «que cause á la parte recurrente un agravio que pueda y deba ser al presente materia de la apelación concedida.» El auto que según la Cámara no resolvía espresamente la diligencia para mejor proveer, la establecía terminantemente, pues señalaba día para su cumplimiento. Es evidente que aquí hay gravamen irreparable como lo hay en todo auto en que se ordena una diligencia de prueba. Así lo tiene resuelto la Cámara. Por consiguiente las reservas que haga el Juzgado á cerca de esa diligencia para mejor proveer, traen gravamen irreparable y son apelables. ¿Qué valor legal tiene la declaración del Juzgado, cuando se reserva y señala día para una diligencia de prueba? Si no se reclama de esa providencia, ¿podrá reclamarse después? En manera alguna, pues el reclamo sería estemporáneo: la providencia estaría consentida. Los Jueces no dictan providencias inútiles. ¿Y no sería inútil un auto en que reservase el Juzgado el juramento de derecho que le incumbe al litigante prestar para practicar oportunamente una diligencia de prueba? Ciertamente que sí si se le da el alcance que la Cámara pretende darle. Y si el Juez se reserva una diligencia de prueba, que no está comprendida en la enumeración del art. 57 del Cód. de Proc., ¿no podría el litigante reclamar de él sobre tablas? Evidentemente que sí, pues la enumeración del art. 57 citado es taxativa.

2—El auto dictado para mejor proveer, tenía por objeto ilustrar la conciencia del Juez sobre hechos pertinentes á la causa, y era necesario para formar su convicción legal. La oportunidad para decretarla está entregada por la ley al prudente criterio del magistrado, como lo establece el art. 493 del Cód. de Proc. en lo Crim. Esta doctrina es la correcta en materia criminal, pues así lo establece terminantemente el artículo citado que dice así: «Desde entonces quedará cerrada toda discusión en la misma instancia, y no podrá presentarse más escritos ni



MEM — MEN

rácter de para mejor proveer, la presentación de toda prueba que crean conveniente para formar su prudente criterio.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 124, Ser. 2ª.

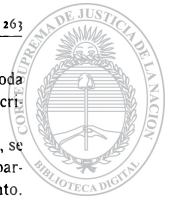
1ª. **Memoria pía**—Los intereses de una memoria pía, se adeudan desde la fecha de la aprobación de la cuenta participatoria, siempre que hubiera que detraerse del quinto.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 134, Ser. 2ª.

1. **Menor edad**—La del procesado, no puede ser tenida

producirse más prueba, *salvo la que el Juez creyese oportuna para mejor proveer.*» Esta disposición difiere por completo de la correlativa del Cód. de Proc. Civ., que establece en el art. 57 las diligencias que los Jueces pueden decretar con carácter de para mejor proveer. Esta enumeración es taxativa. En el caso del sumario, se discutía en la Cámara, si ella podía ordenar la agregación de un expediente con carácter de para mejor proveer, á pesar de haber sido denegada por el Juez de 1ª Inst., resolviéndose en la forma espresada en el sumario.

1ª—La cláusula en que se fundaba la memoria pía, no determinaba la fecha ó época desde la cual debía cumplirse, debiendo entenderse que dicho legado se debería desde que pudiese establecerse que el quinto alcanzaba para pagar esa suma, pues la cláusula testamentaria así lo establecía: «del quinto de mis bienes se separará la suma de 30.000 pesos % para que sea depositada en el Banco de la Provincia, y con los intereses que ella produzca, se mande decir anualmente el número de misas á que alcanzasen por el bien de mi alma y las de mi esposa é hijos fallecidos.» Es claro pues, que mientras no se haga la cuenta participatoria no se puede saber si el quinto alcanza ó no á cubrir el legado, y por consiguiente los intereses no pueden exigirse hasta que tal liquidación se practique, pues es principio general, que solo producen intereses, las sumas líquidas.

1.—La minoridad es una circunstancia atenuante—art. 83, inc. 2º del Código Penal vig.—y la reincidencia es una circunstancia agravante—art. 84, inc. 2º.—La circunstancia agravante hace desaparecer la atenuante, y por consiguiente ésta no puede disminuir la pena, y debe aplicarse la disposición del art. 53 que establece que los Tribunales deben aplicar las penas, según su prudente arbitrio, dentro de los límites señalados por el Código.





MEN — MIN

como circunstancia atenuante si es reincidente. — Jur. Crim., tom. 9, pág. 359, Ser. 2^a.

Menor de edad—Véase: *Arma de fuego*, núm. 4—*Homicidio*, núms. 15 y 28—*Robo con violencia*, núm. 1.

Menores—Véase: *Prescripción*, núm. 11—*Créditos*, número 1—*Declaratoria de herederos*, núm. 2—*Herederos mayores*, núm. 1—*Contratos*, núm. 1—*Domicilio*, núm. 1—*Juicios sumarios*, núm. 1—*Obligación de hacer*, núm. 2.

1^a. **Mensura**—Procede su aprobación sin audiencia de los linderos, siempre que citados en forma no la hayan protestado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 52, Ser. 2^a.

Mercaderías—Véase: *Mandato*, núm. 5—*Convenio especial*, núm. 1—*Comisionista*, núms. 2 y 3—*Estafa*, núm. 4—*Contrato de compraventa*, núm. 3—*Acción reivindicatoria*, núm. 4—*Comisión*, núm. 4—*Acreedor*, núm. 1—*Conocimiento a la orden*, núm. 1—*Dependiente*, núm. 2—*Recibos*, núm. 1.

1^b. **Mero tenedor**—La transferencia a título de mero tenedor, no basta para dar por consumado el contrato de compraventa de una casa de comercio.—Jur. Com., tomo 6, pág. 247, Ser. 2^a.

Miembro—Véase: *Lesiones*, núm. 17.

Mínimum de la pena—Véase: *Heridas*, núm. 4—*Lesiones*, núm. 18.

Ministerio fiscal—Véase: *Recursos*, núm. 1—*Sobrese-*

1^a—Arts. 620 y 621 del Cód. de Proc.

1^b—La sentencia no consagra el principio establecido en el sumario: solo se dijo que la prueba testimonial no era procedente, por tratarse de una suma mayor de 200 pesos, y por haber mediado la circunstancia de no haberse verificado la entrega del precio, ni otorgádose el más ligero documento de obligación. Sin embargo, el principio sentido en el sumario es exacto pues las leyes así lo preceptúan terminantemente.

MIN—MUE

miento, núm. 4—*Acusación particular*, núm. 1—*Adhesión al recurso*, núm. 1—*Diligencias de prueba*, núm. 7—*Incontinencia*, núm. 1.

Ministerio pupilar—Véase: *Juicios sumarios*, núm. 1.

1ª. **Modificaciones**—A un contrato de mayor cuantía, requieren para su prueba, los mismos requisitos que la ley exige para lo principal.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 6, Ser. 2ª.

Moneda especial—Véase: *Jurisdicción*, núm. 1—*Obligaciones*, núm. 3.

Monto—Véase: *Hurto*, núm. 4.

1ª. **Mora**—El deudor incurre en mora sin necesidad de interpelación, cuando ésta se hace imposible por su culpa.—Jur. Civ., tom 9, pág. 134, Ser. 2ª.

Moral—Véase: *Mujer*, núm. 1.

1ª. **Moratorias**—No eximen del reconocimiento de la firma de una obligación, ni tampoco suspenden la secuela del juicio hasta la ejecución.—Jur. Com., tom. 9, página 193, Ser. 2ª.

Motivo determinante—Véase: *Lesiones*, núm. 20.

Muebles—Véase: *Contrato de mayor cuantía*, núm. 1.

Muebles embargados—Véase: *Embargo*, núm. 9.

1ª—Véase: *Contrato de mayor cuantía*, núm. 2.

1ª—Se trataba de la mora en que había incurrido una sucesión con motivo del legado de que nos habla el verb. *Memoria pia*. No puede aplicarse el art. 509 del Cód. Civ., pues no puede haber requerimiento judicial cuando el acreedor no tenía conocimiento del legado, siendo esa falta de conocimiento únicamente imputable al albacea, quien debió haber conocer a aquél la existencia del legado—art. 3860—siendo aplicable el art. 1109.

1ª—Es terminante la prescripción del art. 1599 del Cód. de Com. vigente, 1743 del ant., que dice: «el curso ordinario de las causas pendientes solo se suspende en cuanto a la ejecución.»



MUE—MUJ

Muerta— Véase: *Lesiones*, núms. 2 y 5—*Heridas*, número 3.

1. **Mujer**.—No existiendo prohibición expresa de que la mujer preste sus servicios en casas de comercio, la policía no puede prohibirlo ni aun prestar su concurso á la Municipalidad en tanto no se ofenda á la moral ó á las buenas costumbres.— Jur. Crim., tom. 10, pág. 375, Ser. 2ª.

1—El Intendente Municipal solicitó, por medio de nota dirigida al Jefe de Policía, el auxilio de la fuerza pública, á fin de impedir, por razones de moralidad pública, que el servicio que se hacía en los cafés cantantes y demás establecimientos análogos, fuese desempeñado por camareras. La Policía se negó á prestar el auxilio solicitado, aceptando en un todo el dictamen de su Asesor letrado Dr. Salterain. Es evidente que la medida solicitada tendía á menoscabar uno de los derechos individuales asegurados por la Const. á todos los habitantes de la Nación. Debe tenerse presente, que no existe ordenanza alguna que restrinja la libertad del trabajo y el ejercicio de una industria lícita. Ni podría existir, porque se ultrapasaría la esfera limitada dentro de la cual debe desenvolverse la acción municipal. De consiguiente, el hecho de que en algunos establecimientos públicos se haga el servicio por camareras, no encierra en sí mismo un atentado á la moral ni á las buenas costumbres. El rol que la mujer desempeña en el orden económico é industrial, tiende diariamente á establecer una igualdad de condiciones con el hombre, y la prueba evidente de ello, es que en Europa, el servicio de los cafés, casinos, restaurant, etc., es desempeñado por mujeres. Es una industria lícita, y el principio de la libertad del trabajo la pone á cubierto de todo ataque. La libertad del trabajo es un derecho garantizado por la Const. Nac. sin más restricción que la que establezcan las leyes reglamentarias: no hay ley que prohíba á la mujer el ejercicio de este derecho por el hecho de ser tal. Si las casas donde las camareras prestan sus servicios, pagan su patente, ¿en virtud de qué derecho les sería prohibido emplearlas en el servicio diario? Mientras estas no ofendan la moral pública ó las buenas costumbres, con hechos, palabras ó acciones, y mientras desempeñen sus funciones en forma culta y correcta, no habrá razón para proceder contra ellas. Es fácil que la intervención de dichas mujeres en esa clase de negocios determinen otro género de actos que no se armo-



MUJ—MUT

Mujer—Véase: *Procuración*, núm. 1.

Mujer casada—Véase: *Posiciones*, núm. 5.—*Jurisdicción Civil*, núm. 1.—*Maternidad*, núm. 1.—*Posiciones*, núm. 13.

Mujer honesta—Véase: *Violación*, núm. 1.

Mujer indefensa—Véase: *Circunstancias atenuantes*, número 3.

1^a. **Multa**—Como pena estipulada en un compromiso arbitral, solo puede ser aplicada si se justifica la existencia de los requisitos que exige el contrato.—Jur. Com., tom. 6, pág. 409, Ser. 2^a.

2. **Multa**—Incorre en la multa establecida en el compromiso, la parte que opone repetidos inconvenientes á la formación del Tribunal arbitral.—Jur. Com., tom. 9, pág. 53, Ser. 2^a.

Multa—Véase: *Delitos*, núm. 2.—*Jurisdicción*, núm. 7.—*Laudo arbitral*, núm. 1.

Municipalidad—Véase: *Protesto*, núm. 5.—*Evicción*, número 2.—*Indemnización*, núm. 1.—*Interdicto de despojo*, núm. 1.—*Precio*, núm. 1.—*Renuncia*, núm. 2.—*Mujer*, núm. 1.

Muro—Véase: *Robo*, núm. 1.

1^b. **Mutilación**—Para que sea castigada con pena especial, deben concurrir los requisitos siguientes: que el acto se cometa con intención de dañar, pero mientras esos actos no trasciendan al público, la autoridad pública debe abstenerse de todo procedimiento.

1^a—Véase: verb. *Compromiso arbitral*, núm. 1.

2—El compromiso contenía, en una de sus cláusulas, que si alguna de las partes dejase de cumplir los actos esenciales para la realización del arbitraje, pagaría una multa. Efectivamente, en autos constaba esos inconvenientes opuestos por uno de los compromitentes.

1^b—El procesado había arrancado el pabellón de la oreja á la víctima: habiendo el hecho notándose después de la pelea. La pena aplicable no es la determinada por el art. 119 en su inc. 3^o, pues aun cuando re-



MUT

cial, debe ser intencional: cuando no revista ese carácter será penada como heridas, según la deformidad causada a la víctima.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 373, Ser. 2ª.

2. **Mutilación**—Para que ésta sea causa agravante de las lesiones, debe resultar haber sido el motivo determinante del delito: si solo ha sido accidental no debe tenerse en cuenta.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 16, Ser. 2ª.

sultó de la pelea la pérdida de la oreja, esa mutilación fué puramente accidental y agena á las previsiones del delincuente, no pudiéndosele imputar legalmente el delito de mutilación voluntaria á que se refiere el artículo citado. Pacheco, comentando el artículo de la ley española dice: «En estos hechos son posibles dos intenciones, dos propósitos: uno el de herir, otro el de mutilar, y con cualquier de ellos puede resultar mutilación efectiva». Véase: Comentarios al Cód. Pen. español, tom. 3, pág. 47. De donde resulta que aun dado el caso de que realmente resultase mutilación, no habiendo intención de mutilar, no será castigado el agente como mutilador: pero desde que haya intención de herir, basta para que se imponga la pena del art. 119, inc. 3º, cuando resulte deformación.

2—Véase: *Lesiones*, núm. 20.





Nacionalidad—Véase: *Excepción de incompetencia*, número 2.

1. **Negativa**—La manifestación de ignorancia de un hecho, por el demandado, importa una negativa que obliga al demandante á producir pruebas sobre él.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 325, Ser. 2^a.

2. **Negativa**—Del reo, no basta para invalidar una serie de hechos anteriores y concomitantes del acto de que le acusan como autor.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 93, Ser. 2^a.

Negligencia—Véase: *Homicidio*, núms. 1 y 3.—*Daño*, número 1.

Negocio propio—Véase: *Corredor de bolsa*, núm. 5.

Noche—Véase: *Tentativa de robo*, núm. 2.

Nombramiento—Véase: *Espedientes*, núm. 1.

Nombre propio—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 2.

1—La manifestación de que el demandado ignoraba el hecho, no se refería á un hecho propio de él, pudiendo en consecuencia ignorarlo; no se hallaba pues obligado á negarlo categóricamente bajo la sanción del art. 100 del Cód. de Proc.

2—Todos los antecedentes de la causa concurrían en el sentido de constituir prueba circunstancial en las condiciones requeridas por el art. 358 del Cód. de Proc. Crim. En el caso presente no hubo testigos presenciales del acto, y el procesado negó ser el autor del hecho, pero incurriendo en contradicciones y falsedades.

NOM — NOT

Nombres—Véase: *Término de prueba*, núm. 1.

1. **Notificación**—A uno de los socios, en su domicilio particular, no importa la de la sociedad, y en consecuencia son nulas las resoluciones que recaigan dando como válida aquella notificación.—Jur. Com., tom. 5, pág. 358, Ser. 2ª.

2. **Notificación**—No procede la nulidad de una notificación por edictos, si el notificado reconoce haberse mudado sin constituir nuevo domicilio en autos.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 375, Ser. 2ª.

3. **Notificación**—En forma, de la citación de remate, hace

1—Porque la notificación debe hacerse á la parte misma. La sociedad es una persona distinta de cada uno de los socios y por consiguiente, el socio no es la sociedad. No puede argumentar diciendo que los arts. 454 y 455 del Cód. de Com., no tienen aplicación en el presente caso, porque esos artículos legislan respecto á la responsabilidad de cada uno de los socios con relacion á terceros, siendo así que estos artículos determinan las obligaciones sociales y faculta á la parte interesada para hacer efectiva la responsabilidad. Pero cuando un acreedor demanda á la sociedad sin hacer uso del derecho que le acuerdan los recordados artículos y dirige la demanda contra ella, cada uno de los socios no puede representar aisladamente á la razón social, es necesario que ella sea la emplazada, debiendo entenderse con esta ó con su representante todos los trámites del juicio. Otro sería el caso, si el actor acogiéndose á las prescripciones citadas del Cód. de Com. demandara á uno de los socios, pues entonces este es el demandado y el único que debe intervenir en el juicio.

2—El domicilio fué indicado por el comprador en el acto de firmar un boleto de compraventa. El juzgado mandó que se le hicieran saber las providencias en ese domicilio, y habiendo dado cuenta el actuario de haberse mudado, se procedió á la citación por edictos. Se dijo de nulidad de este procedimiento, alegando que la otra parte sabía que se había mudado y conocía el nuevo domicilio. No se hizo lugar á la nulidad deducida porque el procedimiento se había ajustado estrictamente al precepto legal. El domicilio no fué constituido en la forma del art. 12 del Cód. de Proc.

3—Véase: verb. *Citación de remate*, núm. 1.



NOT

procedente la sentencia, aun cuando no existan días señalados para la notificación.—Jur. Com., tom. 8, pág. 342, Ser. 2ª.

4. **Notificación**—Declarado rebelde el demandado, son válidas las notificaciones hechas por nota, de todas las providencias ulteriores.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 203, Ser. 2ª.

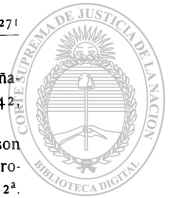
5. **Notificación**—No puede tenerse por válidamente notificado el demandado en el domicilio denunciado aunque sea el designado en la letra si resulta que no vive allí.—Jur. Com., tom. 10, pág. 164, Ser. 2ª.

6. **Notificación**—La escepción de nulidad de la ejecución

4—Siempre que esas providencias no sean de las especificadas en el art. 33 del Cód. de Proc. En cuanto al fundamento del sumario puede verse la última parte del art. 433.

5—Véase: verb. *Domicilio*, núm. 3.

6—El ejecutado se escepcionó—diciendo que cuando una de las notificaciones le fué llevada á su domicilio ya lo había cambiado, y que las notificaciones en el juicio ejecutivo deben hacerse con arreglo á los arts. 77 y siguientes del Cód. de Proc. El ejecutante dijo que la notificación del emplazamiento fué hecha en el domicilio del deudor, y que la segunda no fué sino el diligenciamiento del mandamiento. La Cámara dijo que habiéndose probado que el ejecutado vivía en el lugar en que se hizo la notificación, es de concluirse que la notificación está bien hecha. Esta resolución no puede tomarse como un antecedente para la resolución de los demás casos. Es cierto que la citación debe ser hecha en el domicilio del ejecutado—arts. 468 y 77 del Cód. de Proc.—pero no por eso es menos cierto, que no basta que el demandado viva allí, es necesario que se halle presente, y es por esto que el art. 77 citado dice que si no se le encontrase á la persona á quien se va á notificar, se le dejará aviso para que espere el día siguiente, lo que demuestra que es necesario que el emplazado, no solo tenga allí su domicilio, sino que además es necesario que se encuentre presente en la localidad, porque puede hallarse accidentalmente ausente, y en este caso el emplazamiento no puede surtir los efectos legales. Es por esto que el art. 78 establece que cuando la persona no se encuentre en el lugar en que se le demanda, el emplazamiento se hará por medio de orden ú exhorto á



NOT — NUL

fundada en la falta de notificación, debe ser desechada si se justifica que al hacerse la primera de los autos, el ejecutado vivía en el domicilio indicado.—Jur. Com., tom. 10, pág. 256, Ser. 2ª.

Notificación—Véase: *Regulación*, núm. 1—*Nulidad*, número 10—*Domicilio*, núm. 2—*Sentencias*, núm. 1—*Prescripción*, núm. 10—*Edictos*, núm. 1.

Nuevo día—Véase: *Justa causa*, núm. 1.

la autoridad judicial del partido en que se *halle*. Luego pues, no basta que una persona dé su domicilio en el lugar del emplazamiento, es además necesario que se *halle* presente allí; si se encuentra accidentalmente ausente, el emplazamiento no surtirá efecto alguno legal. Sin embargo en el fallo que nos ocupa, la Cámara establece que basta que viva allí. Puede considerarse correcto el fallo en el caso especial, porque el ejecutado alegó su ausencia pero no la probó: mientras que el ejecutante demostró que el domicilio del ejecutado era en la época del emplazamiento allí donde éste se le hizo. La presunción legal es que el hombre se encuentre allí donde tiene su domicilio y si quiere establecer algo contra esta presunción legal, debe probarlo debidamente. Como no lo hizo, la Cámara no hizo lugar á la nulidad. Sin embargo de todo esto parece que se quiere establecer como regla general que basta que un individuo viva en el lugar en que ha sido emplazado para considerarlo citado en forma legal, pues así lo tiene resuelto en un caso fallado recientemente, y del que nos ocuparemos cuando se publique. El caso fué resuelto por la Cámara en lo Civil, lo que le da menos importancia, pues ese Tribunal no estudia las cuestiones; trata de desembarazarse de ellas para luego presentar estadísticas que hagan ver su mucha labor, pero no se ocupa del fondo de sus fallos. Para ese Tribunal lo mismo es resolver que una cosa es blanca ó negra, lo que quiere es resolver. Así no se forma un cuerpo de jurisprudencia que merezca respeto. Si la actual Cámara de lo Civil llegara á constituirse con elementos nuevos, como la de lo Comercial, donde han sido nombrados recientemente los Dres. Saavedra, Esteves y Lopez Cavanillas, tendremos magistrados que se preocupen de cumplir con su deber; mientras esto no suceda los fallos se resentirán de la falta de estudio y de preparación de sus miembros.





1. **Nulidad**—No adolece de ella el expediente testamentario seguido ante un Juez incompetente, en virtud de que el acervo sobrepase el monto de su jurisdicción, siempre que fuese seguido por el esposo, y detraídos los gananciales sea de su competencia exclusiva.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 14, Ser. 2ª.

2. **Nulidad**—No existiendo acción de nulidad contra la cosa juzgada, no puede declararse nula la escritura pública resultante de una sentencia ejecutoriada, cualesquier que fueren los vicios que se aleguen contra ella, mientras no afecten al orden público ó á las buenas costumbres.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 386, Ser. 2ª.

3. **Nulidad**—La ratificación del mandante hace improcedente la nulidad de lo actuado, si ella se funda en la estralimitación del mandato ó en la carencia de facultades del mandatario.—Jur. Com., tom. 8, pág. 173, Ser. 2ª.

4. **Nulidad**—Es nula la declaratoria de herederos, dictada por Juez incompetente para conocer en la testamentaria por falta de jurisdicción.—Jur. Com., tom. 8, página 239, Ser. 2ª.

5. **Nulidad**—El deudor puede oponer al esposo heredero las causas que lo inhabilitan, según la ley, para serlo; pues para él no hace cosa juzgada la declaratoria cuya nulidad, en cuanto afecte á sus derechos, puede invocar y conseguir.—Jur. Com., tom. 8, pág. 239, Ser. 2ª.

6. **Nulidad**—La falta de intervención del Defensor del

1. Véase: *Jurisdicción*, núm. 2.

2. Véase: *Escritura pública*, núm. 2.

3. Véase: verb. *Mandamiento*, núm. 2.

4. Véase: *Declaratoria de herederos*, núm. 3.

5. Véase: *Cosa juzgada*, núm. 2.

6. Véase: verb. *Defensor del reo*, núm. 1.



NUL

reo, hace procedente la nulidad de todo lo actuado.—Jur. Com., tom. 8, pág. 343, Ser. 2ª.

7. Nulidad—No la causa, el dictarse auto de sobreseimiento omitiendo la vista al acusador.—Jur. Crim., tomo 7, pág. 357, Ser. 2ª.

8. Nulidad—Aun tratándose de juicios sumarios, la falta de intervención del Ministerio Pupilar, vicia de nulidad el procedimiento, si existen menores interesados en el resultado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 93, Ser. 2ª.

9. Nulidad—La falta de las formalidades espresamente determinadas por la ley para la diligencia del protesto de una letra de cambio, hace procedente la nulidad del acto, y como consecuencia, la escepción de caducidad.—Jur. Com., tom. 9, pág. 103, Ser. 2ª.

10. Nulidad—O validez de la notificación por no haberse llenado los requisitos de la ley, no puede ser tenida en consideración cuando la parte confiesa haber abandonado

7—La audiencia á que se refiere el art. 441 del Cód. de Proc., no es de aquellos trámites cuya omisión pueda motivar la nulidad de lo obrado, circunstancia que no debe olvidarse cuando se trata de la libertad individual.

8—Véase: verb. *Juicios sumarios*, núm. 1.

9—Véase: verb. *Protesto*, núm. 2.

10—Se dijo de nulidad de una notificación fundándose en que la cédula dejada á un vecino, no fué entregada al notificado cuando volvió á su domicilio, pues en la fecha de la notificación éste se hallaba ausente. La notificación fué declarada válida, porque la obligación del vecino, de entregar la cédula, estaba subordinada al regreso de la persona notificada—art. 138 del Cód. de Proc. Crim.—Además el domicilio constituido por las partes, subsiste mientras dure el juicio y no se constituya uno nuevo. El art. 129 establece la forma de la notificación cuando la parte no se halla ausente, no habiendo disposición que obligue á buscar al interesado fuera del domicilio que ha constituido, ni á averiguar si lo ha abandonado definitiva ó momentáneamente.

NUL

el domicilio constituido.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 373, Ser. 2ª.

11. **Nulidad**—La renuncia de todo recurso contra el laudo arbitral bajo pena de multa, no importa renunciar también á la acción de nulidad que la ley concede.—Jur. Com., tom. 10, pág. 136, Ser. 2ª.

Nulidad—Véase: *Escritura pública*, núm. 2—*Testigos*, núm. 7—*Notificación*, núms. 1 y 2—*Inscripción provisoria*, núm. 1—*Quiebra*, núm. 8—*Excepción de nulidad*, números 1 y 2—*Querella*, núm. 1—*Prejuzgamiento*, números 1 y 2—*Declaraciones*, núm. 1—*Endoso*, núm. 1—*Remate*, núm. 3.

1ª. **Nulidad del emplazamiento**—Para que se declare la de la citación hecha por edictos, así como la del procedimiento ulterior, debe justificarse plenamente que el demandante conocía el domicilio del demandado.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 26, Ser. 2ª.

2. **Nulidad del emplazamiento**—La citación del deudor, hecha por edictos, solo procede después de verificada la notificación en el domicilio indicado en la letra: la omisión de esta diligencia ó su cumplimiento en otro domicilio indicado por el ejecutante vicia de nulidad el procedimiento, y en consecuencia debe quedar sin efecto la ejecución.—Jur. Com., tom. 10, pág. 30, Ser. 2ª.

1ª. **Nulidad del laudo**—Ya sea deducida como recurso ó

11—Véase: *Laudo arbitral*, núm. 1.

1ª—La prueba de que la parte conocía el domicilio del citado, incumbe al que aduce el hecho como fundamento, pues es principio recíproco en procedimiento que la prueba incumbe al que afirma.

2—Véase: *Edictos*, núm. 1.

1ª—En materia de arbitraje, la escritura de compromiso, es la ley á que deben sujetarse especialmente los contrayentes.



NUL

como acción se rige por la escritura de compromiso.—Jur. Com., tom. 7, pág. 362, Ser. 2ª.

1ª. **Nulidad del pago**—El derecho del esposo para pedir la nulidad del pago verificado por el deudor, á su esposa, se prescribe á los dos años de la disolución del matrimonio. El término para la prescripción corra tenga ó no conocimiento del acto.—Jur. Com., tom. 8, pág. 239, Ser. 2ª.

1ª. **Nulidad de la ejecución**—Por violación de las formas que rijen el procedimiento, es procedente aun cuando la ejecución se funde en un pagaré equiparado por la ley á la letra de cambio.—Jur. Com., tom. 10, pág. 30, Ser. 2ª.

2. **Nulidad de la ejecución**—Procede la escepción de nulidad de la ejecución fundada en una letra de cambio, pues las escepciones que establece el Cód. como admisibles, tienen relación con la letra misma, mientras aquélla afecta tan solo al procedimiento ejecutivo.—Jur. Com., tom. 10, pág. 30, Ser. 2ª.

3. **Nulidad de la ejecución**—Resultando falso el reconocimiento de la firma á ruego, debe declararse nula la ejecución y procedente la escepción de inhabilidad de título.—Jur. Com., tom. 10, pág. 197, Ser. 2ª.

4. **Nulidad de la ejecución**—Esta escepción, fundada en la falta de notificación debe ser desechada si se justifica que al hacerse la primera de los autos el ejecutado vivía en el domicilio indicado.—Jur. Com., tom. 10, pág. 256, Ser. 2ª.

1ª.—Art. 4031 del Cód. Civ.

1ª.—Véase: *Escepción de nulidad*, núm. 4.

2. Véase el número precedente.

3. Véase: *Escepción de inhabilidad de título*, núm. 5.

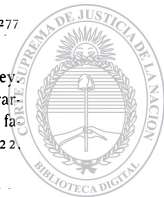
4.—Véase: verb. *Domicilio*, núm. 4.



NUL

1. **Nulidad relativa**—De actos prohibidos por la ley, adolecen de ese vicio, y por lo tanto ella no puede declararse de oficio sino á petición de la parte á quien el Cód. faculta para demandarla.—Jur. Com., tom. 5, pág. 322. Ser. 2^a.

1—Se fundaba la nulidad en que el acto celebrado era uno de los prohibidos por el art. 1361 del Cód. Civ., y que no puede ser atacado por las personas á quienes comprenda la prohibición, art. 1362.





Objeto—Véase: *Lesiones*, núm. 16.

1^a. **Objetos robados**—Si no resulta plenamente comprobado el valor de los objetos robados, corresponde a la defensa pedirla prueba.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 289, Ser. 2^a.

1^b. **Oblación**—El comprador en remate judicial, no está obligado a la oblación del precio mientras el vendedor no se encuentra en el pleno dominio de los bienes vendidos.—Jur. Com., tom. 5, pág. 207, Ser. 2^a.

2. **Oblación**—Consentido por el comprador el auto que

1^a—Rivarola. El Cód. Pen. Arg.: su explicación es crítica.

1^b—Es una obligación inherente al contrato de compraventa la de que el vendedor debe hacer tradición de la cosa al comprador y estenderle la correspondiente escritura de venta. El contrato de compraventa puede versar sobre bienes ajenos, pero su ejecución ó su cumplimiento no puede exigirse sino cuando la cosa pasa al dominio del vendedor para á su vez trasmitirla. De manera que mientras el comprador no puede transmitir el dominio de la cosa vendida, tampoco puede exigir el pago del precio. El art. 521 faculta al comprador, antes de hacer la oblación, á pedir que el vendedor exhiba los títulos. Si no es dueño del inmueble vendido, mal puede exhibir su título de propiedad, y si no hay título de propiedad, no puede exigirsele al comprador que cumpla con su obligación cuando al otro le es imposible cumplir, pues esta es la ley que rige en los contratos bilaterales.

2—Se había convenido entre contratantes la oblación de parte del precio antes de otorgarse la escritura, convenio que fué aprobado judicialmente; esa suma debía ser entregada en el acto de otorgarse la escritura.

OBI

ordena la oblación de parte del precio antes del otorgamiento de la escritura de compra, no puede invocar á su favor

pidió que se le intimara al comprador la oblación dentro de 24 horas bajo apercibimiento: el comprador pidió prórroga de 15 días, prórroga que fué denegada ordenándose el depósito dentro de las 24 horas, bajo apercibimiento de lo que por derecho hubiere lugar. No habiéndose hecho el depósito, se presenta nuevamente el vendedor pidiendo se hiciese efectivo el apercibimiento decretado. Después de algunos trámites se presenta el comprador con el recibo de depósito y pide la escrituración inmediata, á lo que se opone el vendedor, y dice que debe declararse rescindiendo el contrato de acuerdo con lo establecido en el art. 433 del Cód. de Proc. y 1375 del Cód. Civ., pues las intimaciones importan un pacto comisorio. No se puede argumentar diciendo que no habiéndose estipulado expresamente el pacto comisorio de que nos habla el art. 1204 del Cód. Civ., el vendedor no ha podido pedir, ni el Juez ordenar que se resolviera dicho contrato sino que se cumpla, por que si bien es cierto que el boleto no contenía el pacto comisorio y que el art. 1204, hablando de los contratos, establece que solo podrá exigirse el cumplimiento del contrato pero no su rescisión. Sin embargo en el caso presente, no debe perderse de vista que cuando el vendedor había solicitado del Juzgado que se hiciese la oblación decretada en el auto ya ejecutoriado, no pidió la rescisión del contrato sino su cumplimiento, que no otra cosa importaba la oblación solicitada y ordenada. De manera que esa petición, no puede ser contraria al art. 1204, ni menos puede ser considerada bajo otro punto de vista por que se haya solicitado el apercibimiento. Una demanda en estos términos se halla de perfecto acuerdo con lo dispuesto en el art. 1187 del Cód. Civ. que es concordante con el 1204, en cuanto autoriza á demandar el otorgamiento de la escritura bajo apercibimiento de pérdidas é intereses, lo que implica dejarse sin efecto el contrato. Es necesario tener presente que el auto mandando hacer la oblación previa, estaba ejecutoriado y consiguientemente no era posible volver sobre él. En el caso presente se hicieron dos intimaciones. En la primera se mandó escriturar, previa oblación del precio, bajo apercibimiento de dejarse sin efecto la obligación; la segunda cuando se pidió se hiciese efectivo el apercibimiento de clarándola disuelta. En el primer caso se pedía el cumplimiento del contrato de acuerdo con el art. 1187; y en el segundo se pedía la efectividad del apercibimiento decretado por el Juzgado. Debe no olvidarse que según disposición del inc. 3° del art. 1375, cuando una





OBL

la disposición de la ley que le permite hacerlo en el acto del otorgamiento.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 359, Ser. 2ª

Oblación.—Véase: *Posesión*, núm. 1—*Títulos*, núm. 7

1ª. Obligación.—Los jueces están facultados para conceder al deudor un plazo prudencial para el pago de la obligación.—Jur. Com., tom. 5, pág. 123, Ser. 2ª.

Obligación.—Véase: *Convenio espreso*, núm. 2.—*Jurisdicción*, núms. 1 y 8.—*Moratorias*, núm. 1.—*Cosa vendida*, núm. 2.—*Tentativa de estafa*, núm. 1.—*Inhibición*, núms. 5, 6 y 7.—*Mandatario*, núm. 3.—*Embargo preventivo*, núm. 16.—*Competencia*, núm. 4.—*Deudores solidarios*, núm. 1.—*Embargos*, núm. 2.—*Prescripción*, núm. 10.—*Pago*, núms. 2 y 3.—*Contrato de compraventa*, núm. 1.—*Daños y perjuicios*, núm. 9.

Obligación condicional.—Véase: *Embargo preventivo*, número 13.

Obligación de dar.—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 3.

1. Obligación de hacer.—La intervención del Juzgado, de conformidad de partes, en el cumplimiento de una obligación de hacer, modifica la forma de su cumplimiento la que se rige única y exclusivamente por las resoluciones del Juz-

parte pide el cumplimiento del contrato, no puede pedir su rescisión: pero este artículo no es aplicable al caso presente, porque la oblación ordenada no significa otra cosa que la manifestación material de que se quiere con ello la escrituración. Pedir que se oble dicha suma, no es pedir el pago de la misma como si estuviese celebrado el contrato de compraventa en que se haya estipulado el pacto comisorio, que el caso para el cual legisla el art. 1375, inc. 3º, y mal puede aplicarse su disposición para otro caso diferente como es el presente: con tanto más razón cuanto éste se halla rejido espresamente por otro artículo.—1187.

1.—Arts. 278 y 927 del Cód. de Com. ant. Pero la ley no permite estas esperas cuando se trata de letras de cambio.—art. 854.—Puede verse asimismo la excepción establecida en el art. 928.

OBL

gado consentidas por las partes.— Jur. Civ., tom. 10, pág. 359, Ser. 2ª.

2. Obligación de hacer— Justificada plenamente la obligación de hacer, del causante, sus herederos aun menores están obligados á cumplirla.— Jur. Civ., tom. 10, pág. 215 Ser. 2ª.

3. Obligación de hacer— Como personal, puede ser demandada ante el Juez del domicilio, aun cuando carezca de jurisdicción sobre el bien objeto de la obligación.— Jur. Civ., tom. 10, pág. 418, Ser. 2ª.

4. Obligación de hacer — La falta de cumplimiento de una obligación de hacer, no basta para fundar un embargo preventivo.— Jur. Civ., tom. 10, pág. 422, Ser. 2ª.

Obligación de hacer— Véase: *Embargo preventivo*, núms. 4 y 5.— *Jurisdicción*, núm. 3.

Obligación de pagar— Véase: *Regulación*, núm. 1.

Obligación ejecutiva— Véase: *Obligaciones condicionales*, núm. 1.

Obligación futura— Véase: *Defraudación*, núm. 9.

Obligación sin causa— Véase: *Excepción de falsedad*, número 1.

1. Obligaciones— Las contraídas por cualquier de los

2— Los herederos continúan la persona del difunto y adquieren sus derechos activa y pasivamente — Art. 3417 Cód. Civ.

3— Se trata de una demanda sobre escrituración interpuesta ante el Juzgado de la Capital Federal estando el inmueble ubicado en la ciudad de La Plata. La obligación de escriturar, es una obligación de hacer, esencialmente personal, la que en caso de inejecución se resuelve en pago de pérdidas é intereses; en igual sentido se ha resuelto otro caso. Véase: Inst. tom. 3, verb: *Juez competente*, núm. 1.

4— Véase: verb. *Embargo preventivo*, núm. 3.

2— Arts. 493 y 494, Cód. de Com. ant., iguales á los arts. 430 y 431 del vigente. El art. 484 del ant. establece en su inc. 1ª, que la sociedad



**OBL**

socios después de la espiración del plazo que fijaba el contrato para la duración de la sociedad, pesan personalmente sobre el contrayente, aun cuando lo hayan sido con la firma social.—Jur. Com., tom. 5, pág. 60, Ser. 2ª.

2. **Obligaciones**—Reconocida é invocada por el Síndico, la falsedad de las obligaciones en el acto de la verificación, no puede desconocerla con posterioridad en el caso de que la validez de esas mismas obligaciones favorezca los intereses de la masa.—Jur. Com., tom. 5, pág. 171, Ser. 2ª.

3. **Obligaciones**—Las contraídas á pesos fuertes, antes de la ley de inconvención, se conceptúan hechas en la moneda especial que la misma reconoce.—Jur. Com., tom. 5, pág. 356, Ser. 2ª.

Obligaciones—Véase: *Socios*, núm. 1—*Corredor de bolsa*, núm. 3—*Embargo preventivo*, núm. 16—*Sociedad*, número 10.

Obligaciones á moneda especial—Véase: *Jurisdicción*, número 1.

se disuelve totalmente por la espiración del plazo fijado en el contrato. El art. 486, no admite la prorrogación tácita de una sociedad así disuelta, y por 492 no se exige con relación á tercero que la disolución de una sociedad de comercio, por la espiración del término por el cual fué constituida, sea publicada. Esta disposición del Cód. de Com., es concordante con las del Cód. Civ.—art. 1768—Bravard Veyrierre, tom. 1º, págs. 419 y 420.—F. S. C. N. tom. 9, pág. 56, y tom. 10, pág. 170, Ser. 2ª.

3.—La obligación materia del juicio era anterior á la Ley de 15 de Oct. de 1885, y ésta en su art. 3º solo exonera del pago en billetes por su valor escrito, á las obligaciones contraídas á moneda especial; mal puede resistirse la aplicación de este artículo, cuando es evidente que la denominación de pesos fuertes es especial, siendo así que el pago debe hacerse en oro sellado ó en billetes por su valor corriente en plaza. Esta ha sido la jurisprudencia uniforme y constante de nuestros tribunales.—Véase: *Inst.*, tom. 2, verb. *Oro sellado*, núms. 1 y 2.

OBL — OPE

Obligaciones á pesos fuertes—Véase: *Obligaciones*, número 3.

1ª. Obligaciones alternativas—En ellas no procede la acción ejecutiva, si el acreedor opta por recibir cantidades de cosas y no dinero efectivo—Jur. Com., tom. 9, pág. 174, Ser. 2ª.

1ª. Obligaciones condicionales—No son ejecutivas, mientras no se justifique que la condición ha sido cumplida.—Jur. Com., tom. 9, pág. 191, Ser. 2ª.

Obligaciones no vencidas—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 9.

Obligaciones personales—Véase: *Chancelación*, núm. 1.

Obreros—Véase: *Jurisdicción comercial*, núm. 2.

Ocupantes—Véase: *Cosa vendida*, núm. 2.

1ª. Oficial de justicia—Siendo éste un delegado del Juez cuya providencia va á cumplir, comete desacato el que lo injurie ó amenace al llenar sus funciones.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 375, Ser. 2ª.

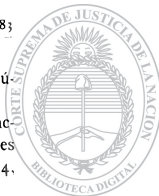
Oficio—Véase: *Interrogatorio*, núm. 1.

Omisión—Véase: *Interrogatorios*, núm. 2.

1ª—No procede la vía ejecutiva para exigir el cumplimiento de obligaciones de entregar cantidades de cosas. El art. 464 del Cód. de Proc., solo autoriza la vía ejecutiva cuando se trata de cantidades de dinero.

1ª—Un crédito en estas condiciones no reúne los requisitos exigidos por el art. 464 del Cód. de Proc. Una obligación condicional, solo da derecho para pedir un embargo preventivo en los casos especificados en el inc. 5º del art. 443.

1ª—El desacato fué cometido contra un oficial de justicia del fuero federal, y por consiguiente deben reñir las leyes del mismo fuero en la apreciación y calificación del hecho punible. El art. 93 de la ley federal de 14 de Set. de 1863, establece que los delitos comunes cometidos en los lugares sujetos á la jurisdicción nacional, serán castigados con arreglo á los códigos que forman el derecho común de las provincias; debiendo consiguientemente aplicarse las disposiciones del Código Penal vi-



OPE

1ª. **Operación á plazo**—Siendo la confesión indivisible, corresponde al demandante la prueba de la existencia de condiciones no reconocidas por el demandado: la prueba de ser la operación á plazo corresponde al que afirma que la venta fué con esas condiciones.—Jur. Com., tom. 8, pág. 220, Ser. 2ª.

Operaciones—Vease: *Corredor de Bolsa*, núms. 1 y 2.

1ª. **Operaciones de Bolsa**—Se rijen exclusivamente por el Reglamento de dicha asociación.—Jur. Com., tom. 6, página 80, Ser. 2ª.

gente, el que en su art. 237 establece lo que constituye desacato á la autoridad. El art. 238 castiga el delito con uno á tres meses de arresto. La Ley 6, tit. 10, lib. 12, de la Nov. Rec. legisla especialmente el caso del sumario.

1ª—Véase: verb. *Confesión indivisible*, núm. 1.

1ª—Cuando la operación encomendada debe celebrarse en la Bolsa y por un corredor del Establecimiento, se supone que los contratantes aceptan sujetarse con relación á esa operación y á sus consecuencias, á los Reg. y á la práctica de la misma Bolsa. En este sentido se pronunció la S. C. N. en un fallo que corre publicado en el tom. 13, página 403, Ser. 2ª, al declarar que cuando es necesario interpretar un contrato celebrado en la Bolsa, el uso y la práctica generalmente observados en el comercio en casos de igual naturaleza, y especialmente la costumbre del lugar donde debe ejecutarse, prevalecerá sobre cualquier inteligencia en contrario que se pretenda dar á las palabras, y que por lo tanto, no habiéndose aun legislado sobre Bolsas de comercio, pero siendo ellas permitidas, según el mismo Código, cuando se encarga de una operación en ella á un corredor ó agente de la misma y no de comercio en los términos y condiciones que la ley determina sin imponerle restricción ó limitación alguna, y si aceptan sin observación los boletos respectivos, quedan mandante y mandatario sujetos en esa operación y sus consecuencias á los Reg. y á la práctica de la misma Bolsa. Este caso fué resuelto antes de dictarse el Código vigente que legisla sobre Bolsas de comercio, y que ha venido á consagrar los mismos principios sentados en los casos prácticos resueltos por nuestros Tribunales.



OPE—ORD

2. Operaciones de Bolsa —El comisionista tiene derecho para repetir contra el mandatario el saldo que haya pagado al contado ó á plazos por las operaciones de Bolsa que le haya encomendado.—Jur. Com., tom. 9, pág. 5, Ser. 2ª.

Operaciones de Bolsa—Véase: *Boletos*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núm. 11—*Quiebra*, núm. 7.

Orden público—Véase: *Nulidad*, núm. 2.

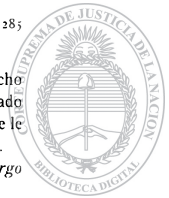
Orden superior—Véase: *Violencia*, núm. 1.

1. Ordenanza municipal —La fijación de la línea de edificación que cause pérdida de terreno al propietario, no puede dar origen á un juicio de espropiación, siempre que el ancho de la calle se haya fijado por ordenanza anterior á su adquisición.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 245, Ser. 2ª.

Ordenanza municipal—Véase: *Evicción*, núm. 2.

2 —Véase: verb. *Comisionista*, núm. 2.

1 —Véase: *Espropiación*, núm. 1.





1. **Pacto de retroventa**—Para que proceda el derecho de retrotraer los efectos vendidos después de vencido el término fijado en el contrato con pacto de retroventa, el vendedor debe depositar el precio judicialmente el día del vencimiento.—Jur. Com., tom. 5, pág. 283, Ser 2ª.

1.—Este sumario no expresa en manera alguna el pensamiento del fallo, ni de los antecedentes de la causa. En primer lugar la demanda se entabla por reivindicación de acciones de compañías ó sociedades: es sabido que el pacto de retroventa no puede tener por objeto bienes muebles—art. 1380, Cód. Civ.—y menos, papeles de comercio. Se trataba de una prenda ó de una caución, según la demanda. Pero los demandados dijeron que la operación había sido de venta, y que solo le dieron un documento ofreciéndole al actor en venta las mismas noventa acciones, oferta que fué aceptada por el actor poniendo su firma al pié del documento. De manera que lo que hubo fué una venta pura y simple, concluida y perfeccionada, que dió paso á una promesa de venta por las mismas acciones, por el mismo precio y con solo el aumento del interés correspondiente al plazo que durara la operación. El Juez de 1ª Inst., no habla de pacto de retroventa, sino al hacer alusión, accidentalmente, á un informe de la Cámara Sindical de la Bolsa, que decía: «generalmente se acostumbra dar á los préstamos la forma de contratos de venta con pacto de retroventa.» El fallo de la Cámara no habla tampoco de pacto de retroventa, sino cuando dice: «Aun siguiéndolo en su razonamiento hipotético, de que no existiera la simulación alegada, y de que los documentos presentados espresaron realmente un contrato de venta de acciones con pacto de retroventa, tampoco habría justificado la inejecución de la obligación contraída por el compra-

PAD—PAG

Padres—Véase: *Domicilio*, núm. 1—*Hijo natural*, número 4—*Filiación adulterina*, núm. 1.

1ª. Pagaré—El ejecutante puede pedir el desgloce del pagaré sin desistir de la acción entablada, siempre que de autos no conste su pago.—Jur. Com., tom. 9, pág. 64, Ser. 2ª.

Pagaré á la orden—Véase. *Excepción de novación*, núms. 1 y 2—*Excepción de inhabilidad de título*, núms. 1 y 13—*Excepción de compromiso*, núm. 1—*Excepción de falsedad*, núm. 1—*Pago*, núm. 1—*Jurisdicción*, núm. 5—*Nulidad de la ejecución*, núm. 1.

1ª. Pago—El documento en que se funda la ejecución, debe entregarse al ejecutante, mientras no exista en autos constancia del pago.—Jur. Com., tom. 8, pág. 341, Ser. 2ª.

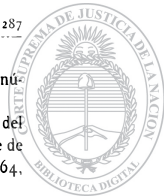
2. Pago—El deudor que ignorando la incapacidad del acreedor hubiese hecho el pago, queda liberado de la obligación.—Jur. Com., tom. 8, pág. 239, Ser. 2ª.

don.» Este fallo, no puede servir de antecedente para las ventas con pacto de retroventa, pues éste consagraría un principio que está en pugna con la ley y con la doctrina.

1ª—Una resolución contraria al sumario, no podría fundarse en consideración alguna. Esa medida no perjudica á nadie. No es posible coartar el deseo de un litigante que quiere guardar su documento para otra oportunidad, cuando por el momento la ejecución no le da resultados. Puede suceder también que el acreedor deseara intentar un arreglo privado, en lo que no se falta á la ley, ni á la menor consideración de orden público. La Cámara Civil ha resuelto un caso en contra.—Véase: Scotte contra Hernandez, juez Posse, secretario Sasso.

1ª.—El documento es de propiedad del ejecutante y como propietario puede ejercitar todos los derechos que son inherentes al dominio. Por otra parte, el desgloce no perjudica en manera alguna al ejecutado.

2—Una señora tenía un depósito en el Banco verificado antes de contraer matrimonio: se casa y durante el matrimonio el establecimiento ignorante del matrimonio hace entrega del depósito á la depositante.



PAG

3. **Pago**—La falta de pago de la seña en el día fijado, no basta para dar por rescindido el contrato de compraventa si tal pena no se estipuló en el convenio. El comprador debe exigir el cumplimiento de la obligación.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 192, Ser. 2ª.

4. **Pago**—Por consignación, debe verificarse judicialmente para que surta efectos legales: el simple depósito de la suma en poder de un Escribano, no basta para dar por efectuado el pago en tiempo oportuno.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 192, Ser. 2ª.

Pago—Véase: *Quiebra*, núm. 3 —*Mandato*, núm. 2 —*Dinero*, núm. 1 —*Obligación*, núm. 1 —*Acreeedor*, núm. 1 —*Daños y perjuicios*, núm. 4 —*Depositario judicial*, número 1 —*Falsificación*, núm. 5 —*Letra de cambio*, núms. 3 y 4 —*Pagaré*, núm. 1 —*Escepción de litispendencia*, número 4.

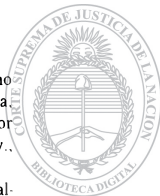
1. **Pago á cuenta**—La remisión hecha al acreedor, de un giro á cargo de un tercero, sin manifestar su objeto, im-

El esposo dice de nulidad del pago, en virtud de la incapacidad de su esposa para recibir pagos. La Cámara declara que el pago extinguió la obligación de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 735, 929, 1964 y 1967 del Cód. Civ. En este caso hay un error de hecho, el que es perfectamente excusable, porque hubo razón para errar—art. 927 citado.

3—Véase: verb. *Contrato de compraventa*, núm. 1.

4—Para que la consignación surta los efectos del pago, deben llenarse los requisitos del art. 738 del Cód. Civ.

1—Este sumario no fué materia de resolución, ni en primera ni en segunda instancia. El demandado al contestar la demanda decía: «Que aun supuesta la remisión en calidad de pago, tal operación no puede conceptuarse en ese carácter, sin que hubiese mediado antes la voluntad del comisionado de aceptarlo en ese concepto; que el hecho de cobrarse dicho giro no implica recibirlo á cuenta, porque exigir el pago de un giro, es obligación del que lo tiene, sin que le asista el derecho de com. pensar con su importe lo que pueda adeudarle el girante.



PAG — PAP

porta una comisión de cobro y no un pago á cuenta.—Jur. Com., tom. 5, pág. 385, Ser. 2^a.

1^a. Pagos—Los hechos por el mandatario sin autorización del mandante, son de cuenta esclusiva del primero, el que debe entregar al segundo todas las sumas percibidas.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 153, Ser. 2^a.

Pagos—Véase: *Cesación de pagos*, núm. 1—*Consignación*, núm. 2—*Poder especial*, núm. 2—*Indemnización*, núm. 3.

País extranjero—Véase: *Embargo*, núm. 5—*Excepciones*, núm. 4—*Estado civil*, núm. 1.

Países distantes—Véase: *Matrimonio*, núm. 2—*Información supletoria*, núm. 1.

1^b. Paliza—No habiendo pena para la tentativa de lesiones, el que ordena una paliza que no se lleva á efecto no es pasible de pena.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 86, Ser. 2^a.

Paliza—Véase: *Delito*, núm. 2.

Papel en blanco—Véase: *Tentativa de estafa*, núm. 1.

1^c. Papel sellado—Las infracciones á la ley de papel sellado, permiten paralizar la petición á que ha sido acompañado el documento pero no el juicio, que debe tramitarse teniéndose aquél por no presentado.—Jur. Com., tom. 5, pág. 168, Ser. 2^a.

1^a—Véase: verb. *Mandante*, núm. 2.

1^b—Art. 46, Cód. Pen. vig.

1^c—El art. 37 de la ley de sellos del año 88 decía testualmente, que no se daría curso á la solicitud mientras no se repusiera el sello correspondiente; la solicitud á que este artículo hace referencia, es el escrito y el documento acompañado. El Juez de 1^a Instancia fué de opinión que debía paralizarse todo el juicio: el Fiscal contestó diciendo que esto en vez de ser una pena sería una recompensa, cuando el documento exhibido fuese presentado por el demandado.



PAP

2. **Papel sellado**—Aun cuando no se haga división de bienes, la declaratoria debe abonar el impuesto correspondiente.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 211, Ser. 2ª.

3. **Papel sellado**—La Cámara carece de jurisdicción para determinar si existe infracción á la ley de papel sellado.—Jur. Com., tom. 8, pág. 338, Ser. 2ª.

4. **Papel sellado**—Los tribunales de comercio, carecen de jurisdicción para resolver las cuestiones sobre infracción á la ley de papel sellado; ellas deben someterse á la Dirección General de Rentas.—Jur. Com., tom. 8, pág. 339, Ser. 2ª.

5. **Papel sellado**—Las cuestiones que se susciten respecto al impuesto de papel sellado, deben ser resueltas por la Dirección General de Rentas.—Jur. Com., tom. 10, pág. 101, Ser. 2ª.

2—El art. 33 de la ley de sellos de 1888, prohibía á los Jueces hacer declaratoria de herederos, sin que previamente se pagara ó garantiera el impuesto correspondiente. El pago de este impuesto debe verificarse siempre que se pida declaratoria de herederos, sin que sea necesario que se proceda á la división de la herencia, porque esa declaratoria es el título que la parte que lo solicita necesita para justificar en forma la transmisión hecha á su favor, de los bienes del causante. Si fuera admisible que aquel que obtiene una declaratoria de herederos á su favor, no está obligado á pagar el impuesto, sino en el caso de proceder á la división de los bienes, los herederos mayores de edad eludirían el pago del impuesto, obteniendo la declaratoria de herederos y procediendo en seguida á la división privada de bienes, desde que según el art. 3465 del Cód. Civ., los que se encuentran en este caso no están obligados á hacer partición judicial.

3—El art. 45 de la ley de papel sellado de 1890 determinaba espresamente la autoridad que debía resolver las cuestiones sobre la clase de papel sellado que corresponde á un documento.

4—Véase: *Nota precedente*.

5—Véase el núm. 3.



PAP — PAT

Papel sellado—Véase: *Escribanos*, núm. 2—*Contrato privado*, núm. 1—*Declaratoria de herederos*, núm. 4.

Papeles—Véase: *Secuestro*, núm. 1.

Papeles de comercio—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 6.

1ª. Parentesco—Solo es tacha legal dentro de los grados que la ley señala.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 312, Ser. 2ª.

Partes—Véase: *Término de prueba*, núm. 1.

Partidas—Véase: *Aprobación*, núm. 1—*Información supletoria*, núms. 1, 2 y 3—*Matrimonio*, núms. 2 y 4.

Partidas de cargo—Véase: *Rendición de cuentas*, núm. 6.

1ª. Paternidad—La disposición que prohíbe la indagación de la maternidad cuando se atribuye el hijo á una mujer casada, no es aplicable si ésta no lo negase—Jur. Civ., tom. 10, pág. 25, Ser. 2ª.

2. Paternidad—El término de dos meses que la ley fija al marido ó á sus herederos para desconocer la paternidad,

1ª—El art. 207 establece como tacha legal relativa, el parentesco dentro del 4º grado civil y 2º de afinidad: debiendo esta graduación contarse de acuerdo con la prescripción de los arts. 353 y 363 del Cód. Civ.

1ª—Véase: verb. *Maternidad*, núm. 1.

2—Se trata de un padre que habiendo contraído matrimonio en esta ciudad, en 1813, se ausentó al poco tiempo para Chile sin haber vuelto más, falleciendo allí en el año 1825. De aquí se desprende que cualquier hijo que hubiese tenido en la esposa después de los diez primeros meses de su ausencia, que es el plazo más largo que puede durar el embarazo, no le pertenecía seguramente, teniendo en cuenta la imposibilidad física en que se encontraba de unirse con su esposa—art. 240, Cód. Civ.—El art. 246 establece, que son hijos legítimos los nacidos después de 180 días desde la celebración del matrimonio, y dentro de los trescientos siguientes á su disolución, si no se probase que había sido imposible al marido tener acceso con su mujer en los primeros 120 días de los 300 que han precedido al matrimonio. El Cód. chileno establece, que cuando á la disolución del matrimonio hubiese precedido imposibilidad física de cohabitación entre los esposos, los diez meses durante los cuales, el hijo



PAT

solo es aplicable á los hijos que habiendo nacido en términos hábiles durante el matrimonio, se reputan ser del marido y se les presume legítimos. Cuando el desconocimiento reconoce otras causas, el término es imprescrip-

que dé á luz la mujer, debe atribuirse al marido, y sea tenido en consecuencia, como legítimo, se han de contar, no desde el día de la disolución, sino desde que sobreviniera la indicada imposibilidad—art. 185, inc. 2º Cód. de Chile.—Según el espíritu de nuestro Cód.—art. 251—el hijo que naciese de la esposa, diez meses después de haberse verificado la ausencia, ni estaría amparado siquiera por la presunción de legitimidad que favorece á los que nacen durante el matrimonio: de manera que la prueba de que el hijo es legítimo, incumbiría, en este caso, al que sostuviera la legitimidad. Es necesario no confundir la acción de desconocimiento de la *paternidad*, con la de *contestación de la legitimidad*. Marcadé define ambas, diciendo: que la primera es aquella por la cual se pretende que un hijo concebido, ó al menos nacido durante el matrimonio, no es hijo del marido de la madre, importando tan solo la denegación judicial de la paternidad del marido; la segunda es la acción por la cual se pretende que un hijo no es legítimo por una causa cualquiera. Así, la contestación de la legitimidad es el género y el desconocimiento, la especie.—Tom. 2, pág. 18 y siguientes.—La ilegitimidad de una persona puede provenir de una de estas tres causas: 1º De no haber existido matrimonio entre sus padres, ni verdadero ni putativo; 2º De no haber nacido durante el matrimonio, si lo hubo, en términos hábiles para que pueda considerarse fruto de esa unión; 3º Por no ser del marido de la madre. En los primeros dos casos, solo existe una cuestión de orden público que debe resolverse por hechos notorios y públicos, que deben averiguarse y constatare plenamente, sin necesidad de penetrar en el secreto de las relaciones conyugales, que sólo los esposos pueden conocer con exactitud, y que convendría que personas estrañas, no pudiesen sacarlas á luz. En estos casos procede la acción de contestación de la legitimidad que se concede aun en vida del marido, á cualquiera que tenga interés en deducirla. Ese derecho existe en todo tiempo, porque no se designa término preciso para entablarla: por el contrario se lo ha declarado expresamente imprescriptible, en razón de que el estado de familia, hallándose fuera del comercio, no se adquiere ni se pierde por prescripción—arts. 257 y 262, Cód. Civ.—Por el contrario la última de las tres causales no afecta el orden público exclusivamente y sí al esposo directamente,



PAT

tible tanto para ellos como para los terceros cuyos derechos pueda afectar el reconocimiento tácito, ó la ignorancia de los hechos que demuestran la existencia de una usurpación de estado civil.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 97, Ser. 2ª.

Paternidad—Véase: *Hijo natural*, núm. 2.

Paternidad legítima—Véase: *Rendición de cuentas*, número 6.

quien puede tener interés en callar por referirse á relaciones íntimas que siempre traen el ridículo á quien es víctima de ella, no puede motivar un proceso sino á instancia de la misma parte. Es por esto que la ley ha reservado al esposo y á sus herederos el brevísimo término de dos meses para desconocer la paternidad de un hijo nacido durante el matrimonio: ese derecho según se desprende de lo espuesto se refiere á los hijos que habiendo nacido durante el matrimonio y en términos hábiles, se reputan ser del marido y se les considera legítimos—arts. 254, 256 y 258 del Cód. Civ.—Se objeta que cuando se supone que una persona ha nacido durante el matrimonio de sus padres, la única acción precedente, es la de desconocimiento; y desde que el padre no deduce su correspondiente reclamación, solo sus herederos habrían podido iniciarla después de la vigencia del Cód. Civ., dentro de dos meses, y de ninguna manera un tercero que no es heredero, careciendo por consiguiente de acción. El Dr. Cortés, en una notable vista, contestaba este argumento diciendo: «Aunque los principios antes mencionados sean exactos y ellos contengan la verdadera doctrina de nuestro Cód., sobre legitimidad de los hijos, no se la ha espuesto de un modo completo, y esa aplicación que se intenta hacer de ella no es ajustada, habiéndose prescindido indebidamente en la materia, de la acción que se concede al hijo para reclamar el estado que le corresponde, ó bien á cualquiera para contestar é impugnar el que alguno se atribuye sin derecho». La contestación de estado, dice Marcadé, es aquella por la cual se pretende que el estado, sea de hijo legítimo, sea de hijo natural, de que alguien se encuentra en posesión, no le pertenece; y reciprocamente la acción por la cual el hijo quiere hacerse atribuir un estado del que no se encuentra legalmente en posesión pero que pretende le pertenece—tom. 2, pág. 18, art. 315, núm. 1.—Nuestro Cód., en cuanto se refiere al estado legítimo, empieza á tratar de él desde el art. 259. Esa acción no se pierde por prescripción como lo establece el art. 262.



PAT—PEN

Patria potestad—Véase: *Poseción de estado*, núm. 1—*Hijo natural*, núm. 1.

Patronato—Véase: *Capellanía*, núms. 1 y 2.

Pelea—Véase: *Homicidio*, núm. 27.

Peligro—Véase: *Legítima defensa*, núms. 1 y 2—*Defensa*, núm. 1—*Homicidio*, núm. 23.

1. **Pena**—La de 20 años de presidio establecida por el antiguo Código, equivale á la máxima del actual, ó sea presidio por tiempo indeterminado.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 57, Ser. 2ª

2. **Pena**—Aun cuando se demande ésta, debe entender en la demanda el Juez que deba resolver la cuestión previa de rescisión ó cumplimiento del contrato.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 197, Ser. 2ª.

3. **Pena**—No puede modificarse en sentido desfavora-

2—La demanda decía, que venía á pedir la indemnización de pérdidas é intereses por la falta de cumplimiento de un contrato, solicitando al mismo tiempo se declarase rescindido. La Cámara constituida en Tribunal de Interlocutorias resolvió por mayoría, que demandándose la rescisión del contrato, sin la cual no es procedente la indemnización del perjuicio ocasionado por falta de cumplimiento de aquél, puesto que según el art. 1187 del Cód. Civ., la obligación de escriturar se resuelve en la de pagar daños y perjuicios, cuando el obligado resiste su cumplimiento, debía atenerse para establecer la competencia, á la demanda primera que es la de rescisión, siendo la pena una consecuencia de ésta; y por consiguiente, el Juez competente para entender en esa demanda lo era el que tenía jurisdicción para entender en la de rescisión. La minoría dijo que la demanda tenía por principal objeto el cobro de la pena, y que solo incidentalmente se pedía la rescisión del contrato, debiendo tenerse presente que la rescisión solicitada era una consecuencia lógica de la demanda sobre pago de la pena, y que por consiguiente el juez competente para entender en la demanda, era aquel que tenía jurisdicción para resolver sobre el pago de la pena.

3 —Art. 693 del Cód. de Proc. Crim.—Esta cuestión ha sido muy de-



PEN—PEO

ble al reo, si el Agente Fiscal no ha interpuesto el recurso de apelación.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 432, Ser. 2ª.

4. **Pena**—Es facultativo del Juez graduarlas no obstante la admisión de una circunstancia atenuante, si su no existencia prevista por la ley, permitiera distinta calificación y mayor pena que la impuesta.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 341, Ser. 2ª.

Pena—Véase: *Asesinato*, núm. 1—*Delitos*, núm. 1—*Desacato*, núm. 1—*Envenenamiento casual*, núm. 1—*Lesiones*, núms. 1, 3 y 5—*Mutilación*, núm. 1—*Paliza*, núm. 1—*Escarcelación bajo fianza*, núm. 5—*Homicidio*, números 16 y 20—*Prueba plena*, núm. 4—*Injurias*, núm. 5—*Homicidios*, núm. 1—*Legítima defensa*, núm. 4—*Apercibimiento*, núm. 1—*Pago*, núm. 3—*Contrato de compraventa*, núm. 1—*Adulterio*, núm. 3—*Agravación de la pena*, núm. 2—*Calumnia*, núm. 8—*Fianza*, núm. 2.

Pena capital—Véase: *Asesinato*, núm. 1—*Homicidio*, número 18.

Pena de prisión—Véase: *Reincidencia*, núm. 1.

Pena divisible—Véase: *Escarcelación bajo fianza*, número 1.

Pena estipulada—Véase: *Multa*, núm. 1.

Pena máxima—Véase: *Delitos*, núm. 3.

Pena pecuniaria—Véase: *Lesiones*, núms. 8 y 9—*Reincidencia*, núm. 1.

Peones—Véase: *Capataz*, núm. 1.

batida antes de dictarse el actual Cód. de Proc.—Véase: *Inst.*, tom. 3º, verb. *Cámara de Apelaciones*, núm. 1.

4—El art. 96 en su inciso 3º establece, que si hubiese una sola circunstancia atenuante, puede imponerse la pena dentro de los límites allí establecidos.



PER

Pérdida—Véase: *Contrato de rescisión*, núm. 1—*Prueba*, núm. 12.

Pérdida clandestina—Véase: *Interdicto de recobrar*, números 1 y 2—*Interdicto de despojo*, núm. 3—*Interdicto de retener*, núm. 3.

Perentoria—Véase: *Excepción de falta de personería*, núms. 9 y 10.

Perforación—Véase: *Tentativa de robo*, núm. 2.

Periódico—Véase: *Editores*, núm. 1.

1^a. **Perito**—Confiado á éste, de común acuerdo de partes, la ubicación de un terreno, la operación en que éste da cuenta de su cometido, no causa agravio y debe ser aprobada—Jur. Civ., tomo 9, pág. 379, Ser. 2^a.

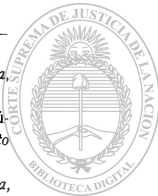
1^b. **Peritos**—Las conclusiones terminantemente asertivas de los peritos, forman prueba plena, y los Jueces solo pueden resolver en contra esponiendo las razones que tengan para rechazar su dictamen.—Jur. Com., tom. 5, página 171, Ser. 2^a.

2. **Peritos**—Las formalidades que la ley exige para el nombramiento de peritos para el cotejo de documentos ar-

1^a—Una vez convenidas las partes en someter el resultado de una cuestión pendiente á la resolución de peritos, es evidente que están ellas obligadas á aceptar la operación practicada, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 1197 del Cód. Civ.

1^b—Los Jueces pueden apartarse de lo resuelto por los peritos cuando su dictamen no fuese terminantemente asertivo, ó cuando no tuviesen título. Pero cuando estas dos circunstancias concurren, el Juez no puede apartarse de ese dictamen.—Véase: Inst., tom. 3^o, verb. *Informe*, núm. 1.

2—El Juez de 1^a Inst. Dr. Mendez Paz dijo que debieran previamente llenarse las exigencias de los arts. 154 y 158 del Cód. de Proc. La Cámara dijo que esos artículos no eran aplicables porque ellos se refieren á documentos firmados directamente por las partes litigantes, como se desprende del 2^o inc. del art. 155.



PER

guidos de falsos, no son aplicables cuando aquél emana de un tercero.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 98, Ser. 2ª.

3. **Peritos**—La forma que la ley fija para el nombramiento de éstos, no es aplicable á los que por razón de su oficio, hayan intervenido, antes que el juicio se iniciara, en algún hecho que conviniese analizar científicamente.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 312, Ser. 2ª.

4. **Peritos**—En los juicios voluntarios y tratándose de bienes situados fuera de la jurisdicción del Juzgado, la operación puede ser practicada por peritos sin título científico.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 29, Ser. 2ª.

5. **Peritos**—Si no se justifica la comisión estipulada, el comitente debe al comisionista lo que sea de uso en plaza determinada por peritos nombrados de común acuerdo.—Jur. Com., tom. 9, pág. 294, Ser. 2ª.

Peritos—Véase: *Honorarios*, núms. 11 y 12—*Prueba plena*, núm. 3.

Peritos amigables componedores—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 1—*Rendición de cuentas*, núm. 2—*Honorarios*, núms. 9 y 10.

Peritonitis—Véase: *Heridas*, núm. 3.

1ª. **Perjuicio**—El autor de un hecho que por su culpa ó negligencia causara un daño, es responsable del perjuicio sobreveniente.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 81, Ser. 2ª.

Perjuicios—Véase: *Lesiones corporales*, núm. 1—*Incendio*, núm. 1—*Robo*, núm. 4—*Resarcimiento*, núm. 1—*Prueba testimonial*, núm. 4.

4—Se trataba de una tasación de bienes raíces á practicarse en Catamarca, habiéndose ofrecido hacerse gratuitamente la operación.

5—Art. 274 del Cód. de Com. vigente, igual al 379 del anterior.

1ª—Véase: *Daño*, núm. 1.



PER

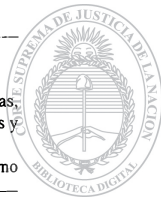
Persona jurídica—Véase: *Calumnia*, núms. 5 y 6.

1. **Personas jurídicas**—Que ejercen funciones públicas, no son pasibles de una condenación al pago de daños y perjuicios.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 175, Ser. 2ª.

2. **Personas jurídicas**—Las sociedades anónimas, como

1—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 2.

2—Esta resolución viene á reformar la jurisprudencia establecida anteriormente por esta misma Cámara.—Véase: Inst., tom. 3º. verb. *Representante*, núm. 2.—Hoy la jurisprudencia es otra, pues el sumario consagra la resolución contraria dictada en dos casos, la que se funda en que las sociedades anónimas, consideradas por la ley como personas jurídicas—art. 33, inc. 5º del Cód. Civ.—son administradas directamente por mandatarios, socios ó extraños, los que las obligan en todos sus actos,—arts. 405 y 408, Cód. de Com. ant., correspondientes á los arts 335 y última parte del 315 del vig.—De aquí resulta que al comparecer estas sociedades en juicio, como actoras ó demandadas, se colocan en las mismas condiciones de las de cualquier otro litigante, obligándolas del mismo modo, con sus actos, el gerente ó administrador, adquiriendo de este modo, la persona de existencia ideal ó de creación legal, las mismas condiciones que las personas naturales ó de existencia visible. Por otra parte, el gerente, en su calidad de representante legal, tiene la facultad de comparecer y estar en juicio por la sociedad, y tiene la obligación de negar ó confesar los hechos motivo de su acción, ya sea que asuma el carácter de actora ó demandada. Si esto no fuese así, la igualdad perfecta que establece la ley respecto á los derechos recíprocos de los litigantes, se quebrantaría, pues mientras una de las partes estaría obligada á absolver posiciones, ella carecería de igual derecho hacia la parte contraria. Quedaría, pues, una de las partes, privada de un derecho de que legítimamente puede hacer uso, siendo así que la ley le acuerda ese derecho de una manera espresa. El argumento que se hace, de que el gerente no puede considerarse personalmente obligado por los actos que haya llevado á cabo como tal, no es una circunstancia de la que pueda hacerse mérito, pues al confesar ó negar los hechos consignados en las posiciones, debe comprenderse que ellos se refieren á los actos que hubiere verificado en su carácter de representante, obligando á la sociedad como la obligan siempre que no se excedan en los límites de las facultades que le están acordadas por los estatutos—ar-



PER

tales personas, están obligadas á absolver posiciones por

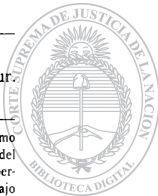
tículos 36 y 37 del Cód. Civ., y 408 del Cód. de Com. ant. y 315 del vig.—El argumento principal que se aduce para que un gerente de sociedad anónima, no pueda absolver posiciones, de que comprometería á dicha sociedad confesando hechos que vendrían á crear obligaciones que no han sido aceptadas por el directorio, no es sólido porque en este caso el gerente obraría fuera de los límites del mandato sin obligar á la sociedad, y obligándose personalmente él para con los terceros á cuyo favor reconociese esos derechos—art. 408 del Cód. de Com. antiguo, igual al 315 del vigente.—Además, las personas jurídicas pueden *adquirir derechos* y ejercitar aquellos actos que no le sean *prohibidos por el ministerio* de los representantes constituidos por los Estatutos. Todos estos derechos y actos les pertenecen como *unidad*, como entidad de existencia ideal y no á los diferentes miembros que la componen. Respecto de terceros que contraten con ellas, gozan en general de los mismos derechos que las personas naturales, y pueden, en la medida de su capacidad, intentar acciones, como pueden asimismo, ser demandadas por iguales acciones. Bajo la expresión *adquirir derechos*, se comprenden, el hecho de la adquisición, el de la duración, el de la conservación, el de la defensa en juicio, y la pérdida total del derecho—arts. 35, 39, 41, 42 y 52 del Cód. Civ.; Freitas, nota al art. 17 de su Proyecto de Cód. Civ.—Las personas de existencia ideal tienen la incapacidad de obrar, pero en cambio tienen la capacidad de derecho; y ésta ha traído el remedio artificial de la representación, á la que deben proveer sus estatutos ó constituciones, como sucede con los menores y enagenados: sujetos capaces de derecho pero incapaces de hecho, los que tienen por *representantes* á sus tutores y curadores. Estas personas pueden estar en juicio por medio de sus representantes legales, y desde luego están sometidos á todos los efectos de la *litiscontestación*. Estos efectos son activos y pasivos, y ellos comprenden las contestaciones que las partes están obligadas recíprocamente á darse ante el Juez, bajo la base de que en la justicia natural existe la más perfecta igualdad en el debate. Pretender que una de las partes esté obligada á responder confesando ó negando los hechos sobre que es interrogada, y que afectan fundamentalmente al juicio, y que la otra tiene derecho á no ser interrogada sobre ellos, sería faltar á ese gran principio de equidad natural, sobre que reposa la garantía constitucional de igualdad ante la ley, consagrada en el art. 16 de la Const. Nac. De consiguiente toda persona que litiga,



PER

intermedio de sus gerentes ó representantes legales.—Jur. Com., tom. 8, págs. 291 y 302, Ser. 2ª.

se encuentra en el caso de confesar ó negar los hechos del litigio como demandada y sometida por lo mismo á la disposición del art. 125 del Cód. de Proc. Debe advertirse, que la ley no hace distinción de personas, debiendo considerarse que están comprendidas todas, pues bajo la denominación genérica están comprendidas las personas de existencia ideal como asimismo las de existencia visible—art. 31, Cód. Civ.—De aquí resulta, que si la sociedad anónima es parte en un juicio, y su gerente ejerce personería legal, debe absolver las posiciones, no solamente porque la confesión judicial no repugna á la naturaleza de su entidad jurídica, sino también, porque ninguna ley la ha esceptuado positivamente de hacerlo, como sería necesario para que se le reconociera ese privilegio como constituido á su favor. Savigny dice, que esta ha sido la doctrina del derecho romano: «la capacidad de derecho concedida á las personas jurídicas, tendría efectos muy limitados, si no se les reconociese al mismo tiempo la capacidad de presentarse en juicio como demandantes ó demandadas.»—Véase: Derecho Romano actual, tom. 2º, pág. 97.—Esta misma doctrina enseña. Dalloz.—Rep. de Leg., tom. 29, núm. 20.—Las personas jurídicas, dice, pueden ser interrogadas judicialmente en la persona de sus mandatarios. Lo propio dice Carre et Chaveau, en su tratado Lois de la Procedure, tom. 3º, al estudiar el art. 336 del Cód. de Proc. francés, establecen que las sociedades anónimas, deben absolver los interrogatorios judiciales por medio de sus mandatarios, ó representantes legales. Entre nosotros, prevalece esta doctrina, como puede verse en los recientes fallos de la S. C. N. en los casos de Ross con el Ferrocarril Central Argentino: Costa con el Banco Inglés del Río de la Plata, y otros publicados en el tom. 34, Ser. 3ª, y tom. 6º, págs. 33 y 49 de la misma serie. Tal es la resolución de la Cámara que ha venido á reformar la jurisprudencia por ella establecida anteriormente. Así y con fundamentos sólidos se comprende que la jurisprudencia se reforme y que en sus páginas se registren fallos contradictorios. Ellos demuestran laboriosidad y estudio detenido de las cuestiones que se someten á su decisión. La Cámara de lo Comercial, ha modificado su antigua costumbre de confirmar *por sus fundamentos* las resoluciones de los Jueces de 1ª Inst. El nuevo personal que hoy la compone, parece que se ha dado cuenta de su alta misión, comprendiendo que en un país todo se encarrila con buenos Tribunales de



PER

Personas jurídicas — Véase: *Interdicto de despojo*, número 1.

Personal — Véase: *Dependiente*, núm. 5.

Personales — Véase: *Demanda*, núm. 1.

Personalmente — Véase: *Protesto*, núm. 6 — *Honorarios*, núm. 1.

1. **Personería** — Las injurias vertidas contra un diario se conceptúan hechas á sus redactores, y en consecuencia éstos tienen personería para iniciar la correspondiente acción. — Jur. Crim., tom. 5, pág. 344, Ser. 2ª.

2. **Personería** — El padre ejerciendo derechos inherentes á su carácter de tal, no debe acompañar los documentos que justifiquen su personería. — Jur. Civ., tomo 9, pág. 55, Ser. 2ª.

3. **Personería** — Las cuestiones que se susciten sobre existencia de la sociedad ó sobre personería de su represen-

Justicia. La Cámara de lo Civil debiera imitar ese ejemplo: hay poca esperanza sin embargo, mientras no se inocule sangre nueva en ese cuerpo que necesita regenerarse, pues hoy no estudia las cuestiones por incompetencia notoria de algunos de sus miembros y por el desprecio con que miran las cuestiones sometidas á su decisión cuando ellas no interesa á alguno de sus miembros.

1 — Véase: verb. *Injurias*, núm. 2.

2 — Entablada una demanda por daños y perjuicios ocasionados por una compañía de tramways, se opuso por ésta la escepción de falta de personería en el actor, pues el padre que se presentaba por la hija no había acompañado los recaudos que acreditaban su carácter de tal, el Juez Dr. Méndez Paz dijo, que el actor debió evidentemente justificar la personalidad invocada, acompañando con la demanda los documentos necesarios con arreglo á la disposición del art. 13 del Cód. de Proc. La Cámara fundada en la jurisprudencia por ella establecida en otros casos análogos, y tratándose en éste, del ejercicio de derechos propios del padre, revocó el auto. — Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Escepción de falta de personería*, núm. 3, y tom. 2º, verb. *Padres*, núm. 1.

3 — Véase: verb. *Sociedad*, núm. 5.



PER

tante, corresponden á la jurisdicción ordinaria; la arbitral solo puede conocer de la liquidación después de resueltas aquéllas.—Jur. Com., tom. 8, pág. 297, Ser. 2ª.

4. **Personería**—El representante carece de personería para acusar por injurias dirigidas á su representado.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 333, Ser. 2ª.

5. **Personería**—El representante legal de los herederos del querellante, tiene personería para continuar la acción sin necesidad de poder especial.—Jur. Crim., tom. 9, página 46, Ser. 2ª.

6. **Personería**—Los certificados sobre personería espedidos por funcionarios de otra jurisdicción, si bien son documentos públicos, no bastan para conferirla por ser necesario poder en forma constante de escritura pública.—Jur. Com., tom. 9, pág. 201, Ser. 2ª.

7. **Personería**—Los empleados de una repartición, á la que en general se imputen delitos, tienen personería individual ó colectiva, para acusar por calumnia, sin que sea necesario que la acción se deduzca á nombre de la entidad abstracta, ni que el jefe de ella asuma su representación.—Jur. Crim., tomo 10, pág. 117, Ser. 2ª.

8. **Personería**—Uno ó más miembros del directorio de una persona jurídica, tienen personería para acusar por ca-

4—Art. 454, Cód. de Proc. Crim.

5—De acuerdo con lo preceptuado en el art. 175 del Cód. de Proc. Crim.

6—El Cód. Civ. requiere, de un modo claro y terminante, que los poderes se comprueben por escritura pública que debe obrar en autos: no admite instrumentos de mera referencia, que sin el principal carece absolutamente de valor.

7—Véase: *Calumnia*, núm. 5.

8—Véase: verb. *Calumnia*, núm. 6.



PER — PLA

lumnia al autor de una publicación en que se imputan delitos al directorio.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 344, Ser. 2ª

Personería—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 1—*Regulación*, núm. 2—*Comisionista*, núm. 3—*Escepción de cosa juzgada*, núm. 2—*Abogado*, núm. 1—*Acusación*, número 3—*Fallido*, núm. 3—*Herederos*, núm. 2—*Incontinencia*, núm. 1—*Procurador*, núm. 1—*Albaceas*, núm. 1—*Filiación natural*, núm. 1—*Estado civil*, núm. 3—*Título*, núm. 6—*Mandatario*, núm. 1.

Pesos fuertes—Véase: *Obligaciones*, núm. 3.

Pesos oro sellado—Vaase: *Competencia*, núm. 4.

1ª. **Petición de herencia**—Los Tribunales de la Capital son competentes para entender en la petición de herencia, aun después de terminada y liquidada la testamentaria.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 75, Ser. 2ª.

Petición de herencia—Véase: *Embargo preventivo*, número 7—*Escepción de falta de personería*, núm. 3—*Poder especial*, núm. 3.

1ª. **Plazo**—Los Jueces están facultados para conceder

1ª—La petición de herencia es una acción real, la que en el caso presente se deducía sobre bienes situados en la República, y aunque los herederos hubiesen trasladado á Europa su domicilio, siempre serían competentes los Tribunales de nuestro país. No puede argumentarse diciendo que una vez hecha la partición termine la jurisdicción del Juez de la sucesión, respecto de la demanda de los coherederos, pues el art. 3284 en su inc. 2º, prorroga la facultad para continuar conociendo en ellas, aun después de verificadas las particiones, pudiendo conocer en las demandas que tiendan á anularlas ó reformarlas. No puede negarse que la acción de petición de herencia, deducida después de hechas las particiones, reclamando la parte de herencia que corresponde, tiende manifiestamente á la nulidad ó por lo menos á la reforma de dichas particiones.

1ª—Véase. verb. *Obligación*, núm. 1.



**PLA — POD**

al deudor un plazo prudencial para el pago de su obligación.—Jur. Com., tom. 5, pág. 123, Ser. 2ª.

Plazo determinado—Véase: *Legado condicional*, núm. 1.

Plazo perentorio—Véase: *Contrato sin pacto comisorio*, núm. 1.

Pleito—Véase: *Depositario judicial*, núm. 1.

Plenario—Véase: *Testigos*, núm. 11.

Pleno dominio—Véase: *Remate judicial*, núm. 1—*Obligación*, núm. 1.

1ª. **Poder**—La presentación de uno nuevo, ó la ratificación del acusador, hace improcedente la escepción de falta de personería.—Jur. Crim, tom. 8, pág. 168, Ser. 2ª.

Poder—Véase: *Embargo*, núm. 9—*Mandato*, núm. 3.

Poder en forma—Véase: *Esposa*, núm. 1—*Personería*, núm. 6.

1ª. **Poder especial**—Para formar la testamentaria, no basta para iniciar acciones reivindicatorias sobre los bienes que forman el acervo.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 55, Ser. 2ª.

2. **Poder especial**—Para un objeto determinado, no basta para hacer pagos á nombre del mandante, para lo cual se requiere poder especial.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 153, Ser. 2ª.

3. **Poder especial**—Para intervenir en la testamentaria,

1ª—Véase: verb. *Escepción de falta de personería*, núm. 8.

1ª—El poder especial es bastante para entender en los asuntos que le den origen, pero no lo es para iniciar los asuntos que no puedan considerarse como incidentes de aquéllos. El juicio reivindicatorio no puede considerarse una incidencia del juicio sucesorio.

2—El art. 1881, inc. 1º, establece que para hacer pagos que no sean los ordinarios de la administración, se necesitan poderes especiales.

3—El poder fué otorgado para intervenir en la testamentaria hasta

POD — POS

es bastante para demandar la filiación ó petición de herencia.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 247, Ser. 2ª.

Poder especial—Véase: *Comisionistas*, núm. 3—*Personería*, núms. 5 y 6.

Poder municipal—Véase: *Violencia*, núm. 1.

Policiá—Véase: *Informe*, núm. 1—*Confesión del reo*, núm. 1—*Defensa propia*, núm. 1—*Mujer*, núm. 1.

1ª. **Posaderos**—Y hoteleros, tienen privilegio especial y derecho de retención sobre los equipajes y efectos introducidos en su establecimiento por los viajeros.—Jur. Crim., tom 10, pág. 349, Ser. 2ª.

Poseedor—Véase: *Desalojo*, núm. 1—*Evicción*, núm. 3—*Título*, núm. 1.

Poseedores—Véase: *Testigos*, núm. 7—*Posesión al heredero*, núm. 1.

1ª. **Posesión**—El comprador solo puede pedir la pose-

su completa terminación, facultándose asimismo para intervenir en todos sus incidentes. En virtud de ese mandato se presentó el apoderado diciendo que su mandante no figuraba entre los herederos que legítimamente debían heredar al causante, por lo cual deducía demanda de petición de herencia, la que no tiene otro fin que el de cumplir el objeto para el cual fué conferido el mandato. Con esta demanda no se va más allá del mandato y de sus términos, porque dicha demanda es indispensable á fin de tomar la intervención en los autos testamentarios, siendo esta última la misión especial del mandatario. La naturaleza del negocio determina la extensión de los poderes para conseguir el objeto del mandato, como dice el art. 1905 del Cód. Civ., y lo espresa el art. 17 del Código de Proc.

1ª—Véase: *Derecho de retención*, núm. 2.

1ª—El art. 521 del Cód. de Proc., aplicable á todas las ventas judiciales, según jurisprudencia constante de la Cámara, solo autoriza al comprador, antes de hacer la oblación del precio, á exigir la subsanación de los defectos de que adolezcan las títulos ó á desistir de la compra sin responsabilidad alguna. La operación de deslinde corresponde



**POS**

sión y deslinde de los lotes comprados, después de oblado el precio.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 223, Ser. 2ª.

2. **Posesión**—No cubre por sí sola las imperfecciones de un título, ni crea título suficiente sino en tanto se justifica que ella reúne los caracteres que son suficientes para oponer la prescripción adquisitiva: no basta alegarla.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 260, Ser. 2ª.

á la toma de posesión, la que no puede pretenderse sin oblar el precio. En el tom. 8º, pág. 356, Ser. 1ª, se registra una resolución igual á la presente.

2.—Una testamentaria vendió un bien raíz; el comprador objetó los títulos como defectuosos; la sucesión dijo que aun dado el caso de que esa deficiencia hubiese existido en la adquisición, ella habría quedado cubierta con la posesión de largo tiempo,—arts. 3999 y 4016 del Cód. Civ.—que esa posesión se presume que existe desde la fecha del título—art. 4003.—A esto se contesta diciendo, que esta presunción ha sido establecida por la ley á beneficio del poseedor que es agredido por actos del mismo propietario ó por actos de terceros, en cuyo caso corresponde á éstos probar la interrupción de la posesión, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 4010 y con la opinión de los tratadistas, entre los cuales cita el Codificador á Aubry y Rau, con especialidad al final del párrafo 217. Pero aquí no se trata de repeler acciones de tercero, sino de dar cumplimiento á una convención de compraventa, en cuyo caso, y teniendo como tiene el comprador un derecho incontestable á exigir títulos satisfactorios, siendo el origen de este derecho un contrato de compraventa, no puede hacerse valer la presunción del citado art. 4003 para purgar los vicios y defectos de que adolezca el título. Como lo dice el sumario, la posesión no cubre por sí sola las imperfecciones de un título, y no basta alegar que la posesión reúne los caracteres exigidos por la ley para que dé derecho á la prescripción, es necesario su comprobación. Si esta doctrina no fuese la correcta, muy serios peligros podrían sobrevenir, tanto por lo que respecta á la eficacia de los actos de transmisión de inmuebles, cuanto á la seguridad misma de las transacciones á que diesen motivo; y desde luego, tendríamos entre otros resultados, que el propietario con título vicioso, se hallaría en sus relaciones de derecho con los terceros adquirientes en igualdad de condiciones al propietario con título perfecto, lo que en manera alguna puede ser admitida.

POS

Poseción—Véase: *Acreeedor prendario*, núm. 1—*Bienes muebles*, núm. 1—*Acción reivindicatoria*, núm. 1—*Acciones personales*, núm. 1—*Embargo*, núm. 9—*Cosa vendida*, núm. 2—*Interdicto de retener*, núms. 2 y 3—*Interdicto de despojo*, núms. 2 y 3—*Interdicto de recobrar*, núms. 1 y 2—*Interdicto de obra nueva*, núm. 1—*Título*, núms. 4 y 5—*Prescripción*, núm. 2.

1^a. **Poseción al heredero**—Para darle la de la universalidad de los bienes de la herencia, no debe oírse á los poseedores de bienes determinados cualquiera que sea el término de la posesión.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 81, Ser. 2^a.

2. **Poseción al heredero**—La de una herencia que se supone vacante, solo puede acordarse al que pretende tener derechos, después de haber justificado su carácter de heredero.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 415, Ser. 2^a.

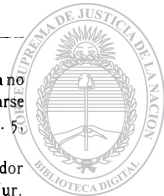
1^b. **Poseción de estado**—Justificada la posesión de estado que implica el reconocimiento tácito del hijo natural, los tribunales deben amparar al padre natural en la patria potestad entregándole el menor para que lo eduque.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 307, Ser. 2^a.

1^a—La posesión hereditaria se refiere á la universalidad de los bienes de la sucesión, y no á los bienes determinados de ella, en cuyo caso los poseedores de bienes determinados, no pueden oponerse á tal petición, por que sus derechos no quedan afectados por la misión en posesión hecha á favor del heredero.

2—Mientras esté pendiente de resolución el carácter de heredero que se invoque, no puede ejercitarse ningun acto de tal, como lo es la misión en posesión de la herencia que se pretende.

1^b—La entrega del hijo al padre en los casos que ella sea procedente, es una consecuencia de la patria potestad, poco importa que el padre sea natural, pues en lo que no se halla dispuesto especialmente le corresponden los mismos derechos que á un padre lejítimo, entre los que se encuentran el de criarlos y educarlos, pudiendo por lo tanto retenerlos á su lado —arts. 328 y 330 del Cód. Civ.



**POS**

1. **Posiciones**—La justa causa que la ley admite para no concurrir á la absolución de posiciones, debe manifestarse al Juzgado antes de la hora señalada.—Jur. Com., tom. 5, pág. 240, Ser. 2ª.

2. **Posiciones**—Pueden hacerse por medio de borrador en caso de no poderse presentar en pliego escrito.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 93, Ser. 2ª.

3. **Posiciones**—La presentación aun después de la hora

1—Decía la Cámara, que la causal alegada para no haber comparecido el día designado á efecto de absolver posiciones, corresponde ponerse en conocimiento del Juzgado antes de la espiración del término, desde que importando una prórroga debe guardarse lo dispuesto en el inc. 1º del art. 43 del Cód. de Proc. Este último fundamento es de aquellos que prueban demasiado y por consiguiente no prueban nada. El citado inciso dice, que para pedirse una prórroga debe hacerse antes de vencerse el término. Preguntamos. ¿Cuándo vence el término para absolver posiciones? A las cuatro de la tarde del día señalado. De manera que si la audiencia ha sido señalada para la una, la parte tiene derecho para alegar la justa causa hasta las cuatro de la tarde, y esto sería *después* de la hora señalada. Sinembargo la Cámara dice que debe alegarse antes de la hora. Consideramos que la justa causa puede ser alegada antes ó después de la hora señalada, según los casos y circunstancias. Así, por ejemplo, yo sostengo un pleito en el que se me ha citado para absolver posiciones á las 2 de la tarde: pero como tengo urgentes quehaceres en La Plata, tomo el tren por la mañana con intención de volver para la hora de la audiencia, pero en el camino sucede una desgracia, un descarrilamiento que me impide llegar á la hora indicada. ¿Podrá darse por absueltas las posiciones por no haber concurrido á la audiencia? Evidentemente que no. Con cuanta más razón no se resolverá en el mismo sentido, si de la catástrofe resulta herido el absolvente. Esa causal la podría alegar aún varios días después del día señalado para la audiencia. Así lo aconseja la equidad y la recta administración de la justicia.

2—El art. 129 del Cód. de Proc., sólo prohíbe al absolvente valerse de borrador en el acto de la absolución de posiciones, pero no al que las pide.

3—El que debía absolver las posiciones concurrió momentos después

POS

señalada para la absolución de posiciones, hace procedente la fijación de nuevo día.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 78, Ser. 2ª.

4. Posiciones—Si el que debe absolverlas se encuentra ausente, la parte debe solicitar el término extraordinario de prueba en la estación oportuna del juicio.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 100, Ser. 2ª.

5. Posiciones—La mujer casada, no puede ser obligada á absolver posiciones sin la venia del marido.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 199, Ser. 2ª.

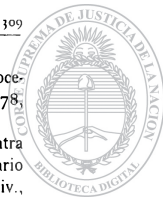
6. Posiciones—La justa causa á que se refiere la ley,

de la hora señalada. La Cámara tiene sentada jurisprudencia uniforme á este respecto. Véase Inst., tom. 2º, verb. *Posiciones*, núm. 8; tom. 1º, mismo verb., núm. 2083.

4—Porque el Juzgado no tiene la facultad de hacer comparecer ante él al litigante que tiene su domicilio fuera de su asiento—art. 136 del Cód. de Proc.—Tampoco puede pedirse que se libre exhorto porque ello importaría reabrir el término de prueba y no sería posible dar cumplimiento á lo dispuesto en el art. 114. Esta resolución está de acuerdo con otro caso resuelto.—Véase: Inst. tom. 3, verb. *Posiciones*, núm. 5; en la nota que le es relativa hemos combatido esta doctrina: tom. 2, mismo verb. núm. 14.—En contra, véase el tom. 1, mismo verb. núm. 2079.

5—La jurisprudencia ha consagrado uniformemente este principio.—Véase: Inst., tom. 3, verb. *Esposa*, núms. 1 y 2; tom. 1, mismo verb., núm. 1147. En el tom. 2, pág. 315, Ser. 3ª de los F. S. C. N. se registra un caso en el que se resuelve lo contrario al sumario.

6—Este caso está en contra del principio sentado por la Cámara de lo Civil. Véase el núm. 1, teoría que hemos combatido nosotros. El auto del sumario fué revocatorio de uno de 1ª Inst. en el que se decía que las causas de inasistencia para la absolución de posiciones deben ser alegadas antes de la hora señalada, porque de lo contrario sería dejar al arbitrio de las partes, el que ellas pudieran alegar su causal en tiempo indefinido, no pudiendo darse otra interpretación al art. 127 del Cód. de Proc. Debiendo además tenerse presente lo que dispone el art. 182 respecto á la inasistencia de los testigos, la que debe ser alegada antes de la hora señalada. Si la ley tiene estas exigencias para con los testigos que no



POS

puede justificarse después del día señalado para la absolución de posiciones.—Jur. Com., tom. 6, pág. 115, Ser. 2ª.

7. Posiciones—El cedente de un crédito está obligado a

tienen interés en el pleito, con mayor razón debe aplicarse esa interpretación respecto de las partes litigantes, siendo aplicable la prescripción del art. 182 citado. La Cámara revocó esta resolución diciendo, que el art. 127, establece, que si dejare de comparecer sin justa causa se le dará por confeso, lo que revela que deja librada á la prudencia del Juez la apreciación de las causas que hayan impedido el comparendo: que lo que la ley ha querido castigar, es la contumacia ó resistencia opuesta para comparecer al juicio, y no el simple hecho material de no presentarse á declarar. Para hacer pesar sobre un litigante las gravísimas consecuencias que resultan de las posiciones dadas por absueltas en rebeldía, es necesario que se desacate la orden del Juez sin causa plausible cuya apreciación queda librada al criterio judicial. Lo que la ley ha querido castigar es la contumacia ó resistencia para comparecer á la audiencia y no el simple hecho material de presentarse á ella.

7—El Juez de 1ª Inst. dijo: Que no podía desconocerse á la parte el derecho para pedir que el cedente absolviera posiciones, desde que se trataba de un crédito que le perteneció en su origen. La Cámara, haciendo uso de su eterno *cliché*, quizás por no estudiar el punto, confirmó el auto *por sus fundamentos*. Esta resolución no está de acuerdo con las exigencias de la ley de forma, pues el art. 125 del Cód. de Proc. establece que cada parte podrá exigir que la *contraria* absuelva posiciones. Ahora bien, el que cede un crédito, no es parte en el juicio, y por consiguiente la disposición del artículo citado no puede aplicársele. Si se aceptara la teoría de la Cámara, se tendría, que en un juicio estarían obligados á absolver posiciones un sinnúmero de personas. Así en una letra de cambio en que hubiese veinte endosos, cada uno de los endosantes estaría obligado á absolverlas, pues con arreglo al precepto del art. 624 del Cód. de Com. vigente igual al 801 del ant. el endoso es una verdadera cesión. Cada endosante es un verdadero cedente de la letra, y de acuerdo con la resolución de la Cámara estaría obligado á absolver posiciones. Si en un juicio se considerase tan necesario el testimonio de una persona, no habría necesidad de obligarla á declarar bajo un falso concepto, se le podría citar como testigo, debiendo su declaración interpretarse de acuerdo con las reglas de la sana crítica. El cedente deja de ser parte y por consiguiente no puede absolver posiciones. El sumario, está de acuerdo



POS

absolver posiciones en el juicio entre cesionario y deudor.—Jur. Com., tom. 6, pág. 222, Ser. 2ª.

8. **Posiciones**—La falta de comparecencia á absolver posiciones por causa justificada, permite el señalamiento de nuevo día.—Jur. Com., tom. 6, pág. 115, Ser. 2ª.

9. **Posiciones**—El acusador particular está obligado á absolverlas.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 46, Ser. 2ª.

10. **Posiciones**—El gerente ó director de una sociedad anónima no está obligado á absolverlas.—Jur. Com., tom. 6, pág. 401, Ser. 2ª.

11. **Posiciones**—Las absueltas por los fallidos, no for-

con una resolución de la Cámara de lo Civ., confirmando *por sus fundamentos* una resolución de 1ª Inst., y está en contra de otra dictada por esta última, confirmando también *por sus fundamentos* un auto de 1ª Inst. que establecía lo contrario del sumario. Esta resolución no ha sido aun publicada, habiendo recaído en el caso de Rota de Bruno con el Tramway Ciudad de Buenos Aires sobre daños y perjuicios, Juzgado del Dr. Posse, Secretaría de D. Pedro Persiani. Esto demuestra la exactitud de lo que se ha dicho, que basta tener un punto resuelto en 1ª Inst. para tener la casi seguridad de ser confirmado por la Cámara, siempre que la resolución no sea dictada por algún Juez que no merece confianza á la Cámara.

8—Art. 127 del Cód. de Proc. La causal fué alegada después de la hora señalada pero en el día de la audiencia. Véase el núm. 6.

9—El art. 470 del Cód. de Proc. Crim., lo resuelve terminantemente, siempre que las posiciones sean solicitadas desde que la causa se reciba á prueba hasta la citación para sentencia.

10—Esta resolución está de acuerdo con otro caso resuelto y tanto para este como para el sumario, se han aducido los mismos fundamentos. Véase: Inst. tom. 3, verb. *Representante*, núm. 2. En contra véase: verb. *Personas jurídicas*, núm. 2, de este tom. 4.

11—Durante el estado de quiebra los fallidos se hallan en una incapacidad relativa, la que solo desaparece cuando vuelven al libre ejercicio de los derechos civiles de que están privados por la ley. La absolución de posiciones tiene lugar entre las partes que litigan pudiendo realizarse con los mismos interesados ó sus representantes legalmente autorizados,



POS

man prueba contra el concurso.—Jur. Com., tom. 8, página 70, Ser. 2ª.

12. **Posiciones**—Las sociedades anónimas, como personas jurídicas, están obligadas á absolver posiciones por intermedio de sus gerentes ó representantes legales.—Jur. Com., tom. 8, págs. 291 y 302, Ser. 2ª.

13. **Posiciones**—Las puestas á una mujer casada, dadas por absueltas en rebeldía, no forman prueba si consta que el esposo negó su venia.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 6, Ser. 2ª.

pero la incapacidad del fallido lo imposibilita y escusa de dicha absolución. Aceptar que un fallido puede absolver posiciones, hallándose como se halla inhibido de contraer obligaciones que afecten los derechos del concurso, es contrario á lo que precisamente la ley ha querido garantizar, pues su confesión disminuiría los intereses de la masa, tal vez sin razón ni derecho, y de ellos surgirían obligaciones que serían ley para los contrayentes.—Raul Fosse, *Le Syndic des Faillites* 82; Alauzet, núm. 2463. Por otra parte, no cabe la menor duda de que existe cierta analogía en el procedimiento criminal y el que se sigue con los fallidos, cuya posición es la de reos: en razón de la declaración de quiebra, tienen sobre sí pendiente un auto de prisión del que sólo pueden exonerarse dando fianza, es decir que, la ley presume la posibilidad de una pena, que puede ser impuesta por el proveyente de acuerdo con el art. 1543 del Cód. de Com. y entonces, siendo susceptibles de ser juzgados los actos de los fallidos correccionalmente, no pueden absolver posiciones de las cuales podrían surgir nuevos cargos que afectarían la calificación de la quiebra.

12—Esta resolución ha venido á reformar la jurisprudencia establecida anteriormente por esta misma Cámara y por la de lo Civ., como puede verse en el núm. 2. El fundamento del sumario puede verse en el verb. *Personas jurídicas*, núm. 2.

13—Constaba en los mismos autos en que esta providencia fué dictada, que la Cámara había declarado con anterioridad que la esposa no estaba obligada á absolver posiciones, desde que no constaba que su esposo le hubiese acordado su venia para el acto. El sumario consagra la jurisprudencia constante de la Cámara.—Véase: *Inst.*, tom. 3, verb. *Esposa*, núms. 1 y 2; y tom. 1º, mismo verb., núm. 1147.



POS

14. **Posiciones**—Las absueltas en rebeldía, no forman prueba si la citación no hubiese sido hecha bajo apercibimiento.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 6, Ser. 2ª.

15. **Posiciones**—Pueden pedirse mientras no esté contestada la providencia de autos.—Jur. Civ., tom. 10, página 20, Ser. 2ª.

16. **Posiciones**—La absolución de posiciones, puede

14—Art. 127 del Cód. de Proc.

15—Se pidió la absolución de posiciones al día siguiente de dictada la providencia de autos. El art. 246 del Cód. de Proc., autoriza á solicitar esa medida probatoria hasta la citación para sentencia, la que tiene por objeto habilitar á las partes para que por ese medio probatorio puedan demostrar, aclarar ó destruir algún hecho que pueda influir en el resultado final del pleito. Aun dado el caso de que el artículo citado fuese susceptible de diversa interpretación, ésta debería ser siempre en el sentido más favorable á la defensa: *favores convenit ampliari*. Esta resolución fué dictada por mayoría de votos. La minoría decía que el art. 246 del Cód. de Proc., concordante con el 125, solo autoriza la confesión judicial hasta la citación para sentencia, y que en consecuencia tal derecho no puede válidamente ejercitarse después que el Juez se hubiese pronunciado sobre ese llamamiento, esto es, después que hubiese hecho saber á las partes que esto pasa á estado de definitiva. Esta es la doctrina seguida por los espositores de la ley española que contiene preceptos análogos á la nuestra sobre esta materia. Puede verse Manresa y Reus, tom. 2º, pág. 315, que al comentar el art. 292 de la ley española dice: «Para que sean admisibles las posiciones se requieren tres circunstancias: 1º Que la pida la una parte á la otra; 2º Que se pida después de contestada la demanda; 3º Que no se haya practicado la citación para definitiva». Reus, piensa del mismo modo comentando el art. 579 de la nueva ley; lo mismo sucede con Laserna en sus comentarios, en el tom. 2º, pág. 315.

16—Parece que este sumario fuese la confirmación del anterior, pero no es así, porque aquí el sumario está equivocado, pues el que pedía que el contrario absolviera posiciones, no había sido notificado aun de la providencia de autos. Esto es muy distinto de lo que dice el sumario: aquí el derecho es evidente no así en el caso de que trata el número anterior.



POS

pedirse mientras no esté consentida la providencia de «autos».—Jur. Civ., tom 10, pág. 30, Ser. 2ª.

17. Posiciones—El cedente de derechos, está obligado á absolver posiciones aun después de aceptada la cesión.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 31, Ser. 2ª.

18. Posiciones—La imposibilidad para comparecer al acto, debe alegarse antes de hora señalada.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 271, Ser. 2ª.

19. Posiciones—La falta de presentación de ellas, basta para declarar decaído el derecho á presentarlas.—Jur. Com., tom. 9, pág. 43, Ser. 2ª.

Posiciones—Véase: *Calumnia*, núm. 9.

17—Se alega como fundamento la circunstancia de que el Juez, puede aun de oficio, dirigir preguntas á los litigantes—Ley 1ª, tit. 12, Part. 3ª.—Véase el núm. 7.

18—Reina una gran confusión en esta materia, á causa de que las Cámaras confirman los autos de 1ª Inst. *por sus fundamentos*, cualquiera que sea la solución que se les dé. El caso resuelto en el sumario fué confirmado *por sus fundamentos*, en contra de otros resueltos también por sus fundamentos. Cuando uno ve que los Tribunales dicen que hoy es negro lo mismo que ayer fué blanco, siéntese constringido que la justicia esté administrada por personas que no se dan cuenta de su alta misión social. Las injusticias se suceden las unas á las otras y los camaristas continúan desempeñando sus funciones con terror para los litigantes que no saben si la suerte les será propicia ó adversa, en esa gran serie de resoluciones confirmadas *por sus fundamentos*. Es necesario conocer todas las resoluciones para darse cuenta de la gran cantidad de sentencias contradictorias, todas ellas dictadas sin estudio previo, y con ese afán incalificable de tener todo al día con detrimento de la misma justicia que administran. Hoy la Cámara de lo Comercial parece volver por su reputación, con el nuevo personal que ha entrado á formar parte de ella, que se da cuenta de su responsabilidad ante el pueblo cuyos intereses debe velar. De acuerdo con el sumario, véase el número 1. En contra los núms. 6 y 8.

19—Art. 128, inc. 3ª, Cód. de Proc.



PRE

1. **Precio**—Si el terreno necesario para vía pública ha sido vendido judicialmente por la Municipalidad, la pérdida por parte del propietario solo le concede derecho á la devolución del precio, en la parte proporcional, con intereses.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 245, Ser. 2ª.

2. **Precio**—La demanda que versa sobre el pago del precio de un inmueble, como acción personal, corresponde á los Tribunales del domicilio del demandado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 166, Ser. 2ª.

3. **Precio**—El comprador debe oblar el precio, sin perjuicio de las reclamaciones que crea corresponderle por diferencia en el área.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 272, Ser. 2ª.

1—El art. 46 de la Ley Org. Municipal confiere á esa repartición pública la facultad de disponer el ensanche de las calles y delineaciones de la Ciudad. La indemnización acordada en el caso del sumario no fué por vía de espropiación sino por vía de equidad. El dueño del terreno pretendía que se le abonara su valor actual—en la época de la delineación,—y los perjuicios que tenía que sufrir por la disminución á la calle, lo que es inaceptable, porque como se ha dicho, no se trata de una espropiación, y solo se funda en la equidad, pues la Municipalidad está obligada á dar la línea de la calle San Juan con arreglo al decreto de 9 de Mayo de 1827, que estableció para dicha calle el ancho de 30 varas.—Véase, Digesto Municipal, pág. 285.—Como en el caso presente se trataba de la venta de un terreno valdío hecha por la Municipalidad, esta circunstancia inhabilita al comprador para pretender indemnización de perjuicios que no ha podido sufrir desde que ni á él, ni á su antecesor se le había acordado otra línea que pudiera considerarse alterada por la dada últimamente. El art. 2511 del Código Civil, no es aplicable.

2—Váase: *Acción personal*, núm. 1.

3—El hecho de la oblación, no implica desde luego la entrega de ese precio al vendedor, antes de cuya entrega debe darse la posesión de la cosa vendida y hacerse la escrituración. Si efectivamente resultase diferencia en el área, puede el comprador hacer oportunamente los reclamos que corresponden.



PRE

Precio—Véase: *Asesinato*, número 1—*Bienes propios*, núm. 1—*Oblación*, núms. 1 y 2—*Pacto de retroventa*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núm. 6—*Comisionista*, número 3—*Defraudación*, núm. 3—*Falsificación*, núm. 5—*Bienes de menores*, núm. 1—*Cesión de derechos*, núm. 1—*Cosa agena*, núm. 1—*Cosa vendida*, núm. 1—*Posesión*, núm. 1—*Titulos*, núms. 5 y 7.

Prejudicial—Véase: *Quiebra*, núm. 9.

1^a. **Prejudiciales**—A los efectos de la acusación criminal, solo son prejudiciales las cuestiones que la ley espresamente determina.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 246, Ser. 2^a.

1^b. **Prejuzgamiento**—Toda resolución que resuelva sobre el derecho demandado, antes de la sentencia definitiva, es nula por importar un prejuzgamiento.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 202, Ser. 2^a.

2. **Prejuzgamiento**—La procedencia ó improcedencia de

1^a—Véase: verb. *Acusación*, núm. 2.

1^b—Abierta una causa á prueba fué reclamado el auto que la ordenaba, por una de las partes. Convocados los litigantes al juicio verbal prescripto por el art. 105 del Cód. de Proc. y celebrado el comparendo el Juzgado declaró que una de las partes no tenía personería para seguir el juicio, porque no había acreditado la paternidad que invocaba. Apelada esta resolución, la Cámara la declaró nula, reponiéndose la causa al estado en que quedó cuando se celebró el juicio verbal, porque el Inferior solo podía pronunciarse sobre el único punto en discusión, cual era, si procedía ó nó la revocatoria solicitada del auto por el cual se recibió la causa á prueba. En vez de resolver este punto, el Juez se pronunció sobre el fondo de la causa resolviendo esta misma con el hecho de desconocer la personería de la parte, lo que evidentemente no procedía en el estado en que se encontraba la causa, avanzando un prejuzgamiento manifiesto que constituye la nulidad de dicha resolución.

2—Esta fué otra de las resoluciones confirmadas *por sus fundamentos*. El Inferior había dicho que la disposición del art. 108 del Cód. de Proc. es terminantemente preceptiva: la prueba debe apreciarse al dictar sen-



PRE

la prueba pedida, solo puede declararla el Juez al dictar sentencia: antes importaría un prejujuamiento.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 234, Ser. 2^a.

3. Prejujuamiento—Los jueces de Instrucción, al ser nombrados de sentencia en materia comercial, no pueden

tencia definitiva, desechando entonces lo que se refiere á hechos no articulados. La pertinencia ó impertinencia, ó su legalidad debe apreciarla el Juzgado en la estación que determina el art. 207: antes de ese estado, no podría pronunciarse sin prejujuar. Consideramos que esta resolución, no consulta los principios que rijen la producción de la prueba. El art. 108 del Cód. de Proc. citado en el fallo sirve admirablemente para sostener lo contrario de lo resuelto. El art. 108 dice testualmente así: «No podrá producirse prueba si no sobre hechos que hayan sido articulados por las partes en sus respectivos escritos. Este es el principio general: la ley no permite que se produzca prueba sobre hechos no articulados. Pero como pueda suceder que á pesar de la prohibición de la ley esa prueba puede producirse, el codificador ha introducido la segunda parte del artículo, y ha establecido que si á pesar de esa prohibición la prueba impertinente, se produce, ella debe ser desechada irremisiblemente al dictar sentencia. Tan es esta la interpretación correcta, que la misma Cámara de lo Civil ha dicho, en un caso que corre publicado en el tom. 7º, pág. 164, Ser. 2ª, que «si bien el Juzgado no puede pronunciarse sobre la procedencia de la prueba, debe rechazar toda diligencia manifestamente inútil.»—Véase: Inst., tomo 3º, verb. *Prueba*, núm. 10.—Esta es la verdadera doctrina, la que es sumamente peligrosa en manos de Jueces que no son escrupulosos en el cumplimiento de su deber. No debe confundirse el mérito de la prueba con la procedencia de ella. El mérito juzga de su eficacia probatoria, y la procedencia se relaciona con su pertinencia. Una vez producida la prueba sea ella procedente ó nó, los Jueces, no pueden apreciar su mérito sino al dictar sentencia definitiva, porque si lo hicieran tal acto importaría un prejujuamiento. Los Jueces, como lo tiene resuelto la Excma. Cámara, no deben permitir que se produzca prueba abiertamente impertinente, y con esta negativa no prejujuan jamás. Las diligencias de prueba manifestamente inútiles no deben ser ordenadas.

3.—Véase: verb. *Excusación*, núm. 1.



**PRE**

escusarse, por prejuzmiento, de entender en causa en que hayan instruido sumario criminal.—Jur. Com., tomo 8, pág. 226, Ser. 2^a.

Prejuzgamiento—Véase: *Recusación*, núm. 5.

1. **Premeditación**—El intervalo transcurrido entre el hecho que produjo el furor ó la ira y aquel en que tuvo lugar el delito, no basta para declarar que existió premeditación, aun cuando se haya procurado durante él el arma homicida.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 278, Ser. 2^a.

1.—La sentencia fué dictada por mayoría, fundándose ésta en que, el agente obró á despecho de la voluntad, impelido por la pasión de la ira. El estado de irritación y de furor es una de las circunstancias atenuantes que determina el art. 83 del Cód. Pen. vig., y con sobrada razón, pues la ira impide que el ánimo distinga la verdad como lo dice una Ley de Part.: «E demas faze al ome tremer el cuerpo é perder el seso, é cambiar la color é mudar el continente etc.» No se puede decir que esta circunstancia no puede favorecer al agente, porque hubiese procedido con premeditación. La razón es clara, porque entre el pensamiento y el delito, solo mediaron breves instantes para que el delincuente corriera á tomar el arma y tratase de descargarla sobre la víctima. La naturaleza de su acción no cambia, pues en el espacio de tiempo que media entre la concepción del delito y su ejecución, se encuentra siempre bajo la acción de la pasión de la cólera. No hay reflexión ni tiempo para calcular los medios de ejecución. ¿Puede en estos casos pretenderse que la acción criminal se ha llevado á cabo con la circunstancia agravante de premeditación? En manera alguna, pues la premeditación presupone la voluntad deliberada antes de obrar; la combinación de un proyecto; el cálculo y la medida de los elementos de ejecución. Supone en una palabra, la reflexión que prepara friamente todos sus elementos dejando pasar un tiempo más ó menos largo para dar vida á la acción criminal. La minoría opinó que no había circunstancia atenuante porque el estado de irritación ó furor en que se encontraba el procesado fué debido á culpa del mismo, mientras que por el inc. 6º del art. 83 del Cód. Pen. vig., no debe serle imputable dicho estado para que constituya circunstancia atenuante.

PRE

2. **Premeditación**—La ausencia momentánea en busca de un arma, no puede calificarse de premeditación.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 55, Ser. 2ª.

3. **Premeditación**—Su existencia como circunstancia agravante, no puede ser declarada por simples presunciones.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 262, Ser. 2ª.

Premeditación—Véase: *Homicidio*, núms. 5, 6 y 25.

1. **Prenda**—La venta de la prenda, debe hacerse en juicio sumario.—Jur. Com., tom. 9, pág. 41, Ser. 2ª.

2—A consecuencia de un altercado de palabras entre víctima y victimario éste se retiró del lugar del incidente, y volvió poco después armado de un revólver con el que disparó dos tiros contra el primero. Se dijo que no puede considerarse que hubiese habido premeditación pues el intervalo que medió entre la salida y la vuelta del procesado que se encontraba dominado por la cólera fué corto. La premeditación supone que el agente obró á sangre fría, que delibera antes de obrar, madura y prepara el proyecto, el pensamiento nõ se encuentra oscurecido por ningún pensamiento apasionado. En cuanto al significado jurídico de la premeditación.—Véase: Inst., tom. 1º, verb. *Voluntad criminal*, núm. 2720.

3—Hasta que ella no se demuestre, no alcanza la fuerza de presunción.

1—El art. 585 del Cód. de Com. vig., ha establecido una forma breve y sumaria, para la venta de las cosas tenidas en prenda, la que debe efectuarse en remate, debidamente anunciado con diez días de anticipación. Los encargados de proyectar las reformas al Cód. de Comercio, se han convencido de que la rapidez y multiplicidad de estas operaciones, no podría autorizar sino este procedimiento, abandonando la vía ejecutiva que no es de tan breves resultados. Respecto á la enagenación de la prenda, la comisión decía que ella «ha modificado el artículo referente á la venta de la prenda por falta de pago: se establece un procedimiento prudente para la enagenación (pública de la cosa dada en prenda, sea raíz, mueble ó títulos y papeles de bolsa.» La disposición citada está en oposición con las prescripciones del Cód. de Proc., y en este caso debe aplicarse las disposiciones establecidas por la ley especial, mucho más si se tiene en cuenta lo dispuesto en el art. 813 del Cód. de Proc., que da prelación al Cód. de Com. siempre que haya oposición entre uno y otro Código.





PRE

2ª. **Prenda**—Corresponde al Juzgado Correccional el conocimiento del delito de defraudación por haberse dispuesto de la prenda.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 267, Ser. 2ª.

Prenda—Véase: *Acreedor prendario*, núm. 1—*Estafa*, núm. 2.

Prensa—Véase: *Calumnia*, núms. 3 y 4.

1ª. **Prescripción**—Siendo la bigamia un delito instantáneo y no sucesivo, la prescripción del derecho de acusar empieza á correr desde la fecha del último matrimonio.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 128, Ser. 2ª.

2ª. **Prescripción**—La posesión no cubre por sí sola las imperfecciones de un título, ni crea títulos suficientes sinó en tanto se justifique que ella reúne los caracteres que bastan para oponer la prescripción adquisitiva: no basta alegarla.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 260, Ser. 2ª.

3. **Prescripción**—La de un derecho condicional, como la reversión de un legado, no puede verificarse ni aun iniciarse siquiera, antes de que la condición se cumpla.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 269, Ser. 2ª.

4. **Prescripción**—Para que la prescripción, fundada en dos posesiones, libere al demandado por reivindicación, es indispensable que exista entre una y otra, título traslativo si no se reúne por el ministerio de la ley.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 352, Ser. 2ª.

5. **Prescripción**—El derecho del esposo para pedir la

2ª—Véase: *Defraudación*, núm. 7.

1ª—Véase: verb. *Bigamia*, núm. 1.

2ª—Véase: verb. *Posesión*, núm. 2.

3—Arts. 553, 559 y 3957 del Cód. Civ.

5—Véase: verb. *Nulidad del pago*, núm. 1.

PRE

nulidad del pago verificado por el deudor á su esposa, se prescribe á los dos años de la disolución del matrimonio. El término para la prescripción corre ya sea que tenga ó no conocimiento del acto.—Jur. Com., tom. 8, pág. 239, Ser. 2ª.

6. **Prescripción**—El término para la prescripción del derecho de observar la liquidación de la sociedad, no es aplicable cuando lo que se discute es la existencia del derecho para exigir la liquidación sin que haya existido un saldo, de conformidad entre todos los socios.—Jur. Com., tomo 8, pág. 372, Ser. 2ª.

7. **Prescripción**—El reconocimiento de un sueldo mayor que el reclamado, hace improcedente la escepción de prescripción invocada contra otro menor.—Jur. Com., tomo 8, pág. 372, Ser. 2ª.

8. **Prescripción**—El término de dos meses que la ley fija al marido ó á sus herederos para desconocer la paternidad, es solo aplicable á los hijos, que habiendo nacido en términos hábiles durante el matrimonio se reputan ser del marido y se les presume legítimos; cuando el desconocimiento reconoce otras causas, el término es imprescriptible, tanto para ellos cuanto para los terceros cuyos derechos pueda afectar el reconocimiento tácito ó la ignorancia de los hechos que demuestran la existencia de una usurpación del estado civil.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 97, Ser. 2ª.

9. **Prescripción**—La del derecho al patronato de una capellanía solo empieza á correr desde la fecha en que se re-

7—La suma menor está comprendida en la mayor.

8—Véase: verb. *Paternidad*, núm. 2.

9—Véase: verb. *Capellanía*, núm. 2.



PRE

conoció judicialmente corresponder al heredero y no desde la fecha en que quedó vacante por fallecimiento del anterior patrono.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 98, Ser. 2ª.

10. **Prescripción**—Para que proceda la escepción de prescripción de acciones personales entre presentes, deben transcurrir diez años desde la fecha de la obligación hasta la presentación judicial del acreedor; la notificación del deudor no es necesaria para que la acción se tenga por instaurada dentro del término legal.—Jur. Civ., tom. 10, página 209, Ser. 2ª.

11. **Prescripción**—Tratándose de derechos personales ella es procedente contra los herederos mayores, aun cuando se declare improcedente contra los menores.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 279, Ser. 2ª.

10.—Con arreglo á lo prescripto en el art. 4023 del Cód. Civ., toda acción personal por deuda exigible se prescribe por diez años entre presentes y veinte entre ausentes. Estas obligaciones empiezan á prescribirse desde la fecha que lleva el título de la obligación y se interrumpe por la demanda—art. 3986 del mismo Código.—No puede objetarse que la interrupción de la prescripción se opera por la notificación de la demanda, pues el art. 3986 citado, es claro y terminante cuando dice: «La prescripción se interrumpe por *demanda*, poco importa que ella sea defectuosa ó nula desde que probándose con ella la diligencia del dueño ó acreedor, quedan de esta manera cumplidos los propósitos de la ley, según se desprende de la nota con que el Codificador ilustra el artículo, y del fundamento mismo de la prescripción liberatoria, que no es otro que castigar la inacción ó negligencia del acreedor.

11.—El beneficio de la suspensión de la prescripción, solo puede ser invocado por ó contra las personas, en perjuicio ó en beneficio de las cuales ella esté establecida, y no contra ó por sus cointerésados, á no ser que se trate de obligaciones ó cosas reales indivisibles—arts. 3981 y 3982 del Cód. Civ.—No pueden pues los cointerésados mayores acogerse á la prescripción que compete á los menores, porque el beneficio de la suspensión es personal para éstos.



PRE

12. **Prescripción**—La de las acciones de los dependientes habilitados, se rige por el término que la ley fija á los dependientes, y no por la que establece para los socios.—Jur. Com., tom. 9, pág. 70, Ser. 2ª.

Prescripción—Véase: *Matrimonio*, núm. 1—*Capellanía*, núms. 1 y 2—*Estado civil*, núm. 2.

Presidio—Véase: *Asesinato*, núm. 1—*Pena*, núm. 1.

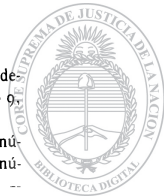
Préstamo—Véase: *Condominio*, núm. 1.

1. **Préstamo hipotecario**—Los Tribunales de la Capital son competentes para conocer en la ejecución de un préstamo hipotecario constituido fuera de la Capital, sobre un

12—Cuando un dependiente, además de su sueldo, goza de una parte de las utilidades sociales, la ley lo considera siempre dependiente—art. 462, Cód. de Com.—Así lo tiene resuelto la jurisprudencia.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Dependiente*, núm. 2; *Dependientes habilitados*, núms. 1 y 2; *Participación*, núm. 1.—Fijado el carácter de dependiente no puede pretenderse que á los habilitados se les aplique las disposiciones legales establecidas para los que revisten el carácter de socio, y mucho menos cuando la misma ley ha establecido cuidadosamente y de un modo especial las reglas particulares que rijen la prescripción del derecho de los dependientes para reclamar sus salarios, los que se prescriben al año—arts. 1006 y 1009, Cód. de Com. anterior.

1—El título en que se funda la obligación es personal, y aunque su cumplimiento se encuentre garantido con un inmueble situado fuera de esta jurisdicción, esa circunstancia no es bastante para determinar la in. competencia de estos Tribunales, desde que dicha obligación en su carácter de accesoria está subordinada á la obligación principal. Aunque el contrato se constituya fuera de la Capital, estando domiciliado el demandado en ella y tratándose del ejercicio de una acción personal, surge la competencia de sus tribunales para entender en la demanda, desde que el actor ha elegido el domicilio del demandado para iniciar su acción—art. 4º, inc. 4º del Cód. de Proc.—Si bien es cierto que la hipoteca, es un derecho real y como tal puede dar margen á acciones reales, es evidente que aquí no se trata una acción semejante, sino del cobro de un crédito personal, cuyo carácter no puede ser modificado por la garantía anexa constituida como una seguridad para su cumplimiento.





PRE-PRI

inmueble situado también fuera de ella, siempre que el demandado tenga en ella su domicilio.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 39, Ser. 2ª.

Presunciones—Véase: *Voluntad*, núm. 2—*Asesinato*, número 1—*Confesión del reo*, núm. 8—*Bienes muebles*, número 1—*Informes*, núm. 2—*Nulidad del pago*, núm. 1—*Premeditación*, núm. 3—*Prueba*, núm. 5—*Prueba de presunciones*, núm. 1.

1ª. **Presunciones favorables**—Al reo, deben tenerse en cuenta, siempre que no exista prueba plena de que son inverosímiles.—Jur. Crim., tomo 8, pág. 415, Ser. 2ª.

Principal—Véase: *Convenio espreso*, núm. 1—*Rendición de cuentas*, núm. 7.

Prisión—Véase: *Reincidencia*, núm. 1—*Escarcelación bajo fianza*, núm. 7.

1ª. **Prisión preventiva**—Que la ley establece contra el fallido, no es procedente contra el gerente de una sociedad anónima declarada en quiebra.—Jur. Com., tom. 9, pág. 421, Ser. 2ª.

1ª. **Privilegio especial**—Los hoteleros y posaderos, tienen privilegio especial y derecho de retención sobre los equipajes y efectos introducidos en sus establecimientos por los viajeros.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 349, Ser. 2ª.

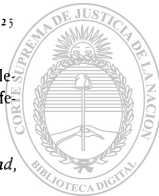
1ª. **Privilegios**—Las compañías formadas para la adquisi-

1ª.—La Cámara no resolvió tal cosa, solo dijo que como el ministerio Fiscal no había espresado agravios y atento lo espuesto de los arts. 508 y 690 del Cód. de Proc. Crim., no estaban facultados para aumentar la pena.

1ª.—Véase: verb. *Fallido*, núm. 4.

1ª.—Véase: *Derecho de retención*, núm. 2.

1ª.—Una compañía se formó en Inglaterra con el objeto de adquirir en esta República la concesión para la provisión de aguas y cloacas en la



PRO

sición de empresas privilegiadas, no gozan de los privilegios concedidos mientras no se haya verificado la transferencia.—Jur. Com., tom. 6, pág. 101, Ser. 2ª.

Procedimiento—Véase: *Juicios sumarios*, núm. 1.

Procedimiento ejecutivo—Véase: *Excepción de nulidad*, núms. 1 y 2—*Nulidad de la ejecución*, núm. 2.

Procesado—Véase: *Menor edad*, núm. 1.

1ª. **Proceso**—Evidenciada la existencia del delito, debe continuarse el proceso por todos los trámites.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 25, Ser. 2ª.

Proceso—Véase: *Reincidencia*, núms. 2 y 4—*Querrela*, núm. 1—*Adulterio*, núm. 2.

1ª. **Procuración**—La mujer solo puede ejercerla en los casos determinados por la ley.—Jur. Com., tom. 7, página 73, Ser. 2ª.

1ª. **Procurador**—El abogado y el procurador ó representante, carecen de personería para apelar personalmente de las regulaciones contenidas en la sentencia de transe y remate.—Jur. Com., tom. 9, pág. 308, Ser. 2ª.

Procuradores—Véase: *Bienes*, núm. 1.

ciudad de Buenos Aires. La personalidad de ambas compañías es distinta: una es la empresa de las obras de salubridad y la otra es la compañía para adquirir esa empresa por compra. No se trata pues de la empresa privilegiada sino de una nueva sociedad que se formará para adquirir la empresa con la concesión del gobierno. Una vez que haya adquirido la concesión gozará de los mismos privilegios y exenciones que la empresa concesionaria; pero antes que esto suceda no puede alegar derechos á una ley que no le comprende.

1ª—Así lo establece el nuevo Cód. de Proc. Crim.

1ª—Ley 5ª, tit. 5º, Part. 3ª. —La mujer puede representar á su esposo, á sus ascendientes y descendientes.

1ª—Porque no son parte en el juicio, y es sabido que únicamente pueden apelar de las providencias los que son parte. La regulación ni perjudica ni aprovecha al abogado.



PRO

1^a. **Prófugo**—En tanto no exista sentencia ejecutoriada que declare al acusado responsable del delito, no se puede disponer de la suma depositada como fianza de escarcelación, aun cuando el reo sea prófugo.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 103, Ser. 2^a.

Prohibición—Véase: *Filiación adulterina*, núm. 1.

Prohibición expresa—Véase: *Mujer*, núm. 1.

Propiedad—Véase: *Bienes muebles*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núm. 14.

Propietario—Véase: *Inquilinos*, núm. 1—*Acciones personales*, núm. 1—*Empedrado*, núm. 1—*Evicción*, núm. 3—*Interdicto de adquirir*, núm. 1.

Prórroga—Véase: *Rebeldía*, núm. 1.

Protestada—Véase: *Letra de cambio*, núm. 2.

1^b. **Protesto**—Las irregularidades en la forma del protesto, no pueden dar base á una escepción en el juicio ejecutivo.—Jur. Com., tom. 6, pág. 341, Ser. 2^a.

2. **Protesto**—La falta de las formalidades espresamente determinadas por la ley para la diligencia del protesto de una letra de cambio, hace procedente la nulidad del acto y como consecuencia la escepción de caducidad.—Jur. Com., tom. 9, pág. 103, Ser. 2^a.

1^a—Véase: verb. *Escarcelación*, núm. 1.

1^b—Los defectos ó deficiencias de un protesto, harían inhábil el título; y es sabido que la escepción de inhabilidad no procede contra la acción ejecutiva de una letra de cambio, porque aquella no está comprendida entre las escepciones enumeradas en el art. 852 del Cód. de Com. ant., igual al 676 del vig. Las irregularidades del protesto no pueden obstar al progreso del juicio ejecutivo: solo entrañan responsabilidades para el escribano encargado de la diligencia—art. 894 del Cód. de Com. ant. y 718 del vig.

2—Véase: verb. *Nulidad*, núm. 9.

PRO

3. **Protesto**—Si por una imposibilidad de hecho, el protesto de una letra de cambio, se verifica ante el empleado municipal que llena las funciones del designado por la ley.

3.—Esta sentencia fué dictada por mayoría de votos, fundándose en que la diligencia de protesto de una letra de cambio debe llenar todas las formalidades que el Cód. de Com. ant. prescribe para que traiga fuerza ejecutiva. La primera de las formalidades es que la diligencia de protesto se entienda personalmente con el deudor—art. 891—debiendo intimársele espresé la razón de su negativa—art. 893, inc. 2º.—Con el fin de que esta condición se llene, es que se ha establecido minuciosamente en el art. 892 el domicilio donde debe buscarse al deudor; que es en primer lugar el designado en la letra, y no hallándose allí debe diligenciarse ante el Presidente ó Secretario de la Municipalidad—art. 891.—Estas circunstancias son requisitos que deben llenarse esencialmente como lo ordena la ley.—Véase: Bravard-Veyrierre, tomo 3º, págs. 433 y 434.—En el caso que motivó la resolución que nos ocupa, el escribano omitió todas las formalidades, y solo dijo que se constituyó en la Intendencia por no vivir el deudor en el domicilio indicado. No manifestó haberse constituido en el domicilio, ni haber indagado si existían allí algunas de las personas indicadas por la ley en defecto del deudor. Esa omisión de una de las formalidades que la ley establece como esencial, es causa de la nulidad del acto, porque teniendo éste una forma especial para cumplirse, cae bajo la disposición de los arts. 976 y 1044 del Cód. Civ. Por otra parte, el protesto debe hacerse ante el Presidente ó Secretario de la Municipalidad, como lo exige la ley y á falta de estos ante el pro-Secretario, debiendo especificarse la razón por qué la diligencia se efectuó ante este último para que haya un fundamento atendible que explique ese procedimiento. De otro modo, serían ilusorios todos los requisitos de la ley para revestir á la letra de cambio, debidamente protestada, de todas las garantías más seguras para que se efectúe el pago de la deuda que acredita, y la diligencia del protesto se convertiría en una mera tramitación librada completamente á la apreciación del escribano que la realiza. La minoría fundó su opinión contraria en que no es exacto que cuando la persona contra quien ha de hacerse el protesto no vive en el domicilio designado en la letra debe aquél efectuarse en los términos y en el orden á que se refieren los incs. 2º y 3º del art. 892 del Cód. de Com. Basta fijarse en los términos de este artículo para comprender que tal preten-





PRO

debe hacerse constar determinadamente los motivos que existieron para ello.—Jur. Com., tom. 9, pág. 103, Ser. 2ª.

4. Protesto—Debe verificarse en el domicilio indicado en la letra, y el escribano debe practicar en él la diligencia, no bastando su ciencia propia de que no es el del deudor para omitir esta formalidad.—Jur. Com., tom. 9, página 103, Ser. 2ª.

5. Protesto—El de la letra que no se haya verificado personalmente al deudor, carece de fuerza ejecutiva; el hecho ante la Municipalidad no llena los requisitos de la ley.—Jur. Com., tom. 9, pág. 173, Ser. 2ª.

6. Protesto—El que no hubiese sido verificado personalmente, no autoriza la vía ejecutiva.—Jur. Com., tomo 9, pág. 367, Ser. 2ª.

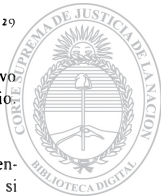
7. Protesto—La falta de protesto personal, no puede sión no tiene el menor fundamento legal. Cuando en una letra hay designación de domicilio, es solo en él donde debe hacerse, y ante la autoridad municipal local cuando en dicho domicilio no existen las personas con quienes según la ley deben entenderse aquellas diligencias—artículo 891.—Que al decir el protesto que por no vivir el deudor en el domicilio indicado, se diligenció ante la Municipalidad, se demuestra claramente que el escribano fué al domicilio, y que si el protesto se hizo ante la Municipalidad fué por no haber encontrado allí las personas requeridas por la ley. Que el cargo formulado por no haberse hecho el protesto ante el Presidente ó Secretario, es también inadmisibile, y para así comprenderlo, basta tener presente que en ausencia del último, es con el Pro-secretario con quien se entendió el protesto. Se ve que la resolución que nos ocupa es contraria á la del núm. 1. La Jur. de la Cámara viene á reformarse con la resolución consignada en el sumario. Nos parece que la mayoría de la Cámara ha estado en el terreno legal al resolver esta cuestión.

4—Véase el número anterior.

5—Art. 675 del Cód. de Com. vig.

6—Véase nota precedente.

7—Véase: verb. *Excepción de inhabilidad de título*, núm. 4.



PRO-PRU

fundar la escepción de inhabilidad de título, si el acto tuvo lugar antes de la vigencia del nuevo Código de Comercio.

—Jur. Com., tom. 10, pág. 168, Ser. 2ª.

Protesto—Véase: *Acción ejecutiva*, núm. 2.

1ª. **Protocolación**—Aun declarado el condominio por sentencia ejecutoriada, es improcedente la protocolación, si el inmueble se transfiere judicialmente á un tercero.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 99, Ser. 2ª.

Protocolación—Véase: *Estado civil*, núm. 1.

1. **Protocolos**—Acuerdo sobre visita de Registros, fijando el volúmen de los protocolos, forma de los Registros de Inhibiciones y multas.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 62, Ser. 2ª.

Providencia—Véase: *Mandato*, núm. 3—*Embargo*, número 5—*Desacato*, núm. 5—*Oficial de justicia*, núm. 1—*Notificación*, núm. 4.

1^b. **Provocación**—Ilícita y grave, debe aceptarse como circunstancia atenuante, pero nó como eximente de la pena.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 54, Ser. 2ª.

Provocación—Véase: *Desafío irregular*, núm. 1—*Homicidio*, núms. 9, 14, 16 y 27—*Legítima defensa*, núms. 4 y 5—*Lesiones*, núm. 18.

Provocaciones—Véase: *Homicidio*, núm. 4—*Lesiones*, núm. 6.

1^c. **Prueba**—Si la demora en la presentación de la prue-

1ª.—Véase: verb. *Condominio*, núm. 3.

1^b.—El procesado fué acometido de improviso por la víctima, dándole ésta una bofetada. El provocado sacó su revólver y disparó dos tiros sobre el ofensor, el que falleció á consecuencia de la herida recibida. El caso cae bajo la disposición espresa del art. 97 del Cód. Pen. No puede considerarse que haya habido legítima defensa, pues el ataque no puso en peligro la vida del ofendido.

1 —Art. 118 del Cód. de Proc.

PRU

ba rendida, no es imputable á la parte, debe agregarse aun después de vencido el término.—Jur. Civ., tom. 9, página 62, Ser. 2ª.

2. **Prueba**—La agregación de documentos durante el término de prueba, es procedente, sin que ello importe reconocer su fuerza probatoria.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 79, Ser. 2ª.

3. **Prueba**—La conformidad de las partes para practicarse una diligencia de prueba, pedida dentro del término, hace procedente su producción por orden del Juzgado y á petición de parte, aun después de vencido el término.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 223, Ser. 2ª.

4. **Prueba**—Las diligencias pedidas dentro del término deben practicarse aun después de vencido.—Jur. Com., tom. 6, pág. 50, Ser. 2ª.

5. **Prueba**—Las presunciones, que sobre la forma del hecho deduzcan los médicos en sus informes, no pueden modificar la prueba que resulte de testigos presenciales: el informe solo puede prevalecer en la parte científica.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 130, Ser. 2ª.

6. **Prueba**—Para que el boleto de venta efectuada por el corredor ó comisionista forme prueba contra las partes,

2—Las partes pueden durante el término de prueba hacer uso de todos aquellos medios tendentes á justificar sus derechos sin que pueda restringirse. Si la prueba ofrecida no es pertinente será irremisiblemente rechazada al dictar sentencia—art. 108, inc. 2º, Cód. de Proc.—Los documentos presentados no eran de los que fundan el derecho de la parte—arts. 72 y 73.—El mérito de la prueba solo puede apreciarse al dictar sentencia; si antes se hiciese se incurriría en prejuzgamiento.

4—La diligencia pedida dentro del término no se diligenció dentro de él por causas no imputables á las partes.

5—Véase: verb. *Informes*, núm. 2.

6—Véase: verb. *Boleto de venta*, núm. 1..



PRU

debe ser reconocido por aquél y y constar la operación en sus libros de comercio.—Jur. Com., tom. 8, pág. 220, Ser. 2ª.

7. **Prueba**—Para el diligenciamiento de la prueba en la República, puede ampliarse el término según la distancia, aunque en la debida oportunidad no se hubiese solicitado el término extraordinario.—Jur. Com., tom. 8, página 331, Ser. 2ª.

8. **Prueba**—Los espedientes no pueden agregarse como parte de ella.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 264, Ser. 2ª.

9. **Prueba**—Cuando los espedientes pedidos como prueba lo son con el fin de constatar referencias generales procede su agregación.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 277, Ser. 2ª.

10. **Prueba**—El pedido de prueba en forma indebida, no suspende el término.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 269, Ser. 2ª.

11. **Prueba**—Puede versar sobre todo hecho que dentro de los tres días de recibida la causa á prueba, la parte alegue haber llegado recién á su conocimiento.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 262, Ser. 2ª.

12. **Prueba**—La declaración del dependiente, que como

7—Son dos cosas distintas: el término ordinario que puede ampliarse en la forma establecida en el art. 111, y el término extraordinario del art. 113. Para el primer término puede pedirse la prórroga siempre que no esté vencido el ordinario de prueba; para el segundo, la oportunidad única solo está comprendida en los primeros diez días del término ordinario.

8—Debe pedirse testimonio ó certificado de la parte pertinente. Esta ha sido la jurisprudencia constante de la Cámara.—Véase: Inst., tomo 3º, verb. *Espediente terminado*, núm. 1.

9—Véase: verb. *Espedientes*, núm. 2.

11—Art. 109 del Cód. de Proc.

12—El administrador en este caso no es un testigo hábil, por ser un dependiente del acusador, y por hallarse interesado en el éxito del pro-





PRU

administrador ha sufrido la pérdida, no hace prueba contra el reo. —Jur. Crim., tom. 9, pág. 265, Ser. 2ª.

13. **Prueba**—La procedencia ó improcedencia de la prueba pedida, solo puede declararla el Juez al dictar sentencia, antes importaría un prejuzgamiento.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 234, Ser. 2ª.

14. **Prueba**—Debe recibirse la causa á prueba siempre que resulten hechos contradictorios.—Jur. Com., tomo 10, pág. 106, Ser. 2ª.

15. **Prueba**—Los jueces pueden ordenar para mejor proceder la presentación de toda prueba que crean conveniente para formar su prudente criterio.—Jur. Com., tom. 10, pág. 124, Ser. 2ª.

16. **Prueba**—Al acusador corresponde la de la existencia del delito: si no procede el sobreseimiento.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 340, Ser. 2ª.

Prueba—Véase: *Certificado*, núm. 1—*Declaracion*, número 1—*Injurias*, núm. 3—*Costas*, núm. 14—*Instrumento privado*, núm. 1—*Rendición de cuentas*, núms. 1 y 4—*Rebeldía*, núm. 3—*Simulación*, núm. 1—*Defraudación*, núm. 5—*Tentativa de homicidio*, núm. 1—*Término de prueba*, núm. 1—*Calumnia*, núm. 1—*Confesión del reo*, núms. 1, 2, 4, 5 y 6—*Escepción de pago*, núm. 1—*Hijo natural*, núm. 2—*Libros de comercio*, núms. 2 y 3—*Tentativa de herida*, núm. 1—*Término extraordinaria*

ceso, en razón de la responsabilidad que pesa sobre él por el carácter que inviste.

13—Art. 108 del Cód. de Proc.—Véase: verb. *Prejuzgamiento*, número 2.

14—Art. 104 del Cód. de Proc.

15—Véase: verb. *Mejor proveer*, núm. 2.

16—Arts. 432 y 434, inc. 1º del Cód. de Proc. Crim.

PRUE

rio, núms. 2 y 3—*Modificaciones*, núms. 1, 7, 8 y 9—*Diligencias de prueba*, núms. 10 y 11—*Testimonio*, núm. 1—*Retractación*, núm. 1—*Despojo*, núm. 2—*Confesión estrajudicial*, núm. 1—*Confesión indivisible*, núm. 1—*Dependiente*, núm. 4—*Negativa*, núm. 1—*Habilitación*, número 1—*Operación á plazo*, núm. 1—*Posiciones*, números 4, 11, 13 y 14—*Contrato de mayor cuantía*, núm. 2.

Prueba de falsedad—Véase: *Falsedad*, núm. 2.

Prueba de las excepciones—Véase: *Excepciones*, núms. 5, 6 y 8.

1^a. *Prueba de presunciones*—Si ella no escluye la posibilidad de un error en la apreciación de las circunstancias, procede la absolución del reo.—Jur. Crim., tomo 9, pág. 287, Ser. 2^a.

Prueba de presunciones—Véase: *Embargo preventivo*, número 10—*Confesión del reo*, núm. 8.

1^b. *Prueba en segunda instancia*—No debe recibirse en esta instancia la no rendida en primera por desidia de la parte que la solicitó.—Jur. Com., tom. 10, pág. 124, Serie 2^a.

1^c. *Prueba escrita*—El documento que contiene el contrato impugnado de simulación, no puede conceptuarse

1^a—Esa duda basta para exonerar al acusado de la responsabilidad criminal en el hecho imputado.

1^b—Art. 530 Cód. de Proc.

1^c—Si el documento no es otra cosa que el acto mismo que se ataca de simulado, y si él no contiene en su texto la doble estipulación ó convención que se invoca, sino que se refiere al acto cuya validez se contesta, mal puede decirse que es un contradocumento, pues que de otro modo faltaría siempre el documento del contrato simulado. La existencia del contradocumento constituye una pluralidad de actos escritos: crea una situación opuesta entre los diversos actos.





PRU

principio de prueba escrita para hacer procedente la testimonial.—Jur. Com., tom. 5, pág. 283, Ser. 2ª.

1. **Prueba plena**—Aun cuando se encuentre justificada la existencia de transgresión, se requiere prueba plena para imputarla al acusado; si aquella no existe, éste debe ser absuelto.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 5, Ser. 2ª.

2. **Prueba plena**—Las conclusiones terminantemente asertivas de los peritos, forman prueba plena, y los jueces solo pueden resolver en contra esponiendo las razones que tengan para rechazar su dictamen.—Jur. Com., tomo 5, pág. 171, Ser. 2ª.

3. **Prueba plena**—El informe de los peritos, terminantemente asertivo, forma prueba plena del hecho que afirman.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 352, Ser. 2ª.

4. **Prueba plena**—Se requiere la de la culpabilidad del acusado para la imposición de la pena; no basta la existencia del hecho si éste no puede calificarse como delito.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 24, Ser. 2ª.

5. **Prueba plena**—Si no existe sobre el valor del robo,

1—Un menor de trece años imputó á otra persona haberle disparado un tiro de revolver; la madre de aquél y dos testigos más, afirmaron haber oído la detonación. El presunto delincuente fué detenido inmediatamente pero no se le encontró el arma. La Cámara fundada en esta circunstancia y en la falta de todo testigo presencial hábil para declarar resolvió que el delito no estaba justificado. Esta resolución fué revocando la sentencia de 1ª Inst. y en contra del dictamen Fiscal, en el que se establecía que «no podía dudarse por un momento, atendido el cúmulo de presunciones que demostraban que su autor no era otro que el procesado.

2—Si los peritos tienen títulos, su dictamen tiene fuerza de prueba legal, y los Jueces no pueden apartarse de él. Véase: verb. *Peritos*, número 1.

3—Art. 178 Cód. de Proc.—Véase el núm. 2.

PRU

solo puede aceptarse el confesado por el reo.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 191, Ser. 2ª.

Prueba plena—Véase: *Delito*, núm. 4—*Crédito*, núm. 1—*Injurias*, núm. 3—*Fractura*, núm. 1—*Testigos*, números 12 y 13—*Tentativa de robo*, núm. 1—*Detención*, núm. 2—*Confesión del reo*, núms. 6, 12 y 13—*Homicidio*, núm. 6—*Presunciones favorables*, núm. 1—*Voluntad*, número 2.

Prueba privilegiada—Véase: *Prueba testimonial*, núm. 1—*Simulación*, núm. 2—*Contrato de mayor cuantía*, número 1.

1ª. **Prueba sobre falsedad**—De un contradocumento privado, debe producirse en el mismo término que se fije para lo principal.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 213, Ser. 2ª.

1ª. **Prueba testimonial**—O privilegiada, es permitida solo á los terceros lesionados por simulación: las partes que la han llevado á cabo, solo pueden justificarlo por contradocumento.—Jur. Com., tom. 5, pág. 283, Ser. 2ª.

2. **Prueba testimonial**—Las diligencias deben pedirse en términos hábiles á fin de llenar los requisitos que exige el

1ª—El hecho de contestarse la autenticidad de un documento conducente á la contienda, no altera las reglas fundamentales que rijen la producción de la prueba en lo principal, siendo de observarse que las probanzas relativas á su falsedad, deben recibirse en la forma y con sujeción á aquellas mismas.—Arts. 157 y 158, Cód. de Proc.

1ª—De acuerdo con la doctrina recibida y la jurisprudencia uniforme de nuestros tribunales.—Véase: Inst., tom. 3, verb. *Simulación*, núm. 2; tom. 2, mismo verb., núms. 1, 7 y 11.

2—Se ofreció la prueba testimonial tres días antes de vencerse el término de prueba. El escrito se presentó el doce y el término vencía el quince, habiendo sido feriado el trece. No podía darse cumplimiento al art. 184 del Cód. de Proc., pues la lista no podía estar de manifiesto en la oficina durante los tres días que la ley exige. La prueba tendría





PRU

Cód. de Proc. para su recepción.—Jur. Com., tom. 7, pág. 149, Ser. 2ª.

3. **Prueba testimonial**—Aun cuando la ley permite al Juez apreciarla según su criterio, no bastan para fundar una condena, las declaraciones de testigos sospechosos, y corresponde la absolución del acusado.—Jur. Crim., tomo 7, pág. 15, Ser. 2ª.

4. **Prueba testimonial**—Es procedente para justificar la existencia de un contrato de mayor cuantía llevado á cabo por el tutor en perjuicio de los intereses de su pupilo.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 279, Ser. 2ª.

5. **Prueba testimonial**—Tendente á justificar el matrimo-

que producirse fuera del término, violándose la prescripción del art. 118 que exige que la prueba sea pedida, ordenada y *producida* dentro del término.

3—Entre las reglas jurídicas por las cuales debe conducirse el criterio del Juez, un célebre autor establece la de que nunca debe fundarse sentencia condenatoria en lo criminal en declaraciones de testigos que sean todos sospechosos. «Han estado mucho tiempo divididas las opiniones sobre la cuestión de si las declaraciones de hombres sospechosos pero que constituyen un gran número, pueden por su multitud compensar lo que á cada uno de aquéllos falta de credibilidad: con otros términos, si por ejemplo, cuatro testigos sospechosos, pero conformes en sus dichos, pueden establecer la certeza de un hecho. La cuestión así presentada debe resolverse negativamente:—Mittermayer, Tratado de las pruebas en materia criminal, pág. 321. —El mismo autor agrega: que hay casos de escepción en los cuales las declaraciones de testigos sospechosos apoyadas por circunstancias dadas, pueden llegar á producir certeza.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Testigos*, núm. 13; tomo 2º, verb. *Declaraciones*, núm. 2; Ley 10, tit. 19, Part. 3ª.

4—Porque en este caso, el pupilo es un tercero que persigue el descubrimiento del fraude, y no la demostración de la existencia del convenio para producir sus efectos propios, por cuya razón las leyes y la jurisprudencia van hasta admitir la prueba privilegiada.

5—Véase: verb. *Matrimonio*, núm. 4.

PRU—PUP

nio, omitiendo la presentación de la partida, solo es procedente justificando la imposibilidad material de presentarla.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 96, Ser. 2ª.

Prueba testimonial—Véase: *Prueba escrita*, núm. 1—*Contrato de mayor cuantía*, núm. 1—*Simulación*, núm. 2—*Interrogatorio*, núm. 1.

Publicación—Véase: *Calumnia*, núm. 6.

1. **Publicación acusada**—La presentación del verdadero autor de la publicación acusada después de vencido el término de prueba, no exime de responsabilidad al editor.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 220, Ser. 2ª.

Pupilo—Véase: *Contratos*, núm. 1—*Prueba testimonial*, núm. 4—*Tutor*, núm. 1.

1—Véase: verb. *Editor*, núm. 1.





1ª. **Querella**—La falta de jurisdicción en el Juez de Instrucción, no basta para anularla, debe remitirse el proceso y el acusado al Juez competente. —Jur. Crim., tom. 7, página 260, Ser. 2ª.

Querella —Véase: *Competencia*, núm. 1 —*Injurias*, números 1 y 2 —*Acusación*, núm. 3.

Querellante—Véase: *Incontinencia*, núm. 1 —*Persone-ría*, núm. 5 —*Calumnia*, núm. 8 —*Costas*, núm. 18.

1ª. **Quiebra**—Solo puede levantarse el auto de quiebra

1ª—La incompetencia en que se pretendió fundar la nulidad de la querella fué de lugar á lugar. En vez de tener el querellado su domicilio en una sección del Municipio de la Ciudad lo tenía en otro, en el que el Juez no tenía jurisdicción. Esta circunstancia no autoriza la suspensión ni la nulidad de la querella, pues el hecho de que un Juez de Instrucción no haya tenido jurisdicción para decretar la prisión preventiva del acusado, de acuerdo con lo establecido en el art. 25, inc. 1º, del Cód. de Proc., no tiene otra inteligencia que la de atribuir el conocimiento de la causa al Juez que corresponda según el domicilio del acusado, una vez determinado aquél, pero eso no implica que el Juez ante quien se haya iniciado el juicio carezca de jurisdicción, siendo así que el art. 25 citado, comprueba lo contrario. En tal caso, lo que corresponde, una vez salvado el error por el conocimiento preciso del domicilio, es remitir los antecedentes conjuntamente con el detenido al Juez á quien corresponda el conocimiento de la causa.

1ª—Arts. 1551, 1598, 1642 y 1721 del Cód. de Com. ant.—Esta resolución está de acuerdo con otro caso anteriormente resuelto.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Quiebra*, núm. 8.



QUI

mediante carta de pago otorgada por los acreedores.—Jur. Com., tom. 5, pág. 30, Ser. 2ª.

2. Quiebra—Justificado el carácter de comerciante del deudor, la declaración de quiebra es procedente.—Jur. Com., tom. 5, pág. 138, Ser. 2ª.

3. Quiebra—Para la revocatoria del auto de quiebra, el concursado debe justificar la existencia de bienes suficientes para el pago de todos los acreedores, y las escepciones que tenga contra los que han solicitado la declaración de quiebra.—Jur. Com., tom. 6, pág. 402, Ser. 2ª.

4. Quiebra—Si al dar esplicaciones el deudor abona el crédito reclamado, no procede la declaración de quiebra.—Jur. Com., tom. 6, pág. 44, Ser. 2ª.

5. Quiebra—La revocatoria del auto de quiebra solo procede probada la falsedad de los hechos que motivaron la declaración, ó mediante concordato, en la oportunidad que fija la ley.—Jur. Com., tom. 8, pág. 152, Ser. 2ª.

6. Quiebra—La transferencia del conocimiento á la orden, no basta para probar la tradición de las mercaderías, y el vendedor, en virtud de la quiebra del comprador, puede entablar acción reivindicatoria, la que hace procedente el embargo preventivo—Jur. Com., tom. 8, pág. 154, Ser. 2ª.

2—Art. 1511, Cód. de Com. ant.

3—Art. 1551 y 1642, Cód. de Com.

4—Para que un comerciante sea declarado en quiebra es necesario que exista una deuda impaga, pues como lo dice el art. 1511 del Código de Com. ant., todo aquel que sin razón particular respecto de alguno ó algunos créditos comerciales cesa de pagar unos, se considera en estado de quiebra. Este artículo ha sido reproducido con una pequeña reforma en el art. 1579 del Cód. de Com. vig.

5—Véase: verb. *Concordato*, núm. 2.

6—Véase: verb. *Documento á la orden*, núm. 1.



QUI

7. **Quiebra**—Los boletos sobre operaciones de Bolsa, no traen aparejada ejecución, ni son bastantes para declarar en quiebra al que los suscribe.—Jur. Com., tom. 8, pág. 335, Ser. 2^a.

8. **Quiebra**—La acción de nulidad de los actos del fallido, fundada en disposiciones del Cód. de Com., debe ser resuelta por el Juez que entienda en la misma.—Jur. Com., tom. 7, pág. 284, Ser. 2^a.

9. **Quiebra**—Para que proceda el juicio criminal, es prejudicial la declaratoria del Juzgado de Comercio y su calificación.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 262, Ser. 2^a.

10. **Quiebra**—La prisión preventiva que la ley establece contra el fallido no es procedente contra el gerente de una sociedad anónima declarada en quiebra.—Jur. Com., tomo 9, pág. 421, Ser. 2^a.

11. **Quiebra**—Pagadas las deudas anteriores á la diso-

7—Véase: verb. *Boletos*, núm. 1.

8—Se trataba de una acción reivindicatoria deducida por el Síndico de un concurso. En presencia de lo dispuesto en el art. 1526 del Cód. de Com. ant.; la resolución del sumario es arreglada á derecho. Esta resolución está en contra de otro caso resuelto.—Véase: Inst. tomo 2^o, verb. *Concurso comercial*, núm. 1.—El Dr. Cortés ha opinado en este caso y en otro anterior en el sentido del sumario.

9—Se trata de la quiebra de un corredor, la que se reputa siempre fraudulenta, sin admitir escepción en contrario, cuando el corredor hace operaciones mercantiles por su cuenta ó á nombre propio. La ley de 5 de Noviembre de 1888 equipara á los corredores de Bolsa con los corredores de comercio. El art. 1104 del Cód. Civ. establece que es privativa de la jurisdicción mercantil la declaratoria de quiebra y su calificación, siendo ésta una cuestión prejudicial para el juicio criminal, y que mientras no quede ejecutoriada esta sentencia en el juicio civil, no habrá condenación en el juicio criminal. El art. 17 del Cód. de Proc. Crim. corrobora esta doctrina.

10—Véase: verb. *Fallido*, núm. 4.

QUI

lución de la sociedad, el auto de quiebra debe ser levantado respecto del socio separado, sin perjuicio de continuar el concurso del socio que continuó el giro.—Jur. Com., tom. 10, pág. 271, Ser. 2ª.

Quiebra—Véase: *Fallido*, núms. 3 y 4.

Quita—Véase: *Chancelación*, núm. 1.

1. **Quitas**—El socio que por el contrato tiene el uso de la firma social, tiene facultad para firmar quitas á sus deudores.—Jur. Com., tom. 5, pág. 306, Ser. 2ª.

1.—Si un socio debidamente autorizado, puede contrar obligaciones haciendo uso de la firma social, equivaliendo ésta á la firma de todos sus miembros, con mayor razón tiene facultad para realizar arreglos ó convenios con los acreedores sociales á objeto de disminuir las deudas de la comunidad, lo que produce el efecto de favorecer á todos y cada uno de los socios.





Rapto—Véase: *Incontinencia*, núm. 1.

Ratificación—Véase: *Mandatario*, núm. 5—*Excepción de falta de personería*, núm. 8—*Mandatario*, núm. 2—*Pago*, núm. 2.

Rebeldé—Véase: *Calumnia*, núm. 2.

1. **Rebeldía**—La prórroga solicitada antes de vencido el término, hace improcedente la acusación de la rebeldía.—Jur. Com., tom. 5, pág. 238, Ser. 2^a.

2. **Rebeldía**—No puede serle acusada rebeldía al apoderado, mientras no se le haya tenido por parte, aun cuando se le hubiese notificado la demanda.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 35, Ser. 2^a.

1—El art. 45 faculta para acusar rebeldía una vez vencidos los términos legales y sus prórrogas, de donde resulta que la rebeldía acusada antes de vencerse la prórroga es improcedente por estemporánea.

2—El actor pidió que la demanda se entendiera con una persona que según aquél era apoderado del demandado. El traslado de la demanda fué notificado á una persona que dijo ser dependiente del presunto apoderado, dejándosele las copias respectivas. Vencido el término, se acusó la correspondiente rebeldía la que fué decretada por el Juzgado; pero fué revocada por la Cámara fundándose en que el Juzgado no ordenó por ningún auto que la demanda se entendiera con el apoderado, pues el mismo demandante solicitó varias veces que aquél manifestara si estaba ó no dispuesto á asumir la personería del demandado, no habiéndose hecho manifestación alguna. Es evidente que en este

REB—REC

3. **Rebeldía**—La demanda tenida por contestada en este carácter, si bien obliga al actor á justificar los hechos alegados, lo exonera de la prueba sobre las escepciones que pudieran haberse opuesto á su acción.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 215, Ser. 2^a.

Rebeldía—Véase: *Notificación*, núm. 4—*Posiciones*, números 13 y 14.

Recaudos— Véase: *Embargo*, núm. 5.

1. **Recibos**— De mercaderías, firmados por el depen-

caso, la rebeldía no procede, porque no basta que una persona sea oprimida de otra para que se entienda con él el juicio: es necesario además que manifieste su conformidad de ser tenido por parte y de asumir la representación á fin de que se entiendan con él las ulteriores del pleito.

3.—Dada por contestada una demanda en rebeldía y seguidos los trámites de estilo, al alegar de bien probado el demandado dice de nulidad de un contrato, fundándose en la falta de doble ejemplar. Esta escepción ó defensa no pudo ser tomada en consideración por haber sido deducida fuera de la oportunidad espresamente establecida por la ley— arts. 99, 100, 108, 109 y 110.—Especialmente el art. 109 que solo admite alegar nuevos hechos hasta tres días después de abierta la causa á prueba. Los pronunciamientos judiciales deben referirse á los hechos que hayan sido oportunamente articulados, conteniendo decisión espresa y precisa con arreglo á las acciones deducidas en juicio. Este principio está fundado en la necesidad de que presida un orden económico en los juicios, pues de lo contrario se obstaculizaría la secuela de los mismos quebrantando la unidad del procedimiento é introduciéndose una confusión en las contiendas judiciales que la ley de forma se ha cuidado siempre de evitar. Esto en cuanto á las escepciones opuestas después de dada por contestada la demanda en rebeldía, siempre que esas escepciones hagan al fondo de la cuestión: ahora en cuanto á las escepciones dilatorias tampoco son procedentes porque el art. 46 del Cód. de Proc. establece que el término dentro del cual deben oponerse es perentorio, siendo de nueve días.—Véase: verb. *Escepción de incompetencia*, núm. 3.

1.—Véase: *Defraudación*, núm. 2.



REC

diente á nombre del principal, no importa una defraudación, mientras no se justifique la intención dolosa.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 344, Ser. 2ª.

1ª. **Reconocimiento**—El reconocimiento espreso del saldo que arroja una cuenta, importa su aprobación, y hace improcedente todo ulterior reclamo sobre falsedad de las partidas por medio de una nueva rendición.—Jur. Com., tomo 9, pág. 70, Ser. 2ª.

Reconocimiento—Véase: *Concurso*, núm. 1—*Condómino*, núm. 1—*Prescripción*, núm. 7—*Crédito*, núm. 1—*Comisionista*, núm. 6—*Jurisdicción prorrogada*, núms. 1 y 2—*Declaratoria de herederos*, núm. 2—*Hijo natural*, núms. 1 y 2—*Instrumento privado*, núm. 1.

Reconocimiento de firma á ruego—Véase: *Excepción de inhabilidad de título*, núm. 5.

Reconocimiento judicial—Véase: *Escritura pública*, número 3.

Reconocimiento tácito—Véase: *Paternidad*, núm. 2.

Reconvencción—Véase: *Calumnia*, núm. 1.

1ª. **Recurso**—Procede la adhesión interpuesta por el Ministerio Fiscal, pues la ley la permite á las partes sin excepción.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 348, Ser. 2ª.

2. **Recurso**—El fallecimiento de uno de los encausados exime á la Cámara de resolver si los demás hubiesen consentido la sentencia.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 170, Ser. 2ª.

1ª—Véase: *Aprobación*, núm. 1.

1ª—De acuerdo con la jurisprudencia sentada por esta Cámara, fundada en la ley.—Véase: *Adhesión al recurso*, núm. 1.

2—La sentencia tiene por objeto castigar al delincuente; si éste fallece no hay sujeto punible. La Cámara no tiene por qué sentenciar.



REC

Recurso—Véase: *Apelación*, núms. 2 y 3—*Pena*, núm. 1.
—*Nulidad del laudo*, núm. 1.

Recurso de apelación—Véase: *Agravación de la pena*, núm. 2.

1ª. Recurso de hecho—No procede si la resolución del Inferior ha sido consentida.—Jur. Com., tom. 7, págs. 258, Ser. 2ª.

1ª. Recurso de reposición—Del auto que ordena el embargo preventivo. puede interponerse el recurso de reposición.—Jur. Civ., tom. 9, págs. 190, Ser. 2ª.

1ª. Recusación—Este derecho, no procede en los incidentes, siempre que el recurrente hubiese consentido la intervención en el juicio principal.—Jur. Civ., tom. 9, págs. 59, Ser. 2ª.

1ª.—El recurso de hecho se interpuso sin que la resolución hubiese sido apelada ante el Inferior. Este recurso solo procede cuando la apelación es denegada—art. 234, Cód. de Proc.—Y en caso de que la apelación sea denegada por el Juez *a quo*, el recurso de hecho debe ser deducido dentro de tres días de notificada la denegación.—art. 235.

1ª.—El art. 223 del Cód. de Proc., establece que de las providencias interlocutorias puede pedirse reposición. El auto que ordena un embargo preventivo no solo no es definitivo sino que ni puede considerarse como interlocutorio, pues se dicta sin audiencia de la parte demandada. El art. 452, faculta al embargado para apelar del embargo.

1ª.—Los herederos se presentan en un juicio testamentario deduciendo acción contra el comprador en remate sobre cumplimiento de la compra de una de las propiedades que componen el haber testamentario, y recusan al Juez de la sucesión. El Juez se da por recusado á pesar de considerar que no podía hacer uso de ese derecho, pues considera que el de recusación sin causa debe restringirse en virtud del principio *alia restringit, sin embargo* debía ajustar su resolución á lo resuelto por el superior en otros casos análogos á este. La Cámara declaró que no podía hacerse uso de ese derecho porque la sucesión había dejado pasar la oportunidad para hacer uso de la facultad que le acuerda el art. 336 del Cód. de Proc.



REC

2. **Recusación**—El representante legal no puede usar del derecho de recusar si no lo hubiese hecho el representado en la época que fija la ley.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 101, Ser. 2ª.

3. **Recusación**—El nombramiento de nuevo Juez, hace procedente la devolución al Juzgado originario de los expedientes en que el cesante hubiese sido recusado.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 196, Ser. 2ª.

4. **Recusación**—Es procedente también en los juicios voluntarios.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 207, Ser. 2ª.

5. **Recusación**—Por prejuzgamiento, solo es procedente cuando el Juez ha emitido opinión sobre el punto material del litigio.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 49, Ser. 2ª.

6. **Recusación**—Del Juez, no suspende el término para contestar la demanda—Jur. Civ., tom. 10, pág. 258, Ser. 2ª.

2—El derecho de recusar sin causa solo puede usarse por el actor antes de entablar la demanda y por el demandado antes ó al tiempo de contestarla—art. 366 del Cód. de Proc.—En el presente caso, la esposa tomó intervención por incapacidad sobreviviente á su marido, el que había ya intervenido en el juicio cuando aun era capaz, sin hacer uso del derecho que le acuerda el art. 366 del Cód. de Proc., y al intervenir la esposa recusa al Juez, no se le hace lugar á la recusación, porque el marido no había hecho uso de la facultad que le acuerda el recordado artículo: si la esposa representa únicamente los intereses del marido ó si representa los intereses de la sociedad conyugal es la misma cosa, porque en ambos casos el esposo debió usar del derecho de recusación si es que esa medida convenía á sus intereses.

3 Véase: *Expedientes*, núm. 1.

4—El art. 366 del Cód. de Proc., da derecho á recusar á los jueces en todos los juicios. Así tiene interpretada la Cámara esta disposición legal. Véase: *Inst.*, tom. 1 verb. *Recusación*, núm. 2305.

5—Art. 368, inc. 8 del Cód. de Proc.



REG-REG

Recusación colectiva—Véase: *Informe de los arbitros*, núm. 1.

Redactores—Véase: *Injuria*, núm. 2.

Registro parroquial—Véase: *Información supletoria*, números 1, 2, 3 y 4.

1. **Registros**—Acuerdo sobre visita de Registros, fijando el volumen de los protocolos, forma de los Registros de Inhibiciones y multas.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 62, Ser. 2ª.

Registro público de comercio—Véase: *Acreedores*, núm. 2 — *Disolución*, núm. 1 — *Sociedad colectiva*, núm. 1.

Reglamento de la Bolsa—Véase: *Corredor de Bolsa*, número 3.

Reglamento de Policía—Véase: *Delitos*, núm. 1.

1ª. **Regulación**—Para que pase en autoridad de cosa juzgada en virtud de la notificación, es necesario que al ser notificada conste evidentemente la obligación de pagar el importe.—Jur. Com., tom. 7, pág. 101, Ser. 2ª.

1ª.—La ejecución se inició en virtud de una regulación practicada sin que al ejecutado se le hubiese ordenado hacer manifestación alguna de conformidad ó disconformidad con la cuenta de honorarios presentada y sin que la regulación se le hubiese notificado á la parte contra quien se inició la ejecución. Es evidente que ésta tenía que ser rechazada porque la regulación no estaba consentida. El sumario está mal, pues expresa un principio que no fué consagrado por la Cámara. No se requiere una declaración previa que implique obligación de pagar esos honorarios para que la regulación pase en autoridad de cosa juzgada; basta la notificación de dicha regulación hecha á la parte ejecutada. La sentencia de remate resolverá si la ejecución debe ó no llevarse adelante y si el ejecutado debe ó no los honorarios que se cobran. Por el contrario, el sumario está en contra de la Jur. establecida por la Cámara de lo Civil, la que ha declarado que toda declaración sobre obligación al pago, hecha en el auto de regulación de los honorarios, es nula. Véase: Inst., tom. 2, verb. *Honorarios*, núm. 13.



REG-REI

2. Regulación—El abogado y procurador ó representante. carecen de personería para apelar personalmente de las regulaciones contenidas en una sentencia de transé y remate.—Jur. Com., tom. 9. pág. 308. Ser. 2ª.

Regulación—Véase: *Honorarios*, núms. 6, 7, 8 y 12.

1. Reincidencia—Hace improcedente la sustitución de

2—Porque los abogados y procuradores no son parte en el juicio. Véase: verb. *Abogado*, núm. 1.

1—El art. 79 del Cód. Pen. vigente, establece que la prisión preventiva que se hubiese sufrido se computará por cada día de prisión cuatro pesos de multa. La práctica anterior á la vigencia del actual Cód. Pen. fundada en la ley de escarcelación bajo fianza —art. 11—era que el escarcelado podía redimir por multa el tiempo de la condena de arresto ó prisión que se le hubiese impuesto. Pero ni el Cód. Penal, ni el de Proc. actualmente vigentes, autorizan espresamente esta sustitución, pues el Cód. Pen. en sus arts. 49 y 79—el art. 49 se dictó reformando el 171 del ant. Cód.—sólo reglamenta la forma en que debe computarse la prisión preventiva que hubiese sufrido el reo y que debe serle tenida en cuenta como parte de la pena misma á que fuese condenado. El art. 79 solo tiene por objeto evitar la impunidad en que quedaría el reo condenado al pago de multa en caso de no poder satisfacerla, por cuya razón prescribe el arresto pero sin autorizar por esto la sustitución inversa. Por otra parte, aún durante la vigencia del antiguo Cód. era práctica, no acordar la sustitución de pena al reo reincidente, pues la consideraba como un beneficio acordado al que tenía derecho á solicitar su escarcelación bajo fianza. Tal escepción reconocía una base de equidad, pues si al reincidente se le negaba la escarcelación cuando el delito que se le imputaba no estaba todavía comprobado, con mayor razón se le debía negar después de sentenciado, cuando ese delito estaba ya comprobado. La prohibición de la ley, respecto á la escarcelación para el reincidente, se fundaba en la necesidad que tiene la sociedad de protegerse contra un individuo de quien puede lejitimamente sospecharse que abusaría de la libertad concedida para cometer nuevas transgresiones, y como tal sospecha subsiste y se robustece después de una nueva condenación, hay doble motivo para rehusarle la libertad por el tiempo de la condena.—Morgin. *Traité des preuves*, tom. 2, pág. 40.



**REI-REM**

la pena de prisión por la pecuniaria.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 118, Ser. 2ª.

2ª. **Reincidencia**—Para que ella exista, debe el reo haber sido juzgado y sentenciado: el simple proceso terminado por *gracia* no basta para que se declare su sentencia.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 285, Ser. 2ª.

3. **Reincidencia**—Solo existe, cuando ha recaído sentencia que declare que existió delito.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 149, Ser. 2ª.

4. **Reincidencia**—El informe del Alcaide de Policía sobre ella, no forma prueba: debe agregarse el proceso para que pueda ser tomada en consideración.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 186, Ser. 2ª.

Reincidente—Véase: *Menor edad*, núm. 1.

Reivindicación—Véase: *Acreedor prendario*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núm. 7—*Prescripción*, núm. 4.

1. **Rematador**—Cuyo mandato le es conferido sin instrucciones especiales, permite al mandante la modificación sucesiva de las condiciones de la venta, según convenga á sus intereses.—Jur. Com., tom. 7, pág. 50, Ser. 2ª.

2ª. **Rematador**—Que debe efectuar la venta de mercaderías en presencia del propietario, se rige por las disposiciones del mandato y no por las del comisionista ó consignatario.—Jur. Com., tom. 7, pág. 50, Ser. 2ª.

2ª—Véase el número 3.

3—La reincidencia implica una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

4—La reincidencia fué negada y la Cámara declaró que el informe era insuficiente para constituir plena prueba.

1—Y puede revocarlo siempre que quiera, sin incurrir en responsabilidades.—Véase: *Contrato*, núm. 1.

2ª—Véase: verb. *Comisionista*, núm. 1.

REM

3. **Rematador**—El auto en que el Juzgado nombra rematador por disconformidad de las partes es inapelable.—Jur. Com., tom. 9, pág. 418, Ser. 2ª.

Remate—Véase: *Comisión*, núms. 1 y 2.

1ª. **Remate judicial**—El comprador en remate judicial, no está obligado á la oblación del precio, mientras el vendedor no se encuentre en el pleno dominio de los bienes vendidos.—Jur. Com., tom. 5, pág. 217, Ser. 2ª.

2. **Remate judicial**—Si bien la ley prohíbe á los procuradores y mandatarios comprar los bienes materia del litigio, si la compra llevada á cabo en remate público por el representante del ejecutante, fuese aprobada por el ejecutado, el acto no puede ser anulado.—Jur. Com., tom. 5, pág. 323, Ser. 2ª.

3. **Remate judicial**—La falta de publicación del aviso en los diarios designados, vicia de nulidad el remate ordenado judicialmente.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 58, Ser. 2ª.

Remate judicial—Véase: *Escrituración*, núm. 1.

1ª. **Remuneración**—No existiendo convenio espreso so-

3—La Cámara declaró que el auto era inapelable de acuerdo con lo dispuesto en el art. 505 del Cód. de Proc. Debe tenerse en cuenta que esta inapelabilidad establecida para los autos del juicio ejecutivo, es solo aplicable para el ejecutado, según la doctrina generalmente recibida.

1ª—Véase: *Oblación*, núm. 1.

2—Véase: *Bienes*, núm. 1.

3—El art. 986 del Cód. de Proc., establece que para la validez del acto, es necesario se hayan llenado las formas prescritas por las leyes bajo pena de nulidad. Véase el art. 513 del Cód. de Proc.

1ª. Un apoderado que había hecho trabajos administrativos se presentó cobrando judicialmente una comisión de 2 %, habiendo pasado estrajudicialmente una cuenta al 1 %. El Juez declaró que la comisión á pagarse era del 2 % y que nada implicaba la cuenta pasada cobrando el 1 % estrajudicialmente, pues ese hecho no implica que esa



REM

bre la remuneración por los servicios prestados, debe fijarse la que el uso tenga establecido, no pudiendo sobrepasar á lo que estrajudicialmente haya exigido el mandante.—Jur. Com., tom. 6, pág. 238, Ser. 2ª.

sea la comisión que debe abonarse, desde que esa cuenta estrajudicial no había sido aceptada por la persona á quien se pasó. Esas cuentas solo pueden significar en derecho una manifestación de voluntad hecha por el que la pasa, manifestación que queda sin efecto si no hay conformidad por parte de éste. No habiendo estipulación sobre la comisión, debe estarse, según el art. 310 del Cód. de Com. ant., al uso, y el uso en el caso que motivó el fallo, es de 2 %¹. La Cámara revocó la sentencia por mayoría de un voto fundándose en que el comisionista solo cobró el 1 %², como justa retribución de su servicio, no pudiendo aplicarse al caso el art. 1137 y siguientes del Cód. Civ., porque de su propio contexto resulta que sus disposiciones hacen referencia á la formación de los contratos en general: pero que en el presente caso no se trata de la existencia ó inexistencia de determinado contrato, sino simplemente de solucionar el contrato reconocido por ambas partes, fijando la compensación que merecen los servicios prestados por el mandatario. ¿Qué base más segura puede descarse, que la voluntad manifestada por el mandatario en sus cuentas pasadas al mandante? No se puede decir que por el hecho de no haber sido aceptada por el mandante la comisión que se cobraba, quedara desvinculado el mandatario de sus propias manifestaciones, porque á la verdad, no se trataba de una oferta sino de la simple cobranza de una suma, en la que apreciaba sus trabajos. No es pues el caso de hacer efectiva la aplicación del art. 366 del Cód. de Com., y es indudable que procediendo en equidad, á verdad sabida y buena fe guardada, ha debido atenderse principalmente á la estimación pecunaria del mismo interesado, ya que esa fijación entra de lleno dentro de los términos establecidos por el uso comercial, y consulta á la vez la regla de que en la duda se resuelva siempre en favor de la liberación ó del demandado según la ley 40, tit. 16, Part. 3ª. Se ve que los dos votos se fundan en los términos establecidos: en el uso comercial. Sin embargo, el uso comercial quedó establecido que era el 2 %³: la prueba así lo determinó. La sentencia mandó pagar el 1 %⁴ fundada en ese uso, luego pues ella es arbitraria é injusta. Esto prueba el criterio de la Cámara en la resolución de los asuntos. Lo que ella quiere es resolver aunque esa resolución sea contra la letra de la ley, contra su



REN

1. **Rendición de cuentas**—En estos juicios, corresponde á los Tribunales ordinarios la recepción de la prueba, sin perjuicio de la jurisdicción arbitral para la resolución de las cuestiones sobre existencia de dolo ó fraude.—Jur. Com., tom. 5, pág. 153, Ser. 2ª.

2. **Rendición de cuentas**—Complicadas que requieran conocimientos especiales, debe ser practicada por peritos amigables compondores.—Jur. Com., tom. 5, pág. 209, Ser. 2ª.

3. **Rendición de cuentas**—La acción que tienen los socios contra el liquidador nombrado, es de competencia de los Tribunales de Comercio: no corresponde á la jurisdicción arbitral aunque el encargado de la liquidación de la sociedad reuna el carácter de socio de la misma.—Jur. Com., tom. 5, pág. 392, Ser. 2ª.

4. **Rendición de cuentas**—Para que esta acción sea procedente, basta la existencia del mandato y la del objeto para el cual fué conferido.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 57, Ser. 2ª.

espíritu, y contra la prueba producida. Así en este caso, se invoca la práctica comercial para mandar pagar la comisión del 1 %, mientras que en autos se comprobó que la práctica comercial establecía el 2 %. Parece imposible que la justicia de la Capital de la República esté librada á jueces tan poco escrupulosos en el cumplimiento de sus deberes. Esto no es administrar justicia, es entronizar la injusticia.

1—Cuando hay hechos controvertidos, corresponde la apertura de la causa á prueba—art. 104 del Cód. de Proc.—Esto no implica que las cuestiones de hecho sobre existencia de dolo, error, fraude, etc. en la formación de los contratos, no correspondan á la jurisdicción arbitral, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 208 del Cód. de Com. ant., el que ha sido suprimido en el vigente.

2—Art. 557, Cód. de Proc.

3—Véase: *Jurisdicción arbitral*, núm. 1.

4—El derecho de exigir la rendición de cuentas está claramente establecido en el art. 1909 del Cód. Civ.



REN

5. **Rendición de cuentas**—En este juicio deben llenarse los trámites del juicio ordinario, cuando el administrador no ha sido nombrado judicialmente.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 402, Ser. 2ª.

6. **Rendición de cuentas**—Las partidas de cargo del que exige la rendición de cuentas, deben ser plenamente justificadas.—Jur. Com., tom., 9, pág. 402, Ser. 2ª.

7. **Rendición de cuentas**—Procede esta acción á favor del dependiente y contra el principal, cuando por vía de retribución participa también de las utilidades.—Jur. Com., tomo 9, pág. 70, Ser. 2ª.

8. **Rendición de cuentas**—El comisionista debe á su co-

5—No se trata de un nombramiento hecho de acuerdo con lo preceptuado en el art. 643 del Cód de Proc., y por consiguiente no son aplicables las prescripciones del art. 680 y siguientes del mismo.

6—El art. 545 del Cód. de Proc., prescribe el trámite de la prueba para el caso de no haber conformidad de partes en las cuentas que se rinden; y como es de consiguiente, la prueba incumbe al que afirma el hecho del pago.

7—El carácter del habilitado en este caso, es el de dependiente, como lo tiene resuelto la Excm. Cámara.—Véase: Inst., tom. 3, verb. *Dependientes habilitados*, núm. 2; art. 462 del Cód. de Com. ant. —No pudiendo el dependiente acojerse á la disposición legal que consagra á favor del socio el derecho de pedir la liquidación social, es evidente que cuando presta sus servicios bajo el régimen de la habilitación, no puede quedar desarmado ante el peligro posible de la arbitrariedad y mala fe de sus principales. La habilitación constituye un contrato con derechos y obligaciones recíprocas, y sería llegar al absurdo el reconocer derechos sin los medios de ejercitarlos, ni aun los de resguardarlos, si se admitiera que el habilitado ha de pasar por las simples afirmaciones de sus principales. Tanto valdría el decir que la habilitación consistiría en lo que dichos principales quisieran atribuirle. El único medio que puede emplear para velar por sus derechos el habilitado, y que puede emplear para hacerlo respetar, es la rendición de cuentas. Así es que esta acción procede por parte de los habilitados como lo establece el sumario.

8—Véase: *Comisionista*, núm. 5.



**REN**

mitente cuenta detallada del mandato y no puede responsabilizar á éste por operaciones sueltas: la rendición de cuentas de todas las encomendadas y practicadas por su orden es ineludible á fin de responsabilizarlo por el saldo.—Jur. Com., tom. 9, pág. 209, Ser. 2ª.

9. **Rendición de cuentas**—Entre comitente y comisionista, no puede existir saldo deudor mientras no haya sido aprobada la rendición de cuentas que el segundo debe al primero.—Jur. Com., tom. 9, pág. 251, Ser. 2ª.

10. **Rendición de cuentas**—Reconocida por el comisionista la obligación de rendir cuentas, no puede modificarse por el hecho de haberlas rendido con anterioridad aunque el hecho sea cierto.—Jur. Com., tom. 6, pág. 294, Ser. 2ª.

11. **Rendición de cuentas**—Para que exista defraudación por parte del dependiente administrador, es requisito esencial la prueba de la existencia de un saldo cuya inversión no justifica ó la negativa á rendir cuentas de su administración.—Jur. Com., tom. 10, pág. 86, Ser. 2ª.

12. **Rendición de cuentas**—Esta acción corresponde á la jurisdicción común, aun cuando las operaciones encomendadas pudieran corresponder al fuero federal,—Jur. Com., tom. 10, pág. 295, Ser. 2ª.

9—Desde que no hay cuenta liquidada no hay saldo comprobado ni adeudado. Para que una cuenta pueda dar margen á una demanda es necesario que ella esté fundada en los libros de comercio de quien la presenta y acompañada de los comprobantes respectivos.—F. S. C. N., tom. 2º, pág. 27, Ser. 2ª.

10—El hecho de haber rendido cuentas con anterioridad no podía tener ninguna fuerza legal una vez que en un juicio verbal celebrado el comisionista hizo caso omiso de ese hecho y se comprometió á rendir dichas cuentas.

11—Véase: *Defraudación*, núm. 5.

12—Véase: *Fuero Federal*, núm. 2.

**REN—REP**

Rendición de cuentas—Véase: *Aprobación*, núm. 1.

1. **Renuncia**—La intervención personal en la escritura pública de compraventa de una fábrica, importa la renuncia de los derechos que por contratos privados anteriores se hubiesen estipulado para la formación de una sociedad bajo la base de una operación.—Jur. Com., tom. 5, página 253, Ser. 2ª.

2. **Renuncia**—La apelación ante los tribunales ordinarios, de una resolución de la Municipalidad, importa una renuncia de los derechos que al apelante pudieron corresponderle por otros medios.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 245, Ser. 2ª.

Renuncia—Véase: *Laudo arbitral*, núm. 1.

Renunciante—Véase: *Mandatario*, núm. 3.

Reo—Véase: *Sentencia*, núms. 1, 2, 3 y 4—*Homicidio*, núm. 24—*Reincidencia*, núm. 2—*Testigos*, núm. 11—*Incendio*, núm. 1—*Escarcelación bajo fianza*, núm. 7—*Fallido*, núm. 2.

Repreguntas—Véase: *Interrogatorios*, núm. 1.

Representación—Véase: *Mandatario*, núm. 3.

1ª. **Representante**—Carece de personería para acusar por injurias dirigidas á su representado.—Jur. Crim., tomo 8, pág. 333, Ser. 2ª.

Representante—Véase: *Abogado*, núm. 1.

1º. **Representantes legales**—De una persona jurídica están obligados á absolver posiciones.—Jur. Com., tom. 8, págs. 291 y 302, Ser. 2ª.

Representantes legales—Véase: *Personería*, núm. 5—*Recusación*, núm. 2.

1ª—Véase: verb. *Personería*, núm. 4.

1º—Véase: *Personas jurídicas*, núm. 2.

**REQ-REV**

Requisitos esenciales—Véase: *Embargo*, núm. 5.

Requisito indispensable—Véase: *Confesión del reo*, número 6.

1^a. **Resarcimiento**—Del perjuicio ocasionado, que hace el reo, contra su voluntad, no puede ser tenido en cuenta al dictarse sentencia.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 227, Ser. 2^a.

Resolución—Véase: *Notificación*, núm. 1—*Recurso de hecho*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núm. 10.

Residencia—Véase: *Exhorto*, núm. 1.

Resolución de contrato—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 3.

Responsabilidades civiles—Véase: *Escarcelación bajo fianza*, núm. 1.

1^b. **Retractación**—Para que la confesión pueda ser tomada en consideración y tener efecto legal, es requisito indispensable que sea la única prueba que exista contra el reo; si por otros medios existe la prueba plena que la ley requiere, la retractación es de ningún valor.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 188, Ser. 2^a.

Retractación—Véase: *Injurias*, núms. 1 y 4—*Confesión*, núm. 17.

Retribución—Véase: *Rendición de cuentas*, núm. 7.

Reversión de un legado—Véase: *Prescripción*, núm. 3.

Revocación—Véase: *Contrato*, núm. 1—*Mandato*, números 2 y 3.

1^c. **Revocatoria**—El auto que no hace lugar a la revoca-

1^a—No puede ser tenido en cuenta como circunstancia absolutoria, pero sí como atenuante, según la sentencia que motivó el sumario.

1^b—Véase: *Confesión del reo*, núm. 6.

1^c—Véase: *Apelación*, núm. 1.

REV-ROB

toria, hace cosa juzgada si conjuntamente con aquélla no se interpone el recurso de apelación.—Jur. Com., tom. 10, pág. 334, Ser. 2ª.

Revocatoria—Véase: *Quiebra*, núm. 3—*Concordato*, número 2—*Fallido*, núm. 3.

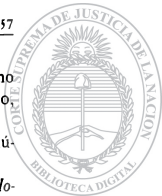
Riña—Véase: *Lesiones*, núm. 2—*Heridas*, núm. 4—*Homicidio*, núm. 22.

1. Robo—La mayor ó menor solidez ó altura del muro saltado, no puede influir en manera alguna sobre la calificación de robo, por haber entrado por vía no destinada á tal objeto.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 284, Ser. 2ª.

2. Robo—Para que exista, basta que el acto se haya cometido con violencia contra la propiedad sin que sea requisito indispensable que el reo se haya introducido en el domicilio para cometer el delito.—Jur. Crim., tom. 6, página 336, Ser. 2ª.

1—La circunstancia de que una pared se salve para cometer un robo, basta para su calificación, sin que pueda distinguirse si ella es nueva ó vieja, alta ó baja. La ley solo ve en el hecho de saltarla en grado de audacia en el malhechor, que conviene reprimir en obsequio del orden público y de la tranquilidad del hogar. De todas maneras la ley solo requiere que se penetre á la casa por vía no destinada para servir de entrada á un edificio—art. 190, inc. 1º, Cód. Pen.

2—El procesado había roto los vidrios de una casa de cambio é introducido la mano, estrayendo billetes de banco que luego arrojó á la calle, los que recogidos, se vió que ascendían á la suma de mil pesos. La Cámara por mayoría de votos resolvió en el sentido del sumario, fundándose en que habiendo habido fractura de la vidriera para perpetrar el acto, hecho que cae bajo el inc. 2º del art. 190 del Cód. Penal vig., debe calificarse de robo. No obsta á esta calificación, el que no entrase todo el cuerpo dentro de la cosa, porque el robo no es sino un hurto calificado, y este delito existe desde que se sustrae la cosa ajena mueble con ánimo de apropiársela. En el caso que nos ocupa, hubo esa sustracción calificada por la fractura; esta fractura da á la sustracción el carácter de robo. La ley solo exige en el caso, la fractura,



ROBO

3. Robo—La tentativa de robo con fractura debe ser penada con año y medio de prisión.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 81, Ser. 2ª.

4. Robo—La existencia de circunstancias agravantes, como el escalamiento, no permite tomar en consideración la poca importancia del robo, ni aun el ningún perjuicio que se hubiese sufrido.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 337, Ser. 2ª.

5. Robo—La entrada por vía no destinada á tal objeto, si bien no basta para que exista escalamiento hace que el delito sea calificado como tentativa de robo y no hurto.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 86, Ser. 2ª.

6. Robo—Con ganzúa, debe ser penado con dos años de prisión, si el valor de lo robado no alcanza á 500 pesos moneda nacional.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 271, Ser. 2ª.

7. Robo—Con escalamiento, debe ser penado con dos

sin necesidad de que introduzca el ladrón todo el cuerpo, basta la aprehensión material. La minoría dijo que bien examinado el art. 190, inc. 2º, se tiene que admitir que su disposición solo es referente al caso en que la fractura se lleve á cabo para *penetrar* en el edificio lo que no entró en la intención del agente, ni debía preocuparlo para producirse la acción porque se le castiga, y simplemente el hecho debía calificarse de hurto simple con la circunstancia agravante de la fractura de la vidriera.

1—El procesado violentó la puerta de calle y se introdujo en un negocio, de noche. En este caso corresponde la pena espresada en el sumario de acuerdo con lo preceptuado en los arts. 12, inc. 2º, y 193 del Cód. Pen. vig.

4—Arts. 52, 190 y 191 del Cód. Pen. vig.

5—Véase: verb. *Entrada*, núm. 1.

6—Arts. 190, inc. 1º, y 191 del Cód. Pen. vig.—No solo se había perpetrado el delito con ganzúa sino que existían contra el delincuente las circunstancias agravantes que enumeran los incs. 13 y 14 del artículo 84, y el procesado era de malos antecedentes habiendo tenido varias entradas en la Policía.

7—Arts. 190 y 191, Cód. Pen. vigente.



ROBO

años de prisión.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 191, Ser. 2^a.

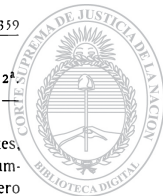
Robo—Véase: *Tentativa de robo*, núms. 1, 2, 3 y 4—*Prueba plena*, núm. 5.

1. **Robo con violencia**—Y con circunstancias agravantes, debe ser penado con seis años de presidio, que deben cumplirse en la Penitenciaría, si el reo es menor de edad pero mayor de 18 años.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 5, Ser. 2^a.

2. **Robo con violencia**—Debe ser penado con cuatro años y medio de presidio si concurren circunstancias agravantes y atenuantes.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 11, Ser. 2^a.

1—Arts. 62 y 83, inc. 2º del Cód. Pen. vigente.

2—Art. 189, inc. 1º, Cód. Pen. vigente.





Saldo— Véase *Cuenta de venta*, núm. 1—*Prescripción*, núm. 6—*Aprobación*, núm. 1—*Comisionista*, núms. 2 y 5—*Rendición de cuentas*, núms. 8 y 9—*Defraudación*, número 5.

Saldo adelantado—Véase: *Comisionista*, núm. 6.

Saldo deudor—Véase: *Rendición de cuentas*, núm. 9.

Secuela del litigio—Véase: *Moratorias*, núm. 1.

Secuestro—Véase: *Dinero*, núm. 1.

Segunda instancia—Véase: *Prueba en 2ª instancia*, número 1.

1ª. Sellos—Ls declaratoria de herederos al solo objeto de bonificar un título de propiedad, no está sujeta al impuesto de sellos.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 244, Ser. 2ª.

Sellos—Véase: *Cámara*, núm. 1—*Papel sellado*, núms. 4 y 5—*Contrato privado*, núm. 1—*Declaratoria de herederos*, núm. 1.

Sellos oficiales—Véase: *Falsificación*, núm. 4.

Senador—Véase: *Dietas*, núm. 1.

1ª. Sentencia—La de primera instancia solo puede ser modificada en sentido desfavorable al reo, si hubiese sido

1ª—De acuerdo con otro caso resuelto por este mismo Tribunal.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Declaratoria*, núm. 1.

1ª—Véase: verb. *Consulta*, núm. 1.

SEN

apelada por el Fiscal.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 232, Ser. 2ª.

2. **Sentencia**—Elevada en consulta, no puede ser modificada por el Superior en sentido desfavorable al reo.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 249, Ser. 2ª.

3. **Sentencia**—Cuando el Agente Fiscal no interpone recurso contra la sentencia, la Cámara reconociendo la improcedencia de la pena, no puede alterarla en sentido desfavorable al reo.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 414, Ser. 2ª.

4. **Sentencia**—La absolución del reo, no permite la escarcelación bajo fianza si la sentencia hubiese sido apelada.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 366, Ser. 2ª.

5. **Sentencia**—El Superior no puede modificar en sentido desfavorable la del Inferior elevada en consulta.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 392, Ser. 2ª.

6. **Sentencia**—Para la validez de la sentencia, basta que ella resuelva el punto sometido á decisión: las diferentes cuestiones de detalle que hayan sido discutidas y cuya re-

2—De acuerdo con el número anterior.

3—Véase el núm. 1.

4—Es jurisprudencia constante en nuestros Tribunales.—Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Escarcelación bajo fianza*, núm. 8; y tom. 1º, verb. *Absolución*, núm. 15.

5—Véase el núm. 1.

6—El art. 216 del Cód. de Proc. solo establece que la sentencia debe contener decisión espresa y precisa, con arreglo á las acciones deducidas en juicio: el 217 manda que se haga mérito de cada uno de los puntos pertinentes de derecho fijados en la discusión. Es necesario no confundir los puntos pertinentes del debate, con cada uno de los argumentos que á un litigante se le ocurra en la defensa de su causa: pues si se fuese á tomar en cuenta todos y cada uno de esos argumentos, se harían interminables los pleitos y las sentencias se convertirían en disertaciones jurídicas en vez de sentencias judiciales. Además, no debe olvidarse que toda difusión es peligrosa en derecho.



SEN

solución no modificaría el fondo, no se encuentran comprendidas en la disposición de la ley.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 291, Ser. 2^a.

7. **Sentencia**—La audiencia que se acuerda á la parte contra quien se pide la ejecución de una sentencia dictada en país extranjero, solo tiene por objeto oír sus observaciones sobre su forma; las excepciones deben oponerse en la debida oportunidad del juicio. —Jur. Com., tom. 9, página 406, Ser. 2^a.

8. **Sentencia**—Los jueces carecen de facultad para modificar su sentencia aclarándola ó aumentándola, después de ser notificada alguna de las partes—Jur. Crim., tom. 9, pág. 144, Ser. 2^a.

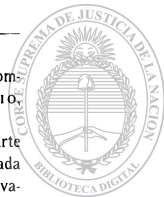
Sentencia—Véase: *Intereses*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núm. 9—*Término*, núm. 1—*Apelación*, núm. 2—*Inhibición*, núm. 4—*Citación de remate*, núm. 1—*Excusación*, núm. 1—*Reincidencia*, núm. 3.

1. **Sentencia definitiva**—Dictada en juicio contradictorio, no hace cosa juzgada para las partes que hayan tenido

7—Véase: verb. *Excepciones*, núm. 4.

8—En materia criminal, el Código de Procedimientos no autoriza al Juez para corregir ó enmendar su propia sentencia, limitándose este Código, en sus prescripciones á establecer los recursos que son procedentes contra las sentencias definitivas. De consiguiente, si un querellado se siente sgravado por cualquiera omisión de que adoleciera una sentencia, debe concretarse á buscar su reparación en los recursos legales para ante el Superior. Si se pudiese aplicar por analogía el Cód. de Proc. Civ., tendría que llenar los requisitos del art. 222, el que autoriza á pedir aclaraciones dentro del día siguiente á la notificación. La Ley 3^a, tít. 22, Part. 3^a, establece que solo puede formularse dentro de las primeras 24 horas después de pronunciada la sentencia ó de notificada al interesado.

1—Véase: *Cosa juzgada*, núm. 3.



SEN—SEP

intervención en el juicio como coadyuvantes por existir comunidad de intereses.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 97 Ser. 2ª.

Sentencia definitiva—Véase: *Consignación*, núm. 2—*Estado civil*, núm. 1—*Inhibición*, núm. 4—*Confesión del reo*, núm. 13—*Costas*, núm. 19—*Escepciones*, núm. 5—*Testigos*, núm. 12—*Honorarios*, núm. 5—*Acción*, núm. 1—*Prejuzgamiento*, núm. 1—*Prueba*, núm. 13.

1ª. Sentencia de remate—Cuando no se han opuesto escepciones es inapelable.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 220, Ser. 2ª.

Sentencia de remate—Véase: *Escepción*, núm. 1—*Abogado*, núm. 1.

1ª. Sentencia ejecutoriada—En tanto no exista sentencia ejecutoriada que declare al acusado responsable del delito, no se puede disponer de la suma depositada como fianza de escarcelación aun cuando el reo sea prófugo.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 103, Ser. 2ª.

Sentencia ejecutoriada—Véase: *Condominio*, núm. 3—*Escritura pública*, núm. 2—*Nulidad*, núm. 2.

Sentencia inapelable—Véase: *Honorarios*, núm. 6.

Seña—Véase: *Pago*, núm. 3—*Contrato de compraventa*, núm. 1.

Separación—Véase: *Liquidador*, núm. 2.

1ª. Separación de bienes—Entablada ésta, procede la inhibición.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 47, Ser. 2ª.

1ª—Art. 501 del Cód. de Proc.

1ª—Véase: *Escarcelación*, núm. 1.

1ª—No puede sentarse esto como principio general. Es necesario que concurren ciertas circunstancias. En el caso que nos ocupa se libró mandamiento contra el esposo, por los alimentos que estaba obligado á prestar á la esposa: el marido dijo que no los abonaba por no



SER—SIM

1ª. **Servicios**—No existiendo convenio expreso sobre la remuneración por los servicios prestados, debe fijarse la que el uso tenga establecido, que no puede sobrepasar a la que estrajudicialmente hubiese exigido el demandante.—Jur. Com., tom. 6, pág. 238, Ser. 2ª.

2ª. **Servicios**—Corresponde á la jurisdicción comercial, el cobro de servicios prestados á una sociedad anónima.—Jur. Com., tom. 9, pág. 230, Ser. 2ª.

3. **Servicios**—No existiendo prohibición expresa de que la mujer preste sus servicios en casas de comercio, la policía no puede prohibirlo, ni aún prestar su concurso á la Municipalidad, en tanto no se ofenda á la moral y á las buenas costumbres—Jur. Com., tom. 10, pág. 375, Ser. 2ª.

Servicios extraordinarios—Véase: *Honorarios*, núm. 10.

1ª. **Simulación**—La prueba de la simulación de un contrato, es procedente entre las partes que lo han llevado á cabo, siempre que el acto que se pretenda verdadero, no fuese ilícito ó prohibido por la ley.—Jur. Com., tomo 5, pág. 283, Ser. 2ª.

2ª. **Simulación**—No existiendo convenio expreso sobre

tener fondos ni bienes que dar á embargo; antes de esta manifestación había dicho que existían bienes raíces, lo que comprueba, ó por lo menos hace presumir la ocultación de dichos bienes. Con estos requisitos queda comprobado el peligro que corren los bienes de la mujer, y consiguientemente procede la aplicación del art. 1295 del Cód. Civ.

1ª.—Véase: verb. *Remuneración*, núm. 1.

2ª—La acción deducida tenía por objeto obtener el pago de servicios prestados por un dependiente de la sociedad. La jurisdicción mercantil procede de acuerdo con lo preceptuado por el Cód. de Com.—artículos 282 y 1º, inc. 8º del Cód. de Com. ant.; y art. 8, inc. 8º del vigente.

3—Véase: *Mujer*, núm. 1.

1ª—Arts. 954, 959, 1374 del Cód. Civ., y 753 del Cód. de Com. anterior.

2ª—Véase: verb. *Remuneración*, núm. 1.



SIM — SOB

la remuneración por los servicios prestados, debe fijarse la que el uso tenga establecido y no puede sobrepasar a lo que estrajudicialmente haya exigido el demandante.—Jur. Com., tom. 6, pág. 174, Ser. 2ª.

3. Simulación—Justificada la de un acto jurídico verificado por el fallido, debe anularse si su existencia perjudica á los acreedores.—Jur. Com., tom. 6, pág. 183, Ser. 2ª.

Simulación—Véase: *Prueba testimonial*, núm. 1—*Escritura pública*, núm. 3.

1ª. Síndico—Los acreedores no son parte en los incidentes del concurso: la intervención del síndico basta en tanto la ley no requiera espresamente la de aquéllos.—Jur. Com., tom. 9, pág. 169, Ser. 2ª.

Síndico—Véase: *Falsedad*, núm. 1—*Honorarios*, número 12.

1ª. Síndico definitivo—El Juzgado no puede conferirle autorización para entablar demanda, debe recabarla de los acreedores.—Jur. Com., tom. 6, pág. 217, Ser. 2ª.

Síndico definitivo—Véase: *Acreedores verificados*, número 1.

1ª. Sobreseimiento—Sin acusación, por no resultar cargos contra los detenidos, no hace cosa juzgada.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 25, Ser. 2ª.

2. Sobreseimiento—Cualquiera que sea su forma, el

3—Art. 1541 del Cód. de Com. anterior.

1ª—Véase: verb. *Acreedores*, núm. 3.

1ª—Art. 1650 del Cód. de Com. ant.

1ª—Véase: *Cosa juzgada*, núm. 1.

2 —El auto de sobreseimiento no se opone á que el interesado haga valer las acciones que considere asistírle, en la forma y modo que las leyes de procedimientos determinen.



SOB

acusado tiene facultad para ejercer las acciones que crea convenientes á su derecho —Jur. Crim., tom. 8, pág. 167, Ser. 2ª.

3. **Sobreseimiento**—Provisorio, por no haberse justificado quien era el autor de un delito, no causa agravio.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 167, Ser. 2ª.

4. **Sobreseimiento**—No puede decretarse tratándose de delitos acusables por el ministerio fiscal, aun cuando se admita la escepción de falta de personería en el acusador.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 151, Ser. 2ª.

5. **Sobreseimiento**—Provisional, la omisión de la vista al acusador, al dictarse el auto, no es causa de nulidad.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 357, Ser. 2ª.

6. **Sobreseimiento**—Definitivo, el desistimiento del acu-

3—La Cámara no dice que el sobreseimiento provisorio no causa agravio, sino que dados los motivos y el alcance legal del auto, en nada se perjudica la reputación del interesado. El sobreseimiento fué decretado en virtud de lo dispuesto en el art. 435 del Cód. de Proc.

4—En el acusador particular se entiende. La acción fué entablada por un acusador particular á nombre de otro y sin poder bastante: opuesta por el querrellado la escepción de falta de personería por cuanto la querella fué deducida con un poder general, siendo de ley la necesidad de un poder especial—arts. 157 y 177 del Cód. de Proc. Crim.—fué declarada procedente; pero no se hizo lugar al sobreseimiento por cuanto se trataba de un delito sujeto á acción pública en el que es también parte el ministerio fiscal, respecto del cual no podía oponerse la mencionada escepción.

5—La audiencia prescripta por el art. 441 del Cód. de Proc. Crim., no es uno de aquellos trámites cuya misión puede motivar la nulidad de lo obrado: esta circunstancia debe tenerse mayormente en cuenta cuando se trata de la libertad individual, la que debe demorarse lo menos posible.

6—Según el precepto establecido en el art. 141 del Cód. Pen., el Juez no procede de oficio en las causas allí espresadas. Todos los motivos de conveniencia social y decencia pública que funda esta prescripción,



SOC

sador en los delitos que solo pueden ser perseguidos por acusación, hace procedente el sobreseimiento definitivo.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 385, Ser. 2ª.

1. **Sociedad**—Los gastos del contador nombrado por la comisión liquidadora de una Sociedad, son á cargo de los socios y no de los liquidadores.—Jur. Com., tomo 5, pág. 219, Ser. 2ª.

2. **Sociedad**—La acción pro-socio, es improcedente mientras el actor no justifica la existencia de la sociedad.—Jur. Com., tom. 5, pág. 198, Ser. 2ª.

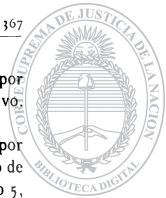
3. **Sociedad**—Justificada la sociedad por admisión del socio administrador ultrapasando sus facultades, éste es el personalmente responsable y no la sociedad administrada.—Jur. Com., tom. 6, pág. 143, Ser. 2ª.

tienen presente que dichos delitos deben casi tenerse como puramente privados y en consecuencia sujetos á desistimiento.—art. 15 del Cód. de Proc. Criminal.

1—Según la expresa disposición del art. 501 del Cód. de Com. ant., son los socios y no los liquidadores los que quedan directamente obligados por las obligaciones contraídas por estos cuando dichas obligaciones son una consecuencia natural de la liquidación. Véase: Massé, Derecho Comercial, última parte del núm. 1961.

2—Esta acción se basa en la existencia de la sociedad, si esa base desaparece la demanda no puede prosperar.

3—No basta la firma social puesta por el administrador para el ingreso de nuevos asociados—art. 480 del Cód. de Com.—El contrato de sociedad tiene por base esencial la confianza personal que los coasociados recíprocamente se inspiran, á tal extremo que las leyes de partida miraban á los socios como á hermanos. Por eso es que el Cód. de Com. prohíbe por el citado artículo, la trasmisión de derechos sociales á personas que sean estrañas á la sociedad, salvo expreso consentimiento de todos los socios, por que de otra manera el contrato se desnaturaría, haciéndose por demás violenta la posición respectiva de los asociados primitivos.





SOC

4. **Sociedad**—La existencia de la sociedad en las cuestiones entre socios, puede probarse por todos los medios que la ley permite para probar los hechos.—Jur. Com., tom. 6, pág. 143, Ser. 2ª.

5. **Sociedad**—Las cuestiones sobre existencia de la sociedad ó sobre personería de su representante, corresponden á la jurisdicción ordinaria: la arbitral solo puede conocer de la liquidación después de resueltas aquéllas.—Jur. Com., tom. 8, pág. 297, Ser. 2ª.

6. **Sociedad**—Procede la separación del liquidador de la sociedad que no ha llenado su cometido dentro del término que se le fijó.—Jur. Com., tom. 9, pág. 182, Ser. 2ª.

7. **Sociedad**—La fijación de sueldos á los directores de una sociedad de socorros mútuos, no puede calificarse como delito en tanto no esté prohibida por los estatutos.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 423, Ser. 2ª.

8. **Sociedad**—La mala administración de una sociedad por sus directores, no puede ser calificada y penada como delito mientras no se justifique la comisión de hechos criminales.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 423, Ser. 2ª.

9. **Sociedad**—Conformes los socios en la disolución de la sociedad, procede el nombramiento de árbitros.—Jur. Com., tom. 10, pág. 99, Ser. 2ª.

10. **Sociedad**—Aun después de su disolución, los socios son personalmente responsables de las obligaciones anteriores á la disolución.—Jur. Com., tom. 10, pág. 271, Ser. 2ª.

4—Art. 399 del Cód. de Com. ant.

5—Véase: verb. *Personería*, núm. 3.

6—Véase: verb. *Liquidador*, núm. 2.

8—Solo puede dar lugar al ejercicio de acciones civiles.

9—Véase, verb. *Árbitros*, núm. 5.

SOC

Sociedad.—Véase: *Accionista*, núm. 1—*Acreedores*, número 2—*Concordato*, núm. 1—*Excepción de quita*, núm. 1—*Quiebra*, núm. 11—*Liquidador*, núm. 1—*Condominio*, núm. 1—*Notificación*, núm. 1—*Contrato privado*, núm. 1—*Obligaciones*, núm. 1—*Renuncia*, núm. 1—*Socios*, número 1.

1. **Sociedad anónima**.—Las cuestiones que se susciten por los accionistas contra el directorio, por violación de los estatutos de una sociedad anónima, corresponden á la jurisdicción comercial, aun cuando los estatutos resuelvan que son de la competencia de las asambleas.—Jur. Com., tom. 5, pág. 108, Ser. 2ª.

2. **Sociedad anónima**.—Que en sus estatutos reconoce la compensación en favor del iniciador, está obligada al di-

1—El art. 417 del Cód. de Com. ant. vicia de nulidad toda deliberación tomada por los accionistas contra los estatutos. Decir que la asamblea es la competente para resolver dicha cuestión, importaría entregar á la deliberación de la mayoría de los accionistas, todas las cuestiones que sobre modificación de los estatutos sociales fuesen promovidas por socios ó terceros, contra el espíritu del artículo citado y lo que aun es más si se quiere, contra el principio de justicia consagrado de que nadie puede ser juez y parte.

2—La estipulación relativa á la remuneración decía así: «Se abonará al iniciador de la empresa, Sr. Fliess por toda compensación de sus trabajos el dos por ciento en recibos, títulos provisorios ó acciones sobre el capital primitivo de la sociedad, hasta 1.000.000 de pesos; y estos recibos, títulos provisorios ó acciones le serán entregados en relación al capital suscrito y á medida que se vayan percibiendo cuotas parciales que pida el consejo de administración de acuerdo con los estatutos.» La sociedad se disolvió antes de dar principio á sus operaciones. El iniciador invocando su derecho de acreedor de la sociedad pide se le abone lo adeudado. Esto era lógico, pues que mientras la sociedad no le entregase los títulos ó acciones á que se obligó, solo podía invocar su carácter de acreedor para exigir la entrega de los papeles de crédito en que se convino abonarle la



SOC

solverse, á abonarle los daños y perjuicios, pero no el

compensación de sus trabajos, estudio é iniciativa para la formación de la sociedad. La obligación así contraída no puede considerarse sujeta á condición alguna, y mucho menos á una potestativa por parte del deudor, que sería siempre nula—arts. 238, Cód. de Com. ant. y 542 del Cód. Civ.—porque el hecho de obligarse la sociedad antes de constituirse, supone el reconocimiento de servicios preexistentes, habiéndose convenido la remuneración en la forma establecida en los estatutos. El hecho de la disolución sea legal ó no, en nada altera esta conclusión, porque en todo caso la sociedad habría entrado en liquidación á los efectos del art. 497 y siguientes del Cód. de Com., y habría procedido asimismo al pago de los créditos pasivos—art. 505, *ibid*—entre los cuales se incluiría necesariamente el del iniciador, mientras no hubiese cambiado su calidad de tal por el de accionista, mediante la entrega de títulos ó acciones que tenía derecho á exigir. El acreedor pidió el cumplimiento de la obligación ó el pago de 20.000 pesos á que ascendía el 2 % sobre el millón de pesos de capital primitivo. Es evidente que no era posible la entrega de la cosa adeudada. Los demandados manifestaron categóricamente, que ninguno de sus miembros estaba dispuesto personal ni pecuniariamente á reconstituir la sociedad. En este caso, ya se considere la obligación como de dar ó de hacer, debe resolverse en indemnización de daños y perjuicios—arts. 218, 219 del Cód. de Com., y 576, 628 y 889 del Cód. Civ.,—siendo por consiguiente, la sociedad deudora al iniciador, de una suma de dinero equivalente al valor de la pérdida sufrida y de la utilidad que haya dejado de percibir á causa de la inexecución de la obligación—arts. 222, Cód. de Com., y 519, Cód. Civ.—Pero, es necesario justificar el monto de los perjuicios sufridos. Ante todo, es conveniente tener presente, que no se trata de la entrega de una suma de dinero en compensación de servicios prestados, sino de la entrega de títulos y acciones con un valor nominal, siendo de estricta aplicación los principios sentados en los artículos citados, y una comprobación de ellos lo que disponen los arts. 224 del Cód. de Com. y 522 del Cód. Civ.—los que solamente en caso de convención expresa, fijan el importe de los daños y perjuicios en la suma estipulada de antemano. No es posible entregar por vía de indemnización la suma de 20.000 pesos porque la remuneración debía ser hecha *en relación al capital suscrito y á medida que se van percibiendo cuotas parciales*, lo que demuestra que no era indiferente á



SOC

monto de la compensación estatuida.— Jur. Com., tom. 5, pág. 406, Ser. 2^a.

3. **Sociedad anónima**—Legal ó ilegalmente disuelta, los acreedores carecen de derecho para obligarla á reconstituirse.—Jur. Com., tom. 5, pág. 406, Ser. 2^a.

4. **Sociedad anónima**—Como persona jurídica está obligada á absolver posiciones por intermedio de su gerente ó representante legal.—Jur. Com., tom. 8, pág. 291 y 302, Ser. 2^a.

Sociedad anónima—Véase: *Posiciones*, núm. 10—*Contrato de compraventa*, núm. 2—*Fallido*, núm. 4—*Servicios*, núm. 2.

1^a. **Sociedad colectiva**—Para que la demanda de disolución de una sociedad colectiva produzca efecto contra terceros, debe ser anotada en el registro público de comercio.—Jur. Com., tom. 5, pág. 268, Ser. 2^a.

1^b. **Sociedad comercial**—Las cuestiones que se susciten

á la misma sociedad el pago en moneda efectiva, ni en los mismos títulos, mientras no se encontrase suscrito y percibido todo el capital. Que los servicios valgan ó no los 20.000 pesos, esa es cuestión de prueba. Lo que sí no admite duda, es que basta reconocer el fondo de justicia de la demanda, para evitar la inmoralidad que entrañaría su rechazo absoluto, haciendo depender de la voluntad del deudor la remuneración de sus servicios en la formación de la sociedad, aun cuando ésta se hubiese disuelto ó suspendido temporalmente sin que ella aprovechara de los trabajos realizados por el iniciador. Debe la cuestión en este caso someterse á la decisión de peritos amigables componedores, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 557 del Cód. de Proc.

3—Véase nota precedente.—Los acreedores solo tienen derecho á ser pagados de sus créditos al hacerse la liquidación.

4—Véase: verb. *Personas jurídicas*, núm. 2.

1^a—Art. 492, Cód. de Com. ant.

1^b—Véase: ver. *Arbitros*, núm. 3.





SOC—SUB

sobre su liquidación, deben ser resueltas por árbitros.—Jur. Com., tom. 6, pág. 104, Ser. 2ª.

2ª. *Sociedad comercial*—La renovación ó reforma de una sociedad comercial y su continuación con los mismos dependientes, hace suponer que éstos se hallan sujetos á iguales condiciones á las que tenían con la estinguida.—Jur. Com., tom. 8, pág. 372, Ser. 2ª.

Socio administrador—Véase: *Sociedad*, núm. 3.

1. *Socios*—Los de una sociedad colectiva, son solidariamente responsables de las obligaciones contraídas por otro socio para los fines sociales.—Jur. Com., tom. 5, página 268, Ser. 2ª.

2ª. *Socios*—Para la admisión de nuevos socios, se requiere cláusula especial que faculte al efecto al administrador, no basta que tenga el uso de la firma.—Jur. Com., tom. 6, pág. 143, Ser. 2ª.

Socios—Véase: *Concordato*, núm. 1—*Prescripción*, número 12—*Excepción de quita*, núm. 1—*Libros de comercio*, núm. 8—*Jurisdicción arbitral*, núm. 1—*Árbitros*, número 5—*Notificación*, núm. 1—*Sociedad*, núm. 10—*Obligaciones*, núm. 1—*Quitas*, núm. 1—*Sociedad*, número 1.

Socorros mutuos—Véase: *Sociedad*, núm. 7.

Sublocatario—Véase: *Testigos*, núm. 7.

2ª—Véase: verb. *Dependiente*, núm. 4.

1—Art. 302, Cód. de Com. vig.

2ª—El uso de la firma social es al solo efecto de los negocios sociales, y no puede decirse que la admisión de un socio constituya uno de esos negocios, desde que ellos tienden á alterar el contrato social. La admisión de un nuevo socio, como que tiende á constituir una nueva sociedad en sus elementos personales, es un acto que no puede ser celebrado sino con el acuerdo de todos los socios.



SUB-SUM

1^a. Subrogación—Esta se verifica en favor del que estando obligado, con otros ó por otros, al pago de una deuda, tiene interés en cubrirla.—Jur. Com., tom. 6, página 133, Ser. 2^a.

1^b. Sueldo—No siendo prohibida por la ley la convencción por la que se reconoce al dependiente una parte en las utilidades además del sueldo, debe obligarse judicialmente á su cumplimiento.—Jur. Com., tom. 8, pág. 372, Ser. 2^a.

2. Sueldo—La fijación de sueldos á los directores de una sociedad de socorros mutuos, no puede calificarse como delito en tanto no esté prohibida por los estatutos.—Jur. Com., tom. 9, pág. 423, Ser. 2^a.

Suma demandada—Véase: *Jurisdicción*, núm. 8.

1. Suma depositada—En sustitución de objetos, no puede ser estraida en tanto no se declare á quien pertenecían.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 283, Ser. 2^a.

Suma depositada—Véase: *Escarcelación*, núm. 1.

Suma determinada—Véase: *Condominio*, núm. 1.

1^c. Sumario—El Agente Fiscal puede pedir ampliación

1^a—Art. 976, inc. 2º del Cód. de Com. ant.

1^b—Véase: verb. *Dependiente*, núm. 1.

2—Véase: verb. *Sociedad*, núm. 7.

1^c—Incoado un sumario ante el Juez de Instrucción, fué pasado al de Sentencia, y éste comunicó vista al Agente Fiscal para que dedujese la correspondiente acusación: este funcionario se espidió solicitando se practicasen algunas medidas previas. El Juez del plenario accedió á lo solicitado, y á este efecto remitió el expediente al Juez sumariante, el que se negó á ejecutarlo, observando que al declarar terminado el sumario se había desprendido de toda jurisdicción en la causa: el Juez del plenario revocó su anterior resolución, y mandó que el proceso volviera de nuevo al Fiscal á fin de que se espidiera sobre su mérito. El Fiscal apeló de ésta resolución. Para revocar el auto el Juez se fundó en que, encontrándose dividido por disposición legal, el juicio criminal,

SUM

del sumario ante el Juez de sentencia antes de entablar la acusación.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 107, Ser. 2ª.

en sumario y plenario, y teniendo cada estado su respectivo Juez, no es posible mezclar ni confundir las diligencias correspondientes á cada uno de dichos estados. El Juez del plenario no puede reabrir el sumario, porque el art. 439 del Cód. de Proc. Crim. dispone, que practicadas por el Juez sumariante las diligencias que hubiese creído necesarias para la averiguación del hecho punible, deberá dictar un auto declarando cerrado el sumario, y elevarlo al Juez de sentencia, á menos que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 482 ordenase el sobreseimiento. Además el art. 457 determina, que recibido el proceso por el Juez de Sentencia, deberá correr vista de lo actuado al Ministerio Fiscal y acusador particular. El objeto de esta vista está allí determinado es para que se espidan sobre el mérito del sumario, sin que le sea de consiguiente, permitido verificarlo en otra forma solicitando la práctica de algunas diligencias. Aun cuando el Fiscal pudiese encontrar en el sumario algunas deficiencias, esto no sería un obstáculo para que se espidera, pues podría subsanarlas en el término probatorio, que según el art. 467, debe concederse en toda causa. A esto se contestó diciendo que siempre se consideró, antes y después de la nueva Ley de Proc., dividido el juicio criminal en sumario y plenario; sin que le fuese lícito al Juez de la causa durante este último retrogradar y reabrir el sumario, pero sin que tampoco le fuera prohibido completarlo y confeccionarlo, subsanando cualquiera deficiencia que llegase á notar lo que generalmente se hacia á solicitud del Fiscal encargado de promover la averiguación de los delitos. Si bien la ley determina en general que el sumario tiene por objeto la comprobación del cuerpo del delito y la indagación de la persona del delincuente, no designa ni podía designar en detalle todas las diligencias necesarias ó convenientes á tales fines. Puede muy bien suceder que el Juez haya obrado con la mayor ilustración y sagacidad posibles, y sin embargo no haber podido obtener la confesión del delito hecha por el reo, y que llegado al Juez de Sentencia lo confesase; también es posible que en el plenario se descubran nuevos testigos ó sean habidos algunos prófugos. En estos casos, el Juez de Sentencia no podría quedar privado de practicar las diligencias oportunas y convenientes para completar y perfeccionar la indagación, subsanando las deficiencias resultantes del sumario. La separación del sumario y del plenario existe y ha existido siempre, pero ella no puede



SUM—SUS

2. **Sumario**—La resolución del Juez de Instrucción dando por terminado el sumario, no hace cosa juzgada.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 107, Ser. 2ª.

3. **Sumario**—Su formación es de competencia de los jueces de Instrucción cualquiera que sea la fecha de la denuncia del delito.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 94, Ser. 2ª.

4. **Sumario**—Si de las constancias de autos resulta la falsedad de la denuncia, no debe instruirse el sumario.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 155, Ser. 2ª.

Sumario—Véase: *Testigos*, núm. 11.

Sumario de prevención—Véase: *Causas correccionales*, núm. 1.

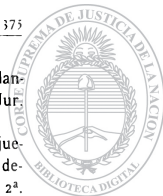
1. **Suspensión de empleo**—Los Jueces Correccionales ca-

ser tan absoluta que, contra la naturaleza de las cosas, pueda suprimir la íntima relación y estrecha conexión que forzosamente existe entre ambos juicios, ó más bien dicho, entre ambas partes de un mismo juicio, que autorizan al Juez del plenario para adelantar y perfeccionar el sumario. Cuando el Juez sumariante declara cerrado el sumario, esta resolución no tiene otro alcance que desprenderse de su conocimiento, pasando la causa al Juez de Sentencia. Si el sumario no ofrece mérito suficiente á juicio del Fiscal para entablar su acusación, puede éste solicitar nuevos datos y nuevas diligencias siempre que fuese posible obtenerlos.

2—Véase nota precedente.

3—Véase: verb. *Denuncia*, núm. 1.

1—Basta comparar los arts. 28 y 29 del Cód. de Proc. Crim. para comprender que se ha introducido notable variación con relación á lo que se hallaba dispuesto en el art. 66 de la Ley Orgánica de los Tribunales. Mientras que en esta se determinaba la jurisdicción del Juez Correccional con referencia á los delitos que no mereciesen mayor pena que la de un año de prisión ó mil pesos de multa, debiendo considerarse por tanto comprendidos también aquellos delitos que aunque mereciesen diversa pena, no fuese mayor que la expresada en la indicada ley de Proc. Crim., el punto se determina de muy distintos modos. En esta ley, atendiéndose también á la naturaleza de los delitos,



SUS

recen de jurisdicción para entender en delitos penados con suspensión de empleo.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 160 Ser. 2ª.

Sustancias inofensivas—Véase: *Veneno*, núm. 1.

Sustitución de pena—Véase: *Reincidencia*, núm. 1.

1ª. Sustracción—La sustracción en diversas épocas, hecha por un dependiente del damnificado, solo puede calificarse de hurto.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 289, Ser. 2ª.

1ª. Sustracción de menores—Los Jueces de Instrucción son competentes para entender en una querella por sustracción de menores, aun cuando estos sean depositados por auto de un Juez Civil, posterior al hecho que se persigue.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 206, Ser. 2ª.

2. Sustracción de menores—No procede la acción criminal por sustracción de menores, cuando estos son mayores de nueve años.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 350, Ser. 2ª.

no solamente se atribuye al Juez del Crimen eximiéndose de la jurisdicción del Juez Correccional, muchos cuya pena siendo de prisión ó multa, no excede en el primer caso de un año, ni de mil pesos en el segundo—art. 31—sino que se autoriza á dicho Juez Correccional á imponer ambas penas conjuntamente. Pero su jurisdicción se limita por la calidad de la pena, á los delitos que tengan determinada las de arresto, prisión, multa ó sujeción á la vigilancia de la autoridad. En consecuencia estas son las únicas penas que le es permitido al Juez Correccional aplicar, y únicamente puede conocer en los delitos que por el Cód. Crim. se castigan con ellas. En el caso presente un comisario fué acusado por abuso de autoridad; y como este delito, el art. 244 del Cód. Pen. castiga con la pena de arresto y suspensión del empleo, es evidente que el Juez Correccional no puede decretarlo y por consiguiente carece de jurisdicción para entender en el juicio.

1ª—Porque no concurre ninguno de los requisitos exigidos por el Código Penal para que el delito sea calificado de robo.—Artículos 187 y 193.

1ª—Véase: verb. *Jueces de Instrucción*, núm. 1.

2—Art. 158 del Cód. Pen. vig.





Tacha legal—Véase: *Parentesco*, núm. 1.

Tasación—Véase: *Bienes de menores*, núm. 1.

Temeridad—Véase: *Costas*, núms. 3, 5, 10, 11, 16 y 20.

Tenedor—Véase: *Endoso*, núm. 2.

Tenencia—Véase: *Interdicto de despojo*, núms. 2 y 3.

Tentativa—Véase: *Lesiones*, núm. 3—*Paliza*, núm. 1—*Incendio*, núm. 2—*Entrada*, núm. 1—*Infanticidio*, núm. 2—*Homicidio*, núm. 17—*Hurto*, núm. 4—*Robo*, núm. 3—*Estafa*, núm. 8—*Violación*, núm. 1.

1^a. Tentativa de estafa—Debe calificarse y penarse como tal el hecho de llenar con una obligación un papel en blanco en el que exista la forma del obligado.—Jur. Crim., tomo 5, pág. 274, Ser. 2^a.

1^b. Tentativa de heridas—Si no existe prueba plena de la intención homicida, el disparo de un arma de fuego debe penarse como tentativa de heridas.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 19, Ser. 2^a.

1^a—Art. 8 del Cód. Pen. vig.—Uno de los camaristas opinó que en nuestra legislación no existe en la estafa la tentativa, que para él el delito espresado en el sumario debe considerarse como abuso de confianza y falsificación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 203, incs. 8 y 9.

1^b—Véase: *Intención homicida*, núm. 1.

TEN

1^a. **Tentativa de homicidio**—No puede calificarse como tal, el hecho de disparar contra otro un arma de fuego, si la intención de matar no está plenamente justificada.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 159, Ser. 2^a.

2. **Tentativa de homicidio**—El hecho de disparar un arma de fuego puede ser considerado como tentativa de homicidio pero no de asesinato.—Jur. Crim., tom. 5, página 130, Ser. 2^a.

3. **Tentativa de homicidio**—Solo puede calificarse de tentativa de homicidio, el hecho de disparar un arma de fuego contra una persona, si no se justifica la intención homicida.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 65, Ser. 2^a.

4. **Tentativa de homicidio**—Sin circunstancias atenuantes, debe ser penado con siete años de presidio—Jur. Criminal, tom. 6, pág. 420, Ser. 2^a.

1^b. **Tentativa de robo**—No existiendo prueba plena del valor á que hubiese ascendido el robo, la tentativa solo puede ser penada con las tres cuartas partes de la pena que

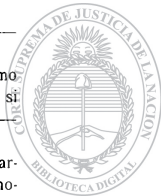
1^a.—Es condición esencial para que exista el delito de tentativa de homicidio, como lo sostiene el Dr. Cortés.—Véase: *Vistas Fiscales*, tomo 2º, págs. 210 y 215.

2.—No se dijo en todo el proceso, lo que espresa el sumario: ni el Juez, ni el Fiscal, ni la Cámara. Todos se limitaron á decir que el delito es el previsto por el art. 99 del Cód. Pen., habiéndose aplicado el minimum de la pena por haber concurrido circunstancias atenuantes.

3.—Véase el núm. 1.

4.—Arts. 12 y 96, inc. 1º del Cód. Pen. vigente.

1^b.—En el caso ocuriente no había el más leve dato para establecer el monto á que el robo hubiese ascendido. Debe tenerse presente que es principio sentado en jurisprudencia criminal, que en toda duda de hecho ó de derecho debe resolverse en favor del reo. La pena de la tentativa, es la que corresponde al delito consumado disminuida en una cuarta parte—art. 12, inc. 2º, Cód. Pen.



**TEN-TER**

la ley fija para el delito, aun cuando existan circunstancias agravantes.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 331, Ser. 2^a.

2^a. **Tentativa de robo**—De noche con perforación, debe ser penada con año y medio de prisión.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 60, Ser. 2^a.

3. **Tentativa de robo**—Con violencia en la persona, debe ser penada con tres años de presidio.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 360, Ser. 2^a.

4. **Tentativa de robo**—Debe ser penada con las tres cuartas partes del máximo de la pena, cualesquiera que sean las circunstancias agravantes que concurran en la comisión de un delito.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 346, Ser. 2^a.

1. **Tercería**—El actor tiene derecho á depositar la suma que baste á cubrir el capital, intereses y costas, para desembargar los bienes sobrë que recae su acción.—Jur. Com., tom. 5, pág. 348, Ser. 2^a.

2^b. **Tercería**—Sobre bienes embargados, no pueden iniciarla los comisionistas para su venta, pues sin poder especial carecen de personería para asuntos judiciales.—Jur. Com., tom. 7, pág. 163, Ser. 2^a.

2^a—Esta pena es la que establece la ley, pues al delito consumado correspondería tres años de prisión, la que debe ser disminuida en la mitad—arts. 12, inc. 2^o; 190, inc. 1^o, y 191 del Cód. Pen. vig.

3—Es la mitad de la de la escala establecida en el art. 189 del Cód. Pen.—art. 12, inc. 2^o *ibid*.

4—Véase el núm. 1.

1—No se puso en duda por el ejecutante, que la suma depositada no fuese suficiente para cubrir el capital, intereses y costas. Estando éstos plenamente garantidos, no puede pretender más y por consiguiente su oposición tiene necesariamente que ser infundada. El embargo de la cosa tiene por objeto garantir el pago de la misma suma que se deposita.

2^b—Véase: verb. *Comisionista*, núm. 3.



TER

3. Tercería.—Procede el levantamiento del embargo sin juicio de tercería, si los muebles embargados se encuentran en poder del tercer opositor.—Jur. Com., tom. 10, pág. 131, Ser. 2ª.

Tercería.—Véase: *Comisionista*, núm. 1—*Costas*, núm. 20—*Disolución*, núm. 1—*Pago á cuenta*, núm. 1—*Sociedad colectiva*, núm. 1.

1ª. Tercería de dominio.—Escluyente, sobre un inmueble, es improcedente si se funda en un documento simple que solo concede derechos personales.—Jur. Com., tom. 5, pág. 392, Ser. 2ª.

Tercería de dominio.—Véase: *Costas*, núm. 1.

Tercerista.—Véase: *Embargo*, núm. 4.

Tercer opositor.—Véase: *Embargo*, núm. 9.

1º. Tercero.—Las convenciones entre vendedor y comprador sobre resolución del contrato de compraventa de mercaderías no afectan los derechos que un tercero hubiese adquirido sobre ellos.—Jur. Com., tom. 10, pág. 7, Ser. 2ª.

Tercero.—Véase: *Condominio*, núm. 3—*Arbitros*, núm. 2—*Interdicto de retener*, núm. 1—*Denuncia*, núm. 2—*Carta misiva*, núm. 2—*Peritos*, núm. 2—*Libros de comercio*, núm. 7.

Terceros.—Véase: *Acciones personales*, núm. 1—*Prueba testimonial*, núm. 1—*Paternidad*, núm. 2—*Carta misiva*,

3—Véase: ver. *Embargo*, núm. 9.

1ª.—No se había estendido escritura pública de transferencia del inmueble y el vendedor continuó siempre en la posesión la cosa vendida—arts. 2503, 2596 y 2523 del Cód. Civ.—Esta resolución está de perfecto acuerdo con otro caso resuelto.—Véase: Inst., tom. 1º, verb. *Boleto de compraventa*, núm. 297.

1º.—Véase: verb. *Contrato de compraventa*, núm. 3.

TÉR

núm. 1—*Simulación*, núm. 2—*Demanda*, núm. 1—*Mandatario*, núm. 4—*Documentos*, núm. 1—*Denunciantes*, núm. 1—*Hurto*, núm. 3.

Término—Véase: *Mandatario*, núm. 3—*Pacto de retroventa*, núm. 1—*Prueba*, núm. 1—*Paternidad*, núm. 2—*Rebeldía*, núm. 1—*Balance de liquidación*, núm. 1—*Contrato*, núm. 4—*Testigos*, núms. 1, 2, 6, 9, 10 y 13—*Reclusión*, núm. 5—*Estafa*, núm. 2—*Embargo preventivo*, núm. 8—*Diligencias de prueba*, núms. 2, 3, 4, 5, 8 y 12—*Convenio espreso*, núm. 1—*Liquidador*, núm. 2—*Prescripción*, núm. 12—*Testimonios*, núm. 1.

1. **Término de prueba**—En causas criminales entre partes, es improrrogable si no se hubiesen presentado dentro de los diez primeros días los nombres y domicilios de los testigos con el respectivo interrogatorio.—Jur. Crim., tomo 5, pág. 247, Ser. 2ª.

2. **Término de prueba**—Para el diligenciamiento de la prueba en la República, puede ampliarse el término según la distancia si en la debida oportunidad no se solicita término extraordinario.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 331, Ser. 2ª.

Término de prueba—Véase: *Declaraciones*, núm. 2—*Escritura pública*, núm. 1—*Diligencias de prueba*, núm. 1—

1—De acuerdo con los arts. 477 y 483 del Cód. de Proc. Crim.—Este último artículo dice que para que pueda admitirse la prueba testimonial no solo se ha de ofrecer dentro de los diez primeros días del término, sino también exige que se acompañe la lista de los testigos con expresión de las calidades que se indican y el interrogatorio á cuyo tenor han de ser examinados. Sin embargo esta misma Cámara ha declarado que la presentación del interrogatorio en causas criminales dentro del término de los diez días, no es ineludible.—Véase: verb. *Interrogatorio*, núm. 1.

2—Véase: verb. *Prueba*, núm. 7.





TÉR

Documentos, núm. 1—*Edictos*, núm. 1—*Prueba*, números 3 y 4.

1^a. **Término de la prescripción**—Corre aun cuando el espediente se encuentre en poder de los jueces esperando sentencia.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 144, Ser. 2^a.

Término de la prescripción—Véase: *Matrimonio*, núm. 1—*Nulidad del pago*, núm. 1.

1^b. **Término extraordinario**—Si el que debe absolver posi-

1^a—El proceso se seguía por violación de domicilio y heridas leves. La pena que corresponde á estos delitos es de arresto y multa, de acuerdo con lo establecido en los arts. 233 y 293, inc. 1° del Cód. Penal antiguo, concordantes con los arts. 129, inc. 1°, y 165, inc. 1° del vigente. El derecho de acusar por estos delitos se prescribe al año contado desde la fecha del delito ó desde el último acto de procedimiento, según lo tiene resuelto la Cámara en casos análogos con sujeción á las disposiciones legales y doctrina más autorizada. Habiéndose paralizado el procedimiento desde el día en que tuvo lugar el informe *in voce* hasta el día en que pidió pronto despacho, y habiendo transcurrido más de un año entre ambos trámites—art. 89, inc. 3°, Cód. Pen. vigente—que es el término para la prescripción de las penas antes establecidas, se declaró que la acción contra el procesado se hallaba prescripta. Esta fué la opinión de la mayoría. La minoría estuvo en contra de la prescripción, fundándose en que si los antecedentes ya espuestos y que le sirven de fundamento bastaran legalmente para establecerla, dependería de los jueces que ella se produjese ó nó en razón de que con demorar el despacho, se originaría dicha excepción, lo que no puede admitirse sin sentar un precedente poco serio y conculcatorio de la justicia. Que la inacción de los interesados pueda dar margen á la prescripción se comprende perfectamente, por que este es el orden de las cosas, que todo se prescribe por la acción del tiempo; pero de ninguna suerte, puede extenderse al caso en que la causa quede paralizada en poder de los jueces cuando ya los interesados no tenían otra cosa que esperar el fallo. Es verdaderamente desconsolador ver que los mismos magistrados que componen la Cámara, califiquen los fallos por ella dictados, como *conculcatorios de la justicia*, y como *precedentes poco serios*. Consideramos que este calificativo no necesita comentarios.

1^b—Véase: *Posiciones*, núm. 4.

TÉR

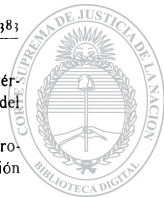
ciones se encuentra ausente, la parte debe solicitar el término extraordinario de prueba en la estación oportuna del juicio. —Jur. Civ., tom. 9, pág. 100, Ser. 2ª.

2. **Término extraordinario**—Para que este término proceda, las diligencias pedidas deben referirse á la cuestión *sub-judice*.—Jur. Com., tom. 6, pág. 418, Ser. 2ª.

3. **Término extraordinario**—De prueba, no procede para

2—La Cámara resolvió no hacer lugar á la producción de la prueba solicitada porque ella no guardaba la menor referencia con la cuestión en tela de juicio. El fundamento está en abierta contradicción con la jurisprudencia sentada por la Cámara, pues según ella, los jueces no pueden resolver nada á cerca de la pertinencia ó impertinencia de la prueba sino al dictar sentencia. ¿Cómo es, pues que la Cámara viene á resolver que esta prueba no debe producirse por ser impertinente cuando aun no ha llegado la oportunidad de dictar sentencia? Es por esto que nosotros hemos sostenido que los Tribunales tienen derecho á negar la producción de una prueba abiertamente improcedente.

3—La disposición del art. 493 del Cód. de Proc., es clara y terminante, al prohibir que el término del encargado pueda suspenderse ó prorrogarse sin la conformidad de los litigantes. Además la ley 2, lib. 21, tit. 24 disponía igualmente que no hubiera otro plazo que el de diez días para la prueba de las escepciones en el juicio ejecutivo condenando de la manera más espresa las concesiones de términos extraordinarios. Debe tenerse por otra parte presente, que su concesión desvirtuaría por completo el carácter del juicio ejecutivo, cuyo objeto principal es que el acreedor logre sumariamente la satisfacción de su crédito.—Véase: Carabantes, tom. 3, pág. 365.—No debe confundirse el término extraordinario del juicio ejecutivo con el término extraordinario para la prueba de las escepciones ordinarias, porque en el primer caso no procede la concesión del término, pero en el segundo sí á pesar de que la Cámara tiene resuelto que tampoco procede en este último caso, como puede verse en el tom. 3º de la Inst., verb. *Prueba*, número 1; resolución que nosotros refutamos en la nota á dicho verbo. Parece que en el juicio ejecutivo la prescripción legal fuese terminante, cuando dice en su art. 493, que el término de prueba no podrá suspenderse ni prorrogarse, pero no es así porque allí no se dice que el término de diez días sea el único que acuerda la ley, sino que la causa



**TÉR-RES**

probar excepciones en juicio ejecutivo.—Jur. Com., tomo 6, pág. 387, Ser. 2ª.

4. **Término extraordinario**—Las diligencias de prueba que deban practicarse fuera de la jurisdicción del Juzgado, solo pueden decretarse si en tiempo oportuno se pidió el término extraordinario.—Jur. Com., tom. 8, pág. 150, Ser. 2ª.

5. **Término extraordinario**—No procede para la prueba de excepciones.—Jur. Com., tom. 10, pág. 332, Ser. 2ª.

Término extraordinario—Véase: *Testigos*, núm. 6—*Diligencias de prueba*, núm. 9.

Término legal—Véase: *Paternidad*, núm. 2.

Término medio—Véase: *Escarcelación bajo fianza*, número 3—*Lesiones*, núms. 5 y 14—*Disparo de arma de fuego*, núm. 4.

Término ordinario—Véase: *Testigos*, núm. 6.

Término para contestar la demanda—Véase: *Recusación*, núm. 6.

Términos hábiles—Véase: *Prueba testimonial*, núm. 2.

Terreno—Véase: *Condominio*, núm. 1—*Evicción*, número 1—*Precio*, núm. 1—*Títulos*, núm. 5—*Indemnización*, núm. 3.

Terror—Véase: *Homicidio*, núm. 5.

1. **Testamentaria**—Los que pretendan derechos hereditarios no son parte en la testamentaria mientras no justifiquen su carácter.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 14, Ser. 2ª.

se abrirá a prueba por diez días; esto se entiende que solo se refiere al término ordinario sin que implique denegar el extraordinario.

4—Véase: *Diligencias de prueba*, núm. 9.

5—Véase: verb. *Excepciones*, núm. 8.

1—Art. 627 del Cód. de Proc.

TES

Testamentaria—Véase: *Declaratoria de herederos*, número 3—*Jurisdicción*, núm. 2—*Crédito*, núm. 1—*Poder especial*, núms. 1 y 2—*Petición de herencia*, núm. 1—*Albaceas*, núm. 1.

1^a. **Testamento**—Justificada la incapacidad física y moral del otorgante de un testamento por acto público, debe declararse la nulidad—Jur. Civ., tom. 10, pág. 312, Ser. 2^a.

1^b. **Testigo**—El error en el apellido de un testigo, no importa un cambio en la persona, y en consecuencia puede declarar aun después de vencido el término.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 83, Ser. 2^a.

1^a—Art. 3615 del Cód. Civ.

1^b—Esta resolución fué revocatoria de la de 1^a Inst. La parte había presentado como testigo en tiempo hábil á D.^a Magdalena Bulliana, y después de vencido, dijo que había habido error en el nombre y pidió que fuese citada D.^a Magdalena Sanguinetti; el Juez de 1^a Inst. no le hizo lugar, porque la petición importaba presentar un nuevo testigo con violación de lo preceptuado en el art. 181 del Cód. de Proc., el que establece que cuando la parte quiera hacer uso de la prueba testifical, debe presentar con anterioridad una lista de testigos con expresión de sus nombres, domicilios, etc., con lo que ha querido determinar de una manera precisa la identidad de aquéllos, á fin de que la contraparte pueda hacer uso del derecho que las leyes le acuerdan, tacharlos, etc. La Cámara revocó este auto diciendo que ella no consideraba que el apellido propio de la testigo D.^a Magdalena Bulliana establezca distinta personalidad de la testigo que bajo el nombre de Magdalena Sanguinetti había sido presentada. Consideramos que la Cámara estuvo muy equivocada en esta resolución, y que si en algún caso puede hacerse uso con justa razón del diario *cliché* «Por sus fundamentos se confirma, etc.», es éste uno de ellos. Los argumentos aducidos por el Sr. Juez de 1^a Inst. son irrelevantes, y la Cámara no pudo jamás, procediendo en justicia revocar el mencionado auto. La doctrina que la Cámara pretende sentar con esta resolución es perniciosa y de ella podemos decir lo que el Dr. Barra dijo de la Cámara de la que él formaba parte: «que esas



TES

2^a. **Testigo**—El Escribano de Registro solo puede certificar sobre los actos que consten en su protocolo: en los hechos en que haya intervenido, es un testigo que debe declarar en la forma que la ley determina.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 192, Ser. 2^a.

Testigo—Véase: *Delito*, núm. 1—*Declaraciones*, número 2—*Término de prueba*, núm. 1.

1. **Testigos**—Los presentados tres días antes de vencerse el término, no deben ser admitidos, aun cuando sean los mismos que haya presentado la contraparte.—Jur. Com., tom. 5, pág. 226, Ser. 2^a.

2^b. **Testigos**—No citados en forma por omisión de la secretaría, deben declarar aun después de vencido el término.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 64, Ser. 2^a.

3. **Testigos**—Justificada la imposibilidad de la parte de

resoluciones no pueden admitirse sin sentar un precedente poco serio y conculcatorio de la justicia.»

2^a—Véase: verb. *Escribanos*, núm. 3.

1—La Cámara dijo, que si bien la ley no prohíbe á una de las partes presentar los mismos testigos que la otra hubiese presentado, exige sin escepción la presentación de la lista de los testigos, la que deberá permanecer en secretaría durante tres días: que esos tres días deben de correr antes del señalado para el examen, como claramente lo establece el art. 184 del Cód. de Proc., en cuyo caso no pueden llenarse los requisitos del art. 118, pues no podría la prueba producirse dentro del término. Esta resolución está en contra de otra resuelta por la Cámara de lo Civil.—Véase: *Inst.*, tom. 3^o, verb. *Testigos*, núm. 3.

2^b—La citación de los testigos no fué practicada por un olvido involuntario de la secretaría; no siendo esta omisión imputable á la parte, la prueba puede producirse aun después de vencido el término, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 118 del Cód. de Proc.

3—El interesado comprobó después del día de la audiencia la imposibilidad en que se encontró para concurrir con los interrogatorios á



TES

concurrir con el interrogatorio al acto de las declaraciones, debe señalarse nuevo día á los testigos.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 86, Ser. 2ª.

4. **Testigos**—Si las declaraciones no han tenido lugar por ocupaciones de la secretaría, debe señalarse nuevo día á los testigos.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 87, Ser. 2ª.

5. **Testigos**—El impedimento, de la parte que presenta los testigos, para comparecer á la audiencia, es causa bastante para fijar nuevo día.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 201, Ser. 2ª.

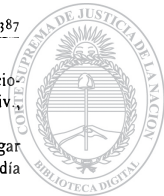
6. **Testigos**—Es improcedente la recepción de los testigos fuera de la Capital, si sus declaraciones no pueden tener lugar dentro del término ordinario y no se ha solicitado el extraordinario. — Jur. Civ., tom. 9, pág. 237, Ser. 2ª.

la audiencia para la recepción de las declaraciones de los testigos de su parte.

4—Aunque el término esté vencido, porque en este caso la no producción de la prueba es imputable á las autoridades encargadas de recibirla—art. 118, Cód. de Proc

5—El procurador presentó escrito diciendo que no podía comparecer á la audiencia y que por consiguiente pedía el señalamiento de nuevo día: el Juez no le hizo lugar fundándose en que no es necesaria la presencia del Procurador para el examen de los testigos, bastando la presentación del interrogatorio. La Cámara revocó el auto diciendo que la presencia del procurador es necesaria en la recepción de los testigos de su parte, pues tiene interés en conocer el resultado de ellos para la elaboración de su propia defensa: tiene además conveniencia de controlar el acierto de sus declaraciones, como asimismo le asiste el derecho de dirigir nuevas preguntas en caso que las contestaciones dadas así lo exigieran.

6—La prueba debía recibirse en la ciudad de Dolores en la provincia de Buenos Aires, y no había tiempo material para que los testigos pudiesen declarar dentro del término de prueba.





TES

7. **Testigos**—Si bien el carácter de locatarios ó sublocatarios de los testigos del actor, no importa una causa de nulidad de las declaraciones, deben ser desechadas si ellos manifiestan haber sido los poseedores.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 421, Ser. 2ª.

8. **Testigos**—La ignorancia de la víctima del delito de hurto, no lo inhibe de denunciarlo, si por aviso de terceros llega á su conocimiento, sin que éstos pierdan su carácter de testigos para convertirlos en denunciantes.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 365, Ser. 2ª.

9. **Testigos**—Que no han declarado dentro del término, sin culpa de la parte, deben hacerlo aun después de vencido.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 43, Ser. 2ª.

10. **Testigos**—Resuelto por el Superior se reciban las declaraciones de los testigos aun después de vencido el término, el certificado sobre el vencimiento del término es inútil.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 18, Ser. 2ª.

7—Las declaraciones fueron desechadas porque los testigos aparecían como que tenían interés en el resultado del pleito: como asimismo que la razón de sus dichos arrancaba de informaciones suministradas por el mismo litigante: es decir, que el dicho de ellos tenía por fundamento el dicho de la parte litigante, lo que es indudable que invalida la declaración.

8—Véase: verb. *Denunciantes*, núm. 1.

9—No hubo desidia de parte del interesado, pues al día siguiente del señalado para el examen de los testigos, y no habiendo éstos comparecido, se presentó solicitando nueva audiencia.—Es aplicable el art. 118, *in fine*, del Cód. de Proc.

10—El Juzgado ordenó certificara el actuario á cerca del vencimiento del término de prueba; en este interín se suscitó una cuestión sobre producción de prueba agregándose ésta sin acumularse. El certificado á cerca del vencimiento es inoficioso porque su objeto es agregar la prueba producida en caso de estar vencido dicho término; pero como la prueba ya estaba agregada al certificado era inoficioso.

TES

11. **Testigos**—Las declaraciones de los presentados en el plenario, que dicen haber presenciado el suceso no obstante no haber sido mencionados por el reo ni aparecer en el sumario, no forman prueba en cuanto contradigan las constancias de autos.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 23, Ser. 2ª.

12. **Testigos** Justificada la inverosimilitud de las deposiciones de los testigos de la acusación, la sentencia solo puede fundarse en la confesión del reo, la que siendo indivisible hace prueba plena.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 64, Ser. 2ª.

13. **Testigos** —Las declaraciones de los presentados dentro del término é indebidamente no aceptados por el Juzgado, deben tomarse aun después de vencido.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 274, Ser. 2ª.

Testigos —Véase: *Información supletoria*, núm. 4—*Contrato de sociedad*, núm. 1—*Confesión del reo*, núm. 8—*Término de prueba*, núm. 1—*Interrogatorios*, núm. 2—*Calumnia*, núm. 1—*Carta misiva*, núm. 1—*Confesión del reo*, núm. 1—*Interrogatorios*, núm. 1—*Declaraciones*, número 1.

Testigos presenciales —Véase: *Informes*, núm. 2—*Confesión del reo*, núm. 9.

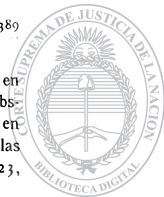
Testigos sospechosos —Véase: *Prueba testimonial*, número 3.

1. **Testimonios**—Como parte de prueba, deben pedirse

11—Los testigos contradijeron en sus declaraciones la confesión del mismo acusado.

12—Véase: *Confesión del reo*, núm. 13.

13—El art. 118 del Cód. de Proc. establece, que la prueba debe ser pedida, ordenada y *producida* dentro del término. Si no hay tiempo para



TIE-TÍT

en tiempo para que puedan ser espedidos y agregados dentro del término.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 269, Ser. 2ª.

Tiempo determinado—Véase: *Contrato*, núm. 4—*Convenio espreso*, núm. 1.

Tiempo hábil—Véase: *Diligencias de prueba*, núm. 12.

Tiempo indeterminado—Véase: *Asesinato*, núm. 1—*Pena*, núm. 1—*Homicidio*, núm. 25.

Título—Véase: *Condominio*, núm. 1—*Posesión*, núm. 2—*Interdicto de adquirir*, núm. 1—*Prescripción*, núm. 4.

Título científico—Véase: *Perito*, núms. 3 y 4.

Título traslativo—Véase: *Prescripción*, núm. 4.

1—Títulos—El poseedor no puede ser obligado á presentar los títulos en virtud de los cuales posee.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 205, Ser. 2ª.

2. Títulos—El demandado por escrituración, no está obligado á presentar sus títulos.—Jur. Civ., tom. 9, página 217, Ser. 2ª.

3. Títulos—El comprador puede optar dentro del término de la ley, por el desistimiento, si los títulos resultan imperfectos.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 260, Ser. 2ª.

producir la prueba dentro del término, no se puede cumplir con lo preceptuado en el art. 118 citado.

1—Él posee porque posee, como dice el art. 2363. Sería contrario á toda regla de justicia obligar al demandado á que proporcione al demandante los medios de prueba para justificar su acción.

2—Los títulos se encontraban en poder de un tercero. A pesar de esto, la Cámara dijo que no procedía la exhibición porque ello importaría obligar á la parte á producir prueba contra ella, siendo así que la Ley 1ª, tít. 14, Part. 3ª, establece que la prueba corresponde al actor.

3—Siempre que los defectos de los títulos no fuesen subsanables en breve tiempo—art. 522 del Cód. de Proc.



TÍT

4. **Títulos**—Ante dos de igual origen y sobre un mismo terreno, los Tribunales deben amparar al que justifique haber tenido la posesión.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 337, Ser. 2ª.

5. **Títulos**—Si los defectos de los títulos solo consisten en la menor área de terreno, el comprador debe depositar el precio sin perjuicio de las acciones que pueda deducir al entrar en posesión.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 375, Ser. 2ª.

6. **Títulos**—Con el objeto de subsanar defectos del título, el poseedor tiene personería para pedir diligencias, aun cuando no sea heredero de sus antecesores en la posesión.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 38, Ser. 2ª.

7. **Títulos**—Consentido el auto que ordena la oblación del precio, no debe admitirse observación sobre los títulos.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 33, Ser. 2ª.

4—El primero que ha sido puesto en posesión de la heredad se reputa ser el propietario—art. 2791 del Cód. Civ.

5—A un comprador en remate judicial se le intimó oblar el precio de compra del inmueble: se opuso á la oblación, fundándose en que el área asignada en los avisos era mayor del que realmente tenía. No se le hizo lugar porque la venta se hizo por un precio único y *ad-corpus* en cuyo caso solo tiene derecho á pedir la disminución proporcional del precio.

6—El postulante había adquirido á título singular un inmueble: fallecido el que se lo confirió, quiso iniciar la testamentaria á fin de subsanar algunas deficiencias del título. El Juez de 1ª Inst. no hizo lugar á la petición fundado en los arts. 627 y 636 del Cód. de Proc. La Cámara revocó el auto diciendo que el solicitante tenía interés legítimo para iniciar el juicio sucesorio, pero al solo efecto de subsanar las deficiencias.

7—El art. 521 faculta al comprador para pedir la exhibición de los títulos antes de hacer la oblación del precio, si el Juzgado le ordena la





TÍT-TRA

Títulos—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 6—*Acción reivindicatoria*, núm. 3—*Sellos*, núm. 1.

Titulos comerciales—Véase: *Actos de comercio*, núm. 2.

Trabajo—Véase: *Incapacidad para el trabajo*, núm. 1.

Trabajos estrajudiciales—Véase: *Honorarios*, números 9 y 10.

Tradición—Véase: *Acción reivindicatoria*, núm. 4—*Co-sa vendida*, núms. 1 y 2.

1^a. Traductor—La parte que presenta un documento en idioma extranjero, es la responsable del honorario del traductor.—Jur. Com., tom. 9, pág. 44, Ser. 2^a.

Tratadíoñ—Véase: *Alevosía*, núm. 2.

1. Transacción—Si ha sido judicial, los jueces pueden ordenar su cumplimiento sin sustanciación alguna.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 11, Ser. 2^a.

1^b. Transacciones—Forman para las partes una regla á la cual deben someterse como á la ley misma—Jur. Civ., tom. 10, pág. 11, Ser. 2^a.

1^c. Transgresión—Aun cuando se encuentre justificada la existencia de la transgresión, se requiere prueba plena para imputarla al acusado: si ella no existe, debe ser absuelto.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 5, Ser. 2^a.

Traslado—Véase: *Documentos*, núm. 3.

Tratado de extradición—Véase: *Adulterio*, núm. 1.

oblación y el comprador consiente el auto, se presume que renuncia al derecho que le acuerda la ley, y el auto queda ejecutoriado debiendo cumplirse en todas sus partes.

1^a—Véase: *Honorarios*, núm. 11.

1^b—Art. 1197 del Cód. Civ.

1^c—Véase: *Prueba plena*, núm. 1.



TRI-TUT

Tribunal arbitral—Véase: *Multa*, núm. 2—*Condominio*, núm. 2.

Tribunales—Véase: *Jurisdicción*, núm. 5.

1ª. Tribunales de comercio—Carecen de jurisdicción para resolver en las cuestiones sobre infracción á la ley de papel sellado: ellas deben someterse á la Dirección General de Rentas.—Jur. Com., tom. 8, pág. 339, Ser. 2ª.

Tribunales de comercio—Véase: *Rendición de cuentas*, núm. 1—*Jurisdicción arbitral*, núm. 1.

1ª. Tribunales de la Capital—Carecen de jurisdicción para conocer en asuntos en que el fuero federal es privativo.—Jur. Com., tom. 10, pág. 143, Ser. 2ª.

Tribunales de la Capital—Véase: *Daños y perjuicios*, número 3—*Duelo*, núm. 1—*Préstamo hipotecario*, núm. 1.

Tribunales ordinarios—Véase: *Rendición de cuentas*, número 1—*Jurisdicción arbitral*, núm. 1—*Calumnia*, número 4.

1ª. Turbación—La citación de evicción, solo procede cuando el propietario es demandado, pero no tratándose de una turbación de hecho, que obliga al poseedor á repeler el ataque por medio de las acciones que la ley acuerda.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 415, Ser. 2ª.

Turbación—Véase: *Interdicto de retener*, núms. 1, 2 y 3.

1ª. Tutor—Está obligado á rendir cuenta de los bienes de su pupilo.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 279, Ser. 2ª.

Tutor—Véase: *Prueba testimonial*, núm. 4.

1ª—Véase: *Papel sellado*, núm. 4.

1ª—Véase: *Jurisdicción federal*, núm. 2.

1ª—Véase: verb. *Evicción*, núm. 3.

1ª—Art. 458 del Cód. Civ.

U



Ubicación—Véase: *Perito*, núm. 1.

Uso—Véase: *Remuneración*, núm. 1—*Contrato de locación*, núm. 1.

Usufructuario—Véase: *Interdicto de adquirir*, núm. 1.

1. **Utilidades**—No siendo prohibida por la ley, la convención por la que se reconoce al dependiente una parte en las utilidades además del sueldo, debe obligarse á su cumplimiento judicialmente.—Jur. Com., tom. 8, página 372, Ser. 2ª.

Utilidades—Véase: *Libros de comercio*, núm. 4—*Rendición de cuentas*, núm. 7.

1—Véase: verb. *Dependiente*, núm. 1.



Vacante—Véase: *Capellanía*, núm. 2—*Posesión al herederero*, núm. 2.

1^a. Vale—La ejecución de un vale al portador corresponde a la jurisdicción comercial.—Jur. Com., tom. 9, pág. 234, Ser. 2^a.

Validez—Véase: *Falsedad*, núm. 1—*Endoso*, núm. 1—*Notificación*, núm. 4—*Nulidad*, núm. 10—*Contrato bilateral*, núm. 1.

1^b. Valor—Si no existe prueba plena sobre el valor del robo, solo puede aceptarse el confesado por el reo.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 191, Ser. 2^a.

Valor—Véase: *Depositario judicial*, núm. 1—*Robo*, número 6—*Bienes embargados*, núm. 2—*Embargo*, núm. 10.

Valor legal—Véase: *Confesión del reo*, núm. 6.

Valor recibido—Véase: *Excepción de falsedad*, núm. 3.

Vencido—Véase: *Costas*, núms. 3, 5, 7, 17 y 19.

Vendedor—Véase: *Obligación*, núm. 1—*Cosa vendida*, núms. 1 y 2—*Pacto de retroventa*, núm. 1—*Evicción*, nú-

1^a—Esta resolución está de acuerdo con otro caso resuelto por esta misma Cámara.—Véase: tom. 1^o, pág. 376, Ser. 2^a; Inst., tom. 3^o, verb. *Vales al portador*, núm. 1.

1^b—Véase: verb. *Prueba plena*, núm. 5.

**VEN—VIA**

meros 1, 2 y 3—*Acción reivindicatoria*, núm. 4—*Contrato de compraventa*, núm. 3—*Acciones personales*, núm. 1.

1^a. **Veneno**—El hecho de vender por equivocación veneno en vez de otra sustancia inofensiva en un almacén, debe ser castigado como homicidio cometido con culpa ó imprudencia. —Jur. Crim., tom. 5, pág. 249, Ser. 2^a.

Vénia—Véase: *Posiciones*, núms. 5 y 13.

Venta—Véase: *Comisión*, núms. 1 y 4—*Comisionistas*, núm. 2 y 3—*Daños y perjuicios*, núms. 5 y 6—*Contrato de rescisión*, núm. 1—*Comisionista*, núm. 3—*Defraudación*, núm. 3—*Prenda*, núm. 1.

Venta á plazo—Véase: *Confesión indivisible*, núm. 1.

Venta extrajudicial—Véase: *Bienes de menores*, núm. 1.

1^b. **Verificación**—Por incidente, en virtud de haber sido objetado el crédito no hace obligatoria la condenación en costas al acreedor.—Jur. Com., tom. 8, pág. 33, Ser. 2^a.

2. **Verificación**—La nulidad ó validez del endoso de un documento á la orden, no puede fundar la oposición al reconocimiento del crédito en el acto de la verificación.—Jur. Com., tom. 8, pág. 164, Ser. 2^a.

Verificación—Véase: *Falsedad*, núm. 1—*Costas*, número 9.

Via—Véase: *Robo*, núm. 1—*Entrada*, núm. 1.

Vías de comunicación—Véase: *Indemnización*, núm. 1.

Vías de hecho—Véase: *Violencia*, núm. 1.

Via ejecutiva—Véase: *Protesto*, núms. 5 y 6.

Via férrea—Véase: *Indemnización*, núm. 3.

1^a—Véase: verb. *Envenenamiento casual*, núm. 1.

1^b—Véase: verb. *Costas*, núm. 13.

2—Véase: *Endoso*, núm. 1.



VÍA—VIO

1. **Vías férreas**—Las empresas de vías férreas, tienen obligación de indemnizar á los propietarios, del terreno necesario para sus vías.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 166, Ser. 2^a.

1^a. **Viajeros**—Los hoteleros y posaderos tienen privilegio especial y derecho de retención sobre los equipajes y efectos introducidos en su establecimiento por los viajeros.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 349, Ser. 2^a.

Vicio determinado—Véase: *Injurias*, núm. 7.

Vicios—Véase: *Nulidad*, núm. 2.

Víctima—Véase: *Atentado*, núm. 6—*Circunstancias atenuantes*, núm. 3—*Escusación*, núm. 3—*Homicidio*, números 9 y 27—*Robo*, núm. 4—*Declaraciones*, núm. 1—*Heridas*, núm. 1—*Indemnización*, núm. 2—*Lesiones*, números 5, 10 y 18—*Hurto*, núm. 3—*Mutilación*, núm. 1—*Denunciantes*, núm. 1—*Testigos*, núm. 8.

Víctima insensibilizada—Véase: *Homicidio*, núm. 18.

Víctimas—Véase: *Lesiones*, núm. 12.

1^b. **Violación**—La tentativa de violación de una mujer honesta, debe ser penada con tres años de penitenciaría.—Jur. Crim., tom., 10, pág. 72, Ser. 2^a.

Violación—Véase: *Incontinencia*, núm. 1.

1^c. **Violación de domicilio**—La fractura para entrar á una habitación, solo puede ser penada como violación de domicilio, mientras no exista prueba plena sobre la tentativa de robo.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 317, Ser. 2^a.

1^a—Véase: *Derecho de retención*, núm. 2.

1^b—Arts. 128, inc. 3^o; 52 y 12, inc. 2^o del Cód. Pen. vig.

1^c—Véase: *Fractura*, núm. 1.

VIO—VOL

2. Violación de domicilio—Si el locatario se ve obligado á entrar por la fuerza en la casa locada, no puede imputársele violación de domicilio.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 232, Ser. 2^a.

Violación de las formas—Véase: *Nulidad de la ejecución*, núm. 1.

1^a. Violencia—El cumplimiento de órdenes superiores por los funcionarios dependientes del Poder Municipal, importa la violencia que la ley exige, sin que se requieran las vías de hecho.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 175, Ser. 2^a.

Violencia—Véase: *Homicidio*, núm. 19—*Robo*, núm. 2.

Violencia en la persona—Véase: *Tentativa de robo*, número 3.

Vista—Véase: *Nulidad*, núm. 7—*Sobreseimiento*, número 5.

Viuda—Véase: *Administrador*, núm. 1.

1^b. Voluntad—A falta de prueba plena, la presunción de dolo que la ley supone en el reo, cede ante las constancias

2—Porque el locatario ejerce en este caso un derecho que le acuerda la ley, y es sabido que el ejercicio de un derecho propio no constituye delito.

1^a—Según se desprende de la nota al art. 43 del Código, el interdicto procede contra las personas jurídicas. En el caso presente el propietario de una heredad dedujo interdicto contra la Municipalidad por haber derribado los cercos. Se dijo que el despojo no estaba caracterizado por no haberse producido violencia. Pero otro nombre no corresponde al hecho de echar al suelo el alambrado contra las protestas reiteradas de su dueño, las que fueron formuladas ante la misma Municipalidad.

1^b—Si bien es cierto que en los delitos, la presunción del dolo está contra el reo, esto solo tiene aplicación cuando las circunstancias no indiquen lo contrario, y ciertamente en el caso del sumario nada tenía de inverosímil la manifestación del procesado, quien dijo que el hecho no



VOL

que hagan verosímil su afirmación de falta de voluntad para cometer el delito.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 134, Ser. 2ª.

Voluntad criminal—Véase: *Lesiones*, núms. 14 y 15.

Voluntad propia—Véase: *Estafa*, núm. 4.

fué intencional, y que realizó contra su voluntad, por causas ajenas á ella. En todo caso basta que haya una duda, para que conforme á las reglas de equidad, admitidas en derecho, ésta deba resolverse en favor del reo, pues es ciertamente menos malo esponerse á dejar impune un delito que castigar á un inocente.

